



# HISTORIA DE COLOMBIA CONTEMPORÁNEA



RICARDO  
ARIAS

BC

Biblioteca  
Básica DE  
Cultura  
Colombiana

▪ historia ▪





**HISTORIA  
DE COLOMBIA  
CONTEMPORÁNEA**

**RICARDO  
ARIAS**

**BC**  
- historia -

*Catalogación en la publicación – Biblioteca Nacional de Colombia*

Arias Trujillo, Ricardo, autor

Historia de Colombia contemporánea (1920-2010) / Ricardo Arias Trujillo ; presentación, Javier Guerrero Barón. – Bogotá : Ministerio de Cultura : Biblioteca Nacional de Colombia, 2017.

1 recurso en línea : archivo de texto PDF (292 páginas). – (Biblioteca Básica de Cultura Colombiana. Historia / Biblioteca Nacional de Colombia)

Bibliografía: páginas 299-300.

ISBN 978-958-5419-11-7

1. Colombia – Historia - Siglos XX-XXI 2. Colombia - Política y gobierno - Siglos XX-XXI 3. Colombia - Condiciones económicas - Siglos XX-XXI 4. Libro digital I. Guerrero Barón, Javier, autor de introducción II. Título III. Serie

CDD: 986.1063 ed. 23

CO-BoBN– a1011806



**Mariana Garcés Córdoba**

MINISTRA DE CULTURA

**Zulia Mena García**

VICEMINISTRA DE CULTURA

**Enzo Rafael Ariza Ayala**

SECRETARIO GENERAL

**Consuelo Gaitán**

DIRECTORA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL



**Javier Beltrán**

COORDINADOR GENERAL

**Isabel Pradilla**

GESTORA EDITORIAL

**Jesús Goyeneche**

ASISTENTE EDITORIAL Y DE INVESTIGACIÓN

**José Antonio Carbonell**

**Mario Jursich**

**Julio Paredes**

COMITÉ EDITORIAL

**Taller de Edición • Rocca®**

REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE TEXTOS,  
DISEÑO EDITORIAL Y DIAGRAMACIÓN

**eLibros**

CONVERSIÓN DIGITAL

**PixelClub S. A. S.**

ADAPTACIÓN DIGITAL HTML

**Adán Farías**

CONCEPTO Y DISEÑO GRÁFICO

Con el apoyo de:

**BiblioAmigos**

ISBN: 978-958-5419-11-7

Bogotá D. C., diciembre de 2017

© Ricardo Arias Trujillo

© 2011, Universidad de los Andes

© 2017, De esta edición: Ministerio de Cultura –  
Biblioteca Nacional de Colombia

© Presentación: Javier Guerrero Barón

Material digital de acceso y descarga gratuitos con fines didácticos y culturales, principalmente dirigido a los usuarios de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas de Colombia. Esta publicación no puede ser reproducida, total o parcialmente con ánimo de lucro, en ninguna forma ni por ningún medio, sin la autorización expresa para ello.

# ÍNDICE

▪ PRESENTACIÓN	7
▪ INTRODUCCIÓN	19
▪ 1. LOS AÑOS DEL CAMBIO	25
▪ 2. LA REVOLUCIÓN EN MARCHA Y LA POLARIZACIÓN DE LA SOCIEDAD	87
▪ 3. LA VIOLENCIA	127
▪ 4. DEL FRENTE NACIONAL A LA CONSTITUCIÓN DE 1991	173
▪ 5. LA CONSTITUCIÓN DE 1991 Y SU LEGADO	247
▪ CONSIDERACIONES FINALES	283
▪ BIBLIOGRAFÍA	289

## ▪ PRESENTACIÓN

HAY UNA GRAN DIFICULTAD EN la comprensión de la historia del siglo xx. Su contemporaneidad, la supervivencia de muchos de sus protagonistas, la mezcla permanente entre historia y memoria y, sobre todo, su complejidad. No hay que olvidar que vivimos en la era de la información y ningún periodo de la historia tiene tantos datos acumulados esperando interpretación. Y mayor dificultad se deriva de la pretensión de una apretada síntesis de gran variedad de sucesos que constituyen cadenas de procesos de diferente naturaleza que se entrecruzan. No obstante, hay buenos intentos y el libro del historiador, profesor de la Universidad de los Andes y especialista del periodo, Ricardo Arias Trujillo, que hoy presentamos, es uno de ellos.

La *Historia de Colombia contemporánea (1920-2010)* pretende una síntesis de los principales procesos políticos, demográficos, sociales, económicos y culturales de este convulsionado periodo del devenir de nuestro país. De por sí, el lapso de tiempo seleccionado por el autor nos introduce

en un debate sobre el siglo XX colombiano y sus ritmos. Se trata de un texto que selecciona con acierto grandes problemas de la sociedad colombiana agrupados en cinco grandes periodos, a manera de capítulos, que logran presentar al lector un cuadro general de los sucesos fundamentales del siglo de los grandes extremos políticos entre las izquierdas y las derechas, de los populismos, de las grandes transformaciones de la sociedad, del surgimiento de las ciudades, de la televisión y de las vanguardias estéticas y, en Colombia, el de la Violencia, la Guerra Fría, la agudización de la guerra de contrainsurgencia, el paramilitarismo y el narcotráfico, para cerrar con los intentos de democratización que introdujo el proceso constituyente de 1991 y la llamada “era” del neocaudillismo latinoamericano, concluyendo con unas consideraciones finales sobre la guerra, las violencias, la democracia, el papel de la memoria y la paz.

El primer capítulo, «Los años del cambio», inicia el análisis a partir de la década de los años veinte, periodo caracterizado por un proceso de modernización selectiva del Estado en lo económico y financiero, en algunos aspectos de la cultura y del desarrollo urbano, pero sin grandes avances democráticos; y aunque varios autores ya se habían planteado que el siglo comenzaba realmente en la década de los años veinte, dadas las inmovilidades y dificultades que afectaron al país después de la Guerra de los Mil Días (1899-1902), que ocasionó la ruina generalizada y la bancarrota fiscal, este libro nos convence de que el siglo empieza con los cambios que en esta época generaron una notoria modernización a partir de la acumulación de

la riqueza cafetera, la llegada de los recursos de la indemnización por la pérdida de Panamá y la “danza de los millones”, el endeudamiento masivo público y privado que permitió el mejoramiento moderado de la infraestructura de transporte y la paulatina transformación de las principales ciudades, acompañado de un malestar social, por las primeras luchas obreras en medio de la incipiente industrialización, las luchas agrarias y la influencia de las revoluciones mexicana y bolchevique de 1917, con el surgimiento de la prensa obrera, los primeros partidos socialistas y la organización de las primeras huelgas. El texto refleja importantes debates intelectuales y generacionales de la década sobre temas como los derechos femeninos, el papel del clero y de la Iglesia católica, el problema de la “raza” colombiana y la incapacidad de progreso, y, claro está, los modelos políticos y la democracia, entre muchos otros temas sociales y políticos.

Continúa el segundo capítulo con las transformaciones progresistas de la República Liberal (1930-1946), la difícil transición de Olaya, el conato de guerra con Perú y las venganzas de algunos liberales para pasar a describir prolíficamente las reformas de la “Revolución en Marcha”, la reforma educativa, la reforma de la Universidad Nacional, la fundación de la Normal Superior Nacional para la formación de maestros, la democratización de la cultura, la expansión de las bibliotecas, la alfabetización rural y urbana y la concesión de derechos civiles a la mujer, las reformas constitucional, tributaria, laboral, la reforma agraria plasmada en la “ley de tierras” y la reforma electoral,

entre otras. Todos estos cambios se enfrentaron al poder del clero aliado con los conservadores, lo que obviamente generó una fuerte reacción de varios sectores económicos y políticos, no solamente conservadores sino también del propio Partido Liberal, con el apoyo de la primera central obrera y la creación de numerosos sindicatos, ligas campesinas, organizaciones impulsadas por el Partido Comunista y algunos sectores liberales radicalizados, especialmente del naciente gaitanismo. En este panorama muy bien descrito surgió una creciente polarización política, alimentada internacionalmente por el ascenso de los fascismos europeos que llevaron las contradicciones al límite, teniendo como telón de fondo la Segunda Guerra Mundial. La “Revolución en Marcha” había abierto la caja de Pandora de su respectiva “contrarrevolución”, que desató reacciones de los sectores tradicionales de la sociedad y la política, los cuales se opusieron radicalmente al cambio enfrentando irreconciliablemente a los dos modelos de Estado y de sociedad civil, y generando un choque partidista que desinstitucionalizó a la sociedad colombiana y la arrojó al abismo de los enfrentamientos violentos.

El tercer capítulo, «La Violencia», parte de la crisis que originó la segunda elección de López Pumarejo y el anuncio de la profundización de las reformas y su apoyo en el movimiento sindical, la radicalización de los sectores opositores que llevaron a la renuncia de López Pumarejo en 1945, el alejamiento del movimiento obrero por parte del liberalismo y los procesos de oposición del gaitanismo que produjeron la división y caída de la República Liberal,

lo cual llevó a una transición conflictiva con el retorno de los conservadores. Con el gobierno de Mariano Ospina Pérez en 1946, se desata la “guerra civil no declarada”, como la caracterizó el historiador inglés Eric Hobsbawm, y que llevó a situaciones extremas de crueldad en la casi totalidad del territorio nacional. Conflictos políticos que se agudizaron irreversiblemente con el ascenso irrefrenable del gaitanismo que había radicalizado sus posiciones y adoptado un marcado tinte populista con muy buenos réditos políticos, en la medida que logró, además de canalizar los temores a un auge de los comunistas, recoger las reformas y promesas abandonadas por el liberalismo. La noción de pueblo invadió los referentes de las campañas políticas y Gaitán se hizo dueño del espacio público con sus estridentes consignas contra la oligarquía de los dos partidos, mientras los comunistas lo tachaban de fascista. En medio de esta polarización, se produjo el asesinato de Gaitán en el momento de su mayor prestigio y en el punto de una transformación cultural generada por la expansión de la radiodifusión, lo que hizo que el incendio político que se vivió con “el Bogotazo” del 9 de abril de 1948 se expandiera a muchos rincones del país. La situación se agravaría en 1949 por los violentos sucesos en el parlamento de mayoría liberal, con el asesinato de dos parlamentarios de este partido por parte de un parlamentario conservador, y otras circunstancias que llevaron al presidente Ospina al cierre del Congreso <sup>3</sup>/<sub>4</sub>que duraría por muchos años hasta después de la dictadura<sup>3</sup>/<sub>4</sub>, a la imposición de la censura de prensa y al manejo dictatorial del país bajo la figura del “Estado

de Sitio”, que concentraba extraordinariamente muchas funciones al arbitrio del ejecutivo.

Vendría luego la presidencia más crítica del periodo, el gobierno de Laureano Gómez, que por sus caracterizadas posiciones intransigentes imposibilitó cualquier acuerdo bipartidista, lo cual hundió al país en la más aguda violencia entre los dos bandos, instaurando un proceso de restauración clerical-conservadora inspirada en el franquismo español de la posguerra civil, tratando de imponer una reforma a través de una Asamblea Nacional Constituyente, ANAC, nombrada a dedo, para instaurar un régimen corporativista, católico y centralista, como pretendieron los regímenes inspirados en los fascismos europeos. La contrarreforma imponía la educación católica, pretendía que la mujer volviera a las labores domésticas, proscribía la educación mixta, restringía las libertades públicas y los procesos democráticos e imponía una noción limitada de ciudadanía que pretendía una rígida jerarquización piramidal de la sociedad. La crisis institucional fue de tal dimensión que la gobernabilidad y la deslegitimación del régimen llegó al límite, y la imposibilidad de acuerdos políticos hizo que una cúpula de civiles ofreciera el gobierno al líder del Ejército.

En la sección del gobierno militar se relata el desempeño del general Gustavo Rojas Pinilla, que asumió el mando el 13 de junio de 1953 en medio de la euforia, haciendo reiterados llamados a la concordia nacional, y ofreció amnistías a las diferentes guerrillas, especialmente a las liberales, mientras que las comunistas decretaban treguas. El inicio del gobierno fue próspero en medio de

una bonanza económica propiciada por los precios del café, pero pronto su prestigio decayó por la represión a los movimientos estudiantiles con varios muertos en 1954. Rojas Pinilla se autonomizó de las élites que lo llevaron al poder y su discurso tomó un tono populista, usando la ANAC para reelegirse al periodo 1954-1958, lo que llevó a conservadores y liberales a un pacto que constituyó un amplio movimiento ciudadano que lo obligó a renunciar en 1957, cuando asumió provisionalmente una junta militar hasta 1958, año en el que el pacto de alternación de los partidos lo sustituyó.

El cuarto capítulo está dedicado al Frente Nacional, surgido de los pactos bipartidistas de los líderes de los dos partidos tradicionales en los que se acordaba la alternancia en la presidencia por cuatro períodos y se repartía milimétricamente los cargos públicos. El gran acuerdo fue refrendado en un plebiscito en el que la mujer ejerció por primera vez el derecho al voto, lo cual le dio en un comienzo un amplio consenso. Pero el hecho de partir del falso supuesto de que el país era exclusivamente liberal y conservador, dejó por fuera a sectores minoritarios como los comunistas, las disidencias liberales y las mismas fuerzas del movimiento de Rojas Pinilla, les dio poderes especiales a las fuerzas armadas para el manejo del orden público y abolió en la práctica las posibilidades de oposición, lo cual hizo que los acuerdos fueran percibidos como un “pacto oligárquico” excluyente que dio oxígeno a la opción de la lucha armada como expresión de la oposición negada, dando origen a numerosas guerrillas. Y aunque

el texto no lo profundiza, durante la vigencia del Frente Nacional surgió más de una decena de grupos armados insurgentes, sin contar los grupos residuales del bandolerismo tardío. El autor se plantea importantes reflexiones sobre el problema de la elusiva modernidad en el contexto de la Guerra Fría, el impacto de la Revolución Cubana, la revolución de los jóvenes, y la politización de la cultura y las ciencias sociales militantes con los cambios radicales que se plantaban en esos agitados tiempos. Es muy importante el análisis que se propone sobre los cambios demográficos, el desarrollo urbano, las vías de comunicación, la industria, la aviación, las mejoras del bienestar de amplios sectores poblacionales, la cobertura de servicios, la educación, los cambios en la familia, el consumo, la presencia de la mujer, la televisión, la recreación y el uso del tiempo libre, incluida la práctica de los deportes, especialmente el fútbol y el ciclismo. No obstante los avances, se da un cuestionamiento del modelo de desarrollo, de la supervivencia de altos niveles de pobreza y desigualdad, y del crecimiento de asentamientos urbanos marginados del acceso a la educación, la salud y los servicios públicos domiciliarios, lo cual creó cinturones de miseria que permitieron el florecimiento de fenómenos de inseguridad y criminalidad, y el aumento de brechas entre la ciudad y el campo. Debido al aumento de la cobertura educativa sin calidad, a la proliferación de la educación privada y al deterioro de la pública, al bajo abarcamiento de educación universitaria, se terminó formando una minoría de clases medias, dando origen a un creciente inconformismo

que se manifestó especialmente por la lucha armada, los movimientos contestatarios, en tanto que en el mundo y en Latinoamérica se expandía con fuerza el marxismo que se reflejaba en la multiplicación de movimientos revolucionarios tales como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, el Ejército Popular de Liberación, EPL, y otros grupos menores. La situación de inconformismo se acentuó en 1970 con el evidente fraude electoral al candidato de la Anapo, Gustavo Rojas Pinilla, y que dio origen a una nueva guerrilla, más de origen urbano, el M-19, que junto con otros grupos se inscribe en el nuevo auge de las izquierdas con el triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua. Desde el gobierno de Belisario Betancur se institucionalizan negociaciones con los grupos insurgentes, muchas de ellas fracasadas en diferentes gobiernos, pero que constituyeron un aprendizaje ensayo-error que produjo resultados parciales en 1990 con la desmovilización del M-19, parte del ELN y el EPL, y la guerrilla indigenista Quintín Lame. Además, se instauró la elección popular de alcaldes y gobernadores. Paralelamente con el auge del narcotráfico y el paramilitarismo, a partir de los años ochenta se llegó a la crisis masiva del sistema judicial y político en 1990, cuando tras el asesinato de cuatro candidatos presidenciales el país se vio abocado a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente presionada especialmente por sectores estudiantiles y movimientos sociales urbanos.

El quinto y último capítulo está dedicado a la Constitución de 1991 y su legado. Por primera vez se eligió

popularmente una constituyente. A pesar del proceso de inclusión y reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, el autor llama la atención sobre las dificultades de inclusión que tuvieron los derechos de la población afrodescendiente. Muchas de sus medidas estuvieron encaminadas a crear un régimen jurídico garantista bajo el principio del “Estado Social de Derecho”, pero con una incompatibilidad fuerte: su esencia neoliberal, que impide y limita en muchos aspectos para su desarrollo. Pero el reconocimiento a la diversidad étnica y cultural y el pluralismo religioso, a partir de la declaración de un Estado laico, se ha convertido en un importante principio de inclusión.

Cierra el libro un debate sobre el neocaudillismo de la era Uribe. De cómo la violencia ejercida por agentes estatales, paramilitares y guerrilleros aumentaba su intensidad y el ostensible fracaso de la mayoría de los procesos de paz del siglo anterior, especialmente el promovido por el gobierno de Andrés Pastrana, hizo que los colombianos recibieran el siglo XXI en medio de una agudización de hostilidades entre los diferentes actores de violencia y en medio del escepticismo, lo cual facilitó la llegada de una opción radical representada en un disidente liberal antioqueño, Álvaro Uribe Vélez. Su polémico gobierno contó con circunstancias favorables como el comienzo de la implementación de un plan estratégico militar de reorganización del ejército con ayuda de los Estados Unidos, la recuperación de la profunda crisis económica que vivió el país y buena parte de América Latina en 1998, y un ambicioso plan de contención antisubversiva que rápidamente

obtuvo resultados, lo que le otorgó un gran prestigio y respaldo incondicional de las élites, sus medios de comunicación y, en consecuencia, de la opinión pública. Pero pronto se evidenció que los resultados se obtuvieron con la articulación de alianzas antisubversivas ilegales, tanto de las fuerzas armadas como de los políticos, empresarios y ganaderos con mafias del narcotráfico, lo cual llevó a una crisis sistémica de corrupción, a violaciones masivas de los derechos humanos, a persecución a la prensa y a la oposición, tratando de crear, de un lado un estado policivo, y de otro un “estado de opinión”, lo cual se combinó con otros factores como la apertura al gran capital nacional y extranjero que generó grandes inequidades. El resultado: una sociedad polarizada sin muchas alternativas políticas ni salidas a la larga guerra y a las violencias generadas por el narcotráfico.

Estamos ante un libro apasionante, polémico, muy bien informado y agradable de leer. Un ensayo analítico que hace una historia de síntesis, inicialmente escrita para públicos universitarios que sólo aspiran a informarse sobre los grandes temas, pero proponiendo una reflexión crítica sobre el siglo xx colombiano, lo cual no es tarea fácil. Muy seguramente va a jugar un buen papel a propósito de la recientemente proclamada Ley de Enseñanza Obligatoria de la Historia, que hará que la Historia como disciplina vuelva a las escuelas donde esta podría ser una lectura práctica para estudiantes y maestros.

JAVIER GUERRERO BARÓN



## ▪ INTRODUCCIÓN

LA HISTORIA DE COLOMBIA QUE vamos a trazar comienza en los años veinte del siglo pasado y se extiende hasta nuestros días: la historia de un siglo en el que el país ha conocido profundas transformaciones. En esos años, Colombia dejó atrás muchos de los rasgos coloniales que aún la caracterizaban cuando celebró su primer centenario de la Independencia. A partir de entonces, el país adoptó un rostro más moderno, es decir, más urbano, más secular, con mayor movilidad social, con un Estado menos débil y con un capitalismo más desarrollado. En ocasiones, los cambios se tradujeron en mejoras notables para el conjunto de la población; en otras, crearon nuevas complicaciones o agudizaron viejos problemas.

La historia que proponemos al lector intenta señalar no sólo los principales procesos que ha conocido el país durante el período seleccionado. También pretende insistir en la complejidad de un desarrollo histórico que, como cualquier otro, no se deja reducir a las simplificaciones y estereotipos, frecuentes en las versiones que tan

sólo buscan destacar una faceta de la historia, ya sea para elogiar el pasado, ya sea para condenarlo. En ambos casos, en términos absolutos, sin derecho a la réplica. ¿Colombia es realmente la democracia «más antigua de América Latina», como lo repiten aún hoy en día algunos políticos, periodistas y manuales escolares? ¿La propaganda oficial de los últimos años, sintetizada en la campaña publicitaria «Colombia es pasión», refleja lo que es verdaderamente el país? Si tales imágenes resultan fácilmente controvertibles, también lo son aquellas que, desde la otra orilla, sostienen, con la misma miopía, que en el país nada ha cambiado, que las mismas «oligarquías» controlan el poder a su antojo, como en tiempos coloniales. Una mirada atenta a las transformaciones y a las continuidades, a las dinámicas y a las inercias, a las fuerzas creativas y a los obstáculos y dificultades de todo orden, permite abordar la historia del país a través de toda su complejidad, es decir, con sus contrastes y matices.

Una historia, pues, más matizada, pero también sensible a las diferentes expresiones y manifestaciones de la sociedad. El ejercicio exige, por consiguiente, tener en cuenta aspectos muy variados. Si bien el enfoque político predomina a lo largo del trabajo, hemos intentado complementarlo con problemas demográficos, culturales, sociales, económicos, artísticos, entre otros, sin los cuales se torna difícil entender lo que ha sido la sociedad colombiana en su conjunto en el transcurso del último siglo.

Creemos que las ciencias sociales revisten una importancia que va más allá del campo estrictamente académico.

Por una parte, el público en general debería encontrar en los trabajos de historia, de sociología, de antropología y demás disciplinas del área, herramientas que le ayuden a comprender mejor un proceso determinado. Por otra, este tipo de estudios puede, además, contribuir a desarrollar una opinión crítica en el lector, paso indispensable en la formación de ciudadanos medianamente informados; para ello, es necesario luchar contra los vicios de una academia muy encerrada en sí misma, con poco impacto en un público amplio, quizá debido a su afición por cultivar una jerga incomprensible para los demás mortales. En el caso que nos ocupa, Colombia en el siglo XX y comienzos del XXI, la investigación resulta fundamental para entender lo que ha sido, en no pocas ocasiones, un proceso histórico traumático y violento.

Este texto, que aspira a contribuir modestamente con un ejercicio de reflexión sobre la historia colombiana, es una síntesis que se apoya, en muy buena medida, en los trabajos realizados por otros académicos, en algunas investigaciones que he realizado y en el intercambio que he mantenido con estudiantes de diversas carreras de la Universidad de los Andes a lo largo de varios años.



*Para los enanos, don Lucas y doña Matilde*



## ▪ 1. LOS AÑOS DEL CAMBIO

LOS AÑOS VEINTE CONSTITUYEN un período histórico de particular importancia para la historia del país. A partir de ese momento, una serie de procesos económicos, políticos, sociales, culturales, que venían gestándose desde tiempo atrás, adquirieron un mayor dinamismo y terminaron transformando profundamente la sociedad colombiana. Muchos contemporáneos vieron esos cambios, por sus efectos trastornadores, con pesimismo y temor. Otros, por esas mismas razones, saludaron entusiasmados lo que veían como vientos «renovadores», portadores, decían, del progreso y del desarrollo. Más allá de las polémicas, en esos años Colombia parece hacer su ingreso, no sin profundas contradicciones, al siglo xx.

### ▪ LA ECONOMÍA CAFETERA

Muchas cosas empezaron a cambiar en un país que, hasta entonces, conservaba numerosos rasgos de la época colonial.

De los más de seis millones de habitantes que había en 1920, alrededor del ochenta por ciento continuaba viviendo en el campo, concentrados en particular en la región andina. Esa población, eminentemente rural, estaba constituida en su inmensa mayoría por mestizos y por unas minorías blancas, negras e indígenas. La mayor parte de los habitantes seguía afectada por los mismos problemas que habían aquejado al campesinado en los siglos anteriores: altas tasas de analfabetismo —cercasas al setenta por ciento—, pobreza extrema, exclusión de la vida política. Como en el pasado colonial, la mayor parte de la población activa (75 %) dependía de una agricultura técnicamente todavía muy atrasada.

Los centros urbanos continuaban asemejándose más a pueblos grandes que a verdaderas ciudades. La capital del país, por ejemplo, no había conocido mayores modificaciones espaciales, arquitectónicas o demográficas. A finales de los años diez, la ciudad cubría prácticamente la misma área que en los siglos anteriores, desde la calle 6.<sup>a</sup> al sur hasta la calle 26 al norte, bordeando los cerros orientales; las numerosas iglesias continuaban siendo las edificaciones más grandes; su población no sobrepasaba los 150.000 habitantes; y los principales grupos sociales, como antaño, eran los comerciantes, los empleados y los religiosos.

En varios aspectos, la situación política también parecía anclada en el pasado. Desde finales del siglo XIX, el Partido Conservador se hallaba sólidamente instalado en el poder. Sin rivales en el horizonte —su enemigo tradicional, el Partido Liberal, había sufrido una apabullante

derrota en la Guerra de los Mil Días (1899-1902)—, los conservadores habían impuesto un orden constitucional (1886) basado en una centralización política de corte autoritario, que daba poca cabida a las libertades individuales, y en un integrista católico, ultramontano y reaccionario, para el cual la «modernidad» constituía una gran amenaza para la sociedad colombiana.

Sobre ese trasfondo de continuidad también se observaban importantes evoluciones. Desde finales del siglo XIX, el auge de la economía cafetera había acarreado transformaciones de la más diversa índole<sup>1</sup>. En el plano económico, el país logró vincularse de manera definitiva con el mercado mundial; la frontera agrícola se expandió, sobre todo, a partir de la colonización antioqueña, por los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima, norte del Valle y parte de Cundinamarca, lo que permitió a esas zonas conocer un desarrollo muy significativo; el transporte ferroviario mejoró las comunicaciones, al menos entre los puntos de producción y los puertos desde donde era embarcado el grano hacia el exterior. No menos importante, los dividendos generados por el café le permitieron al Estado colombiano aumentar sus recursos y superar, así, las continuas crisis fiscales que lo habían aquejado considerablemente a lo largo del siglo XIX. De la misma manera, los poderosos sectores ligados con la producción,

---

<sup>1</sup> Para conocer de cerca la importancia del café, cf. Palacios, Marco, *El café en Colombia, 1850-1970. Una historia económica, social y política*, 4.ª ed., México, El Colegio de México, 2009.

comercialización y exportación de café pudieron diversificar sus inversiones, dando lugar así al desarrollo comercial y al nacimiento de una incipiente industria.

Las consecuencias de la economía cafetera también tuvieron un impacto evidente en la vida política. Las rivalidades bipartidistas, que habían propiciado numerosas guerras civiles entre liberales y conservadores durante el siglo XIX, se apaciguaron, al menos durante unas dos décadas. Conscientes de los innumerables beneficios que podía generar el café, los dirigentes de ambos partidos dejaron de lado sus hostilidades para centrar sus esfuerzos en la formulación de una política que permitiera sacar el máximo provecho del modelo agroexportador, pilar del crecimiento económico y, al menos por el momento, del nuevo clima de concordia política. La alianza entre liberales y conservadores se dio en torno a lo que se llamó la «Unión Republicana», constituida principalmente por la generación del Centenario, para la cual los constantes enfrentamientos bipartidistas eran el principal obstáculo para el desarrollo económico de la «nación». Sin duda, los acuerdos entre ambos partidos se vieron facilitados por la actitud de la mayoría de los liberales que, debilitados por la derrota militar de 1902 y seducidos por las oportunidades que ofrecía el nuevo contexto económico, no dudaron en dejar de lado sus viejas reivindicaciones en torno al federalismo, a las libertades individuales y a la laicidad del Estado.

El crecimiento económico trajo consigo importantes modificaciones en la configuración social. Por una parte,

permitió el fortalecimiento de la «burguesía» cafetera en el ámbito nacional. Hasta entonces habían coexistido numerosos grupos de poder, dispersos por varias zonas del país, sin que ninguno de ellos fuese lo suficientemente fuerte para sobreponerse a los demás. Ahora, gracias a la importancia central del grano en la economía colombiana, los principales grupos vinculados al café —grandes productores, comercializadores, exportadores— lograron unirse e imponerse sobre los otros grupos de presión y, a partir de su posición hegemónica, fueron lo suficientemente hábiles para presentar sus propios intereses y reivindicaciones como si fueran los del conjunto de la nación. En esa tarea, la burguesía cafetera tenía a la mano un argumento de peso que facilitaba y justificaba sus pretensiones en cuanto nueva élite nacional: ¿no había sido acaso gracias a ella que el país había logrado entrar en la senda del desarrollo y del progreso? Nada diferente decían las distintas burguesías latinoamericanas ligadas al modelo agroexportador, profundamente orgullosas de ver los adelantos logrados en sus respectivos países gracias a sus capacidades y a sus esfuerzos.

Por otra parte, el auge cafetero facilitó también la consolidación de un campesinado que, incluso en posesión de muy pocas hectáreas, logró beneficiarse gracias al café. Varios factores explican ese proceso. En primer lugar, era indispensable que el campesinado tuviera acceso a la tierra: los baldíos eran muy numerosos en el siglo XIX y el Estado alentó a la población a colonizar nuevas áreas mediante una legislación que premiaba la explotación de la tierra.

La colonización antioqueña responde a ese contexto, en el que numerosas familias se desplazaron a otras regiones en búsqueda de mejores oportunidades. Es cierto que, al hacer un balance sobre la política de colonización, lo que se observa, a finales del siglo XIX, es una clara concentración de la tierra. Sin embargo, también es cierto que un número no despreciable de campesinos cafeteros mejoraron su situación: así como muchos colonos tuvieron que ceder sus tierras ante la arremetida de poderosos e intimidantes empresarios, que en muchas ocasiones contaban con el apoyo de autoridades locales, otros lograron resistir exitosamente las presiones de sus rivales. El hecho de que un porcentaje importante de las exportaciones proviniera de las pequeñas y medianas propiedades, demuestra el peso del campesinado en la economía cafetera. El segundo factor que explica esta situación tiene que ver con características propias al cultivo del café: las pequeñas parcelas no requerían de una mano de obra numerosa, por lo cual las familias campesinas podían hacer las labores necesarias; el campesino tampoco precisaba de grandes inversiones ni de conocimientos particulares para explotar debidamente la tierra; además, al lado de las plantas de café, se podía practicar el policultivo, es decir que el campesino no tenía que privarse de otros productos básicos de su dieta.

Pero así como ofrecía muchos beneficios, el modelo agroexportador no estaba exento de riesgos. Al igual que el resto de América Latina, Colombia dependía de la venta de sus productos en el exterior. Cuando la coyuntura internacional era favorable —alta demanda y precios

elevados—, tanto el Estado como los particulares veían aumentar sus ingresos —el primero gracias a los tributos que gravaban las exportaciones, los segundos, por los dividendos que generaba la venta directa del grano—. Pero aun en ese caso, el auge del café resultaba nocivo para otros sectores: los industriales, por ejemplo, sostenían con razón que las importaciones, facilitadas por las ganancias que generaba el café, constituían una competencia desleal que desestimulaba la producción nacional. Las cosas se complicaban para todos tan pronto caían los precios en el mercado mundial: la temida crisis fiscal reaparecía, lo que se traducía en un recorte en los gastos del Estado y, por consiguiente, en un desempleo creciente que afectaba el consumo interno. Las dos guerras mundiales, así como la Gran Depresión (1929), fueron, en esos años, los ejemplos más significativos y traumáticos de las debilidades inherentes al modelo agroexportador. El café tuvo también implicaciones negativas en la modernización de la sociedad: en la medida en que su cultivo no exigía un desarrollo tecnológico avanzado, no propició el fomento de la ciencia para explotar la riqueza agrícola del país.

Si bien el café se había convertido, en los primeros años del siglo xx, en el motor del desarrollo colombiano, la vida económica no se limitaba, por supuesto, a la producción y exportación del grano. En el ámbito rural, se aprecia una diversidad de explotaciones que comprendía, por una parte, un sinfín de pequeñas propiedades en manos de campesinos independientes que se dedicaban a las más diversas actividades en diferentes zonas del país

—desde la producción que alimentaba los mercados locales o regionales hasta el minifundio autosuficiente—. Por otra parte, estaban las grandes haciendas, tanto las de origen colonial, situadas en Cundinamarca, Valle del Cauca, Tolima y Huila, como las que surgieron posteriormente, a partir de mediados del siglo XIX, en la costa atlántica y en Antioquia. De manera general, en esas propiedades todavía imperaba lo que se conoce como el «sistema de hacienda» que, por sus profundos efectos en la vida económica, social y política del país, resulta un componente esencial de la historia colombiana. Las enormes extensiones de tierra eran fuente de riqueza, de prestigio social y de poder político. La numerosa *clientela* que estaba bajo la dependencia de los terratenientes hacía las veces de fuerza de trabajo y de apoyo político. A cambio, la mano de obra encontraba en el «patrón» diversos tipos de servicios necesarios para su subsistencia —protección, albergue, empleo, préstamos, ayudas para la educación y para comercializar sus productos, etcétera—. Las relaciones de clientela, al mismo tiempo que se constituyeron en una forma de llenar los vacíos del Estado, les otorgaron un inmenso poder a los terratenientes, que gozaban, además, del apoyo de las diversas autoridades locales y regionales. Al estar vinculados a alguno de los dos partidos tradicionales, estos jefes locales reforzaron el poder y el prestigio de liberales y conservadores, al tiempo que hacían aún más precario al Estado. Los efectos del sistema de hacienda no sólo afectaron la estructura política, también hicieron mella en el desarrollo económico. Los

trabajadores no eran remunerados en dinero —recibían, en cambio, diversas formas de pago no monetarizadas—, una práctica muy extendida que no sólo desestimulaba al trabajador —afectando la producción—, sino que, además, limitaba la demanda, entorpeciendo de esa manera los intercambios comerciales.

Pero, para esa misma época, ya existían también modernas explotaciones, mucho más afines con las prácticas capitalistas. Allí, el trabajador recibía su salario en dinero y el propietario, motivado por consideraciones especulativas, no temía invertir gruesas sumas para aumentar la producción. Fue lo que se dio, por ejemplo, en la agroindustria cañera del Valle del Cauca, con grandes capitales invertidos en maquinaria, o en las fincas ganaderas de la región caribeña, con notables mejoras gracias a la importación de semillas de pastos y de reses de alta calidad.

La diversidad de la economía también se aprecia en el incipiente desarrollo industrial, alimentado en buena medida por los excedentes generados por el café. Incentivados por las mejoras en el transporte, por la armonía política y, sin duda, por la ampliación de la demanda —primer esbozo de un mercado nacional—, ciertos empresarios que habían logrado acumular capital decidieron diversificar sus actividades, apostándole a la industria, en particular, a los textiles, a las bebidas y a los alimentos. A pesar de los evidentes límites de esta primera etapa industrial, su desarrollo contribuyó a hacer más compleja la economía colombiana. Si bien un alto porcentaje de la población activa seguía concentrado en las actividades agrícolas, en

las primeras décadas del siglo xx el número de trabajadores fabriles aumentó, así como el de los empleados en el sector terciario —transporte, comercio, construcción, finanzas, etcétera<sup>2</sup>—.

## ▪ TRANSFORMACIONES EN LAS CIUDADES, EN LOS TRANSPORTES Y EN LA CULTURA

Las ciudades también empezaron a cambiar. Para un mayor número de colombianos, los centros urbanos se habían convertido en una atractiva fuente de empleo: las fábricas, el comercio, la construcción, entre otras actividades, ofrecían oportunidades inéditas para numerosos campesinos. De esa manera, aumentó la población de algunas ciudades: a comienzos del siglo xx, Bogotá contaba con unos 100.000 habitantes, Medellín con la mitad aproximadamente; treinta años más tarde, los habitantes de ambas ciudades se habían triplicado.

Los cambios urbanos no eran sólo demográficos, como se aprecia bien en el caso de la capital del país. A partir de 1920, se desarrolló un importante programa de obras que, poco a poco, fue transformando el rostro de la ciudad.

---

<sup>2</sup> Para una muy buena síntesis de la historia económica del país, cf. Ocampo, José Antonio (comp.), *Historia económica de Colombia*, Bogotá, Planeta-Fedesarrollo, 2007 (edición actualizada).

Los planes urbanísticos que estaban cambiando a Bogotá hacían parte de un proceso de modernización que se extendía a casi todas las capitales latinoamericanas. Las élites dominantes, en su afán «civilizador», habían decidido darles un tono más moderno a sus principales ciudades, lo que implicaba erradicar al máximo los vestigios coloniales. De acuerdo con las posibilidades de cada país, se trató de imitar a las grandes ciudades europeas y, en menor medida, a las norteamericanas. En Bogotá, se emprendieron los primeros esfuerzos para mejorar el alcantarillado, las calles y los andenes de la ciudad. El Ministerio de Obras Públicas, bajo la dirección inicial de Laureano Gómez (1925-1926), construyó lo que sería la avenida Caracas y la avenida Jiménez, canalizó y cubrió el río San Francisco —actual Eje Ambiental—. Durante los mismos años, la ciudad se extendió notablemente, saliendo de los límites espaciales que, desde la Colonia, no habían variado de manera sustancial —la calle 26 al norte y la calle 6.<sup>a</sup> al sur—. El crecimiento fue acelerado, aunque hay que tener en cuenta que la zona urbana era muy pequeña, así que la más mínima ampliación constituía un cambio notorio. La nueva ocupación se dio, en especial, hacia el norte, entre la calle 26 y Chapinero, «barrio de quintas lujosas, de residencias de gente acomodada», rodeadas de amplios jardines<sup>3</sup>. En esa área, numerosos colegios y universidades

---

<sup>3</sup> Arguedas, Alcides, *Obras completas*, tomo I, Madrid, Aguilar, 1959, pág. 784.

comenzaron a edificar nuevas instalaciones, más confortables y espaciosas que las que tenían en la incómoda e insalubre zona colonial.

Alcides Arguedas, escritor boliviano, quien estuvo como diplomático en Colombia a finales de 1929 y comienzos de 1930, dejó algunos testimonios que nos hablan de la ciudad que conoció. La falta de higiene que había en sus calles era impactante: «Es una ciudad que conoce poco del empleo de la escoba», situación que se agravaba con el polvo y, cuando llovía, con el barro. Como resultado, permanentemente había «emanaciones infectas» que obligaban a la gente a taparse la boca. Arguedas nos habla también del crecimiento de la ciudad hacia el norte y de su tímido paso hacia la modernidad:

El conjunto de Bogotá evoca épocas coloniales con fuerte colorido; pero hay regiones y calles en que lo moderno habla su elocuente lenguaje de negocios y de vida holgada, confortable y hasta refinada. El barrio de Chapinero, por ejemplo, de anchas calles y avenidas con casas de estilo diferente, con huertos y jardines, es la residencia de las gentes adineradas. Autobuses pequeños y rápidos establecen las relaciones de la vieja ciudad y el barrio nuevo. La Calle Florián o Carrera octava, en la ciudad misma, es la más activa en negocios, después de la Calle Real. Tiene varios edificios, seis u ocho, modernos. Son altos, de hierro y cemento y de siete, ocho y diez pisos [que contrastan con las viejas casas de dos pisos]<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> *Ibidem*, pág. 826.

Es evidente que las regiones más dinámicas del país se estaban transformando, dejando atrás algunos de sus rezagos coloniales. Con todo, se trataba de un proceso muy limitado si lo comparamos con lo que sucedía, en esos mismos años, en otros países latinoamericanos. Si todos los países de la región dependían de sus exportaciones, Colombia mostraba mayores índices de dependencia que otros, pues vendía prácticamente sólo un producto a un solo cliente —Estados Unidos—. Además, la inserción de la economía colombiana en el mercado internacional ocupaba un lugar muy secundario en el ámbito latinoamericano: las exportaciones del país representaban apenas el 2 % del total de las exportaciones latinoamericanas y las inversiones extranjeras que llegaban a Colombia eran ínfimas al lado de las que jalonaban el crecimiento en Argentina, Brasil y Cuba. El mismo desfase se aprecia en la industria, todavía muy limitada a la fabricación de unos cuantos productos de fácil elaboración, muy alejada de satisfacer la demanda nacional, incluso de aquellos productos que, como los textiles, provenían de las industrias más pujantes<sup>5</sup>.

En materia de vías de comunicación, un factor esencial para el desarrollo económico y la integración nacional, los resultados también eran muy deficientes. A finales de los años veinte, el ferrocarril constituía el principal medio de transporte en América Latina. Colombia tenía la ventaja de contar con el Magdalena, un río navegable

---

<sup>5</sup> Palacios, Marco, *Entre la legitimidad y la violencia: Colombia 1875-1994*, Bogotá, Norma, 1995, págs. 74-75, 91.

durante casi todo el año, que atravesaba buena parte del país de sur a norte. Desde un comienzo, el ferrocarril y el transporte fluvial fueron complementarios: el tren comunicaba los principales centros de producción cafetera con los puertos sobre el Magdalena —de sur a norte, Girardot, Cambao, Honda, La Dorada, Puerto Liévano, Puerto Salgar, Puerto Berrío, Barrancabermeja, Puerto Wilches, Gamarra, El Banco, Magangué, Calamar—; y de esos diferentes puntos, los barcos a vapor y las primeras embarcaciones impulsadas con diésel se encargaban de llevar el grano a Barranquilla, el principal puerto del país en ese entonces.

Sin embargo, la situación en 1930, pese a ciertos avances, era lamentable. Después de casi seis décadas de iniciadas las primeras vías férreas, Colombia contaba tan sólo con unos 2.600 km; para el mismo momento, en Argentina había unos 40.000 km, en México más de 20.000, en Chile unos 8.000, en Perú alrededor de 4.000. «Colombia poseía menos rieles por habitante y por kilómetro cuadrado que [...] casi todos los países latinoamericanos»<sup>6</sup>. Además, debido a la accidentada geografía, las distancias se hacían interminables.

Semejante atraso no se debía únicamente a la falta de recursos o a las dificultades topográficas. Durante varias décadas no existió una verdadera política de comunicaciones

---

<sup>6</sup> Pachón, Álvaro, Ramírez, María Teresa, *La infraestructura de transporte en Colombia durante el siglo XX*, Bogotá, Fondo de Cultura Económica, Banco de la República, 2006, pág. 29.

basada en las necesidades y en las características del país. En su lugar, había una gran desorganización legislativa, sujeta a los vaivenes de las administraciones departamentales y nacionales y a las disputas entre unas y otras. En la década de los veinte, gracias a la indemnización por la pérdida de Panamá, se invirtieron cuantiosas sumas en la construcción de nuevas líneas férreas, pero debido a la falta de organización y de estudios técnicos, así como al exceso de politiquería, los resultados fueron sumamente insatisfactorios: crecimiento muy reducido, como se vio al comparar el caso colombiano con el resto del continente; atomización de las líneas, muchas veces por presiones de las élites locales, que hacía muy difícil la simple interconexión regional; al aislamiento físico entre las líneas se agregaba la falta de uniformidad en el ancho de las vías, lo que aumentaba el tiempo de recorrido y elevaba aún más los costos por los continuos trasbordos<sup>7</sup>.

En materia fluvial, el panorama era similar. Si bien el transporte por los ríos fue un factor fundamental para el desarrollo de la economía exportadora y para el intercambio local y regional, tampoco logró modernizarse en las primeras décadas del siglo XX. Los puertos, por su precariedad, no permitían el acceso de grandes embarcaciones y no contaban con la maquinaria indispensable para agilizar las tareas de carga y descarga de los barcos, faenas que podían tardar hasta quince días, generando, como se puede adivinar, todo tipo de demoras y congestiones. Las

---

<sup>7</sup> *Ibidem*, págs. 22-50.

mercancías almacenadas en las bodegas sufrían los estragos de la humedad, la falta de ventilación y de higiene<sup>8</sup>.

En cuanto al desarrollo urbano, los contrastes también eran notorios entre las ciudades colombianas y las grandes capitales latinoamericanas. En primer lugar, por su tamaño y población: hacia 1930, Buenos Aires contaba con casi dos millones de habitantes, Río de Janeiro con casi millón y medio, Ciudad de México con un millón, La Habana con casi medio millón. En segunda medida, por la infraestructura, por la oferta cultural, por la riqueza arquitectónica. Ilustres viajeros extranjeros se mostraban gratamente sorprendidos por los notables adelantos de algunas de las principales capitales del continente. Desde una perspectiva típicamente eurocentrista, el político francés Georges Clemenceau, tras su visita a Buenos Aires en 1910, no ahorró elogios para describir la decoración de sus edificios, que lo hacían pensar en Oxford Street; sus amplias avenidas —parecidas a «nuestros mejores boulevares»—; la arquitectura italiana, presente en diferentes puntos de la ciudad; la modernidad de Puerto Madero, que nada tenía que envidiarle a las instalaciones de Liverpool; la salubridad, la arborización de sus avenidas, sus jardines y parques —«Palermo, verdadero bosque de Boulogne argentino»—<sup>9</sup>. En el mismo momento, la capital mexicana, de la mano de Porfirio Díaz, ofrecía para las fiestas

---

<sup>8</sup> *Ibidem*, págs. 83-84.

<sup>9</sup> Clemenceau, Georges, *La Argentina del Centenario*, Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes, 1999, págs. 13-20.

del Centenario una faceta moderna, con nuevos y elegantes barrios, zonas verdes, hospicios, hospitales y grandes avenidas. Una de ellas era el suntuoso Paseo de la Reforma, trazada a imagen de los Campos Elíseos, que unía el centro de la ciudad con el castillo de Chapultepec, antiguo sitio de veraneo de los virreyes. Tanto Ciudad de México como Buenos Aires contaban con una animada vida cultural e intelectual, visible en sus librerías, en sus casas editoriales, en sus museos, en las vanguardias artísticas. Compañías de teatro y de ópera, cantantes, pintores, escritores de alto nivel venidos de Europa y de Estados Unidos, visitaban con frecuencia las principales capitales de la región.

Bogotá no estaba del todo aislada culturalmente de lo que sucedía por fuera del país, pero sin lugar a dudas la «Atenas Suramericana» ocupaba un modesto lugar en el continente. Varios testimonios de la época permiten dar una idea de la precariedad cultural de la capital colombiana. Alberto Lleras, en unas memorias que contienen valiosos datos sobre la vida cultural de los años veinte, veía a Bogotá como un pueblo muy alejado de la «civilización», contrariamente a lo que sucedía en México o en las capitales europeas<sup>10</sup>. Los lamentos del escritor liberal Armando Solano se dirigían a las dificultades para acceder a las últimas novedades librescas: «A nuestro amable rincón andino llegan pocos libros, y llegan retardados y a

---

<sup>10</sup> Lleras Camargo, Alberto, *Memorias*, Bogotá, Banco de la República, El Áncora, 1997, pág. 207.

precios demasiado altos»<sup>11</sup>. Y lo que llegaba del exterior solía ser bastante mediocre: según él, los artistas internacionales que visitaban Bogotá eran simples «ases decaídos y con estrellas apagadas» que venían a presentarse en el Teatro Colón, al «que nosotros seguimos considerando como el coliseo lujoso y consagrador por excelencia»<sup>12</sup>. El joven antioqueño Augusto Ramírez, que había llegado a la capital del país atraído por su importancia, recuerda, a mediados de los años treinta, que Bogotá era una especie de aldea en el momento de su llegada, sin «capitolio, ni pavimentos, ni cinematógrafos, ni automóviles, ni esta dulce y misteriosa abundancia humana que ahora timbra la antigua aldea con el sello cosmopolita de las ciudades grandes»<sup>13</sup>. Los procesos de industrialización y de urbanización, por limitados que fuesen, contribuyeron a alterar en las ciudades colombianas viejos patrones culturales, que cobijaban desde las formas de esparcimiento hasta las ideologías, pasando por valores éticos y creencias religiosas. El espacio urbano ofrecía una forma de vida novedosa, diferente a la cotidianidad tradicional del campo. Las diversiones eran más variadas y, sobre todo, tendían a alejarse de las normas impuestas por el clero: cafés, tabernas, prostíbulos o clubes, según los gustos y el bolsillo de cada quien,

---

<sup>11</sup> Solano, Armando, «Las bibliotecas», *Glosas y ensayos*, Bogotá, Biblioteca Básica Colombiana, 1980, pág. 69.

<sup>12</sup> Solano, Armando, «El culto de la decadencia», *op. cit.*, pág. 51.

<sup>13</sup> Ramírez Moreno, Augusto, *Los leopardos*, Bogotá, Editorial Santafé, 1935, pág. 168.

ofrecían nuevas formas de socialización, así como pasatiempos «paganos», muy distantes de las entretenimientos tradicionales, relacionadas casi todas con celebraciones religiosas —misas, peregrinaciones, procesiones, Semana Santa, Ascensión, Navidad, etcétera—. Las fiestas cívicas y, sobre todo, los carnavales juveniles constituían también otra forma de diversión. Por esos años, la llegada del cine fue un pasatiempo novedoso para ciertos sectores. En las salas que se crearon en unas cuantas ciudades del país, los asistentes podían recrearse y entretenerse con historias románticas, cómicas, trágicas, que llegaban de México, Argentina, Estados Unidos y Europa. El público también concurría para enterarse de la actualidad nacional e internacional a través de los servicios informativos que transmitían las salas de cine, o para conocer mejor la gestión del Gobierno de turno, pues el cine también fue un importante medio de propaganda política.

La música no era, por supuesto, ninguna novedad, pero experimentó cambios significativos con la llegada de nuevas expresiones, provenientes, en especial, de Estados Unidos y de algunos países latinoamericanos, reflejo de modificaciones importantes en los gustos del público. Si hasta entonces las élites y las clases medias se habían inclinado por el vals, la ópera, la música «clásica» y otras modalidades «cultas», ahora se interesaban por el *jazz*, el *fox trot* y el *charleston*. También cobró importancia la música «cubana», como el danzón y el bolero, al igual que el tango argentino y las rancheras mexicanas, muy

atractivas para los sectores populares<sup>14</sup>. En cualquier caso, las nuevas corrientes musicales indican algo más que una cuestión de modas; pueden ser también señales de una ruptura con valores tradicionales, manifestaciones de una experiencia liberadora asociada a la desinhibición y la vida nocturna, y que por eso mismo atrajo a miles de jóvenes<sup>15</sup>.

Los clubes privados, varios de ellos fundados en las primeras décadas del siglo XX, fueron uno de los lugares privilegiados por la élite urbana. En la Barranquilla de los años veinte existían, entre otros, el Country, el Club Unión, el Club Barranquilla. En Bogotá, el Polo, el Country, el Jockey. Estos establecimientos fueron, desde un comienzo, exclusivos espacios de sociabilidad para las minorías más «selectas». Allí, además de encontrar un espacio ideal para sus reuniones sociales, también podían disfrutar de nuevas formas de esparcimiento, sobre todo, en torno a las prácticas deportivas como *tennis*, *foot-ball*, *golf* y polo, actividades a las que se referían en sus denominaciones en inglés, reflejo de lo incipientes que todavía eran en los círculos elitistas, pero también del esnobismo de esos

---

<sup>14</sup> Wade, Peter, *Música, raza y nación*, Bogotá, Vicepresidencia de la República de Colombia, 2002, págs. 98-100.

<sup>15</sup> Rinke, Stephan, «Las torres de Babel del siglo XX: cambio urbano, cultura de masas y norteamericanización en Chile, 1918-1931», en Purcell, Fernando, Riquelme, Alfredo (eds.), *Ampliando miradas. Chile y su historia en un tiempo global*, Santiago de Chile, Rol Editores, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2009, págs. 176-177.

mismos sectores. Como se puede adivinar, los clubes eran lugares de «distinción» que servían, al igual que otros símbolos, para marcar la distancia que separaba a la élite del «pueblo». Una atmósfera algo distinta se vivía en las chicherías que frecuentaban los sectores populares, uno de los pocos lugares que encontraban obreros, artesanos, desempleados, campesinos recién llegados, para pasar el tiempo. Las nuevas formas de entretención que tenían unos y otros estaban relacionadas con un incipiente proceso de secularización, es decir, con cierto distanciamiento de algunos sectores de la población, particularmente urbanos, con respecto a los valores católicos. Un proceso similar sucedía en el campo femenino: como veremos más adelante, algunas mujeres habían roto con los moldes tradicionales de la *feminidad*, ya sea porque salían al espacio público ataviadas con vestimentas «indecorosas», porque intervenían en los asuntos *masculinos* o, simplemente, porque cuestionaban algunas de las limitaciones que la sociedad les imponía.

## ▪ INTELECTUALES Y DEBATES<sup>16</sup>

Las transformaciones que se estaban dando en el país suscitaron profundos debates en el campo intelectual de la

---

<sup>16</sup> Varios pasajes sobre la vida intelectual en los años veinte proceden de mi trabajo *Los Leopardos. Una historia intelectual de los años 1920*, Bogotá, Ediciones Uniandes, CESO, 2007.

época. A través de la prensa, de la cátedra, de la política, los intelectuales desempeñaron un papel de primer orden, pues sus intervenciones contribuyeron en muy buena medida a reconfigurar la sociedad colombiana. A finales de los años diez, el panorama intelectual estaba dominado por los Centenaristas, un grupo de hombres que había hecho su irrupción en el escenario público alrededor de 1910, cuando el país festejaba la primera centuria de su independencia. Estos personajes ocupaban un lugar protagónico en la vida política, en el periodismo —varios de ellos habían fundado o dirigían algunos de los principales periódicos y revistas— y en la educación. Finalizando los años diez, su liderazgo empezó a ser cuestionado por una generación de jóvenes irreverentes que creían llegado el momento de un relevo generacional para revitalizar las letras y la política. Todos estos intelectuales, tanto los Centenaristas como Los Nuevos —así se autodesignaban los noveles escritores—, hacían parte de un mundo cultural bastante estrecho. Las tasas de analfabetismo rondaban el setenta por ciento de la población mayor de 14 años; el grueso de los estudiantes estaba matriculado en el sector público que, por lo general, ofrecía una educación deficiente, muy distante del nivel que brindaban algunos planteles privados. Cursar estudios universitarios constituía un privilegio reservado a una muy reducida minoría.

Otro serio problema que afectaba a la educación se derivaba de la influencia de la Iglesia Católica en la enseñanza. De acuerdo con la Constitución de 1886 y el concordato, firmado un año más tarde, el clero contaba con amplios

beneficios en materia educativa, como lo reflejan claramente algunos artículos concordatarios:

En las universidades y en los colegios, en las escuelas y en los demás centros de enseñanza, la educación e instrucción pública se organizará y dirigirá en conformidad con los dogmas y la moral de la religión católica. La enseñanza religiosa será obligatoria en tales centros, y se observarán en ellos las prácticas piadosas de la religión católica (artículo 12).

Por lo tanto, los planteles privados como los públicos quedaban sometidos a los obispos diocesanos, quienes contaban con el apoyo del Gobierno, encargado de impedir «que en el desempeño de asignaturas literarias, científicas y, en general, en todos los ramos de instrucción, se propaguen ideas contrarias al dogma católico y al respeto y veneración debidos a la Iglesia» (artículo 13).

En tales condiciones, el desarrollo de una educación racional, interesada en estimular el espíritu crítico y científico, se veía seriamente limitado. Limitado, no excluido del todo, pues en realidad existían ciertos colegios que habían introducido nuevas pedagogías, al tiempo que intentaban marcar cierta distancia frente a la Iglesia católica, como el Gimnasio Moderno, la Escuela Ricaurte, la Escuela Anexa de la Universidad Republicana, el Colegio Mercantil y el Liceo Araújo. Por allí pasaron varios de los principales políticos, periodistas y escritores de la época. Sin embargo, los esfuerzos realizados por este tipo de planteles se veían seriamente obstaculizados por la normatividad vigente, la

cual reservaba el título de bachillerato únicamente para quienes se graduaban en los establecimientos católicos. La preponderancia del sector privado —y por ende católico— se repetía en la educación superior, en la que las universidades confesionales relegaban a un segundo plano a los planteles que intentaban promover una educación liberal —universidades Nacional, Republicana y Libre—<sup>17</sup>.

Con muy pocas excepciones, la generación de Los Nuevos pasó por la universidad. Allí siguió principalmente estudios de Medicina y Derecho, las dos carreras más prestigiosas que no sólo prometían buenos empleos, sino, además, un capital simbólico que los situaba en la cúspide de la élite cultural y política. Hay que resaltar un hecho muy significativo: a partir de finales de los años diez, la meritocracia parece haber dado pasos importantes. El ingreso a la universidad, aunque restringido, no estaba reservado exclusivamente a los miembros de la élite socioeconómica. Sectores cada vez más numerosos de las clases medias accedían a los estudios universitarios, lo que se traducía en una mayor movilidad social, cuestionando, así, la sólida alianza entre riqueza, conocimiento y poder político. En otras palabras, los estudios universitarios ya no estaban reservados únicamente para los miembros de

---

<sup>17</sup> La historia de la educación en Colombia ha sido muy bien desarrollada por Helg, Aline, *Civiliser le peuple et former les élites*, París, L'Harmattan, 1985 [existe traducción al castellano: *La educación en Colombia, 1918-1957: una historia social, económica y política*, Bogotá, Cerec, 1987].

las élites tradicionales. El caso de Jorge Eliécer Gaitán ilustra bien este tipo de cambios: hizo el bachillerato en el Colegio Araújo, luego estudió Derecho en la Universidad Nacional y, una vez obtenido el grado, viajó a Roma a especializarse en Derecho Penal. Como él, otros jóvenes de las clases medias tuvieron la oportunidad de realizar un recorrido académico similar, gracias al cual pudieron ascender en la escala social.

El ambiente cultural de la época estaba dominado, en cierta medida, por Bogotá que, además de ser el epicentro político, también concentraba buena parte de la vida intelectual: la mayoría de los principales diarios, editoriales y universidades se hallaban allí reunidos, sin que esto quiera decir que la provincia no desempeñara ningún papel cultural. Lo que resulta claro es que la capital del país ejercía una clara atracción, motivando a numerosos estudiantes y escritores a abandonar sus respectivas regiones para establecerse en lo que pomposamente muchos llamaban la «Atenas del Sur», un calificativo que, como ya se mencionó, no dejaba de suscitar ironías entre los intelectuales.

A pesar del sarcasmo y del pesimismo de muchos, el panorama intelectual no era tan desalentador. Diferentes esfuerzos dejaban apreciar el dinamismo del mundo intelectual colombiano, interesado en participar activamente en los debates de la sociedad, en abrirse a las vanguardias de la época, en dar a conocer a los sectores letrados los últimos avances que se daban en Europa en poesía, en ensayo, en crítica literaria, en filosofía, etcétera. Revistas como *Voces*, fundada en Barranquilla a finales de los

años diez, o *Universidad*, impulsada en la década siguiente por el inquieto Germán Arciniegas, así como la activa participación de los Centenaristas y de Los Nuevos en el periodismo, permiten concluir que el mundo intelectual, por limitado que fuese, no se hallaba estancado.

Por el contrario: una revisión a la prensa de la época muestra que los intelectuales participaban activamente en los grandes debates que se daban por entonces. Uno de los asuntos que más retuvo su atención fue la «cuestión social», sin duda uno de los grandes problemas de los años veinte. Después de dos décadas de relativa tranquilidad, crecientes tensiones se apoderaban nuevamente del ambiente. A diferencia de las guerras civiles del siglo XIX, motivadas por las discrepancias ideológicas entre las élites, los conflictos de los años veinte fueron de carácter social. Esta década conoció un gran auge económico, impulsado por los buenos precios del café, por las crecientes inversiones extranjeras y por la indemnización que reconoció Washington al Estado colombiano por la separación de Panamá. La coyuntura favorable permitió un desarrollo hasta entonces desconocido: las vías férreas, la industria, el comercio, la agricultura, las ciudades, crecían a niveles nunca antes alcanzados. Pero en medio de la «danza de los millones», también se hacía cada vez más visible el creciente abismo que separaba a los más ricos de los más pobres. En ese contexto se dio el estallido social. Por una parte, las luchas agrarias llevaron al campesino y al colono a enfrentarse a los latifundistas en torno a la propiedad de la tierra y al control de la mano de obra. A pesar de

la legalidad jurídica de su lucha, el colono contaba con pocas posibilidades de asegurar el control de la parcela que explotaba; frente a poderosos empresarios, quienes no sólo contaban con el apoyo de las autoridades locales, sino que, además, recurrían a prácticas intimidantes, el colono se veía forzado a abandonar la tierra e internarse cada vez más en busca de nuevas oportunidades; si desistía de reemprender su aventura, por lo general se convertía en trabajador dependiente. El resultado de la lucha desigual por el control de la tierra no hizo sino reforzar la concentración de la tierra, una tendencia que venía de tiempo atrás. En los años veinte, los colonos lograron dotarse de una mejor organización, gracias a sus contactos con el mundo laboral urbano. Más unidos y más politizados, para mejorar su situación recurrieron a diversas estrategias: creación de ligas campesinas, ocupación de tierras, insurrecciones, alianzas con los partidos de izquierda y, en ocasiones, con algunos grupos indígenas del sur del país que, bajo el liderazgo de Quintín Lame, también intentaban darle una mayor coordinación a sus luchas.

Desde finales del siglo XIX, los indígenas de la región amazónica eran objeto de una terrible explotación por parte de los grandes comerciantes de caucho; en diferentes zonas del país, otras comunidades veían peligrar sus resguardos. En los años veinte, la resistencia indígena se hizo más fuerte, en particular en el Tolima y en el Cauca. Quintín Lame, un indígena con ciertos conocimientos en Derecho, lideró en este último departamento una importante movilización con el fin de que las autoridades

reconocieran la legalidad de los títulos sobre resguardos. La lucha indígena cobró mayor resonancia cuando Lame y algunos líderes de las comunidades del Tolima entraron en contacto con el recién creado Partido Socialista Revolucionario (1926) y, luego, con el Partido Comunista (1930). Bajo la influencia de esas organizaciones, la lucha se radicalizó, se multiplicó la toma de tierras y se rechazaron con mayor vehemencia las obligaciones fiscales a las que estaban sometidos los indígenas en las haciendas<sup>18</sup>.

El trabajador de la ciudad, el naciente proletariado, daba muestras de una mayor conciencia de clase. Las acciones a las que recurrieron dejaron al descubierto que las «masas» se estaban despertando y que aspiraban a una mayor autonomía. Se trataba, sin embargo, de una clase obrera apenas en formación. Muy reducida numéricamente, dado el tardío e incipiente desarrollo de la industria colombiana, tampoco se había beneficiado, como en otros países latinoamericanos, del aporte de los inmigrantes europeos, familiarizados con las movilizaciones sociales. Los bajos índices de sindicalización, así como la falta de solidaridad también jugaban en contra de las aspiraciones colectivas del trabajador: la mano de obra urbana estaba constituida, por lo general, por campesinos recién llegados del campo, o por sus hijos, para los cuales el trabajo asalariado en la fábrica o en el taller, a pesar de su evidente

---

<sup>18</sup> Pineda, Roberto, «Cuando los indios se vuelven comunistas (1910-1950)», en Sierra, Rubén (ed.), *República liberal: cultura y sociedad*, Bogotá, Universidad Nacional, 2009, págs. 196-197.

dureza, constituía un avance con relación a los rigores e incertidumbres de las faenas rurales.

Si estos factores entorpecieron la consolidación del movimiento obrero, otros aspectos, por el contrario, jugaron a favor de la formación de una toma de conciencia colectiva. Las influencias externas, en particular la Revolución mexicana y el triunfo «bolchevique», de los que daba ampliamente cuenta la prolífica prensa obrera; una mejor organización y coordinación nacional, gracias al papel desempeñado por el Partido Socialista, fundado en 1919, y por el mayor dinamismo del movimiento sindical; el liderazgo de sus principales dirigentes, entre los que se destacaban Ignacio Torres Giraldo, Raúl Eduardo Mahecha, María Cano, una presencia femenina poco usual en ese tipo de ámbitos sociopolíticos; todos ellos intentaban familiarizar al trabajador con un lenguaje, unas prácticas, unas ideas y unos rituales que debían conducir a un mundo supuestamente más justo, un mundo en el que la lucha de clases, la solidaridad obrera, la importancia de la huelga, la exaltación de la revolución, las críticas contra la «oligarquía» y el imperialismo, constituían piezas fundamentales. Sin duda, los abismos cada vez más grandes entre quienes acaparaban la mayor parte de los beneficios y quienes quedaban excluidos de las ganancias también contribuyeron a unificar al proletariado. Adicionalmente, por supuesto, hay que tener en cuenta la explotación a la que estaban sometidos los trabajadores: las jornadas laborales no tenían un límite claramente establecido, así que se podían extender durante doce horas; niños, mujeres y ancianos estaban tan

expuestos a las arbitrariedades de sus patronos como los hombres jóvenes; las condiciones sanitarias y alimenticias, el hacinamiento, comprometían la salud del trabajador; si bien existía el salario, los montos eran establecidos unilateralmente por los empresarios y, en no pocas ocasiones, la remuneración monetarizada era sustituida por el pago en bonos y la obligación de intercambiarlos por los productos que vendían las tiendas de la empresa.

La huelga, principal arma del naciente proletariado, empezó a ser utilizada a partir de 1910 y en la década siguiente se volvió una práctica recurrente. Las reivindicaciones de los sectores populares fueron consideradas desde un comienzo por los sectores dirigentes como pretensiones abusivas y, sobre todo, contrarias a la armonía social. De ahí la respuesta eminentemente represiva que suscitaron la mayor parte de las huelgas: despidos, persecuciones, arrestos y, en no pocas ocasiones, la muerte de trabajadores, eran el saldo que provocaban las demandas laborales de los obreros. La brutalidad de las autoridades no fue suficiente para silenciar las protestas. Los sectores más combativos fueron los ferroviarios, así como los trabajadores de los puertos, de las obras públicas y de los enclaves del petróleo y del banano. Por lo general, se trataba de una mano de obra con cierto grado de especialización, que hacía, por consiguiente, difícil su reemplazo.

Para hacer frente a la agitación social de unas masas cada vez más difíciles de controlar, las élites tradicionales recurrieron a diferentes estrategias. Además de los métodos represivos a los que ya aludimos, a partir de 1915 los

gobiernos conservadores establecieron una legislación laboral orientada a limitar la acción de los trabajadores: los patrones podían reemplazar a los huelguistas —esquirolaje—, desvirtuando así el sentido de la huelga; en los principales servicios públicos —ferrocarriles, navegación, tranvías—, que eran precisamente los que reunían a los trabajadores más militantes, se prohibió la huelga. Incluso cuando la legislación reconocía sus derechos, el trabajador, de hecho, no se vio favorecido: las leyes sobre accidentes o sobre seguro colectivo no fueron realmente aplicadas por los empresarios, como lo reflejan los pliegos de peticiones presentados por los trabajadores en las numerosas huelgas de los años veinte.

Al mismo tiempo, políticos, empresarios y el clero católico intentaban deslegitimar al obrero, presentándolo ante la opinión pública como un sujeto potencialmente peligroso para el conjunto de la sociedad: por su «naturaleza», el trabajador urbano era proclive a los vicios, a la pereza, a la rebelión. Su afición por los juegos, por la chicha, por la promiscuidad sexual, ¿no demostraba acaso su peligrosidad y su inferioridad moral? Para refrenar tales comportamientos, las élites se dieron a la tarea de inculcar los «sanos valores», de transmitir normas de «buena conducta». La prensa, la educación, el púlpito, las «ligas de decencia», los comités de censura, los círculos obreros, así como numerosas asociaciones piadosas fundadas en diversas ciudades del país, buscaban un mismo objetivo: controlar más eficazmente al obrero, no sólo durante el trabajo, sino también en su tiempo libre; una vez finalizada

su jornada laboral, la sociedad debía ofrecerle a él y a su familia alternativas moralmente aceptables para su sana entretención. En ocasiones, este tipo de campañas combinaban «paternalismo y religiosidad [...] para asegurar un control total sobre los trabajadores, dentro y fuera de la empresa», como fue el caso de Fabricato a lo largo de los años veinte<sup>19</sup>. Allí, la mano de obra, exclusivamente femenina, soltera y cristiana, vivía en una especie de comunidad religiosa en la que la exaltación de la castidad se mezclaba con los llamados a la eficiencia laboral: «Fabricato construye paulatinamente su imagen de empresa cristiana» y logra que una inmensa mayoría de sus trabajadoras comparta plenamente su política paternalista-religiosa. Para casi todas las obreras, «el trabajo industrial se convierte en una especie de vocación religiosa que, como otras, exige castidad y soltería. En este caso, el objetivo inmediato de esta vocación lo constituye el sacrificio individual a favor del desarrollo de la unidad familiar de origen»<sup>20</sup>.

Aquellos trabajadores que no estaban dispuestos a ocupar el lugar que les señalaban las autoridades, creían encontrar un mejor resguardo en la naciente izquierda. Sus promesas, su retórica, seguramente les resultaban más atractivas que las campañas de denigración o de caridad promovidas por los sectores tradicionales. Pero las soluciones

---

<sup>19</sup> Arango, Luz Gabriela, *Mujer, religión e industria: Fabricato, 1923-1982*, Medellín, Universidad de Antioquia, Universidad Externado de Colombia, 1991, pág. 42.

<sup>20</sup> *Ibidem*, págs. 43, 51.

socialistas no estaban del todo exentas del paternalismo ni del moralismo que caracterizaba el discurso de las élites. Al igual que los grandes diarios del bipartidismo y del clero, la prensa de izquierda no cesaba de retratar al obrero como un ser débil, propenso al alcoholismo, en muchas ocasiones carente de voluntad propia y de una conciencia clara acerca de lo que le convenía, lo que justificaba el papel autoritario de la dirigencia. Más allá de ese tipo de semejanzas, propias de los sectores «ilustrados», el socialismo denunció, cada vez con mayor vehemencia, la opresión y la injusticia social que reinaban en las relaciones laborales. Pero no sólo criticó, también multiplicó sus esfuerzos para organizar la resistencia de los trabajadores. Durante la década de los veinte, el número de huelgas aumentó de manera considerable y le dieron al problema social una dimensión nacional.

Las huelgas que se produjeron en los enclaves del petróleo en Barrancabermeja (1924 y 1927) y en la zona bananera del Magdalena (1928) permiten hacerse una idea acerca de la situación del proletariado, de sus reivindicaciones, del papel desempeñado por los intelectuales y de la actitud de las élites. Esas grandes manifestaciones obreras, mucho más ambiciosas que en el pasado, se dieron en momentos de plena expansión económica y, además, en zonas de gran dinamismo en las que estaban presentes firmas multinacionales. Los pliegos de peticiones, muy similares por lo general, exigían el pago de salarios atrasados, mejoras en las condiciones de vivienda, servicios médicos, abolición de los pagos en vales redimibles en almacenes de las compañías; en el caso de las bananeras, pedían la abolición

de los contratos indirectos, una treta mediante la cual la compañía evadía el seguro colectivo. Es decir, en algunos aspectos, los trabajadores se limitaban a pedirle al Estado que hiciera cumplir la legislación laboral<sup>21</sup>.

La protesta social fue seguida con un interés creciente por parte de intelectuales y políticos. Numerosos escritores, tanto los Centenaristas como Los Nuevos, denunciaron la situación de pobreza que se vivía en las principales ciudades, causada por la llegada de miles de campesinos que venían en búsqueda de una oportunidad pero que, muy pronto, se estrellaban de frente con una dura realidad de miseria y exclusión. En 1926 Jorge Eliécer Gaitán había hecho su tesis de Derecho sobre las ideas socialistas en Colombia. Muchos anunciaban la inminencia de un estallido social si las élites políticas no reconocían la gravedad del problema. Armando Solano afirmaba que los dirigentes consideraban que no había conflicto a la vista, porque creían que la «gleba analfabeta» y «el mísero obrerismo» no eran capaces de lanzarse a «tan complicadas andanzas»<sup>22</sup>. Gabriel Turbay analizaba la eventualidad de una gran revuelta: «Ya es hora

---

<sup>21</sup> Entre los trabajos sobre los movimientos campesinos y obreros, cf. Archila, Mauricio, *Cultura e identidad obrera. Colombia 1910-1945*, Bogotá, Cinep, 1991. Del mismo autor, *Idas y venidas, vueltas y revueltas. Protestas sociales en Colombia, 1958-1990*, Bogotá, Icanh, Cinep, 2003; Vega, Renán, *Gente muy rebelde* (cuatro tomos), Bogotá, Ediciones Pensamiento Crítico, 2002; Legrand, Catherine, *Colonización y protesta campesina en Colombia, 1850-1950*, Bogotá, Universidad Nacional, 1988.

<sup>22</sup> Solano, Armando, «Un país enfermo», en *op. cit.*, págs. 187-190.

de comprender que la prosperidad de las obras públicas, que el aumento de la riqueza, no ha elevado el standard de la salud pública, sino que se ha edificado sobre la injusticia de la economía nacional que favorece la holgura de una clase privilegiada y consume como un material despreciable el factor humano de los trabajadores arrancados a la gleba». Según él, negarle los derechos al trabajador propiciaba «el fermento de las revoluciones vindicadoras»<sup>23</sup>. En el mismo sentido, Alfonso López Pumarejo denunciaba a conservadores, a liberales y al clero por hacer creer que el descontento social se debía simplemente a la propaganda dañina de agentes comunistas<sup>24</sup>. Esto era lo que decían algunos liberales.

Para la mayoría de los conservadores, conscientes igualmente de la gravedad de la situación, el problema social no era síntoma de la pobreza generalizada, sino de las campañas difamatorias orquestadas por agitadores socialistas y respaldadas por demagogos liberales, que se aprovechaban del descontento de las «turbas». Según los conservadores, a esas masas ignorantes, incapaces de diferenciar el bien del mal, los simpatizantes de la revolución intentaban movilizarlas infundiéndoles el odio de clases, el ateísmo y el materialismo. Comunistas, socialistas y liberales eran un mismo enemigo, pues todos apoyaban

---

<sup>23</sup> Turbay, Gabriel, «Asteriscos», en *Universidad*, núm. 41, 6 de agosto de 1927.

<sup>24</sup> López Pumarejo, Alfonso, «El momento actual de Colombia», en *Universidad*, núm. 68, 11 de febrero de 1928, págs. 95-96.

por igual el individualismo, que se traducía en egoísmo capitalista, todos privilegiaban los bienes materiales en detrimento de lo espiritual y todos querían desentenderse de las desigualdades sociales, a las que sólo podía responder adecuadamente la doctrina social de la Iglesia.

Es cierto que el clero fomentó numerosas instituciones populares, destinadas a aliviar a los sectores más pobres, entre las que se destacaban cajas de ahorros, círculos de obreros, cooperativas de agricultura, bibliotecas, escuelas de artes y oficios, bancos agrícolas, etcétera. Asimismo, no dejó de llamar la atención de los patronos, exhortándolos a respetar los derechos de los trabajadores. También denunció a las clases privilegiadas por el «abuso de las riquezas y la ostentación de los bienes», olvidándose de practicar la caridad, sin la cual la cuestión social no podía ser resuelta satisfactoriamente. Pero al mismo tiempo, el episcopado defendía los derechos incuestionables de los ricos: la propiedad es un derecho «innato o esencial para el hombre», fundado en la «ley natural»; los abusos y exhibiciones de riqueza que hacen los hombres, «con menoscabo de las leyes de caridad y aun de la justicia, y las ocasiones de pecado que sin duda alguna tienen con harta frecuencia los ricos, no son razones para negarles el derecho que tienen a esas riquezas legítimamente adquiridas»<sup>25</sup>. Por lo general, los llamados de atención a los

---

<sup>25</sup> *Conferencias Episcopales de Colombia*, «Deberes de patronos y obreros» (1927), tomo I, 1908-1953, Bogotá, Editorial El Catolicismo, 1956, págs. 69-71.

poderosos eran inmediatamente seguidos por serias amonestaciones dirigidas a los trabajadores, recordándoles el sagrado deber de la resignación a la espera de una nueva vida: «Esta vida es tiempo de prueba, en el cual hemos de ganar, en el fiel cumplimiento del deber y con la paciencia en las adversidades, la felicidad eterna»<sup>26</sup>.

A medida que la agitación social se intensificaba, los sectores más reaccionarios comenzaron a cuestionar los valores democráticos, causantes, según ellos, del desorden reinante, del odio de clases y del debilitamiento de las autoridades. Seducido por las fórmulas dictatoriales que en Europa gozaban de gran prestigio entre círculos cada vez más amplios, el Partido Conservador cayó entre las manos de los líderes más radicales. Para personajes como Laureano Gómez, Silvio Villegas, Augusto Ramírez Moreno, entre muchos otros, el liberalismo, fruto de la Revolución francesa, había acabado con un orden social jerárquico y católico, en el que primaba la armonía entre sus diferentes componentes. El restablecimiento de ese sistema ideal requería poner fin a las fórmulas democráticas, limitar al máximo las libertades individuales y devolverle todo el poder al Ejecutivo y a la Iglesia católica. En ese contexto, cualquier manifestación a favor de un régimen más tolerante y justo era tildada inmediatamente como demagógica y subversiva. Por consiguiente, cuando estalló la huelga de las bananeras, a finales de 1928, las circunstancias eran muy desfavorables para los trabajadores. Pocos meses

---

<sup>26</sup> «Pastoral colectiva» (1927), *op. cit.*, pág. 379.

antes, el Congreso había aprobado una serie de medidas de «orden social» destinadas a extinguir las asociaciones «bolcheviques o comunistas o las que pretendan propagar ideas encaminadas a suprimir o debilitar el sentimiento y la noción de patria» o a difundir «el desprecio en contra de la religión católica»<sup>27</sup>. Las protestas de los trabajadores del banano provocaron una violenta reacción por parte de las autoridades, las cuales, amparadas en los decretos recientemente adoptados, se dieron a la tarea de perseguir, reprimir y asesinar a los revoltosos enemigos de la patria.

La represión oficial provocó no solamente la protesta de socialistas y de algunos liberales que, de tiempo atrás, venían defendiendo los intereses de los sectores populares. Un número reducido de conservadores también denunció los atropellos de su partido y, más aún, criticó, en nombre de la democracia, el autoritarismo que se ocultaba tras el proyecto de orden social. Abel Carbonell y Guillermo Camacho Carrizosa, periodistas y políticos conservadores, insistieron reiteradamente en varios puntos que merecen ser destacados, pues revelan una faceta menos conocida del conservatismo colombiano. Nadie negaba, decía el primero de ellos, que el Partido Conservador estuviera en la obligación de enfrentarse a las ideas socialistas, pues de lo contrario «faltaría a su misión»<sup>28</sup>. Asimismo, ningún conservador podía desconocer que el comunismo era «una

---

<sup>27</sup> *El Debate*, «Conservatismo integral», 7 de julio de 1928.

<sup>28</sup> Carbonell, Abel, «Alimentando la revuelta», *Por la doctrina*, Barranquilla, Editorial del Diario del Comercio, 1929, págs. 17-18.

de las más peligrosas aberraciones ideológicas que pueden afligir a la sociedad»<sup>29</sup>. Pero la manera de combatir las no era debilitando la democracia, sino adelantando las reformas necesarias: «Cumple también al Partido Conservador, puesto que tiene la responsabilidad del gobierno, crear, por medio de leyes bien meditadas, un estado social reacio a los fenómenos que generan las luchas de clases, como son la miseria, el latifundio y las desigualdades injustas»<sup>30</sup>. Carbonell daba un paso más, al admitir, tal como lo hacía la «izquierda», la relación directa entre pobreza y lucha de clases: «Es preciso reconocer [que las doctrinas revolucionarias] no habrían germinado ni se habrían desarrollado en la forma que estamos viendo si el ambiente social no favoreciera su germinación y desarrollo»<sup>31</sup>.

Varios ejemplos históricos servían para corroborar sus postulados: «Nosotros no creemos que la intimidación, ni las leyes que borran los linderos entre la libertad y la licencia, entre la autoridad y la opresión, valgan nada contra los movimientos sociales. Valieran algo, y Rusia no sería hoy presa de la demagogia comunista», puesto que el zarismo no andaba corto en la persecución de los opositores. «No sabemos, no hemos oído de ningún terrorismo rojo que no reconozca sus antecedentes en sistemas de represión», tal como sucedió igualmente en México,

---

<sup>29</sup> Carbonell, Abel, «Estadistas en potencia», *op. cit.*, pág. 117.

<sup>30</sup> Carbonell, Abel, «Política absurda», *op. cit.*, págs. 21-22.

<sup>31</sup> Carbonell, Abel, «Los estadistas de ahora», *op. cit.*, pág. 65.

donde la «tiranía porfirista abrió el camino al revolucionismo de los Obregones y de los Calles». El caso inglés, que representa el otro extremo, confirmaba la tesis: «El culto de las garantías individuales mantiene inaccesible el alma inglesa a los delirios de las izquierdas extremas»<sup>32</sup>. Es decir, había algunos conservadores contrarios a las vías represivas, pues pensaban que, en vez de debilitar los focos subversivos, terminaban, por el contrario, provocándolos y consolidándolos<sup>33</sup>.

Dentro del contexto de la época, el problema social remitía, de una u otra manera, a otro debate: el tema de la raza, de amplia resonancia en todo el continente. A medida que los intelectuales y políticos latinoamericanos reflexionaban sobre la historia y el porvenir de su región, el pesimismo se apoderó de muchos de ellos. Bajo la influencia de varios pensadores europeos, su mirada se posó en la cuestión racial, pues, según ellos, allí residía la clave para entender un «continente enfermo». «La raza», es decir, el conjunto de características morales e intelectuales de un «pueblo», que se reproducía hereditariamente, explicaba el atraso de los «latinos» frente a las razas «superiores» indoeuropeas. El pesimismo se veía reforzado por la mezcla racial, un rasgo característico de todo el continente, que, según pruebas «científicas», implicaban la degeneración de los pueblos.

---

<sup>32</sup> Carbonell, Abel, «Alimentando la revuelta», *op. cit.*, págs. 17-18.

<sup>33</sup> Carbonell, Abel, «Un proyecto de defensa social», *op. cit.*, pág. 9.

Las élites colombianas echaron mano de diferentes recursos para tratar de mejorar la raza, de depurarla de sus elementos contaminantes. Un primer aspecto estaba relacionado con los aportes que podía hacer la medicina. Un vistazo a la prensa de la época permite captar la estrecha relación entre atraso, raza y salud. Las taras raciales, fácilmente apreciables en su predisposición natural al alcoholismo, en su desaseo, en su indolencia, etcétera, podían ser tratadas mediante campañas médicas destinadas a mejorar la dieta alimenticia, las condiciones higiénicas en las que vivía la «plebe». La educación de las masas, así como la puesta en marcha de políticas migratorias, también hacían parte del repertorio propuesto por los sectores dirigentes, sin distingos políticos. En efecto, las tesis sobre la degeneración racial tenían cabida en todas las tendencias. Del lado conservador, un destacado dirigente, escritor y político, Aquilino Villegas, decía en 1921:

La raza hispano-latina comienza apenas a salir en nuestra América del caos primitivo. En un trabajo terrible de adaptación que lleva cuatro siglos, ha debido aclimatarse al soplo abrasador de los trópicos, al aire enrarecido de la cumbre andina, a las estaciones caóticas; ha debido luchar contra mil nuevas dolencias y contra los exóticos fermentos de la sangre indígena, contra una hibridación desconocida de inquietantes anomalías: aquí el indio es indómito y errabundo; allá lento, sumiso y menguado. Y si a esto se le agrega la sangre africana que en mala hora trajo la gente negrera, es preciso convenir que en el inmenso crisol de nuestra América hierven en este

momento innúmeros metales, nobilísimos unos, viles y ordinarios muchos<sup>34</sup>.

En una célebre conferencia pronunciada en el Teatro Municipal de Bogotá en 1928, aplaudida por un auditorio bipartidista, Laureano Gómez resaltó las mismas adversidades geográficas y raciales. Hablando de la zona ecuatorial, en la que se encontraba Colombia, advertía que allí «no existe ninguna comarca que a todo lo largo de la historia del género humano haya sido nunca asiento de una verdadera cultura». El determinismo geográfico no admitía dudas: si la región andina, por sus condiciones climáticas, era la más apta en el país para la civilización, la «naturaleza tropical», por el contrario, producía pueblos inertes culturalmente, proclives al «frenesí lúbrico» y a la «mentira», desinteresados por toda conquista del espíritu<sup>35</sup>. Después de trazar las características negativas de la geografía colombiana, describió, con lujo de detalles, los rasgos raciales de la población. El balance era contundente y desolador: «Nuestra raza proviene de la mezcla de españoles, de indios y de negros. Los dos últimos caudales de herencia son estigmas de completa inferioridad. Es en lo que hayamos podido heredar del espíritu español

---

<sup>34</sup> *La República*, «Discurso pronunciado en Manizales por el doctor Aquilino Villegas, en la velada organizada por el Comité Olímpico de Caldas», 22 de noviembre de 1921.

<sup>35</sup> Gómez, Laureano, *Interrogantes sobre el progreso de Colombia*, Bogotá, Editorial Revista Colombiana Ltda., 1970, págs. 26-30.

donde debemos buscar las líneas directrices del carácter colombiano contemporáneo». Es decir, lo «colombiano» provenía de lo español, que, aunque superior a lo indígena y lo negro, no era para sentirse muy orgulloso, pues aparte de Cervantes y de los pintores, España no había producido nada valioso en la filosofía, en las matemáticas, en la física, ni en tantas otras ciencias en las que sobresalían las verdaderas civilizaciones<sup>36</sup>.

Del lado republicano, Carlos E. Restrepo sostenía ideas idénticas: nuestra raza es el «producto incoherente de factores heterogéneos, viciados por agudos estigmas patológicos y graves vicios morales», que tampoco ha podido fundir y modificar «con el auxilio de sanas corrientes inmigratorias su tardo impulso biológico»<sup>37</sup>. No eran pocos los liberales que pensaban exactamente de la misma manera, como se aprecia en los discursos de Luis López de Mesa, de Jorge Eliécer Gaitán y de Armando Solano. Para este último, el remedio de la pobreza dependía no sólo del desarrollo económico, sino también de otros dos factores. Por una parte, de «sistemas educacionistas que consigan en término breve la extirpación de taras y vicios que merman día por día la eficiencia y la capacidad de la raza»<sup>38</sup>. Por otra, de una política migratoria, pero no tanto de «razas auténticamente superiores en lo físico, como

---

<sup>36</sup> *Ibidem*, págs. 41-45.

<sup>37</sup> *La República*, «Carlos E. Restrepo», 12 de septiembre de 1921.

<sup>38</sup> Solano, Armando, «El imperialismo», *op. cit.*, pág. 40.

las del norte de Europa», pues, por su gran semejanza con la nuestra, ello traería «evidentes peligros físicos y morales», sino más bien de la raza oriental: por ejemplo, el japonés que, «con su modesto empaque de boyacense extranjero», no produciría ninguna desventaja y se adaptaría fácilmente a nuestro medio<sup>39</sup>.

El tema racial estaba, pues, estrechamente relacionado no sólo con una visión elitista, sino, además, con los ideales de progreso y desarrollo: mientras no se mejoraran las condiciones de la «raza», la búsqueda de la riqueza económica y del adelanto material sería una tarea vana:

Los abanderados del proceso de modernización capitalista y seguidores de concepciones médicas y biologicistas decimonónicas, confluyeron, a principios del siglo XX, sosteniendo que el origen de la pobreza y el atraso del país estaban en la «degeneración de la *raza* colombiana», causada por el mestizaje y el consumo de bebidas alcohólicas por parte del pueblo<sup>40</sup>.

De ahí el interés por fomentar políticas migratorias que trajeran al país razas pujantes, trabajadoras, cultas, en pocas palabras, «civilizadas», una preocupación común a todas las élites latinoamericanas. Sin embargo, a diferencia de lo que sucedió principalmente en Argentina,

---

<sup>39</sup> Solano, Armando, «Inmigración japonesa», *op. cit.*, pág. 323.

<sup>40</sup> Núñez, Luz Ángela, *El obrero ilustrado. Prensa obrera y popular en Colombia: 1909-1929*, Bogotá, Ediciones Uniandes, CESA, 2006, págs. 22-23.

Uruguay, Brasil o Cuba, adonde llegaron en unos cuantos años millones de inmigrantes, los esfuerzos por atraer extranjeros a Colombia fracasaron.

Después de varios años de relativa calma, las discusiones en torno al papel de la Iglesia y del catolicismo en la sociedad comenzaron nuevamente a ventilarse y a suscitar, como en el pasado, las más encendidas polémicas entre «anticlericales» y «devotos». Se trataba, en efecto, de un tema muy delicado, relacionado con la conflictiva historia del siglo XIX. Tras los fallidos y muy polémicos intentos que emprendieron los radicales entre 1850 y 1880 por sentar las bases de un Estado laico, la balanza se había inclinado finalmente del lado del clericalismo. La Constitución de 1886, el concordato firmado un año más tarde y las sucesivas derrotas —militares y políticas— sufridas por el liberalismo —el supuesto abanderado de la causa laica— permitieron la consolidación de un régimen confesional. Las disposiciones constitucionales y concordatarias hicieron del catolicismo una pieza fundamental del andamiaje del Estado colombiano, lo que se vio reflejado de inmediato en los planos educativo, moral, social y cultural. Además de su influencia en la sociedad y en el individuo, la Iglesia también era un actor político determinante: en estrecha alianza con el Partido Conservador, se le veía interviniendo en los asuntos más variados, lanzando condenas y anatemas contra el liberalismo, eligiendo representantes del conservatismo para los diferentes cargos de la vida política, «orientando» a sus fieles durante los comicios electorales, etcétera.

La injerencia permanente del clero en materia política y en otros asuntos llevó a un número creciente de críticos a protestar, en distintos tonos, por el poder desmedido de la institución eclesiástica. Carlos E. Restrepo, un dirigente antioqueño, conservador y católico, quien llegó a ocupar la presidencia de Colombia entre 1910 y 1914 en nombre de la Unión Republicana, supo establecer una clara frontera entre sus convicciones religiosas personales y su papel como jefe de Estado, lo cual contrastaba abiertamente con la actitud de la mayoría de los conservadores e incluso de no pocos liberales: «Soy católico, pero como jefe civil del Estado —dándole a la religión católica las garantías que le reconoce la Constitución Nacional— no puedo erigirme en pontífice de ningún credo y sólo seré el guardián de la libertad de las creencias, cualesquiera que sean, de todos los colombianos»<sup>41</sup>. Según cuenta el propio «Carlosé», recién iniciado su gobierno, recibió, por boca de un intermediario, una propuesta del arzobispo de Bogotá, Bernardo Herrera, en la que el alto prelado se comprometía a darle todo su apoyo y el del clero, a condición de que el jefe de Estado aceptara apoyar la creación de un «partido conservador-católico». Restrepo dice que rechazó la oferta «en nombre de mis propias ideas de católico», agregando que «semejante amalgama político-religiosa» contrariaba las disposiciones del papa León XIII<sup>42</sup>. Otros

---

<sup>41</sup> Restrepo, Carlos E., *Orientación republicana*, tomo II, Bogotá, Banco Popular, 1972, pág. 28.

<sup>42</sup> *Ibidem*, pág. 88.

republicanos siguieron la misma vía trazada por Restrepo: el diario *La República* lamentaba, a comienzos de los años veinte, que las ventajas que el concordato le había concedido al clero fuesen utilizadas

[...] para favorecer los intereses de un partido mediante alianzas políticas entre la Iglesia y ese partido [...]. Cada vez que las prerrogativas de aquella sirvan para que un partido gane elecciones, fulmine a sus adversarios o haga propaganda política, se está desvirtuando aquel pacto y se están concediendo a un partido fueros de religión nacional<sup>43</sup>.

Desde las filas del liberalismo, la oposición a la Iglesia solía ser más vehemente. Los motivos eran claros para casi todos:

De las cosas intocables en este país, el problema clerical; de nuestras grandes enfermedades, la supremacía eclesiástica; de los remedios imposibles, el encauzamiento natural, justo y ordenado de la acción de la Iglesia [...]. Las premisas son claras, dolorosamente evidentes: la Iglesia Católica ha formado dentro del Estado un organismo más poderoso que el Estado; el elemento eclesiástico constituye aquí una fuerza refractaria al progreso espiritual de la república<sup>44</sup>.

---

<sup>43</sup> *La República*, «Exposición de motivos del programa republicano adoptado por la Convención Nacional», 11 de mayo de 1921.

<sup>44</sup> *El Sol*, núm. 15, 7 de diciembre de 1922, citado en Molina, Gerardo, *Las ideas liberales en Colombia, 1915-1934*, tomo II, Bogotá, Tercer Mundo, 1988, págs. 165-166.

Armando Solano fue un crítico permanente de las extralimitaciones de la Iglesia, pero su posición no era la de los radicales del siglo XIX, animados por un anticlericalismo furibundo, que los llevaba a ser tan intransigentes e intolerantes como el clero. En varios de sus artículos publicados en *El Espectador* entre 1922 y 1924, Solano planteó debates de primera importancia relacionados con el papel de la Iglesia en la sociedad, como la educación y la intervención política del clero. Sus críticas a la educación confesional resumen lo que pensaban muchos liberales al respecto: en los colegios católicos sólo se inculca una «ciencia rígida, dogmática y estrecha, que no admite dudas, ni estimula iniciativas, ni sugiere deducciones»<sup>45</sup>. La beligerancia de la que daba prueba el clero en materia política le resultaba incomprensible, máxime en un contexto en el que nadie pretendía contrariar el «sentimiento religioso» de la población, agrega Solano, dejando en claro que no desconocía la importancia de la religión en una sociedad como la colombiana:

Quienes no somos anticatólicos profesionales, ni pretendemos, por imposible y perjudicial, arrancar el sentimiento religioso del alma popular, lamentamos de veras los extravíos de cierto clero, atacado por una sed de sangre y por una fiebre de odio [...]. ¿No hay dentro de la Iglesia colombiana una cátedra serena, de donde descienda sobre los clérigos pendencieros y sobre los obispos disociadores una voz de calma, de piedad fraternal, de amor

---

<sup>45</sup> Solano, Armando, «Desvinculándonos», *op. cit.*, págs. 33-34.

al prójimo, algo, en fin, que les recuerde a los espíritus atormentados y en pleno desconcierto, la doctrina pacificadora del Calvario?<sup>46</sup>.

Luis Tejada criticaba la manipulación que ejercía el clero en las comunidades campesinas:

Como ningún otro, el agricultor sufre la influencia del cura y oye con beatífica atención la divina palabra. Es el fanático característico, es el sostenedor sencillo y abnegado del culto. Es el creyente. Paga con envidiable puntualidad sus diezmos y primicias y baja presuroso por las veredas a votar por el candidato que el señor párroco recomienda en su sermón. Es, pues, el exponente auténtico de la educación conservadora<sup>47</sup>.

Los debates en torno a la Iglesia contribuyeron a radicalizar las posiciones del clericalismo, persuadido de la imperiosa necesidad de salvaguardar una religión que creían atacada desde todos los flancos. La prensa católica reafirmaba una y otra vez la supremacía del poder religioso sobre el poder civil; la preeminencia implicaba subordinación: «Esta superioridad de la Iglesia no significa sólo mayor dignidad, ni derecho a dictar normas directivas, sino que implica autoridad en el poder espiritual para corregir

---

<sup>46</sup> Solano, Armando, «Dejad a los niños», *op. cit.*, págs. 55-57.

<sup>47</sup> Tejada, Luis, «La educación y la criminalidad», en Calle, Miguel (recop.), *Mesa de redacción*, Medellín, Universidad de Antioquia, 1989, pág. 80.

los actos civiles perjudiciales a las almas, y obligación en el poder civil de sujetarse en esto al eclesiástico»<sup>48</sup>. Otros artículos recordaban la larga y vieja historia de persecuciones religiosas que había llevado a cabo el liberalismo en el pasado para concluir que nuevamente había vuelto a renacer «la misma aversión por no decir el mismo odio, a todo lo que se refiere a la religión y a la Iglesia»<sup>49</sup>. De esa manera, la bandera religiosa se erigía de nuevo en un asunto crucial en las luchas políticas, radicalizando las posiciones y exacerbando las pasiones de unos y otros. Frente a los guardianes del catolicismo, liberales, masones, comunistas, socialistas, todos por igual, aparecían como los enemigos irremediables de Dios<sup>50</sup>.

La Iglesia Católica también suscitaba malestar en ciertos círculos por su actitud frente a la mujer. Como resultado de los tímidos avances de la secularización en las primeras décadas del siglo XX, el papel tradicional de la mujer empezó a ser cuestionado por algunos políticos, intelectuales y por las propias mujeres. Excluida de la vida

---

<sup>48</sup> Restrepo, Daniel, S. J., «La Iglesia y el Estado. Doctrina católica y doctrina liberal», en *El Nuevo Tiempo*, 3 de noviembre de 1923.

<sup>49</sup> *El Nuevo Tiempo*, «La cuestión religiosa y el liberalismo», 14 de noviembre de 1923.

<sup>50</sup> Para la historia de la Iglesia Católica en Colombia, cf. González, Fernán, *Poderes enfrentados. Iglesia y Estado en Colombia*, Bogotá, Cinep, 1997; Arias Trujillo, Ricardo, *El episcopado colombiano: intransigencia y laicidad (1850-2000)*, Bogotá, Ediciones Unian-des, Cesó, Icanh, 2003.

pública, del mundo de los negocios, de la educación superior y de muchos otros espacios y actividades, reservados exclusivamente a los hombres, la mujer estaba confinada al hogar, donde su máxima realización consistía en ser buena hija, buena esposa y, finalmente, buena madre. Esa era la tradición, así lo imponía la Iglesia católica y así lo determinaban las leyes. En lo político, no podía votar ni ser elegida. La educación que recibía era diferente de la de los hombres, pues de lo que se trataba era de inculcarle buenos modales y desarrollar sus habilidades «naturales»; de manera que, aparte de algunas nociones de Historia y Geografía, la enseñanza para la población femenina estaba centrada casi exclusivamente en la religión y en «todos aquellos elementos que le permitieran cumplir con las obligaciones familiares, como bordado, costura y nociones de economía familiar»<sup>51</sup>. En la esfera laboral, las opciones social y moralmente aceptadas estaban restringidas: para una mujer de clase alta, pensar en trabajar por fuera de su hogar era muy mal considerado; para las menos afortunadas económicamente, la costura y la docencia en las escuelas eran las principales alternativas que tenían. En

---

<sup>51</sup> Velásquez, Magdala, «Condición jurídica y social de la mujer», en *Nueva historia de Colombia*, tomo IV, *Educación, ciencias, la mujer, vida diaria*, Bogotá, Planeta, 1989, pág. 26. Para una buena aproximación al tema de la mujer, consultar los diferentes trabajos de esta misma autora reunidos en *Las mujeres en la historia de Colombia*, tomo I, *Mujeres, historia y política*, Norma, Consejería Presidencial para la Política Social, Presidencia de la República de Colombia, Bogotá, 1995.

las primeras décadas del siglo XX, con el desarrollo de una economía más compleja, un número creciente de mujeres, un poco mejor preparadas gracias a los estudios técnicos, fue empleándose en el comercio y en la industria. Su vida laboral ponía en contacto a la mujer con otras personas, la retenía fuera del hogar durante una buena parte del día, le ofrecía nuevas formas de socialización. En otras palabras, su universo, celosamente limitado hasta entonces, parecía abrirse a nuevas dimensiones.

En ese contexto, poco a poco y tímidamente, fue tomando forma el debate sobre la condición femenina, en especial, en lo relacionado con el tema educativo y político. Algunas mujeres insistían en que la educación que habían recibido era perfectamente inútil:

[...] tenemos que convencernos de que nuestros planteles de enseñanza femenina se reducen hoy a unos muy pocos, contadísimos, en los que se prepara muy medianamente a la mujer. Hay que decir contadísimos, porque la mayor parte está en manos de religiosas, quienes han sido competentes para enseñar ciertos ramos de adorno, pero en ningún caso para educar e instruir en una forma comprensiva y sustancial. Allí se enseña a bordar admirablemente, con tanta intensidad, con perjuicio de lo demás, como si eso constituyera el único medio de ganar la vida<sup>52</sup>.

Otro testimonio, no menos crítico, se preguntaba:

---

<sup>52</sup> Argodemo, «La mujer en el porvenir», *Universidad*, Bogotá, núm. 103, 13 de octubre de 1928, pág. 466.

¿Qué es lo que puede hacer una de nosotras cuando ha terminado ocho o diez años de estudio? La de la alta sociedad, olvidar las cuatro sílabas memorizadas, perfectamente incomprendidas, para continuar ardientemente en el aprendizaje de la farándula social; la necesitada de su trabajo, iniciar la búsqueda de la centésima parte que puede comprender y aplicar a la práctica, para asegurarse cuarenta pesos de sueldo; la que se ha despertado por sí misma a horizontes nuevos, comprender que ha perdido ocho años, los más preciosos, y que para hacer algo requiere comenzar de nuevo, por su cuenta, sin elementos que la ayuden, a una edad en que la vida ya lleva corrido demasiado<sup>53</sup>.

Pero así como había mujeres convencidas de la importancia de acceder a una educación más acorde con las necesidades de los tiempos, otras creían, por el contrario, que los estudios superiores debilitaban la *esencia* femenina: «Ante todo el papel de la mujer en la vida es ser mujer», y los estudios universitarios son incompatibles con esa cualidad, pues «una muchacha que sigue una carrera, pierde mucho de su delicadeza y de su gracia» y, dedicada a «cosas serias, olvida entretanto la ciencia de la frivolidad»<sup>54</sup>. Si en materia educativa las opiniones estaban divididas, la participación de la mujer en la política era rechazada prácticamente por todas ellas: «Una

---

<sup>53</sup> Universidad, «Encuesta femenina. Contestación de Lucía Cock Quevedo», Bogotá, núm. 96, 25 de agosto de 1928, pág. 213.

<sup>54</sup> Universidad, «Encuesta femenina. Contestación de la Dama del antifaz», Bogotá, núm. 91, 21 de julio de 1928, págs. 66-67.

mujer-diputado, una mujer-magistrado, y qué sé yo más, produce una impresión antiestética». Otra mujer agregaba: «Mezclarse en las luchas electorales, apasionadas y fuera de lugar» para las mujeres, les haría perder su «feminidad y dulzura»<sup>55</sup>.

Por supuesto, el conservadurismo no era el monopolio de las mujeres. Numerosos políticos e intelectuales creían que las campañas a favor de los derechos de la mujer no eran más que «opiniones inadaptables al medio en que vivimos, desconocedoras de las verdaderas necesidades apremiantes de la mujer y tendenciosas al desnivelamiento de su dignidad», que amenazaban, además, con hacer naufragar «los más caros ideales de la sociedad, de la familia y de la patria». Como muchos otros, consideraban que el «puesto de la mujer está en el hogar», educando a los hijos, cuidando a sus padres, atendiendo a su esposo<sup>56</sup>. Según ese modo de pensar, la *condición femenina* se alteraba si la mujer se empeñaba en realizar tareas que no eran las de su género. Por eso, rechazaban la posibilidad de verla incursionar tanto en la vida política como intelectual:

Nuestras damas, bajo una aparente sencillez [...], han planteado problemas de vasto alcance y de intrincada complejidad [...]. Yo soy un partidario fervoroso

---

<sup>55</sup> *Universidad*, «Encuesta femenina. Contestación de Démodée», Bogotá, 97, 1.º de septiembre de 1928, pág. 242.

<sup>56</sup> *El Debate*, «Feminismo criollo (contestación a una encuesta)», 17 de agosto de 1928.

de esta clase de feminismo, encantadoramente intelectual, que significa toda una liberación de legendarios prejuicios [...]. Lo que sí no me cuadra es ese feminismo sufraguista [sic] en boga en algunos países y que todo tiene menos de «feminidad». Las mujeres convertidas en hombres resultan insoportables, es algo que repugna al criterio latino, soñador y si se quiere romántico. El feminismo en traje de «sportman» es algo abominable, que peca contra la estética. Y el feminismo en forma académica, dado a resolver problemas políticos y económicos y metido en elucubraciones literarias y filosóficas es poco menos que una amenaza para la paz y la armonía domésticas y para todas las gracias y encantos con que la naturaleza ha dotado prodigiosamente a nuestras adorables congéneres<sup>57</sup>.

Otros escritores, por el contrario, afirmaban que la participación de la mujer en actividades distintas a las faenas del hogar no podía arrojar sino beneficios: «Marchamos tal vez a un polimorfismo sexual, útil a nuestros fines generales, y dentro de varias centurias contemplaremos una multitud laboriosa y ágil de hembras inteligentes y virtuosísimas, fuertemente fabricadas para ayudarnos a triunfar del misterioso destino»<sup>58</sup>. Para unos cuantos, como Baldomero Sanín Cano, destacado intelectual liberal, la exclusión de la mujer tenía su origen en el judeocristianismo, que había creado el mito de la mujer pecadora: «Estas ideas

---

<sup>57</sup> Sereno, Luis, «Inquietud femenina», *La República*, 18 de agosto de 1921.

<sup>58</sup> *La República*, «El valor del feminismo», 11 de agosto de 1921.

han tenido a la mujer en posición social inferior al hombre durante seis mil años de civilización judaica y cristiana», que continúa aún dominando a los «pueblos políticamente más débiles» y culturalmente «oscuros»<sup>59</sup>.

## ▪ INERCIAS Y NOSTALGIAS

Un observador atento a lo que estaba sucediendo en el país durante los años veinte podía concluir, como de hecho muchos lo hicieron, que las transformaciones que estaban afectando a la sociedad eran muy desiguales; que, si en algunos ámbitos los cambios eran sorprendentes, en otros predominaban las inercias y las continuidades. Si este desarrollo contradictorio se debía en parte a la clase gobernante, no por ello se puede afirmar, sin más, que los conservadores estaban ciegamente apegados al «orden establecido» y que eran enemigos del cambio. Muchas de las evoluciones que hemos señalado contaron con el decidido apoyo de los diferentes gobiernos de la hegemonía, comenzando por el impulso dado a las mejoras en las vías de comunicación, a la infraestructura de las ciudades, a la incipiente industria. Bajo la iniciativa del gobierno de Pedro Nel Ospina (1922-1926), se gestaron ciertos proyectos tendientes a modernizar el Estado. Fue la época de

---

<sup>59</sup> Sanín Cano, Baldomero, «Evolución social de la mujer», *Universidad*, núm. 36, 2 de julio de 1927, págs. 25-27.

las misiones extranjeras, que vinieron a Colombia, por invitación del propio Gobierno, para señalar las reformas necesarias y la manera de llevarlas a cabo. Una de ellas, a cargo de E. W. Kemmerer, experto estadounidense en finanzas, tenía como objetivo presentarle al Gobierno un proyecto para modernizar el sistema financiero, en momentos en que la economía colombiana estaba conociendo un auge excepcional. La misión fue exitosa, pues logró modernizar relativamente el sistema financiero del país, creando instituciones e implementando diversas reformas, con el pleno respaldo de las autoridades: la creación del Banco Central y de la Contraloría General de la Nación, encargada de fiscalizar el gasto público, apuntaban «a generar una disciplina fiscal como un requisito para adoptar el patrón oro y para que el Gobierno pudiera ser receptor de crédito internacional», el cual debía ser manejado de manera transparente y racional<sup>60</sup>. Los liberales no dudaron en reconocer la importancia de tal misión. Alberto Lleras decía al respecto:

Entre las notables empresas de Ospina [...], hubo algunas de perdurable memoria. Se debieron, sin duda, a los consejos y dirección de un joven profesor de Princeton, Edwin Walter Kemmerer, experto en cuestiones económicas y en administración, quien presidió una misión para reorganizar el gobierno colonial atrasado e

---

<sup>60</sup> Kalmanovitz, Salomón y Enrique López Enciso, *La agricultura colombiana en el siglo XX*, Bogotá, Fondo de Cultura Económica, Banco de la República, 2006, pág. 73.

impotente, y montar una estructura capitalista moderna, y de acuerdo con las nuevas condiciones en que el país parecía comenzar su desarrollo<sup>61</sup>.

Pero si las reformas financieras lograron su cometido, otras misiones contaron con menor suerte debido a las ambigüedades del Gobierno. La misión educativa era para muchos pedagogos y políticos una condición esencial para asegurar el desarrollo del país, más aún, para acceder a la «civilización». En 1924 llegaron al país los pedagogos alemanes, todos católicos para no ofender al clero colombiano, con la tarea de reformar el sistema educativo en sus distintos niveles. La misión contaba con el respaldo del ministro de Instrucción Pública, de los conservadores «moderados» y de los liberales. Para primaria, el proyecto proponía medios para construir nuevos planteles y para remunerar a los maestros; en la secundaria, se quería abrirles las puertas a las niñas, ofrecer, al lado del bachillerato clásico, el científico y el comercial, y darle al Estado un mayor poder de intervención en los colegios. Cuando el ministro de Instrucción Pública quiso promover la reforma, el nuncio apostólico se opuso; acto seguido, el presidente Ospina le quitó su apoyo al ministro. Los alemanes, decepcionados, regresaron a su país en 1926<sup>62</sup>. En otras palabras, las élites políticas y económicas estaban

---

<sup>61</sup> Lleras Camargo, Alberto, *op. cit.*, pág. 227.

<sup>62</sup> Helg, Aline, *op. cit.*, págs. 95-100.

interesadas en apoyar la modernización económica y administrativa, pero no la cultural.

Para el clero católico, así como para una extrema derecha que ya había empezado a definir sus contornos, las transformaciones que conocía el país representaban un motivo de honda preocupación. De acuerdo con una ideología religiosa apegada a la tradición y a los *valores esenciales*, el devenir histórico, es decir, los cambios, las evoluciones que se presentan en una sociedad determinada, en la medida en que eran susceptibles de alterar el *orden divino*, podían significar una desviación con respecto al *destino* de la humanidad. A finales de los años veinte, cuando el desarrollo capitalista y sus consecuencias habían introducido transformaciones importantes en el panorama nacional, los sectores más conservadores hicieron sentir su voz para defender el mundo tradicional, amenazado por los embates de la modernidad. Estas corrientes oponían el mundo urbano, industrial y moderno a la vida pastoril, campesina y tradicional. Los terratenientes decían contemplar «con tristeza la despoblación de los campos y el desfile interminable de los hombres sencillos hacia las obras públicas, donde se trabaja muy poco, se oía con frecuencia la palabra “camarada” y se consumía el valor de los jornales, entre la espuma de la cerveza y el humo del cigarrillo»<sup>63</sup>. En su visión nostálgica, el campo y el campesinado conservaban

---

<sup>63</sup> *Revista Nacional de Agricultura*, núm. 313-314, julio-agosto de 1930, págs. 156-159, citado en Londoño Botero, Rocío, «Concepciones y debates sobre la cuestión agraria (1920-1938)», en Sierra

la pureza original y eran revestidos de todas las virtudes imaginables, mientras que la ciudad era degradada a una sucursal del pecado. El episcopado recordaba continuamente los numerosos beneficios económicos y políticos de la agricultura, pero, sobre todo, exaltaba la moralidad propia del campo:

Donde está, sin embargo, la supremacía de la agricultura es en la santidad que de por sí entraña. Quizá no haya entre las ocupaciones terrenas ninguna que moralice más las costumbres, que libre a los hombres del pérfido mundo, que purifique tanto el alma como la agricultura, la vida campesina. El aire incontaminado del campo, el silencio de la naturaleza, la independencia casi completa, la tranquilidad del hogar, la frugal alimentación, el alejamiento de los malos ejemplos de los centros paganzados, la ausencia de la ociosidad y diversos factores más, todo contribuye a poner muy alto la agricultura, la vida campesina<sup>64</sup>.

Detrás de esa visión idílica del campo, publicada en 1930, es decir, en momentos en que los conflictos agrarios se habían hecho muy tensos y cuando la ola migratoria había desplazado a miles de campesinos a las ciudades, se aprecia el apego por la tradición y el rechazo del presente; el elogio del «reposo» frente a una sociedad en

---

Mejía, Rubén (ed.), *República liberal: sociedad y cultura*, Bogotá, Universidad Nacional, 2009, pág. 75.

<sup>64</sup> *Conferencias Episcopales de Colombia*, «Carta de los preladados a los agricultores de Colombia (1930)», *op. cit.*, págs. 381-382.

movimiento; la nostalgia de la sociedad rural en contraposición al industrialismo<sup>65</sup>. El clero y otras corrientes del pensamiento expresaban así sus temores frente a la «nueva» sociedad que iba surgiendo a causa del desarrollo industrial y urbano, de los cambios demográficos y culturales, del proceso de secularización, de la irrupción de las masas y del respaldo que les brindaban a estas los partidos de izquierda. Ese mundo «moderno», por sus orígenes, valores y objetivos, significaba una ruptura, en todos los planos, con el orden tradicional.

## ▪ CONCLUSIONES

Los cambios que se dieron a partir de los años veinte empezaron a transformar, todavía tímida pero irreversiblemente, a la sociedad colombiana. Las fuerzas desatadas en ese entonces jalonaron un proceso de modernización que modificó el panorama político y social, que les imprimió un mayor dinamismo a las ciudades, que permitió el desarrollo de las vías de comunicación, que le dio cabida a nuevas generaciones de intelectuales. La modernización trajo consigo también nuevos interrogantes relacionados, entre otros aspectos, con el papel de la mujer, con los fines de la educación, con el lugar de la Iglesia católica, con la

---

<sup>65</sup> Mayeur, Jean-Marie, *Catholicisme social et démocratie chrétienne*, París, CERF, 1986, pág. 23.

cuestión social. La importancia histórica de los debates que se dieron en los años veinte es más que evidente: conservan hoy toda su vigencia y las respuestas que suscitan remiten, de una u otra manera, al gran debate sobre la democracia.

Las transformaciones estudiadas, como se dijo, fueron limitadas no sólo porque no introdujeron modificaciones radicales, sino, además porque su impacto llegó apenas a unos cuantos sectores sociales y a unas cuantas regiones del país. Limitadas también porque la clase dirigente no tuvo el mismo empeño por modernizar la vida política, cultural y social como el que mostró por reformar, por ejemplo, la infraestructura y las finanzas. En el fondo, los sectores más conservadores de la sociedad, bien representados por el régimen confesional de la hegemonía conservadora, tuvieron grandes dificultades para adaptarse al nuevo contexto y a los nuevos desafíos. La llegada inesperada de un nuevo gobierno, encabezado por los liberales, alimentaría todo tipo de esperanzas en aquellos que deseaban mayores reformas.

## ▪ 2. LA REVOLUCIÓN EN MARCHA Y LA POLARIZACIÓN DE LA SOCIEDAD

EN 1930, DESPUÉS DE MEDIO siglo de gobiernos conservadores, los liberales lograron retornar al poder. El fin de la hegemonía conservadora se debió, en primer lugar, a las divisiones internas del partido. Pero también a su incapacidad para responder a los nuevos desafíos que habían surgido en los años anteriores, así como a la crisis del año 1929. El triunfo liberal, por esas mismas razones, había suscitado grandes expectativas de cambio.

Las reformas que llevaron a cabo los cuatro gobiernos liberales que se sucedieron durante los dieciséis años que estuvieron en el poder (1930-1946), buscaban responder a los anhelos del electorado. Sin que se pueda hablar, en ningún caso, de programas radicales, las políticas reformistas de los liberales generaron, pese a su carácter moderado, un profundo temor en la oposición, que vio en ellas la antesala del triunfo comunista. Rápidamente, la sociedad colombiana se polarizó en dos bloques enemigos, cuyos enfrentamientos, alimentados por la no menos tensa coyuntura internacional, no sólo postergaron la

modernización de la sociedad, sino que precipitaron al país en una dramática guerra civil.

## ▪ LOS INICIOS DE LA TRANSICIÓN

Mientras que muchos países de América Latina y de Europa conocieron en la misma época transiciones autoritarias, no deja de llamar la atención el caso colombiano. Relegados a un segundo plano durante largos decenios, los liberales accedieron al poder por la vía democrática y su triunfo fue respetado por sus adversarios. Es posible que el talante del primero de los gobiernos liberales haya contribuido a apaciguar los ánimos de los conservadores. Enrique Olaya Herrera, que había sido embajador en Washington durante la última administración conservadora, no introdujo cambios bruscos en el manejo del Estado. Su política fue tan moderada, que varios investigadores han señalado que su llegada al poder no significó el fin de la hegemonía conservadora<sup>66</sup>. La misma sensación fue compartida por muchos liberales de la época, que sentían frustradas sus esperanzas de cambio.

Quizá no era tan sencillo lanzarse a una política novedosa, como no tardaría en comprobarlo su sucesor. Más allá de la moderación del nuevo mandatario, las circunstancias

---

<sup>66</sup> El tercer tomo de Gerardo Molina sobre las ideas liberales comienza en 1935, con las reformas del gobierno de López Pumarejo, y no en 1930, cuando los liberales regresaron al poder.

hacían difícil dar timonazos bruscos. Con excepción de la rama ejecutiva, los conservadores controlaban todas las instancias del poder. El clero se mostraba resuelto a impedir que las bases del Estado confesional fuesen modificadas. Como muchos otros dirigentes, Olaya pensaba que había que proceder con calma y prudencia, no sólo para evitar en lo posible los roces con la oposición, sino porque el país, decía, no se encontraba preparado para aventuras riesgosas.

No todo siguió igual, a pesar de lo que decían quienes aspiraban a ver profundas y rápidas reorientaciones. Su gabinete de Unidad Nacional, que le dio cabida a varios representantes conservadores en los ministerios y en las gobernaciones, se puso en la tarea de mitigar los severos efectos causados por la Gran Depresión, que en 1929, tras el desplome de las bolsas internacionales, había sumido al mundo entero en una profunda crisis socioeconómica. Al reducirse drásticamente las ventas de las exportaciones de café, tanto el sector oficial como el privado, cortos de recursos, detuvieron sus programas. De inmediato se disparó el desempleo y disminuyeron los salarios. Olaya impulsó las obras públicas, en especial, las carreteras, que empezaban a competir con el tren, y apoyó las leyes proteccionistas establecidas a finales de la hegemonía conservadora con el fin de ayudar a la industria nacional. En ambos casos, el mandatario pretendía, entre otros aspectos, generar nuevas fuentes de trabajo.

Olaya también intentó modernizar en algo la vida política. Dos acciones concretas apuntaban en esa dirección. Por una parte, quiso poner fin, mediante la creación

de la cédula de ciudadanía, a uno de los viejos vicios que desvirtuaban la democracia: el fraude, tan recurrente en los diferentes comicios electorales. Por otra, le dio amplia cabida a las nuevas generaciones, provenientes, por lo general, de las clases medias, que en muchos casos debían su posición no a sus recursos económicos ni a su linaje, sino a sus méritos personales. Buena parte de Los Nuevos, aquellos intelectuales y políticos que encontramos en el capítulo anterior, hicieron así su ingreso a la burocracia oficial. También mostró cierta preocupación por la situación jurídica de la mujer, la cual, hasta entonces, le negaba la posibilidad de manejar sus bienes inmuebles una vez contrajera matrimonio, disposición eliminada por el Gobierno. En el plano social, Olaya reconoció una serie de peticiones que los trabajadores y sus representantes venían solicitando desde tiempo atrás, como las vacaciones remuneradas y la jornada laboral de ocho horas.

En otros temas, el primer gobierno liberal se mostró particularmente timorato. Fue el caso de la cuestión agraria y de las relaciones Estado-Iglesia, dos puntos que muchos esperaban que fueran objeto de importantes replanteamientos. En cuanto al primero, Olaya se limitó a repartir algunas hectáreas, en realidad muy pocas, que provenían de unas cuantas haciendas previamente adquiridas por el Estado, y a fomentar los préstamos entre el campesinado, mediante la creación de la Caja de Crédito Agrario. Nada de ello podía contrariar a la muy poderosa Sociedad de Agricultores de Colombia, que representaba los intereses de los terratenientes. En lo concerniente al segundo

punto, Olaya fue hostil a cualquier iniciativa que pudiera afectar los intereses del clero; cuando un grupo de políticos liberales le sugirió modificar el concordato, el presidente respondió que «la política definida del Gobierno nacional es la de mantener y cumplir el concordato [...] absteniéndose de gestión alguna de reforma y antes bien procurando que sobre él continúen desarrollándose con toda cordialidad y armonía» las relaciones entre el Estado y la Iglesia<sup>67</sup>. Si desde comienzos del siglo XX, la dependencia colombiana frente a Estados Unidos se había ido fortaleciendo rápidamente, durante el gobierno de Olaya esa tendencia se afianzó aún más, como se puede observar, por ejemplo, en la política petrolera, favorable a los intereses de las compañías estadounidenses.

El gobierno de Olaya representaba, en muchos aspectos, el continuismo. Y, sin embargo, fue objeto de severas críticas por parte de una oposición que creía realmente que los «pilares esenciales de la nación» estaban a punto de derrumbarse. Desde la prensa y la tribuna política, los representantes más intransigentes del Partido Conservador no cesaron de condenar al liberalismo, a sus valores, a todos los males que se desprendían de una doctrina inspirada en el protestantismo, en la masonería, en el socialismo y en el ateísmo. Sus ácidos ataques no se dirigían únicamente a los exponentes de semejantes herejías; todo aquel que se atreviera a colaborar con el Partido Liberal era víctima de las mismas condenas, como sucedió con

---

<sup>67</sup> *La Iglesia*, marzo 1932, núm. 3, pág. 92.

los conservadores que habían decidido hacer parte de la Unidad Nacional. Las relaciones entre liberales y conservadores sufrieron un mayor deterioro debido al creciente sectarismo político que se desató en algunas regiones del país, en particular, en Boyacá y los dos Santanderes.

La guerra que estalló entre Colombia y Perú (1932-1934), motivada por litigios fronterizos en la región del Amazonas, eliminó brevemente las tensiones entre liberales y conservadores. Durante unos cuantos meses, los dirigentes del bipartidismo pidieron reiteradamente deponer los ánimos para poder enfrentar con éxito al enemigo externo. Laureano Gómez dejó de lado sus feroces ataques contra el liberalismo en aras de la reconciliación nacional: «¡Paz, paz, paz en el interior! ¡Guerra, guerra, guerra en la frontera amenazada!», declaró ante el Senado en un célebre y aplaudido discurso<sup>68</sup>. La prensa conservadora saludó efusivamente el abrazo en el que se estrecharon Laureano Gómez, Felipe Lleras y Gabriel Turbay: «Fue el abrazo que en toda la república se dieron ayer los hijos de Colombia, como símbolo de la unión y de la fuerza»<sup>69</sup>. El arzobispo primado, Ismael Perdomo, le transmitió al presidente Olaya la disposición del clero colombiano a «cumplir con ilimitada generosidad y entusiasmo los deberes que su ministerio y su amor a la Patria le imponen, sin

---

<sup>68</sup> *El País*, 18 de septiembre de 1932.

<sup>69</sup> *Idem*.

rehusar ninguna clase de sacrificios»<sup>70</sup>. Un año después, el propio Laureano, con el mismo empeño que antes, se encargó de reanudar los ataques contra el liberalismo por el mal manejo militar que le estaba dando al conflicto y por las negociaciones diplomáticas: «Sólo el valor de nuestros soldados, sólo la intrepidez y pericia del ejército [...] supieron contrarrestar la torpeza de un gobierno que fue de error en error, de tumbo en tumbo, hasta dar en la vergonzante claudicación de Ginebra»<sup>71</sup>.

Las retaliaciones que emprendieron no pocos liberales contra los conservadores por haber sido objeto de las persecuciones oficiales en los años anteriores, agravaron la situación. A todo ello se sumó el descontento de los sectores populares, molestos no sólo por las pocas medidas tomadas en su favor, sino, además, por los problemas sociales que provocó la caída de los precios del café a comienzos de los años treinta. Las tensiones se harían muchos más profundas con la llegada de un nuevo gobierno que anunciaba a los cuatro vientos su decisión de introducir reformas de mayor alcance.

---

<sup>70</sup> *Idem.*

<sup>71</sup> *El problema amazónico. Formidable discurso del Senador Dr. Laureano Gómez en la sesión que precedió a la clausura del Congreso colombiano de 1933* (22 de noviembre de 1933), Talleres Gráficos Benedetti Hermanos, Panamá, 1933, págs. 15-16.

## ▪ LA REVOLUCIÓN EN MARCHA<sup>72</sup>

Alfonso López Pumarejo, un estadista identificado con una concepción más moderna del Estado del manejo de la sociedad, gobernó al país en dos ocasiones (1934-1938; 1942-1945), produciendo un profundo impacto en los contemporáneos que vieron en él un hito, para bien o para mal, en la historia colombiana. Para unos, la Revolución en Marcha —nombre con el que se conoce su primer cuatrienio, el más innovador de los dos— representaba el esfuerzo más sólido que se había llevado a cabo hasta el momento para modernizar al Estado colombiano mediante reformas acordes con los nuevos tiempos; en pocas palabras, era el comienzo de una nueva etapa histórica. Para otros, el país tomaba rumbos que, al ser ajenos a su devenir histórico, ponían en serio peligro la estabilidad nacional. Los ímpetus reformistas del Gobierno, alimentados por una retórica llena de promesas, no podían sino escandalizar a los sectores tradicionales, que de por sí ya estaban horrorizados por lo que hacían otros liberales en distintos lugares del planeta.

---

<sup>72</sup> Entre la abundante bibliografía sobre la República Liberal, cf. Molina, Gerardo, *Las ideas liberales en Colombia*, tomo III, *De 1935 al Frente Nacional*, Bogotá, Tercer Mundo, 1988, caps. I-V; Sierra Mejía, Rubén (ed.), *República liberal: cultura y sociedad*, Bogotá, Universidad Nacional, 2009. Para una perspectiva más crítica, cf. Palacios, Marco, *Entre la legitimidad y la violencia: Colombia 1875-1994*, Bogotá, Norma, 1995, capítulo 3; Pécaut, Daniel, *Orden y violencia: evolución sociopolítica de Colombia entre 1930 y 1953*, Bogotá, Siglo XXI, capítulo II.

Desde un comienzo, López anunció que el suyo sería un gobierno innovador. Con un lenguaje desconocido para la sociedad, el nuevo mandatario no dudaba en criticar a las élites tradicionales, preocupadas únicamente por «constituir gobiernos de casta» y «regímenes oligárquicos», ajenas por completo a las necesidades de las «masas populares». Quizá lo más sorprendente de todo era que quien formulaba esas denuncias fuera un connotado representante de esas mismas «oligarquías» que ahora fustigaba por desentenderse del pueblo. Y es que su gobierno, afirmaba en el mismo tono, estaría al servicio de una república liberal y social. Liberal, en primer lugar, por su composición: todos los miembros del gabinete —con excepción del Ministerio de Relaciones Exteriores, que siguió en manos de los conservadores con el fin de darle continuidad a las negociaciones posbélicas con el Perú—, venían de las filas del partido que había triunfado en las elecciones. Liberal, además, por el programa que animaba al Gobierno.

La Revolución en Marcha partía de un postulado: para superar el atraso en el que se hallaba sumido el país, era necesario aplicar reformas de corte liberal. El atraso remitía a diversos ámbitos, comenzando por el económico. La Primera Guerra Mundial y, sobre todo, la crisis de 1929, habían llamado la atención sobre la fragilidad del sistema agroexportador latinoamericano. Con el fin de evitar los riesgos propios a las vicisitudes del mercado internacional, diferentes países de la región impulsaron la industria nacional para asegurar al menos la producción básica y

no depender exclusivamente de las potencias mundiales. Desde las postrimerías de la hegemonía conservadora, la industria colombiana venía recibiendo apoyo oficial a través de medidas proteccionistas. Para los años treinta, el panorama industrial presentaba varios rasgos favorables: se contaba con un empresariado pujante y con mayores capitales, provenientes en buena medida del café; con una mejor infraestructura —sobre todo, en materia de vías de comunicación y de redes eléctricas— y con una demanda interna creciente. Por estos motivos, la industria ocupaba un lugar más importante en la economía del país y tendía a diversificarse: al lado de los sectores tradicionales —bebidas, alimentos, textiles—, las inversiones se dirigían hacia el petróleo y la acería.

Sin embargo, pese a los avances, el desarrollo industrial todavía era precario y muy inferior a los logros que habían alcanzado algunos países vecinos. Para López Pumarejo, el atraso tecnológico y la falta de una mano de obra especializada explicaban, en buena medida, los escasos resultados de la industria nacional. Por consiguiente, era imprescindible llenar esos vacíos si se quería aprovechar la riqueza del país. El desarrollo industrial implicaba entonces dirigir la mirada hacia el campo educativo. ¿Existían instituciones idóneas para capacitar al trabajador colombiano? En un país que dependía de la agricultura y de la explotación del petróleo, y que, además, pretendía desarrollar su industria, ¿en qué estado se hallaban las ciencias agrónoma, química, mecánica y siderúrgica? Resultaba evidente que no se contaba con las bases mínimas para formar trabajadores

especializados, técnicamente competentes. De ahí la recurrente necesidad de pedir ayuda al extranjero, no sólo en capitales, sino también en términos de conocimiento y de mano de obra idónea. López mostró cierto recelo por la presencia de las grandes multinacionales que explotaban las riquezas del país y su discurso tuvo algunos tintes nacionalistas, pero nunca comparables, por su extrema moderación, con el fuerte nacionalismo que para ese mismo entonces se manifestaba en países como México y Brasil.

La tarea educativa era ardua por razones tanto cualitativas como cuantitativas: la población estudiantil era muy baja en todos los niveles y los índices de deserción eran elevadísimos, lo que se traducía en altas tasas de analfabetismo; los maestros carecían de una adecuada capacitación; los recursos oficiales eran muy escasos y la infraestructura dejaba mucho que desear. Los esfuerzos emprendidos por el Gobierno apuntaban a democratizar y a mejorar la enseñanza. La educación escolar fue declarada obligatoria y gratuita, la universidad acogió a las mujeres, se abrieron las escuelas nocturnas para adultos trabajadores y se eliminaron numerosas restricciones que servían de excusa para evitar el ingreso a las aulas de cierto tipo de estudiantes. Así, al mismo tiempo que se intentaba facilitar el acceso de los sectores más pobres a la primaria y de las mujeres a los estudios superiores, se suprimían las trabas que usualmente se empleaban para rechazar a los estudiantes indeseados, ya fuese por razones políticas —hijos de padres demasiado liberales o, peor aún, simpatizantes del «socialismo»—, religiosas —hijos de no católicos—, morales —«hijos

naturales» o provenientes de familias poco edificantes—, étnicas —niños demasiado alejados de los patrones raciales socialmente aceptados—. Los reformadores estaban motivados, como se ve, no simplemente por aumentar las tasas de escolaridad y reducir el analfabetismo, sino, además, y sobre todo, por establecer un sistema educativo menos excluyente, es decir, más democrático. En relación con la calidad de la enseñanza, la reforma apuntaba al desarrollo de una educación laica, propicia al fortalecimiento de un espíritu crítico, racional, basado en nuevas metodologías y abierta a las corrientes modernas del pensamiento occidental. El jefe de Estado lamentaba que «la instrucción secundaria, relegada casi totalmente a la iniciativa particular, subvencionada por el Tesoro Público, es hoy un caos en el cual vienen fracasando sucesivamente millares de estudiantes, desorientados y confundidos». Y agregaba, en clara alusión al monopolio educativo del clero, que «El bachillerato se ha venido convirtiendo en un negocio apostólico, y entre nosotros es una forma lícita del comercio, que rechaza con terca resistencia la intervención oficial»<sup>73</sup>. Una vez reducida la injerencia del clero en la educación, el Estado tendría, incluso en los planteles privados, una intervención mucho mayor en la elaboración y control de los programas de estudio, en la escogencia de los textos y en la concesión de los diplomas a los estudiantes.

---

<sup>73</sup> «Mensaje al Congreso Nacional en la instalación de sus sesiones ordinarias de 1935», en López Pumarejo, Alfonso, *Obras selectas*, Bogotá, Cámara de Representantes, 1979, tomos I y II, pág. 60.

Si bien la modernización del sistema educativo le dio cierta importancia a la primaria y a la secundaria, buena parte de los esfuerzos emprendidos por el Gobierno, apoyado por un grupo de intelectuales de alto nivel, se concentraron en los estudios superiores. En los años treinta, la universidad pública continuaba anclada en el siglo XIX: las principales carreras que ofrecía eran Medicina, Ingeniería y Derecho, de una calidad por lo general muy deficiente; entre las diferentes facultades de un mismo plantel no había mayor relación, lo que implicaba, entre otros factores, la generación de conocimientos muy dispersos. La Universidad Nacional, uno de los emblemas de las reformas educativas, fue reestructurada en lo académico y en lo administrativo. Aumentaron los recursos, la autonomía y las libertades académicas; se crearon nuevas carreras y facultades, tales como Economía, Veterinaria, Química, Arquitectura; se establecieron relaciones más sólidas entre los diferentes saberes gracias a la creación de la Ciudad Universitaria y la investigación recibió estímulos significativos. Muchas de estas reformas estaban inspiradas en los planes educativos que otros países de la región ya habían puesto en marcha. En este caso, la influencia del movimiento argentino era notoria; Germán Arciniegas, uno de los intelectuales que participó activamente en el Ministerio de Educación, conocía muy de cerca esa experiencia y se sentía particularmente atraído por la libertad de cátedra, algo novedoso en el muy conservador escenario educativo colombiano.

Además de la Universidad Nacional, otras instituciones también gozaron del respaldo oficial y contribuyeron a

revitalizar el campo intelectual colombiano. La Escuela Normal Superior, desde su creación en 1936, en un clima abierto a las nuevas corrientes de pensamiento y con el apoyo de un puñado de científicos europeos que habían huido de la extrema derecha, se convirtió en un centro intelectual que renovó las prácticas del saber en diferentes disciplinas. Por una parte, se encargó de la formación de maestros de enseñanza secundaria, que se especializaban en una de las cuatro áreas que se impartían en la Escuela: ciencias naturales, física y matemáticas, literatura e idiomas y ciencias sociales. Una vez culminados sus estudios, los recién egresados se convertían, a su vez, en maestros bien capacitados para transmitir sus conocimientos a los bachilleres en las diferentes regiones. Por otra parte, la Normal contribuyó de manera decisiva a las primeras formas de institucionalización de las ciencias sociales en el país. Esto significa que propició la profesionalización de disciplinas como la historia, la antropología, la geografía, la lingüística, etcétera, que hasta el momento habían estado en manos de simples aficionados, los cuales, en sus ratos libres, sin el bagaje académico apropiado, se convertían en «antropólogos», «historiadores»... Los estudiantes de la Normal, por el contrario, cursaban todo un programa académico, familiarizándose con las temáticas y las teorías dominantes en las universidades europeas, y demostrando, mediante rigurosos exámenes, que estaban en capacidad de manejar las herramientas propias a las ciencias sociales. Entre profesores y estudiantes se formó una comunidad académica que, aunque todavía muy pequeña e incipiente, hizo valiosos aportes en las diferentes áreas.

De la mano del etnólogo francés Paul Rivet; de los geógrafos Ernesto Guhl, alemán, y Pablo Vila, español; del filólogo Pedro Urbano González de la Calle, también español, del historiador alemán Gerhard Masur o del español José María Ots Capdequi, entre otros destacados investigadores extranjeros, las Ciencias Sociales en Colombia adquirieron un rostro más moderno. El paso hacia un saber más científico fue posible no sólo por la solidez de los marcos teóricos y metodológicos de los que hacían gala los eruditos europeos; tan importante como la renovación de los «instrumentos», fue la aplicación de esas técnicas y esos saberes a la realidad colombiana. De una u otra manera, las investigaciones de Guhl, de Rivet y compañía, se centraron en el muy novedoso estudio de los rasgos étnicos, geográficos, lingüísticos, históricos, culturales, del país, destacando sus particularidades, en ocasiones sus riquezas y, en todos los casos, la diversidad de la nación. En esa tarea los secundaron muy pronto sus discípulos: por citar apenas unos pocos ejemplos, Jaime Jaramillo Uribe en la historia; Gregorio Hernández de Alba y Virginia Gutiérrez en la antropología; Luis Flórez en la filología. Todos ellos, junto a muchos otros igualmente destacados en esas y otras disciplinas, sentaron las bases para el estudio de un pasado y un presente que difería notablemente del que difundían los círculos oficiales. Quizá en ese enfoque reside uno de los principales legados de la Escuela al pensamiento colombiano: más allá de la capacitación del profesorado, del desarrollo de las ciencias sociales, del surgimiento de una incipiente comunidad académica, logros de por sí muy valiosos, el reconocimiento

de la diversidad cultural, regional, lingüística, constituía un paso hacia la construcción de un modelo de nación mucho más complejo que el que habían construido las élites de finales del siglo XIX: así, a un país católico, hispanohablante, y, si no blanco, al menos mayoritariamente mestizo, identificado con los modelos de «civilización» europeos, se sumó, todavía con muchas dificultades y no pocas contradicciones, la imagen de una nación más diversa, más plural, que hundía sus raíces en los tiempos prehispánicos<sup>74</sup>.

La política cultural del Gobierno encontró en la *Revista de las Indias* un medio muy eficaz para difundir sus ideales y para legitimar su apuesta. Esta publicación oficial agrupó a un selecto grupo de intelectuales liberales que se convirtieron en «ejecutores de la modernización del sistema educativo y de la promoción de métodos científicos para el estudio de la realidad nacional»<sup>75</sup>.

El Gobierno y sus simpatizantes insistían con razón en el carácter novedoso de la reforma educativa, orientada a la búsqueda del progreso económico, a la inclusión de nuevos sectores y al desarrollo de una racionalidad crítica

---

<sup>74</sup> Una muy buena síntesis sobre la importancia de la ENS se encuentra en: Jaramillo, Jaime Eduardo, «La Escuela Normal Superior: un semillero de las ciencias humanas y sociales», en Sierra Mejía, Rubén (ed.), *República liberal: cultura y sociedad*, Bogotá, Universidad Nacional, 2009, págs. 557-603.

<sup>75</sup> Martínez, Lina María, *La Revista de las Indias, 1936-1938: sus intelectuales como pensadores y ejecutores de la reforma educativa y cultural* [trabajo de grado], Bogotá, Carrera de Historia, Universidad de los Andes, 2009, pág. 72.

y científica. La profunda fe que algunos dirigentes liberales depositaban en la educación introducía una mirada más optimista sobre el individuo y la sociedad colombiana, una mirada alejada de los sombríos vaticinios que trazaban las teorías centradas en la geografía y en la raza, profundamente elitistas. En adelante, si el Estado cumplía su misión como docente, el individuo, dotado de un aparato racional susceptible de indicarle las mejores opciones para él y para el conjunto de la sociedad, estaría en condiciones de contribuir con el progreso del país, un progreso que no era entendido únicamente en términos materiales. Fieles al ideario liberal, López y sus asesores intelectuales creían, en efecto, que la educación también podía arrojar grandes beneficios políticos; para todos ellos, una buena formación debía ser una herramienta muy valiosa para afianzar la democracia. Preocupados por el auge de la extrema derecha en el mundo, los pedagogos liberales esperaban que una mejor preparación blindara al ciudadano contra el fascismo, el cual, gracias en parte al sufragio electoral, había alcanzado el poder y amenazaba la democracia en varios lugares del planeta, incluida Colombia. Estas inquietudes explican, en cierta medida, el interés del Gobierno en difundir la cultura en amplios sectores de la sociedad, en particular, en los sectores populares, a los que erróneamente se juzgaba más propensos a las veleidades antidemocráticas<sup>76</sup>.

---

<sup>76</sup> Silva, Renán, «República liberal, intelectuales y cultura popular en Colombia», en *República liberal, intelectuales y cultura popular*, Medellín, La Carreta, 2005, pág. 36.

Si bien existía el deseo de «educar al pueblo» para controlarlo mejor —vieja receta de las élites de todo el continente—, en sus dos gobiernos López también quiso democratizar la cultura ofreciendo a los sectores populares nuevas posibilidades para su desarrollo espiritual. La difusión del libro mediante bibliotecas aldeanas, ferias del libro, publicaciones con tarifas reducidas; las escuelas ambulantes, la cinematografía educativa, las conferencias didácticas apuntaban en ese sentido<sup>77</sup>. Más aún: López y su «equipo cultural» de colaboradores desplegaron importantes esfuerzos para rescatar y promover la «cultura popular», el «folclor» —fábulas, coplas, refranes, cuentos, etcétera—, considerados por los intelectuales liberales como una especie de «reencarnación de lo más auténtico que tiene un pueblo»<sup>78</sup>.

Las políticas económicas, educativas y culturales replanteaban, todas ellas, el papel del Estado. Si la gran preocupación de la Constitución conservadora de 1886 era asegurar el orden y el desarrollo económico, la Revolución en Marcha consideraba que el radio de acción del Estado debía ampliarse para cumplir con nuevas metas económicas, docentes y culturales. En pocas palabras, para garantizar el bien común se necesitaba un Estado interventor, dotado de las competencias y de los recursos indispensables. Como no existían mecanismos que

---

<sup>77</sup> *Ibidem*, págs. 13-57.

<sup>78</sup> *Ibidem*, pág. 25.

facilitaran el intervencionismo estatal, había que reformar la Constitución. Otras medidas de la Revolución en Marcha planteaban la misma necesidad.

Es el caso de la reforma tributaria. Hasta entonces, los recursos estatales dependían esencialmente de los impuestos que gravaban las exportaciones y las importaciones, un modelo obsoleto que sometía al Estado a los vaivenes de la coyuntura internacional. Al igual que en el siglo XIX, los ingresos fiscales eran muy reducidos: la población no pagaba prácticamente impuestos y cuando estos existían, la evasión era la norma. López inició un proceso de modernización en las finanzas, más equitativo y racional, sustentado en la creación de nuevos impuestos y en el incremento de las obligaciones fiscales de los sectores más ricos.

La intervención estatal también era imprescindible en otro punto delicado. López considera que la injerencia de la Iglesia católica en asuntos que iban más allá del plano espiritual, ocasionaba grandes trastornos no sólo a la institución eclesiástica, sino a la sociedad en su conjunto. En los años treinta, la Iglesia interfería en los asuntos del Estado y en las decisiones de los individuos, tarea facilitada por su alto grado de politización y sus alianzas con el Partido Conservador; la educación estaba bajo su control; pretendía imponer un único modelo moral y jurídico para la mujer, la familia y el matrimonio. Por consiguiente, era imprescindible delimitar el poder religioso. Los aspectos principales de la reforma se centraron en las relaciones entre las autoridades temporal y espiritual, la educación, el estatuto de la mujer, la libertad religiosa, el matrimonio

civil y el divorcio vincular. Adicionalmente, se quiso abolir el nombre de Dios del preámbulo constitucional y algunos artículos concordatarios que le reconocían diversos privilegios al catolicismo. Todas estas medidas implicaban modificar el concordato, pues temas como la educación y el matrimonio habían sido definidos mediante un acuerdo entre el Estado colombiano y el Vaticano.

Como se verá más adelante, no se pretendía, de ninguna manera, relegar al clero a los asuntos puramente espirituales ni, mucho menos, desconocer los derechos religiosos de la población. Al limitar el poder de la Iglesia, el Gobierno buscaba un doble objetivo: por una parte, liberar al Estado de las trabas que imponía el poder eclesiástico y allanar así el camino para el ejercicio de sus atribuciones; por otra, extender la ciudadanía a sectores hasta entonces excluidos por los prejuicios del clero.

La política incluyente del Gobierno también estuvo determinada por criterios sociales. La Revolución en Marcha significó una nueva etapa en las relaciones Estado-sectores populares, lo que supuso un fuerte viraje con respecto a lo que había sucedido durante la hegemonía conservadora. Ya hicimos mención al carácter de estas nuevas relaciones cuando nos detuvimos en las políticas culturales del Gobierno con respecto a obreros y campesinos. Un giro de la misma naturaleza se aprecia también en la esfera laboral. Después de casi dos décadas de exigir infructuosamente el reconocimiento de sus derechos laborales, el campesinado y, sobre todo, el proletariado urbano, encontraron en el gobierno de López un interlocutor dispuesto

a introducir algunos cambios de importancia. El problema social, como ya vimos, había adquirido dimensiones nacionales y las tímidas y escasas medidas adoptadas por el gobierno de Olaya Herrera, lejos de apaciguar los ánimos, quizá los atizaron más debido a la frustración que generaron. La Revolución en Marcha quiso dar, a su manera, una respuesta tanto a las luchas agrarias como a los conflictos laborales urbanos. En 1930 Colombia todavía dependía en muy buena medida de la venta de café en el exterior. Pero, a pesar de la inmensa importancia que revestía la agricultura, el país estaba muy atrasado en términos agrarios con respecto a algunos de sus vecinos. Mientras que la tecnología constituía un porcentaje elevado de las inversiones que hacían en sus tierras los propietarios argentinos, uruguayos o chilenos, los terratenientes colombianos, en su conjunto, no se mostraban decididos a aumentar la producción a partir de innovaciones técnicas. Tampoco parecían dispuestos a renovar las relaciones sociales con sus trabajadores, todavía sustentadas en las formas tradicionales, más propias del mundo colonial y hacendatario que del sistema capitalista moderno.

López se mostraba preocupado no tanto por la muy desigual distribución de las tierras, como por la baja producción de las grandes propiedades. Al igual que muchos otros políticos, creía que la solución consistía en presionar a los terratenientes para que explotaran de manera más adecuada sus enormes extensiones y así aumentar la producción y la oferta laboral. Según sus cálculos, de esa manera la población rural podría mejorar en algo su situación y, al

mismo tiempo, se sentarían las bases para el desarrollo de una mayor demanda. La Ley de Tierras estipulaba que la propiedad que no fuese explotada en un lapso de diez años —un plazo que luego se amplió a quince— pasaría a manos del Estado previa indemnización. La misma ley introdujo una novedad significativa, al atribuirle a la propiedad el carácter de bien social; es decir, una finca, una hacienda particular, podrían ser nacionalizadas si así lo exigía algún plan oficial que pudiera beneficiar a la comunidad —la construcción de una carretera o de una represa, por ejemplo—.

El Gobierno se mostró más audaz en la legislación laboral. El trabajador urbano, mejor organizado y más politizado que el campesino, era codiciado por los diferentes partidos, sobre todo a partir de 1936, cuando el gobierno de López eliminó las restricciones económicas y culturales que limitaban el sufragio de los hombres, los únicos con derecho al voto, lo que le dio una mayor heterogeneidad al electorado en términos sociales y étnicos. La extrema derecha, agrupada en torno al Partido Conservador, la izquierda radical, liderada por el recién creado Partido Comunista (1930), la disidencia liberal orquestada por Jorge Eliécer Gaitán —Unión Nacional Revolucionaria Izquierdista, UNIR—, multiplicaban esfuerzos y estrategias para ganar el respaldo de las masas, que representaban un caudal electoral bastante apetecible. López no tuvo mayores problemas para ganarse el apoyo del proletariado, no sólo por las reformas sociales que adelantó; desde antes, las debilidades del sindicalismo, las divisiones de la izquierda y el poco respaldo con el que contaba Gaitán más allá de

Bogotá, facilitaron el acercamiento entre la Revolución en Marcha y el pueblo, una alianza que se consolidó aún más a mediados de los años treinta, cuando tanto la UNIR como el Partido Comunista se unieron al liberalismo.

Las reivindicaciones del mundo obrero giraban en torno a mejoras en los salarios y en las condiciones de trabajo, al reconocimiento de la organización sindical y a derechos relacionados con diversas prestaciones. El Gobierno no defraudó a la mayoría de trabajadores. Presionó a los empresarios para que aumentaran las remuneraciones, lo que permitiría no sólo mejorar las condiciones del obrero, sino además estimular la producción industrial y agrícola; reconoció la huelga como derecho constitucional, estableció el descanso remunerado y la protección a la maternidad, una medida dirigida, sobre todo, a las madres trabajadoras. También le dio un gran impulso a la organización obrera, apoyando jurídica, económica y políticamente al sindicalismo: fue así que surgió, en 1938, la Confederación de Trabajadores de Colombia —CTC—, primera central obrera del país. En los numerosos conflictos entre patronos y trabajadores, el Gobierno intervino para favorecer a los empleados del ferrocarril, del petróleo, de las trilladoras de café. El apoyo gubernamental explica, sin duda, el auge del sindicalismo, que vio crecer el número de sus afiliados y el de sindicatos asociados, al tiempo que se expandía por nuevas regiones del país.

El mundo laboral experimentó un gran cambio. Privados hasta entonces de muchos derechos, resultaba evidente que tanto el campesino como el trabajador urbano no

eran verdaderos ciudadanos, pues la ley no reconocía sus peticiones, la «buena sociedad» sospechaba de ellos y el Estado los reprimía. A partir de la Revolución en Marcha, las relaciones laborales quedaron reglamentadas en términos modernos.

Pero los efectos de las medidas sociales iban más allá del plano estrictamente laboral, o mejor, las reformas sociales implicaban forzosamente transformaciones en otros ámbitos. El humilde empleado había sido promovido a la categoría de ciudadano: ese cambio, ese trascendental cambio, significaba que la «muchacha de servicio», el jornalero de la finca, el chofer, podían ahora votar, podían aspirar a una mejor calidad de vida —en su trabajo y en su cotidianidad—, podían contar con el respaldo del Estado para protegerse de la arbitrariedad de sus jefes. Hoy, seguramente, todo ello no nos parece mucho; pero para la gente de la época, a pesar de que realmente fue poco, significó una verdadera revolución, tanto jurídica, como social y mental:

Para los liberales [...], atrás debería de quedar la noción de «masas pastoriles», simplemente al uso para el sermón, para la contienda electoral o para el enfrentamiento bélico. Se trataba ahora, por el contrario, del «pueblo» como «sujeto activo» —aunque desde luego siempre un «pueblo niño» por educar y guiar—, objeto de deberes, pero también de derechos, verdadera encarnación del *futuro* [...]<sup>79</sup>.

---

<sup>79</sup> *Ibidem*, pág. 24.

La ampliación de derechos también benefició en alguna medida a las comunidades indígenas. La República Liberal, influenciada por la política indigenista mexicana y por el activismo del movimiento peruano Alianza Popular Revolucionaria Americana, fundó el Instituto Etnológico Nacional (1941), del cual salieron las primeras generaciones de etnólogos colombianos, bajo la conducción de Paul Rivet. Los trabajos de campo y las publicaciones del Instituto pusieron el acento en los grandes problemas sociales que aquejaban a los indígenas. Las investigaciones también se enfocaron en sus rasgos culturales, lo cual contribuyó a valorizar la diversidad cultural de la sociedad colombiana. Algunos escritores e intelectuales colaboraron en esa misma tarea, participando así en una amplia corriente indigenista presente por entonces en toda América Latina: en novelas, en artículos periodísticos, en pintura, exaltaron lo «americano», denunciaron los atropellos de los que eran víctimas los indígenas de las caucherías, rescataron el mundo prehispánico, defendieron los derechos de los indígenas<sup>80</sup>.

Gracias a su política reformista, el Estado extendió sus bases. Al otorgar nuevos derechos a la mujer, al obrero, al campesino, a los estudiantes, el Estado se hacía

---

<sup>80</sup> Pineda, Roberto, «Cuando los indios se vuelven comunistas (1910-1950)», en Sierra, Rubén (ed.), *República liberal: cultura y sociedad*, Bogotá, Universidad Nacional, 2009, págs. 213-216. Cf. el mismo autor, «La reivindicación del indio en el pensamiento social colombiano (1850-1950)», en Arocha, Jaime, Friedemann, Nina de (ed.), *Un siglo de investigación social. Antropología en Colombia*, Bogotá, Editorial Etno, 1984, págs. 220-221.

más incluyente, más representativo y, por lo tanto, más democrático. Ciertamente, no incluía a todos los sectores históricamente marginados, pero era un paso hacia una sociedad más plural. Un paso tímido, sin duda, como lo señalaron en su momento unos cuantos sectores del liberalismo y de la izquierda, muy minoritarios para inclinar la balanza a su favor. Más allá de la retórica empleada por el Gobierno y sus simpatizantes, la Revolución en Marcha fue, en realidad, un modesto plan de reformas que no tuvo jamás la ambición de cambiar profundamente las reglas de juego. No era ese el propósito del propio López, un destacado miembro de las élites nacionales, y semejante objetivo no figuraba entre los planes de buena parte de la dirigencia liberal, en el fondo, bastante conservadora.

## ▪ UNA REVOLUCIÓN A MEDIAS

La mayor parte de las reformas impulsadas por el Gobierno se quedaron a mitad de camino. Fue el caso, por ejemplo, de quienes se identificaban con el «feminismo». Si, por una parte, la emancipación de las mujeres se vio recompensada con el derecho que se les otorgó para ingresar a la universidad, así como con la eliminación de algunas cláusulas discriminatorias en las relaciones conyugales, los estatutos jurídicos continuaron discriminando claramente a la mujer en materia moral, sexual, familiar. El nuevo Código

Penal de 1936 equiparó al hombre y a la mujer en cuanto a la responsabilidad de los delitos, pero permitió que las sanciones fuesen más drásticas para las mujeres:

En el adulterio, la mujer podía ser recluida en un establecimiento penitenciario por el tiempo que decidiera el marido hasta un máximo de cuatro años. En el delito de concubinato también las penas mayores iban para la mujer. Dominaba el principio de irresponsabilidad si el marido asesinaba a su mujer legítima sorprendida en «acto carnal o deshonesto» [por lo cual] hasta los años 50, los maridos celosos continuaron matando impunemente<sup>81</sup>.

En asuntos políticos, la mujer siguió igualmente excluida. Los pocos avances que se dieron en el campo de los derechos de la mujer se explican, en muy buena medida, por la actitud conservadora de los propios liberales. Germán Arciniegas, el dinámico líder estudiantil de los años veinte, quien había alentado a las mujeres a expresar su descontento por la discriminación de la que eran objeto, se opuso, en la década siguiente, a las nuevas reformas educativas: la educación mixta, decía, «traía como consecuencia trastornos sexuales» para la mujer; su ingreso a la universidad era un «simple brote demagógico» que quiere desconocer un hecho irrefutable, a saber: «Que la mujer no es sujeto competente para ciertos menesteres y profesiones

---

<sup>81</sup> Palacios, Marco, *Entre la legitimidad y la violencia: Colombia 1875-1994*, Bogotá, Norma, 1995, pág. 153.

que pertenecen y corresponden a los hombres»<sup>82</sup>. Los derechos políticos de la mujer suscitaron también hondas discrepancias en las filas del Partido Liberal. Jorge Eliécer Gaitán, Gerardo Molina y José Mar, representantes del liberalismo «progresista», del socialismo y del comunismo, eran favorables al reconocimiento pleno de sus derechos como ciudadana. Otros, invocando todo tipo de razones, rechazaban tales iniciativas. Armando Solano, a quien ya hemos citado en otras ocasiones, sostenía:

Nuestra mujer, gracias a Dios, es esencialmente casera, doméstica, y es dentro del hogar donde despliega sus buenas y malas condiciones. Ahí estriba su fuerza y su gracia. Los que algo, aunque poquísimos, tengamos todavía de latinos, no queremos, no toleraremos, la mujer politiquera, la mujer de acción, oradora, periodista o redentora del pueblo<sup>83</sup>.

Para el ministro de Gobierno, Darío Echandía, la mujer «en este país no está preparada para intervenciones oficiales»<sup>84</sup>. *El Tiempo*, el diario liberal más influyente del país, criticaba con sarcasmo la nueva situación de las

---

<sup>82</sup> Citado en Velásquez, Magdala, «Condición jurídica y social de la mujer», *op. cit.*, pág. 28. Cf. también Tirado, Álvaro, *Aspectos políticos del primer gobierno de Alfonso López Pumarejo: 1934-1938*, Bogotá, Instituto Colombiano de Cultura, 1981, págs. 419-420.

<sup>83</sup> *El Tiempo*, 3 de agosto de 1935, citado en Tirado, Álvaro, *op. cit.*, pág. 423.

<sup>84</sup> *El Tiempo*, 22 de enero de 1936, citado en *Ibidem*, pág. 425.

mujeres tras la Segunda Guerra Mundial: «Las jóvenes solteras se ríen del matrimonio, y proclaman el derecho de tener hijos sin necesidad del vínculo sagrado. Otras muchas, más o menos asexuales, que antes se casaban para buscar apoyo económico, declaran la voluntad de mantenerse solteras, y las casadas se están divorciando». El diario insistía en la necesidad de salvar a la mujer y de evitar que se sometiera «a la prueba insensata del voto femenino, que será el paso inicial en la transformación funesta de nuestras costumbres y de la pugna entre los sexos»<sup>85</sup>. Así, voceros del liberalismo legitimaban la inferioridad de la mujer, estableciendo una separación tajante entre el mundo masculino y el femenino, abocado este último a una especie de inmovilismo en aras de las «buenas costumbres». Nada diferente decían los conservadores y los exponentes más recalcitrantes del catolicismo integral.

El campo educativo conoció el mismo resultado contradictorio. Los propósitos originales permitieron reducir en cierta medida el analfabetismo, pero la calidad ofrecida a los estudiantes era muy desigual. Los contrastes que ya existían de tiempo atrás entre la educación privada y pública, entre la educación urbana y rural, se hicieron más evidentes, en detrimento de las segundas. Y si buena parte de los esfuerzos gubernamentales estuvieron enfocados en promover una educación independiente de las trabas de la enseñanza confesional, los resultados, en este

---

<sup>85</sup> Velásquez, Magdala, «Condición jurídica y social de la mujer», *op. cit.*, págs. 51-52.

caso, tampoco fueron muy alentadores: tan pronto llegaron los liberales al poder, la Iglesia abrió nuevas universidades católicas en Bogotá —Javeriana— y Medellín —Pontificia Bolivariana—, las dos principales ciudades del país, en las que formó a buena parte de los hijos de la élite, la encargada, en un futuro cercano, de manejar el país.

Si bien los trabajadores urbanos recibieron la atención del Gobierno, la población rural, pese a constituir la mayor parte de la población, no contó con un verdadero apoyo de parte de las autoridades. La reforma agraria fue simplemente decepcionante. Para comenzar, el número de hectáreas que el Gobierno distribuyó entre el campesinado fue insignificante. Pero así esa cifra hubiese sido mayor, difícilmente la situación hubiera cambiado para la población rural. De hecho, en departamentos como Boyacá y Nariño, la tierra estaba dividida en infinidad de minifundios que pertenecían a familias campesinas muy pobres, pues no existía una política agraria que los apoyara. El campesino, además de una parcela, necesitaba créditos, conocimientos para explotar la tierra, asesoría en mercadeo para invertir en productos económicamente atractivos, vías de comunicación, seguros que protegieran la inversión contra las adversidades de la naturaleza. Nada de esto estaba contemplado en la Ley de Tierras de la llamada Revolución en Marcha, mucho más interesada en modernizar la gran propiedad que en promover una verdadera reforma agraria. Y si los obreros urbanos contaron con un apoyo más decidido por parte del Gobierno, quizá el precio que pagaron fue muy elevado: su respaldo

al liberalismo se tradujo en su sometimiento al liberalismo, lo que comprometió seriamente su posibilidad de actuar de manera un poco más autónoma.

El mismo conservadurismo caracterizó las relaciones con la Iglesia. Para destacados líderes del liberalismo, plantear una reforma religiosa que le diera cabida a temas tan delicados como el matrimonio civil, el divorcio y la educación laica, resultaba a todas luces inoportuna, pues esas medidas no sólo provocarían nuevos enfrentamientos bipartidistas —como lo diría Eduardo Santos, sucesor de López en la presidencia—, sino que, además, al atentar contra la enseñanza religiosa, debilitaría «la base fundamental de la cultura colombiana», según Carlos Lleras<sup>86</sup>. Durante los dos gobiernos de López, altos representantes del clero solían asistir a las ceremonias oficiales en compañía de representantes estatales y en las páginas de *El Liberal*, principal diario lopista, era frecuente encontrar artículos bastante condescendientes con la Iglesia. Cuando el concordato fue finalmente aprobado por el Congreso y recibió el visto bueno de dos de los principales jefes del episcopado, el propio López, en su segundo período presidencial (1942-1945), prefirió no ratificar el tratado, aduciendo que no era prudente introducir el divorcio y el matrimonio civil en una sociedad como la colombiana. Liberales menos temerosos de las iras santas, recordaban

---

<sup>86</sup> Citado en Tirado, Álvaro, Velásquez, Magdala, *La reforma constitucional de 1936*, Bogotá, Fundación Friedrich Naumann, Oveja Negra, 1982, págs. 223-224.

que, mientras en España «el señor Azaña está reconstruyendo con mano firme todo lo que las derechas le echaron abajo, nosotros venimos aquí indecisos, balbucientes, a hacer la reforma, con ánimo de agradar a todo el mundo, y esto es no ser consecuentes con nosotros mismos»<sup>87</sup>. Precisamente, los sucesos de la España del señor Azaña explicaban en buena medida los temores de los sectores clericales.

## ▪ LA OPOSICIÓN

A pesar de la moderación de la política reformista del gobierno de López, la oposición reaccionó de manera virulenta. El estallido de la Guerra Civil española, el auge del comunismo y la consolidación de la extrema derecha en Europa alertaron a los enemigos del Gobierno acerca de lo que podía pasar en el país si no se frenaba a tiempo la obra destructora de López. La prensa fue una tribuna privilegiada para atacar al rival. Completamente politizada, su objetivo no era informar de una manera más o menos neutral, sino servir a la causa del partido con el que se identificaba. Cada partido, más aún, cada tendencia partidista, poseía su propio periódico. López contaba con *El Liberal*, mientras que los liberales más moderados, enemigos del

---

<sup>87</sup> *Anales de la Cámara de Representantes, Suplemento*, sesiones ordinarias, 10 de marzo de 1936, serie 2, núm. 186, citado en Tirado, Álvaro, *op. cit.*, pág. 122.

Gobierno, tenían a su servicio *La Razón* y *El Tiempo*, sin duda el diario más influyente del país. Del lado conservador, Laureano Gómez, uno de los más implacables enemigos del liberalismo, fundó en 1936 el diario *El Siglo*; unos años antes, los jesuitas crearon la *Revista Javeriana*; en Medellín, los conservadores radicales contaban con el semanario *La Tradición*. Estos órganos, fundados no por casualidad durante los primeros años de la República Liberal, fueron voceros de las ideas conservadoras más intransigentes.

Para todos ellos, la Revolución en Marcha tenía como objetivo trastocar los fundamentos más sagrados de la sociedad. La familia, en primer lugar, amenazada por los proyectos sobre matrimonio civil y divorcio:

Hoy cursan en nuestro parlamento proyectos de alocada temeridad reformadora, que desdibujan el croquis tradicional del hogar colombiano. Contra ese laicismo de costumbres es menester una ardorosa movilización de todas las fuerzas sociales. Guerra contra el matrimonio civil, guerra contra la igualdad de hijos naturales y legítimos, guerra contra los azufrados nigromantes que quieren convertir la familia en un cotarro<sup>88</sup>.

Enseguida, la propiedad privada, en peligro por la llamada «reforma agraria», que en realidad no era más que «la confiscación y el despojo de los propietarios que en una cadena de generaciones crearon la riqueza y la estabilidad

---

<sup>88</sup> Estrada Monsalve, Joaquín, «La familia propietaria y cristiana», *La Tradición*, núm. 5, 14 de septiembre de 1935, pág. 17.

de la república»<sup>89</sup>. Igualmente, la armonía social, condenada a desaparecer debido a una legislación laboral que no hacía sino alimentar el resentimiento de las masas populares, que parecían prestas a encender la chispa de la revolución. La sana educación religiosa, que ahora se veía relegada por la enseñanza laica y atea. La coyuntura internacional se prestaba para hablar en tono tan apocalíptico.

Para amplios sectores de la oposición, lo que sucedía en Colombia era el fiel reflejo de lo que estaba pasando en otras latitudes del planeta: el Gobierno español había desatado el anticlericalismo más despiadado; la revuelta social sacudía a Europa y a algunos países latinoamericanos; el comunismo conocía un auge sin precedentes en todas partes. De una u otra manera, eso mismo estaba sucediendo en Colombia: ¿el gobierno de López no se había acaso aliado con los comunistas creando, como en Francia y en España, un Frente Popular? La persecución religiosa y la exacerbación de las masas, ¿no constituían una inquietante copia de las políticas ateas y socialistas de los regímenes revolucionarios de la Unión Soviética y de México?

La espantosa muestra que [comunistas y masones] dieron de sí en España, y el abismo de anarquía, inmoralidad y abyección a que han arrojado a México, comparable sólo con el caos de Rusia, dejan ver lo que nos aguarda

---

<sup>89</sup> Isaza, Rafael, «Comentarios políticos», *La Tradición*, núm. 2, 15 de junio de 1935, págs. 23-24.

si los planes disociadores y antirreligiosos de esos dos monstruos se dejan prosperar<sup>90</sup>.

El conflicto que se estaba desarrollando en Colombia era un episodio más de la gran lucha que se libraba en el mundo entre los defensores de la tradición y del orden cristiano y sus enemigos. Por eso mismo, las soluciones más idóneas no podían desconocer lo que estaban haciendo las fuerzas conservadoras del mundo entero. Para frenar el comunismo, para evitar la lucha de clases, no había otro camino que el del autoritarismo de derecha. Los ejemplos los brindaban la Italia de Mussolini, el nacional-socialismo de Hitler en Alemania y el franquismo español, baluartes de la lucha contra los bolcheviques y modelos de orden y eficacia, contrariamente a la anarquía y a la demagogia que caracterizaban a la democracia y a sus instituciones —parlamento, partidos políticos, elecciones—:

Nosotros queremos dotar a la derecha colombiana de lo que ha sido eficaz en otras latitudes tomando de sus maneras lo que tienen de universal y acoplándolas a lo nuestro [...]. El fascismo italiano, alemán y portugués es [...] infinitamente más popular y más democrático que

---

<sup>90</sup> «El II Congreso Eucarístico», discurso de Francisco Cristóbal, obispo de Antioquia, Jericó, agosto de 1935, citado en *La Iglesia*, núm. 264, agosto-septiembre, 1935, pág. 268.

lo que venimos sosteniendo presuntuosamente como democracia<sup>91</sup>.

En la Guerra Civil no estaba en juego tan sólo la suerte de España: se jugaba el destino de la «civilización latina», amenazada por «una tía de bárbaros filiales a las consignas de los puñaleros moscovitas». En la lucha entre el bien y el mal, entre el cristianismo y el marxismo, el desenlace había sido favorable para el primero: «Y nosotros saludamos desde ahora a la república derechista, al fascismo victorioso restaurando los imperios espirituales de la hispanidad y redomando la tierra aridecida por las pezuñas de tanto bárbaro»<sup>92</sup>. De la exaltación del régimen, se pasaba a la apología de sus conductores: «los grandes jefes fascistas no son tiranos [...], son la culminación de un engranaje poderoso, de un sistema que los coloca a ellos coronando el sistema por voluntad soberana de las mismas corporaciones»<sup>93</sup>.

Una vez más, había excepciones en las filas del Partido Conservador. Unos cuantos políticos e intelectuales, como Aquilino Villegas y Gonzalo Restrepo Jaramillo, denunciaron con valor los peligros que entrañaba una excesiva simpatía con el fascismo, añadiendo de paso que

---

<sup>91</sup> Naranjo, Abel, «Democracia y demócratas», en *La Tradición*, núm. 21, 16 de enero de 1937, págs. 272-273.

<sup>92</sup> *La Tradición*, «Exfoliador político. La lección de España», núm. 16, 8 de agosto de 1936, págs. 121-122.

<sup>93</sup> Naranjo, Abel, «Democracia y demócratas», en *op. cit.*, págs. 272-273.

tal doctrina era incompatible con el cristianismo y con los auténticos principios del Partido Conservador colombiano. El mismo Laureano Gómez, a finales de los años veinte, había condenado el autoritarismo de los líderes de la extrema derecha europea. Pero a mediados de la década siguiente, esas veleidades democráticas ya habían sido extirpadas completamente de su discurso. Laureano, como casi todos los conservadores, hizo suya la idea que promovió un seguidor incondicional de Hitler y Mussolini en un libro publicado en 1936: Silvio Villegas. El libro se intitulaba *No hay enemigos a la derecha...*

Es decir, el fin justifica los medios, un precepto que no ha sido el monopolio de la extrema derecha colombiana y que ha causado enormes daños al país a lo largo de su historia. Para alcanzar sus fines, el clero no dudó en justificar la violencia contra los liberales. En tono desafiante y agresivo no sólo condenó la política reformista de López; llegó incluso a amenazar al Congreso con desatar una guerra religiosa si se aprobaban las reformas propuestas por el Gobierno:

Hacemos constar que nosotros y nuestro clero no hemos provocado la lucha religiosa [...]; pero si el Congreso insiste en plantearnos el problema religioso, lo afrontaremos decididamente y defenderemos nuestra fe y la de nuestro pueblo a costa de toda clase de sacrificios, con la gracia de Dios [...] y llegado el momento de hacer prevalecer la justicia, ni nosotros ni nuestro clero, ni nuestros fieles, permaneceremos inermes y pasivos<sup>94</sup>.

---

<sup>94</sup> Citado en Tirado, Álvaro, Velásquez, Magdala, *op. cit.*, págs. 235-237.

Conviene tener en mente este tipo de consignas y la agresividad con la que fueron proclamadas, no sólo por los efectos inmediatos que pudieron tener, sino porque a partir de 1946, con el retorno de los conservadores al poder, se convertirían en la doctrina oficial.

Desde otra perspectiva, el gobierno de López también fue objeto de severas críticas por parte de los sectores más radicales del liberalismo. A diferencia del ala moderada de Santos, constituían una pequeña minoría, entre la que ya empezaba a destacarse la figura del impetuoso Jorge Eliécer Gaitán. Decepcionado por la moderación del primer gobierno liberal, Gaitán encabezó una disidencia y creó en 1933 su propio partido, la UNIR. Sin embargo, fue una jugada inoportuna, pues la llegada al poder de López encauzó el descontento popular dentro de las filas del liberalismo oficialista. Dos años después de fundar su movimiento, Gaitán regresó a las filas de su partido. El comunismo conoció un proceso similar: si en los primeros años de la República Liberal adelantó una férrea oposición contra los gobiernos «burgueses», en 1936, siguiendo la orden de Moscú, selló una alianza con López para oponerse conjuntamente al Partido Conservador.

De manera que los principales enemigos de López venían no de una izquierda radical, sino de la derecha, lo cual refleja bien el sentir político de las clases dirigentes, en las que su conservatismo y apego a la tradición reflejaba posiciones fuertemente clasistas. Acosado por la oposición, López declaró la «pausa» de sus reformas en diciembre de 1936. Para ese entonces, muchas de sus medidas ya habían

sido adoptadas; en adelante, su afán «revolucionario» cedió el lugar a un discurso conciliador, es decir, se hizo aún más moderado. La «pausa» significó no sólo una derrota para López, sino para quienes intentaban sentar las bases de una sociedad menos injusta y excluyente. Pocos meses después, en las elecciones parlamentarias de 1937, el triunfo del ala santista corroboró las reorientaciones del Partido Liberal, poco dispuesto ahora, bajo la conducción de sus nuevos líderes, a exaltar a las masas y a despertar las furias del clericalismo.

## ▪ CONCLUSIONES

La historiografía colombiana cercana al liberalismo ha contribuido a hacer de la Revolución en Marcha la gran empresa modernizadora del siglo xx. La tendencia apologética no se debe únicamente a cuestiones ideológicas. En el contexto sumamente conservador de la época, cualquier reforma modernizante, por superficial que fuera, aparecía como algo no sólo innovador sino revolucionario, radical. De ahí el entusiasmo exagerado con el que sus partidarios saludaron las medidas de López; de ahí también el profundo temor que despertaron entre sus enemigos. Las reformas no fueron superficiales; contribuyeron sin duda a que los sectores tradicionalmente excluidos tomaran mayor conciencia acerca de sus derechos y, de manera más general, le dieron al Estado nuevas funciones relacionadas con el bien común. De manera concreta, López intentó ampliar el concepto de «democracia»: si en el

siglo XIX sus copartidarios habían luchado por los derechos políticos, ahora, ya bien entrado el siglo XX y con las consecuencias visibles que acarrea el proceso de industrialización, era necesario luchar por los derechos sociales si se quería distensionar el ambiente. El débil Estado de bienestar que quiso instaurar no trajo todos los resultados esperados, pero marcó un referente importante en la historia del país, que no tardaría en ser retomado —y profundizado— por líderes como Jorge Eliécer Gaitán. El liberalismo, en su versión «progresista», se convertía así en el vocero de los sectores populares.

La polarización que suscitó la Revolución en Marcha puso al descubierto las diferencias, más aún, la incompatibilidad que había entre los dos modelos sociales enfrentados. Por un lado, la obra de López apuntaba a una sociedad más abierta, en la que los individuos veían ampliar sus derechos políticos, sociales, religiosos y culturales; por el otro, los partidarios de una sociedad fuertemente jerarquizada, regida por los valores del catolicismo, preocupada antes que nada por asegurar el orden y el principio de autoridad. Es decir, la oposición no era simplemente una cuestión de intereses; lo que estaba en juego era el porvenir mismo de la sociedad, hipotecado, según los lopistas, por las fuerzas reaccionarias y, de acuerdo con la oposición, por los vientos modernizantes que podían dar al traste con las bases de la identidad nacional. La gravedad de la situación radicaba en el hecho de que las diferencias entre uno y otro bando desbordaban de una manera cada vez más evidente los mecanismos institucionales.

## ▪ 3. LA VIOLENCIA

A MEDIADOS DEL SIGLO XX los colombianos se enfrentaron entre sí en uno de los conflictos más dramáticos de la historia nacional. Durante varios años, el clima de violencia fue devastador. Se trata de un proceso bastante complejo, en el que se mezclaron motivaciones muy diversas y en el que participaron numerosos actores. El asesinato de Jorge Eliécer Gaitán agravó aún más la situación, pues su muerte se tradujo en el estallido violento de la ira popular en varias regiones del país, seguido por una represión implacable por parte de los gobiernos conservadores que habían vuelto al poder en 1946. La crisis fue general y muy profunda: el Estado de derecho sufrió innumerables ataques y recortes, las instituciones terminaron por politizarse del todo, los esfuerzos por modernizar la cultura se vieron interrumpidos, el número de homicidios alcanzó niveles escalofriantes. Las mismas élites liberales y conservadoras, que habían contribuido muy eficazmente a incendiar el país, fueron las encargadas de darle una solución a los enfrentamientos bipartidistas mediante el pacto del Frente Nacional, que entró en vigencia en 1958.

## ▪ ¿QUÉ FUE LA VIOLENCIA?

El clima se iba deteriorando a pasos apresurados. El triunfo de Eduardo Santos en las elecciones para el período 1938-1942 significó la victoria de los sectores moderados del liberalismo, cercanos, en muchos aspectos, a los conservadores. Los vientos renovadores del Gobierno anterior quedaron relegados por una agenda política tradicional, más afín con los intereses de unas élites preocupadas, antes que nada, por controlar la agitación popular. Poco a poco, el liberalismo le fue dando la espalda a los sectores contestatarios: las restricciones al derecho de huelga, las condenas abiertas al sindicalismo, las críticas a lo que tildaban como excesivas aspiraciones de los trabajadores, constituyen algunos ejemplos de una política que buscaba limitar, controlar y debilitar a un actor que, en determinado momento, creyó haber alcanzado su autonomía social gracias al liberalismo.

La reelección de López en 1942 demostró, sin embargo, que las aspiraciones del mundo obrero y, en menor medida, del campesinado, no habían sido derrotadas. Una retórica beligerante había marcado el tono de la oposición durante la campaña. Silvio Villegas, uno de los líderes de la extrema derecha, había sentenciado: «El país queda informado del programa del señor López y nosotros no vacilamos en aceptar el reto [...] El pueblo colombiano queda notificado: López es la guerra»<sup>95</sup>. Desde las páginas de *El Siglo*,

---

<sup>95</sup> Villegas, Silvio, «López: la guerra», *El Siglo*, 25 enero de 1941.

Laureano Gómez aludía, en el mismo tono, a las implicaciones de un triunfo lopista: «Nuestra posición en el debate de candidaturas presidenciales está definida, y han sido nuestros adversarios quienes la han definido. López asesinó a nuestra gente; nos impuso la abstención en el ejercicio de nuestros derechos políticos; creó un estado de inseguridad y de desorden en las relaciones del capital y el trabajo. López es el enemigo número uno de la convivencia pacífica de los colombianos y de las garantías de los conservadores»<sup>96</sup>. Por tales razones, «el debate electoral que se avecina, si el lopismo insiste en su empeño reeleccionista, será un certamen de brava pugnacidad, porque no ha de ocurrir pacíficamente una nueva elección del señor López»<sup>97</sup>. Durante la mayor parte de la campaña electoral, los liberales moderados, agrupados en *El Tiempo*, apoyaron la candidatura de un liberal disidente, que contaba también con el respaldo de los conservadores. Sólo a último momento, el influyente diario se decidió a darle su voto a López.

Como era de esperar, su segundo mandato presidencial generó todo tipo de tensiones. El presidente, no obstante, había hecho varios intentos por tranquilizar a sus oponentes, adoptando un discurso conciliador. El punto central de su nuevo gobierno se centró en los derechos del trabajador, que no había logrado desarrollar del todo en su

---

<sup>96</sup> *El Siglo*, «El Espantajo» [editorial], 4 de enero de 1941.

<sup>97</sup> *El Siglo*, «Lo que conviene a Colombia» [editorial], 21 de enero de 1942.

primera administración. La legislación laboral reconoció el salario mínimo, el descanso obligatorio remunerado, la cesantía y la indemnización en caso de despido injustificado. Los debates que suscitó una vez más la política social del Gobierno se vieron agravados por escándalos de corrupción que involucraban a familiares del propio jefe de Estado. En nombre de la «restauración moral», Jorge Eliécer Gaitán se convirtió en un implacable opositor del régimen. A mediados de su mandato, López sufrió un intento de golpe de Estado, muy mal organizado por algunos militares, pero la iniciativa se vio rápidamente frustrada por el inmediato apoyo de los obreros que salieron a las calles a manifestar su apoyo al presidente. Agobiado por los múltiples problemas que lo rodeaban, López, después de varios intentos, renunció definitivamente a su cargo en 1945 y asumió el poder el primer designado.

Durante el año que gobernó, Alberto Lleras, también liberal, tuvo que enfrentar las presiones sociales de los trabajadores portuarios. Pero ya los tiempos habían cambiado. Con el apoyo de casi toda la dirigencia de su partido, Lleras adoptó fuertes medidas para contrarrestar el movimiento obrero. Quedaba claro que el apoyo de los sectores populares al Gobierno ya no garantizaba el respaldo oficial a sus demandas. El realineamiento del liberalismo permitió que Gaitán cobrara mayor resonancia nacional, pues ahora aparecía como el líder indiscutido del «país real» frente a los intereses egoístas de la «oligarquía». Convencido de que su discurso social arrastraría las masas hacia su candidatura, Gaitán se presentó en las elecciones de 1946

como candidato disidente, en competencia con Gabriel Turbay, representante oficial del liberalismo. Los resultados fueron prometedores, pero todavía insuficientes: si en 1935, al frente de la UNIR, no había logrado superar los 5.000 votos, ahora contaba con un poco más de 350.000 electores, unos 60.000 menos que Turbay y unos 200.000 menos que el triunfador. Como en 1930, la división del partido en el poder le abrió las puertas a la oposición. En último momento, después de alimentar la ruptura de los liberales, los conservadores lanzaron su propio candidato: Mariano Ospina Pérez, vocero de los intereses de la poderosa élite cafetera.

Supuestamente, Ospina representaba a los sectores moderados dentro del conservatismo y su candidatura no suscitó en el seno de la oposición los temores que, sin duda, hubiera provocado la postulación de Laureano Gómez. Es muy posible que los liberales se hubiesen unido en caso de tener que enfrentar al temido líder de los extremistas. Sin embargo, pese a ciertos gestos favorables a los liberales, como ofrecerles algunos ministerios en su primer gabinete, las relaciones entre los dos partidos continuaron deteriorándose. A diario, la prensa y la radio liberal y conservadora informaban acerca de nuevos hechos de violencia, responsabilizando sistemáticamente a sus contrincantes. Las diferentes elecciones que se llevaron a cabo durante el cuatrienio de Ospina estuvieron rodeadas de todo tipo de suspicacias y dieron lugar a violentos enfrentamientos. Los liberales lograron conservar las mayorías que detentaban en casi todas las ramas del poder, lo que

radicalizó aún más el antiliberalismo de los sectores reaccionarios. La misma radicalización se dio en las filas del liberalismo progresista cuando el Gobierno quiso eliminar algunas medidas adoptadas durante la República Liberal. En efecto, el retorno de los conservadores no supuso sólo un simple cambio de gobierno; también constituyó un serio retroceso en el proyecto modernizante de la Revolución en Marcha, que ya se encontraba bastante postrado.

Los enfrentamientos armados no comenzaron con el gobierno conservador de 1946. La lucha burocrática, alimentada por los apetitos que suscitaba una maquinaria estatal más rica y más grande, venía de los años treinta; los hostigamientos contra la población rural, dirigidos en particular contra los campesinos liberales, habían afectado a los conservadores en los años anteriores; la polarización generada por las discrepancias ideológicas estaba presente desde los comienzos de la Revolución en Marcha. Todos estos factores contribuyeron a enardecer los ánimos y generaron episodios violentos durante la República Liberal. Pero también es cierto que, a partir de la llegada de los conservadores en 1946, estos factores se exacerbaron y los enfrentamientos alcanzaron unas dimensiones espeluznantes.

El conflicto que envolvió al país durante varios años se conoce como la Violencia. No se le dio el nombre de «guerra civil» ni de «revolución» como algunos contemporáneos lo llamaban. La denominación *la Violencia* se impuso y pasó a ser de uso común en la cotidianidad. Campesinos, terratenientes, empresarios, trabajadores urbanos, periodistas, académicos, intelectuales, jóvenes y

viejos, todo el mundo se refería a la Violencia. Los políticos también, por supuesto. La popularización de la expresión no se debió a razones fortuitas, a la simple «casualidad», a cosas del «azar». Por el contrario, existían motivos de peso. *La Violencia* es una denominación vaga, abstracta. Frases repetidas por miles de campesinos, como «“la Violencia” me mató la familia», «“la Violencia” me quitó la tierra», «“la Violencia” me hizo huir del campo», no aludían a nadie en concreto, no se referían a personas que pudiesen ser identificadas; remitían, más bien, a una especie de «fatalidad histórica», similar a un terremoto o a cualquier otra calamidad provocada por la naturaleza. Por la naturaleza, no por los hombres, no por el entorno social. Es decir, se trataba de un fenómeno surgido de repente, imprevisible, sin relación alguna con la acción de los hombres, ajeno por completo al contexto de la época. Si todo se debía, en última instancia, a la Violencia, los verdaderos protagonistas de la confrontación se esfumaban, quedaban hábilmente ocultos, al igual que sus intereses, que sus motivaciones. Además, la misma denominación tenía la ventaja adicional de presentar esos episodios como algo esporádico, como una interrupción, circunscrita a un corto período. Lograr que la sociedad hablara no de la «guerra civil», sino de la Violencia obedecía, por consiguiente, a los intereses ideológicos de aquellos que, una vez finalizado el conflicto, querían, por una parte, borrar toda huella de su responsabilidad y, en segunda medida, presentar ese triste paréntesis como una interrupción pasajera de una historia no violenta.

El estudio de la guerra civil es bastante complejo. En primer lugar, porque es difícil determinar con cierta precisión cuándo comenzó. Durante mucho tiempo, la historiografía liberal señaló el año de 1946 como punto de partida. También se hablaba con insistencia del asesinato de Gaitán, en 1948. Sin embargo, ya señalamos en párrafos anteriores que la relativa armonía entre los partidos que conoció el país durante las tres primeras décadas del siglo xx, se fue rápidamente deteriorando a partir de 1930. Más aún, las décadas anteriores ya habían presenciado el estallido de la lucha de clases con su dramático correlato de persecución y muertes. No se trata, por supuesto, de buscar continuidades que desconocen evoluciones profundas: muchos investigadores han llegado al extremo de decir que la violencia que sacudió al país a mediados del siglo xx es la simple prolongación de las guerras civiles del siglo anterior. Resulta apenas obvio que la Violencia se enmarca en un contexto muy diferente y, por ello, se trata de un enfrentamiento diferente a los que lo antecedieron.

Así como no hay una fecha precisa que permita indicar el comienzo exacto del conflicto, tampoco se puede determinar el «hecho» que precipitó los acontecimientos. Quienes mejor han estudiado este conflicto, señalan que la Violencia tuvo muchas causas. Si el factor bipartidista fue esencial, también hay que tener en cuenta otros factores no menos determinantes. La complejidad de la guerra se puede ilustrar de la siguiente manera: diferentes lugares del país podían estar inmersos en la violencia, pero, en muchas ocasiones, se trataba de distintas violencias, con

motivaciones, actores, ritmos y desenlaces propios. Es decir, la heterogeneidad de los conflictos hace muy problemático encontrar una unidad al proceso de la violencia. Guerra entre liberales y conservadores, sin duda, pero también conflicto de clases, persecución religiosa, bandolerismo, violencia oficial, a lo que se suman innumerables escenas de barbarie y horror cuya racionalidad parece escapar al análisis del investigador. A la diversidad de confrontaciones correspondió también una multiplicidad de estrategias y modalidades empleadas por los diferentes actores: desalojo de la población rural, terror llevado a cabo por mercenarios de todo tipo, venganzas colectivas e individuales, guerrillas organizadas, represión por parte de las autoridades, alianzas de cada uno de los partidos con diferentes grupos armados, etcétera. La pregunta que intenta indagar por lo que fue La Violencia debe tener en cuenta estas dificultades<sup>98</sup>.

Más allá de los rasgos particulares que adoptó la guerra en el plano local y regional, es posible establecer una cronología general, compuesta por tres grandes etapas, que marcan ciertas tendencias en el desarrollo del conflicto nacional. El primero de estos momentos se extiende

---

<sup>98</sup> Cf., entre otros, Bejarano, Jesús Antonio, *Ensayos de historia agraria colombiana*, Bogotá. Cerec, 1987; Pécaut, Daniel, *op. cit.*, capítulo v; González, Fernán, Ingrid Bolívar y Teófilo Vásquez, *Violencia política en Colombia. De la nación fragmentada a la construcción del Estado*, Bogotá, Cinep, 2003, págs. 17-46. Varios trabajos del sociólogo Alfredo Molano abordan el tema de la Violencia a partir de los testimonios de los sectores populares, cf., por ejemplo, *Los años del tropel*, Bogotá, Cinep, Cerec, 1985.

de los años treinta a 1953. Políticamente, corresponde a la República Liberal y a los dos gobiernos conservadores que estuvieron en el poder desde 1946 hasta el golpe de Estado de 1953. Sin duda, fue el período más cruento. De los 200.000 homicidios que aproximadamente ocurrieron durante La Violencia, la mayor parte de ellos tuvieron lugar en esta etapa, sobre todo, en los gobiernos conservadores. La geografía de la violencia se extendió por casi toda la región andina y por los Llanos Orientales, es decir, afectó departamentos rurales muy atrasados (Boyacá) y departamentos con una agroindustria bastante desarrollada (Valle del Cauca); el epicentro económico del país (el Eje Cafetero), zonas de latifundio (Cauca) y de colonización reciente (Meta). La costa atlántica, pese a compartir varios rasgos socioeconómicos con las zonas golpeadas por el conflicto, parece haber quedado al margen de las luchas.

El gobierno de Unión Nacional promovido por Ospina no fue suficiente para calmar los ánimos en la provincia. Más bien, pudo contribuir a irritar aún más a unos y a otros: los liberales, que contaban con las mayorías en el Poder Legislativo y Judicial, pedían una mayor participación en el Ejecutivo, mientras que los laureanistas y otros líderes de la extrema derecha criticaban la excesiva generosidad del Gobierno con sus rivales.

Bajo los conservadores, se desató la persecución contra los protestantes. Los «herejes» eran acusados, naturalmente, de negar la supremacía del catolicismo y de difundir sus mentiras en el seno de una población mayoritariamente católica. A sus pecados religiosos, se agregaban sus errores

políticos, que se manifestaban en sus simpatías por el Partido Liberal, el cual, en ocasiones, había mostrado cierto interés por la libertad religiosa. En medio del fragor de La Violencia, los simpatizantes del protestantismo fueron hostigados y varios de sus templos sufrieron actos vandálicos. La Iglesia católica se defendió de las acusaciones que, junto con los conservadores, la señalaban como instigadora de los ataques contra la comunidad protestante, alegando que tales hostigamientos no tenían relación alguna con cuestiones religiosas. Los casos en que los protestantes habían sido víctimas de la violencia, si es que los había, se inscribían en el conflicto bipartidista: es decir, como los «herejes» apoyaban a los liberales, era apenas lógico que pudieran verse afectados en el marco de las luchas bipartidistas.

A los enfrentamientos burocráticos e ideológicos se sumó la lucha de clases, que se reactivó a finales de la República Liberal. Exaltados por una retórica mucho más combativa que la de López y, en no pocas ocasiones, tan beligerante e incendiaria como la empleada por la extrema derecha, campesinos y obreros vieron renacer sus esperanzas con Gaitán, el «caudillo del pueblo», una figura más cercana, por sus orígenes sociales, por su forma de hacer política y por sus preocupaciones, a los sectores populares. En el contexto de la posguerra mundial, cuando la Guerra Fría empezaba a delinear claramente las fronteras entre la democracia y el comunismo, o entre el «bien» y el «mal», el discurso de Gaitán disparó las alarmas en el bipartidismo. El gobierno de Ospina no fue insensible al delicado problema social, pero quiso solucionarlo

con la consabida mezcla de caridad y represión, la fórmula predilecta de los conservadores para mantener el «orden establecido». La conservatización de la Policía, vinculando agentes que venían de regiones fuertemente antiliberales, se convirtió en un eficiente —y siniestro— mecanismo para acallar a la oposición. Por otra parte, el Gobierno, con el apoyo de la Iglesia católica, multiplicó los esfuerzos para alejar a obreros y campesinos de las garras del comunismo. El clericalismo repetía una y otra vez que los problemas sociales sólo podían ser abordados adecuadamente a través de la doctrina social de la Iglesia y no mediante el desorden, las huelgas y el odio que promovían los demagogos izquierdistas. Los obispos impulsaron, incluso, la creación de una gran central sindical, la Unión de Trabajadores de Colombia, una organización en la que participaban conjuntamente empresarios y trabajadores en busca de la armonía —y no de la lucha— social, como la que promovía el sindicalismo liberal. Detrás de estos esfuerzos, estaba el doble deseo de llamar la atención de los ricos para que cumplieran sus deberes de caridad, por una parte y, por otra, de recordar a los pobres que el orden divino no podía ser alterado.

En su ofensiva contra la descristianización de la sociedad, los sectores clericales recurrieron al medio masivo de comunicación por excelencia de la época: la radio. En 1947 se fundó Radio Sutatenza, con el objetivo de hacer llegar al campesinado de Boyacá una programación religiosa, educativa y técnica. Lo que comenzó siendo una iniciativa local orientada a ofrecer al campesino del Valle

de Tenza, una región muy pobre y de muy difícil acceso, una serie de conocimientos para mejorar su situación, se convirtió, en pocos años, en un proyecto «integral» que llegaba a muchísimos hogares de todo el país. Además de las emisiones pedagógicas y religiosas, la programación comenzó a incluir «otros aprendizajes que replicaban las asignaturas que se daban en las diferentes escuelas del país, aprendizajes que reforzaban imaginarios relacionados con la historia, el civismo y el Estado, además de las enseñanzas de los principios cristianos católicos»<sup>99</sup>. El fundador de Radio Sutatenza, el padre José Joaquín Salcedo, era plenamente consciente de la importancia estratégica de la radio como medio masivo de comunicación. En primer lugar, «era una solución barata y eficaz a la falta de educación formal» en el campo<sup>100</sup>; en segunda medida, su impacto era evidente: «tempranamente superó en influencia social a la escuela formal y al libro, máxime si se tiene en cuenta las grandes zonas de analfabetismo real y funcional que son características del país»<sup>101</sup>.

---

<sup>99</sup> Rojas, José Arturo, *Radio Sutatenza y Acción Cultural Popular (ACPO): los medios de comunicación para la educación del campesino colombiano* [tesis de maestría], Bogotá, Universidad de los Andes, Maestría en Historia, 2009, pág. 53.

<sup>100</sup> Helg, Aline, «La educación en Colombia. 1946-1957», *Nueva Historia de Colombia*, tomo IV, *Educación. Ciencias. La mujer. Vida diaria*, Bogotá, Planeta, pág. 121.

<sup>101</sup> Silva, Renán, «Ondas nacionales. A propósito de la creación de la *Radiodifusora Nacional de Colombia*», *op. cit.*, pág. 63.

Los sectores clericales no fueron los únicos en recurrir a la radio con fines educativos y políticos. Los liberales habían fundado en 1940 la Radiodifusora Nacional, motivados, entre otras razones, en exaltar los logros de la República Liberal. Para los años cuarenta, la radio cumplía entonces varias funciones: propagandísticas, culturales, pero también propiamente informativas. Por ejemplo, los colombianos seguían los pormenores de la Guerra Civil española o de la Segunda Guerra Mundial a través de las ondas radiales. Como la prensa, la radio contribuyó a envenenar el ambiente político.

Las tensiones cada vez más profundas en el seno del liberalismo también contribuyeron a agitar el panorama nacional. Oficialistas y gaitanistas se hallaban trenzados en arduas disputas, acusándose de demagogos, comunistas y populistas, y de oligarcas, corruptos y traidores, respectivamente. Para 1946, el gaitanismo se había convertido en un movimiento sumamente poderoso que controlaba numerosos municipios y algunos departamentos del país. Si en los comicios presidenciales de ese año había sido superado levemente por el oficialismo, un año después, en las elecciones parlamentarias, se convirtió en la primera fuerza del liberalismo, un triunfo que hacía de Gaitán el jefe único del partido y, como tal, lo postulaba oficialmente como el candidato liberal para la siguiente elección presidencial.

## ▪ GAITÁN Y EL POPULISMO

Jorge Eliécer Gaitán fue uno de los políticos más influyentes de la historia colombiana. Su importancia radica, en muy buena medida, en el papel inédito que le dio al problema social y a los sectores populares en un momento crítico, marcado por el ascenso de las masas en el escenario nacional. Por supuesto que no fue el primero en mostrar interés por la llamada «cuestión social», pues el asistencialismo conservador y clerical —obras de caridad, hospitales, orfanatos, etcétera— era una forma de ocuparse de los pobres. Tampoco era el único liberal en tomar las banderas del «proletariado»: como ya vimos, en los años veinte, varios de sus copartidarios habían insistido en la necesidad de adoptar medidas favorables a los trabajadores urbanos y al campesinado. López, en sus dos gobiernos, implementó importantes reformas laborales. Y, como es obvio, la inequidad social estaba en el centro de las preocupaciones de las corrientes socialistas. Pero la forma como Gaitán abordó el problema, el lenguaje que utilizó para fustigar a la «oligarquía», la dimensión de sus promesas, su indiscutible habilidad para presentarse como el verdadero vocero de los sectores populares, todo ello indicaba que una nueva etapa en las relaciones entre la política y el «pueblo» se abría paso<sup>102</sup>.

---

<sup>102</sup> A nuestro juicio, uno de los mejores trabajos sobre Gaitán, atento a la complejidad del personaje, es Braun, Herbert, *Mataron a Gaitán. Vida pública y violencia urbana en Colombia*, Bogotá, Norma, 1998.

Gaitán hacía parte de una nueva generación de destacados políticos e intelectuales que, desde los años veinte, venían luchando, desde orillas diferentes, por una renovación de los partidos. Si la mayoría de sus compañeros pertenecía a una clase media relativamente acomodada, los orígenes de Gaitán eran más modestos. Sin embargo, aprovechando las nuevas oportunidades que ofrecía una sociedad menos estratificada, logró ingresar a la Universidad Nacional donde cursó estudios de Derecho. Su tesis, *Las ideas socialistas en Colombia* (1926), reflejaba las preocupaciones políticas de un sector del estudiantado colombiano, interesado en estudiar los grandes debates de la actualidad. Tan pronto se graduó, viajó a Italia para especializarse en Derecho Penal. Como muchos estudiantes latinoamericanos que siguieron una trayectoria similar, durante los tres años que permaneció en Europa fue testigo, y se sintió seducido, por el espectáculo que ofrecía el fascismo, por su teatralidad, por el manejo de las masas, por las grandes manifestaciones, por la elocuencia de la que hacían gala Mussolini y compañía. De manera más general, se vio influenciado por la agitación social y política que dominaba al continente europeo, desgarrado por las luchas entre los sectores extremistas de la derecha y de la izquierda.

Cuando regresó a Colombia en 1929, su actividad política se centró en denunciar la feroz represión desatada por los conservadores y los militares el año anterior contra los huelguistas de la zona bananera. Luego, el fin de la «hegemonía conservadora» le abrió la puerta a él y a toda

una generación ávida de darle una orientación más liberal al país. En lo que respecta a Gaitán, desde sus inicios en la política, quiso acercarse a los sectores populares. Lo hizo visitando las zonas pobres de la ciudad —La Perseverancia, Los Laches, Belén, Egipto, Cruces, 20 de Julio—, dictando conferencias en los barrios obreros, organizando manifestaciones. El lenguaje que utilizaba también era una forma de conectarse con el proletariado y el campesinado: al hablar del «país real», olvidado y traicionado por el «país político» de la oligarquía, despertaba la simpatía y el apoyo de campesinos, artesanos, obreros y sectores de la clase media. Ante todos ellos, Gaitán se presentaba como el salvador, como el político redentor. Por su retórica, por los modelos sociales que proponía y por la misión que se autodesignaba, Gaitán hacía parte del «populismo», un vasto movimiento que venía cobrando gran importancia en América Latina a partir de la crisis de 1929.

Los problemas que generó la caída bursátil en el mundo no fueron solamente financieros y económicos. Las consecuencias sociales fueron devastadoras —reducción salarial, desempleo masivo, hambre— y el sistema político tradicional se vio seriamente cuestionado, no sólo por la ineficacia de las élites tradicionales, sino también por la incapacidad de las instituciones para responder adecuadamente a la crisis. En el mundo, amplios sectores responsabilizaron de todos los males al liberalismo económico, principal causante de la concentración de la riqueza en manos de los más fuertes y egoístas; a los partidos, por dividir el cuerpo social en grupos enemigos; a las

elecciones, por engañar al pueblo mediante promesas que luego no se cumplían; al parlamentarismo, por obstaculizar las tareas del poder central. Es decir, las bases mismas de la democracia occidental se veían así deslegitimadas. En ese panorama, el llamado «populismo» alcanzó un enorme prestigio, pues sus carismáticos líderes, dueños de una gran capacidad de convocatoria, supieron aprovechar hábilmente el descontento popular y ofrecieron respuestas inmediatas y de gran impacto. Había un factor adicional que legitimaba aún más las aspiraciones del populismo: el miedo creciente que suscitaba el comunismo, el cual también aspiraba, con un recetario diferente, a solucionar los problemas del pueblo. Tanto el populismo como el comunismo partían de una pregunta central: ¿qué hacer con las masas? En los años treinta, uno de los retos más grandes para las élites latinoamericanas era precisamente encontrar la manera más adecuada para articular a la vida social y política a unos grupos sociales cada vez más numerosos y militantes. En términos puntuales, había que definir cuáles eran los derechos de millones de campesinos, obreros, artesanos, tradicionalmente relegados a un segundo plano.

El populismo latinoamericano puso en marcha reformas sociales, muy ambiciosas en algunos casos, que contemplaban mejoras salariales, creación de empleo, prestaciones laborales, accidentes de trabajo, seguro social, vivienda popular, descanso remunerado, planes vacacionales, etcétera. El vuelco era total: si antes de 1930 la mayor parte del gasto público en América Latina estaba destinada a asegurar el orden y el desarrollo de la infraestructura, los

regímenes populistas de Juan Domingo Perón en Argentina, de Getulio Vargas en Brasil, de Lázaro Cárdenas en México, fomentaron una verdadera redistribución del ingreso y de la riqueza que benefició a los sectores populares y a las clases medias —pequeños productores urbanos y rurales, propietarios y empleados del comercio, de los servicios financieros, funcionarios públicos—.

La política social buscaba varios objetivos vitales para estos gobiernos. Por una parte, al mejorar la suerte de un mayor número de personas, aumentaba la demanda interna, lo que propiciaba, a su vez, el desarrollo de la industria nacional, que era otro de los pilares del populismo. En segunda medida, la reforma social era un instrumento muy útil para atraer a una clientela electoral que el comunismo también intentaba seducir. Por otra parte, constituía un mecanismo no menos eficaz para desactivar la temida revolución social. En efecto, si el Estado y los empresarios tenían que hacer ciertos esfuerzos para aliviar las condiciones de vida de los trabajadores, el «sacrificio» valía la pena, pues era la mejor garantía para asegurarse el apoyo, el reconocimiento, la lealtad, mejor aún, la sumisión de los sectores populares. De eso se trataba, en el fondo, de hacer algunas concesiones para controlar de cerca a los trabajadores y a los sindicatos, para impedir que se organizaran por su propia cuenta, autónomamente.

El autoritarismo, la otra faceta del populismo, no dudó en recurrir a la fuerza cada vez que creyó necesario recordarle a los trabajadores que la única revolución que estaba permitida era la que venía de «arriba», que la revolución

desde «abajo» no tenía ninguna cabida en el régimen. La violencia también fue empleada frecuentemente para acallar a la oposición, comenzando por los comunistas. La tendencia antidemocrática del populismo no parecía inquietar en demasía a sus numerosos seguidores, mucho menos preocupados por las libertades políticas que por el bienestar social o por la afirmación de la «soberanía nacional» que con tanto provecho supieron agitar los grandes líderes populistas frente al «imperialismo yanqui».

Gaitán compartió algunos de los rasgos comunes al populismo latinoamericano. Sin ninguna duda, fue un líder carismático que logró un respaldo masivo, mediante una retórica paternalista que hacía del «pueblo» el centro de su política. Según él, el Estado debía tomar bajo su protección a las masas, ayudarlas, concientizarlas acerca de sus derechos y deberes. Durante el gobierno de Olaya, recorrió el país agitando a obreros y campesinos, y «amenazando continuamente a los políticos con la furia del pueblo si echaban pie atrás a sus promesas electorales»<sup>103</sup>. Presentó al Congreso proyectos sobre la jornada laboral de ocho horas, las vacaciones remuneradas, los seguros que protegieran al trabajador y otras medidas que buscaban beneficiar la fuerza laboral femenina e infantil. Si algunas de sus demandas finalmente se convirtieron en leyes, otras fueron rechazadas, lo que sin duda le motivó a romper con el liberalismo y a crear su propio movimiento. El programa de la UNIR contemplaba la implantación de controles a los

---

<sup>103</sup> *Ibidem*, pág. 114.

precios de los víveres y del arriendo, así como medidas para facilitar el acceso al crédito y políticas firmes para limitar la gran propiedad rural. El modelo de sociedad por el que luchaba Gaitán no estaba pensado únicamente en función de las clases medias y bajas; también incluía a las mujeres: «Gaitán fue el único político de la época que se preocupó activamente» por ellas, que se esforzó por reconocerles mayores derechos educativos y profesionales<sup>104</sup>. Si la UNIR desapareció en 1935 por falta de apoyo electoral, Gaitán no tuvo problemas en regresar al Partido Liberal, que en ese momento estaba embarcado en la política reformista de la Revolución en Marcha, programa cercano a sus ideas.

Como alcalde de Bogotá, cargo al que lo designó el presidente Alfonso López en junio de 1936, introdujo sustanciales mejoras en los barrios más deprimidos de la ciudad, dotándolos de servicios públicos —agua, alcantarillado, electricidad—, pavimentando sus vías de acceso y construyendo vivienda popular. Según Gaitán, el nivel de vida de la población también requería una política cultural más democrática, por lo cual construyó y mejoró muchas escuelas, les dio cuadernos a los estudiantes más pobres y promovió los restaurantes escolares. Su interés por la cultura se plasmó en medidas concretas cuando asumió el Ministerio de Educación (1940): la difusión de la lectura mediante ferias del libro, bibliotecas y ediciones a precios populares fue obra, en gran medida, de Gaitán. La cultura no dependía únicamente del acceso al

---

<sup>104</sup> *Ibidem*, pág. 124.

«conocimiento». Incluía también cuestiones relacionadas con la salud. Gaitán, como alcalde, promovió distintas medidas para mejorar los hábitos de una población que todavía no se había familiarizado del todo con las rutinas higiénicas de las ciudades modernas. Las constantes campañas a favor del uso diario de jabón, de calzado, de ropa «limpia» y «adecuada», la construcción de baños públicos, reflejaban las preocupaciones de toda una élite que luchaba por «civilizar» a las incultas masas.

Este punto es central. Varios investigadores no han dejado de llamar la atención sobre lo que se podría ver como cierta ambigüedad en el discurso y en la obra de Gaitán, como una especie de contradicción: por un lado, exaltaba al «pueblo», describiéndolo como «bueno» y «puro», y lo hacía merecedor, como ningún otro político, de amplios derechos; pero, al mismo tiempo, también veía a ese mismo pueblo con profunda desconfianza, y lo retrataba en muchas ocasiones como si estuviese incapacitado, como si fuese impotente, enfermo, en última instancia, *inferior*. No se trataba simplemente de una inferioridad como resultado de las políticas excluyentes de la «oligarquía», que habían privado al pueblo de educación, de trabajo, de derechos, en fin, de oportunidades para salir adelante. No. Gaitán insistía en que se trataba de una inferioridad «biológica», «fisiológica», «antropológica», es decir, de una anomalía mucho más profunda: si en una sociedad había sujetos dominadores y subordinados, ricos y pobres, fuertes y débiles, sanos y enfermos, no era sólo por las injusticias del sistema establecido, sino

también por causas «naturales». El discurso de Gaitán estaba influenciado por las teorías racistas provenientes de Europa, que tanta acogida habían tenido entre las élites políticas e intelectuales latinoamericanas. Con una raza enferma o inferior, repetían las clases dirigentes, era muy difícil salir del atraso, de la desidia, de la anarquía. Gaitán lo dijo muy claramente:

No habrá agricultura, no habrá industria próspera si persistimos en tener la raza débil que hoy tenemos; una raza tarda y lenta para el trabajo, que se fatiga a muy leve andar y que presenta los defectos síquicos que todos conocemos, los que no son otra cosa que consecuencia de los elementos biológicos y fisiológicos que le son característicos. Buscar gente inteligente y capaz; gente honrada y sociable en organismos débiles y enfermos, atacados de todas las taras atávicas herenciales y circunstanciales, es un imposible metafísico<sup>105</sup>.

Las teorías raciales fueron fundamentales por el papel que desempeñaron como legitimadoras de un orden social jerárquico. Las «taras» de las masas hacían necesario implementar políticas migratorias, educativas, higiénicas, sociales, etcétera. Pero, sobre todo, legitimaban la supremacía de los «elementos superiores» de la sociedad, de las élites, únicos capacitados para señalar el camino hacia el anhelado progreso y la civilización. No podía ser de otra manera, pues el pueblo carecía incluso de voluntad

---

<sup>105</sup> Citado en Pécaut, Daniel, *op. cit.*, págs. 379-380.

política propia, no tenía conciencia acerca de su situación, era indiferente frente al porvenir:

No me habléis [...] de voluntad en un organismo sin nutrición; no me habléis de grandeza de espíritu en un organismo con disfunción en las glándulas endocrinas. No me habléis de grandes empeños y realizaciones en un hígado deficiente, o en un proceso nutritivo deficiente. Los políticos nuestros han olvidado que el hombre es una realidad ante todo biológica y fisiológica<sup>106</sup>.

Una vez más, los factores decisivos, determinantes, se relacionaban con la enfermedad, con la fisiología y la biología. En el fondo, las reformas sociales eran importantes, pero no tan determinantes como las medidas encaminadas a mejorar la raza. Con ocasión de una huelga, los trabajadores pidieron su apoyo a Gaitán; para sorpresa de los huelguistas, la respuesta del destacado líder social señalaba que el verdadero origen no se hallaba en las condiciones laborales: «La defensa de los salarios es necesaria. ¿Pero creéis que basta la solución de este aspecto? No. Puede suceder y yo lo he visto y observado que se traduzca en mayor sífilis, en mayor alcoholismo. Puede que ese mayor salario se liquide el sábado en las tabernas y los prostíbulos y que el lunes la madre y los hijos no tengan alimentación alguna»<sup>107</sup>. Las innumerables incapacidades de las masas implicaban una política paternalista: de la misma manera

---

<sup>106</sup> *Ibidem*, pág. 380.

<sup>107</sup> *Ibidem*, pág. 380.

que el menor de edad, el enfermo y el débil, el «pueblo» debía ser guiado, socorrido, amparado por la acción benefactora del Estado.

De ahí las críticas de Gaitán al marxismo, doctrina que sólo reparaba en las cuestiones materiales: lo económico es importante, decía Gaitán, pero actúa determinado por factores «antropológicos» y «psíquicos», que contemplan, a su vez, elementos «herenciales, atávicos y constitucionales del individuo»; el éxito o el fracaso de lo económico dependía de las cualidades de todos estos factores<sup>108</sup>. Gaitán nunca fue bien considerado por el Partido Comunista colombiano, que lo veía más bien como un propagador del fascismo. Gaitán tampoco se consideraba comunista. Prefería hablar de «socialismo». Sin embargo, trabajos muy serios han puesto en duda esa imagen de verdadero defensor del pueblo que él mismo cultivaba con gran esmero. A pesar de sus violentas diatribas contra los ricos y la corrupción política, sus tesis apuntaban a la defensa de una sociedad en la que predominaban los pequeños propietarios y no el proletariado<sup>109</sup>. Si bien criticaba al capitalismo, la solución que proponía tendía más al fortalecimiento, no de la colectividad, sino del individuo a través de la propiedad<sup>110</sup>. De hecho, Gaitán nunca hizo parte de los partidos de izquierda existentes; tras su fracaso

---

<sup>108</sup> *Ibidem*, págs. 380-381.

<sup>109</sup> Braun, Herbert, *op. cit.*, págs. 93, 104.

<sup>110</sup> *Ibidem*, págs. 92-96, 99.

por liderar su propio movimiento, siempre consideró que el Partido Liberal era el más adecuado para promover la «revolución», revolución que, por lo demás, no podía ser ni repentina ni mucho menos violenta; por el contrario, debía ser un proceso evolutivo, impulsado por la ley y por la educación masiva. Su reiterada insistencia en que son los «hombres de selección» los que orientan a las multitudes, permite preguntarse hasta qué punto creía en una verdadera igualdad<sup>111</sup>.

Por otra parte, su violenta retórica contra las clases privilegiadas contrasta con algunos hechos de su vida privada. En varios aspectos, Gaitán intentó imitar a la oligarquía, quizá incluso quiso hacer parte de ella. Sus elegantes y finos trajes, su matrimonio con una mujer blanca de la «alta sociedad» antioqueña, el costoso barrio en el que residía, sus reiterados esfuerzos por ser aceptado en los clubes sociales más prestigiosos de Bogotá, dejan al descubierto una faceta que no encaja del todo con sus furiosas diatribas contra las oligarquías.

Aun así, pese a que en el fondo no intentaba subvertir el orden social, las élites tradicionales, una vez más, hicieron frente común para rechazar las propuestas de cambio. Muchos liberales y conservadores lanzaron críticas de todo tipo. En ocasiones, Gaitán era tildado de comunista y de revolucionario, en otras de fascista y de demagogo. A partir de 1945, cuando su popularidad se extendió por todo el país, sus propios copartidarios afirmaban que sus

---

<sup>111</sup> *Ibidem*, págs. 103, 139.

propuestas no representaban las ideas liberales. En cualquier caso, constituía un peligro para la democracia y para la sociedad. El diario *El Tiempo* se convirtió en uno de los principales opositores del gaitanismo, un movimiento que «por su color y su fragorosa resonancia recuerda las primeras manifestaciones del fascismo italiano y del nacional-socialismo de Adolfo Hitler». No había duda, pues, en cuanto a los resultados a los que «fatalmente» conduciría el «proceso turbio de caudillismo indoctrinario»: «A la antidemocracia, a la arbitrariedad personalista, al incontrolado ejercicio de una vanidad desahogada». El otro componente del gaitanismo, el «pueblo», no salía mejor librado: «Envueltos en su demagogia marchan los descontentos, los desadaptados, los fracasados, toda esta turbia muchedumbre indeterminada de los sin clase, auténtica corte de los milagros que se mueve por el instinto más que por la razón y que una vez desatada no hay poder humano que la detenga en el desbordamiento de su locura»<sup>112</sup>. Los criterios para rechazar y condenar el gaitanismo no eran sólo de índole política: su líder también fue objeto de permanentes descalificaciones raciales que ridiculizaban algunos de sus aspectos físicos —el color de su piel, su dentadura—. Si las ideas de López habían atemorizado al bipartidismo, las propuestas de Gaitán resultaban aún más peligrosas, pues provenían de un «extraño»,

---

<sup>112</sup> *El Tiempo*, «Ante un hecho político» [editorial], 24 de septiembre de 1945.

de un desconocido, de alguien ajeno a los círculos elitistas. El «indio», el «negro» Gaitán era, en sí mismo, un peligro<sup>113</sup>.

En un contexto cada vez más polarizado, Gaitán fue asesinado el 9 de abril de 1948<sup>114</sup>. A corto plazo, la situación se agravó aún más por el estallido de revueltas populares en diferentes lugares del país, en las que se mezclaban sentimientos de tristeza, dolor, frustración, ira, venganza, resentimiento. En pueblos y ciudades, los manifestantes, exaltados por emisoras de radio que habían sido tomadas por algunos gaitanistas, vengaron la muerte de su líder atacando edificios, casas, escuelas, medios de transporte, saqueando almacenes de todo tipo. En Bogotá, fue incendiado y destruido el periódico *El Siglo*, desde el que Laureano fustigaba sin tregua a los liberales; lo mismo ocurrió con el Palacio de Justicia, la Gobernación, numerosos hoteles, templos y centros educativos católicos, como el Palacio Arzobispal, la Nunciatura y la Universidad Javeriana Femenina. La furia del pueblo se desató contra todo lo que representaba el poder clerical-conservador de la

---

<sup>113</sup> Las caricaturas de la prensa bipartidista de la época fueron uno de los mecanismos privilegiados por las élites para deslegitimar a Gaitán. Cf. Piñeros, Esteban, *Jorge Eliécer Gaitán y la prensa bogotana (1945-1948)* [trabajo de grado], Bogotá, Universidad de los Andes, Carrera de Historia, 2008.

<sup>114</sup> Un recuento pormenorizado del asesinato y de lo que sucedió a continuación, basado en múltiples entrevistas, se encuentra en Alape, Arturo, *El Bogotazo. Memorias del olvido: abril 9 de 1948*, Bogotá, Planeta, 1987.

época. Los símbolos del liberalismo, como el periódico *El Tiempo*, no sufrieron ningún daño, pese a que se encontraban en el epicentro de las revueltas. El gaitanismo parecía anunciar así, su retorno al oficialismo liberal... Detrás de los actos de violencia, no hubo una orientación política que les diera sentido. Todo se redujo a la anarquía: «Lo que hubiera podido ser una revolución se quedó así en explosión invertebrada de furia que sacó a flote todo el odio y el desengaño acumulados del pueblo»<sup>115</sup>. A largo plazo, el asesinato de Gaitán debilitó profundamente el ala progresista del liberalismo. En efecto, la irrupción violenta de las masas corroboró, por si alguien todavía no lo tenía suficientemente claro, el *carácter* violento, destructivo, peligroso de los sectores populares. ¿A qué extremos no se podría llegar si, irresponsablemente, se seguían exacerbando los ánimos desde las filas del liberalismo? Una vez más, fue evocado el tradicional chivo expiatorio: el gobierno conservador responsabilizó al comunismo internacional y rompió relaciones con la ex Unión Soviética. El contexto se prestaba para tales interpretaciones: el asesinato de Gaitán coincidió con la celebración en Bogotá de la IX Conferencia Panamericana, cuyo propósito fundamental era declarar al comunismo, bajo la presión de Estados Unidos, como una amenaza para el continente americano. Una vez borrado Gaitán del mapa, el Partido Liberal volvió a las manos de los dirigentes «centristas»,

---

<sup>115</sup> De Roux, Rodolfo, *Iglesia y sociedad en Colombia*. 9 de abril de 1948, Bogotá, 1981, pág. 127.

aquellos que precisamente habían denunciado la demagogia del «indio». No tuvieron muchas dificultades en recuperar el control del partido, pues el gaitanismo no resistió la muerte de su líder:

Con el asesinato de Gaitán y la fragmentación y desintegración de las corrientes gaitanistas, desapareció del panorama liberal colombiano la izquierda legítima y eficaz como fuerza político-moral de representación de las capas populares, urbanas y rurales, corriente que intentaba centrar civilizadamente el país, sin violencia, dentro del marco de la Constitución y de las leyes, pero con un lugar para todos los colombianos<sup>116</sup>.

El Gobierno de Ospina enfrentó la violencia popular recurriendo a la violencia oficial. A Bogotá llegaron policías de regiones boyacenses, en las que desde hacía ya varios años se cultivaba un profundo resentimiento antiliberal. Los siniestros chulavitas «restablecieron el orden» en unas cuantas horas. En un intento por mejorar las relaciones con los liberales, un nuevo gobierno de «unidad nacional» fue formado al día siguiente del crimen. Pese a compartir los mismos temores con relación a la movilización popular, numerosas diferencias hacían muy precario cualquier acuerdo bipartidista, condenado además de antemano por los conservadores más reaccionarios. Laureano Gómez denunciaba, día tras día, que los liberales tenían

---

<sup>116</sup> Palacios, Marco, *Parábola del liberalismo*, Bogotá, Norma, 1999, pág. 12.

en su poder casi dos millones de cédulas falsas, base de sus fraudulentos triunfos electorales —al comparar los 370.000 votos obtenidos por Olaya en 1930 y los más de 950.000 de López tan sólo cuatro años después, quizá las sospechas de Laureano no eran infundadas—. En el campo, los curas repetían los sermones del jefe conservador; a diario la prensa y la radio bipartidista contribuían también a polarizar el ambiente, a incitar el odio y la violencia entre lectores y oyentes. El Ejército, que hasta entonces había observado una relativa neutralidad, empezó a intervenir cada vez más en los asuntos políticos, pero, como siempre, subordinado a las autoridades civiles. Nuevas bandas de terror, al servicio de los conservadores, como los «Pájaros», perseguían y asesinaban al campesinado liberal. Para hacer frente a la violencia oficial, el Partido Liberal se apoyó en guerrillas de autodefensa campesina, que desde hacía un tiempo intentaban defenderse del Ejército y la Policía. En los Llanos Orientales, en la región del Sumapaz, en el Tolima y en otros departamentos, las guerrillas liberales también sembraban el terror entre la población rural conservadora. Adicionalmente, existían en algunas regiones cafeteras organizaciones armadas amparadas por el Partido Comunista, que luchaban por acceder a la tierra. Por otra parte, en sus respectivas regiones de influencia, los gamonales contaban con sus propias bandas armadas para hostigar al rival o simplemente para sobrevivir. La presencia de innumerables bandas criminales dedicadas al robo, al saqueo, al chantaje, muestran lo complejo que era el problema de la violencia. Si a todo esto sumamos la

creciente politización de las instituciones, en particular de las fuerzas del orden y del aparato de justicia, resulta claro que el país atravesaba por una crisis muy aguda.

Las cosas se agravarían en 1949 a causa de violentos debates en el Congreso. Los liberales, que eran mayoría, quisieron adelantar las elecciones presidenciales y modernizar la Policía, dos medidas que supuestamente debían garantizar un mínimo de transparencia en los comicios que se avecinaban. Las discusiones desbordaron los mecanismos legales: el insulto, las arengas incendiarias, las exhortaciones a la violencia se volvieron comunes. Los conservadores más radicales hablaban de «guerra», de «barricadas», de defender las instituciones «a sangre y fuego». En la Cámara, un congresista conservador no tuvo problema en disparar contra sus rivales, asesinando a dos de ellos. El ambiente, como se ve, era algo agitado. Reclamando falta de garantías, el Partido Liberal decidió retirar a su candidato para las elecciones presidenciales. Y fue más allá: quiso utilizar las mayorías parlamentarias para adelantar un juicio contra el presidente Ospina; cuando este se enteró, cerró el Congreso —noviembre de 1949—, estableció la censura de prensa y reforzó el estado de sitio, una figura legal que le concedía al Ejecutivo mayores poderes en casos extraordinarios.

## ▪ LAS FUERZAS REACCIONARIAS

En medio de una muy delicada crisis institucional, Laureano Gómez fue elegido presidente para el período 1950-1954. Los conservadores más radicales saludaron con satisfacción el triunfo, mientras que los liberales se apresuraron a desconocer unos resultados que no eran más, según ellos, que la expresión de la fuerza y la intimidación. Sin duda, la victoria laureanista hacía prácticamente imposible todo acuerdo bipartidista. La violencia alcanzó en esos años su máxima intensidad. Con mayor convicción que su antecesor, Laureano intentó desmontar las reformas de la República Liberal. En su lugar, quería erigir un régimen clerical-conservador, similar al sistema franquista que regía en España desde finales de los años treinta. Su proyecto estaba en las antípodas no sólo de la propuesta de López, sino de cualquier modelo democrático. Para Laureano, el Estado ideal debía reposar en tres pilares fundamentales: el catolicismo, el centralismo y el corporativismo. Al primero le correspondía formar y educar a la población dentro de férreos parámetros religiosos; al segundo, trazar las directrices del gobierno y asegurar el orden; el tercero se refería a una forma particular de organizar la sociedad: al contrario del modelo liberal, que promovía los derechos individuales, el corporativismo hacía de los gremios o asociaciones profesionales los representantes de los diferentes sectores de la sociedad. Dentro de ese modelo, los partidos políticos, acusados de dividir el «cuerpo» social en bandos rivales, no tenían cabida. Las libertades públicas y las

elecciones eran igualmente nocivas y, por lo tanto, debían erradicarse. Todo apuntaba, como se ve, a un modelo de sociedad jerarquizado, en el que sólo las élites gozaban de plenos derechos, mientras que el «pueblo», las «masas», la «chusma», la «plebe» perdían su carácter de ciudadanos. Laureano explicaba todo esto de manera muy clara:

El manejo del Estado es, por antonomasia, obra de la inteligencia. Una observación elemental demuestra que la inteligencia no está repartida en proporciones iguales entre los sujetos de la especie humana. Por este aspecto la sociedad semeja una pirámide cuyo vértice ocupa el genio [...] Por debajo encuéntrase quienes, con menos capacidades, son más numerosos [...] hasta llegar a la base, la más amplia y nutrida, que soporta toda la pirámide y está integrada por el oscuro e inepto vulgo, donde la racionalidad apenas aparece para diferenciar los seres humanos de los brutos<sup>117</sup>.

La modernización política y social que había impulsado el liberalismo en los años anteriores, sufría así una estocada fatal:

El miedo a la democracia, es decir, a que el pueblo urbano, cada uno de sus individuos, se adiestrara en las artes de la ciudadanía, fue una de las causas más perversas de nuestra tragedia nacional que pagó con sangre el

---

<sup>117</sup> Citado en Tirado, Álvaro, «El gobierno de Laureano Gómez, de la dictadura civil a la dictadura militar», *Nueva Historia de Colombia*, tomo II. *Historia política: 1946-1986*, Bogotá, Planeta, 1989, págs. 89-90.

campesinado andino, que contuvo la marcha liberal y democrática, y que, con un ejército puesto de árbitro supremo entre las élites, y contra los campesinos liberales, conocemos como *la Violencia*<sup>118</sup>.

Una vez más, los factores de exclusión remitían a criterios de orden «natural». Si el Partido Liberal merecía ser condenado, era por su carácter «antinatural»: el liberalismo, decía Laureano, es un «monstruo» que «se mueve con pies de confusión y estupidez, sobre piernas de brutalidad y violencia que arrastraban su inmensa barriga oligárquica; con pecho de ira, brazos masónicos y una pequeña, diminuta cabeza comunista»<sup>119</sup>. ¿Podía haber diálogo con un rival de esas características?

La violencia cobró dimensiones dramáticas. Las sedes de los dos principales diarios liberales fueron incendiadas; los jefes liberales, víctimas de atentados, salieron del país; en un día, las guerrillas liberales asesinaron a decenas de soldados; los criminales a sueldo de los conservadores mataban liberales en las ciudades del norte del Valle del Cauca. Es decir, prácticamente nadie escapaba a la guerra. El conflicto rural contribuyó a intensificar la ola migratoria: grandes contingentes de campesinos se desplazaban a las ciudades, que no contaban con la infraestructura necesaria; otros se lanzaban a colonizar nuevas tierras en el Huila,

---

<sup>118</sup> Palacios, Marco, *Parábola del liberalismo*, *op. cit.*, págs. 268.

<sup>119</sup> Citado en Tirado, Álvaro, «El gobierno de Laureano Gómez...», *op. cit.*, pág. 85.

en el Tolima, en la región de la Orinoquía, etcétera, donde no tardaban en producirse serios conflictos. El terror y la crueldad se manifestaban bajo las modalidades más espeluznantes, dejando un impacto psicológico muy difícil de medir en la población afectada<sup>120</sup>. ¿Hasta qué punto la violencia de las décadas posteriores no fue, en alguna medida, resultado del odio y de la sed de venganza de jóvenes que presenciaron actos de barbarie impresionantes?

El conflicto también tuvo repercusiones en el plano cultural. Los esfuerzos desplegados durante la República Liberal tendientes a modernizar la educación se vieron profundamente afectados tras el regreso de los conservadores al poder y la agudización de la Violencia. En un comienzo, los cambios no fueron tan notorios. Por ejemplo, buena parte del personal liberal empleado en el sector de la educación no fue sistemáticamente sustituido por funcionarios conservadores. La reacción educativa se vino a dar, sobre todo, a causa del asesinato de Gaitán, cuando quedó «demostrada» la peligrosidad del «pueblo». Al preguntarse por las causas de los violentos disturbios de los gaitanistas, la respuesta de las élites sólo quiso ver los «desmanes» y los «daños» generados por la educación liberal. Para contrarrestar la inmoralidad y el materialismo de tal sistema, era urgente reconocer el invaluable papel que la Iglesia tenía como docente. El desarrollo de un espíritu crítico, abierto a las vanguardias del saber, no podía tener

---

<sup>120</sup> Guzmán, Germán, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña, *La violencia en Colombia*, Bogotá, 1980, Tercer Mundo, capítulo IX.

un entorno favorable en medio del clima de cruzada que se desató en aquel entonces. Inmediatamente después del 9 de abril, educadores y funcionarios liberales vinculados al Ministerio de Educación fueron sustituidos por conservadores pura sangre. Escandalizados por la incursión de la mujer en esferas que no eran las *suyas*, los gobiernos conservadores hubieran deseado devolver a la mujer a su hábitat natural, el hogar. Como el proceso de modernización ya había llevado a muchas de ellas a desempeñarse en el comercio, en la industria, en los servicios, no era fácil revertir la situación. Lo que sí resultaba factible era cambiar el modelo educativo liberal, en gran medida responsable del alejamiento de la mujer de sus funciones tradicionales. En consecuencia, se prohibió la educación mixta al tiempo que se multiplicaban, en el campo y en la ciudad, los planteles femeninos, encargados de asegurar una formación acorde con el estatus que la mujer debía observar en la sociedad. En el campo universitario, el énfasis estaba puesto en las carreras más adecuadas para las mujeres: enfermería, bacteriología, artes decorativas, algunas humanidades. Los conservadores restringieron considerablemente la autonomía universitaria, privando así a la enseñanza superior de un mecanismo esencial para fijar sus directrices con el concurso del estudiantado y del profesorado.

Durante el Gobierno de Laureano Gómez, la Escuela Normal Superior, bandera del proyecto modernizante de la educación liberal, se vio afectada por el hostigamiento a sus directivos y docentes, acusados de comunistas, por la falta de presupuesto, por las múltiples trabas que impedían

adelantar libremente las investigaciones. En 1951, ya muy afectada, la Escuela sufrió un golpe decisivo: con la intención de ponerle fin al trabajo conjunto de hombres y mujeres, mezcla a todas luces inmoral para las suspicaces autoridades, el Gobierno creó una sede masculina en Tunja, que debilitó el fructífero trabajo colectivo. De esta manera desaparecía del panorama lo que fue una brillante y pujante comunidad académica que, de la mano de un profesorado competente, había contribuido a abrir el camino de las ciencias sociales. Su legado, sin embargo, se haría sentir en los años sesenta.

## ▪ GOBIERNO MILITAR

El clima de violencia generalizado, el profundo deterioro en las relaciones entre los partidos tradicionales, la crisis institucional que vivía el país, llevaron a los sectores anti-laureanistas a buscar salidas a una situación cada vez más inmanejable. La solución tradicional, consistente en buscar acuerdos bipartidistas para formar gobiernos mixtos, no parecía tener mayores posibilidades de éxito en ese momento. El brutal antagonismo entre liberales y conservadores hacía muy difícil cualquier acercamiento entre ellos. Por otra parte, los enfrentamientos internos entre facciones rivales, que afectaban a cada uno de los partidos, sería una amenaza constante para la estabilidad que se buscaba. Esas mismas divisiones permitían presagiar que, en la eventualidad de una conciliación entre los dirigentes

nacionales del bipartidismo, esta no sería necesariamente acatada en el ámbito regional por caudillos insumisos. Pero quizá el principal obstáculo para alcanzar un arreglo bipartidista era Laureano Gómez. A pesar de que desde 1951, debido a un deterioro importante en su salud, la presidencia la ejercía el designado, el líder conservador se oponía a cualquier acercamiento con el liberalismo. Estas razones llevaron a buscar una alternativa novedosa: ofrecerle el Gobierno al Ejército. Los liberales en su totalidad y los conservadores antilaureanistas eran conscientes de que los militares gozaban de cierta legitimidad en el conjunto de la población, pues, a diferencia del bipartidismo y de la Policía, habían observado un mínimo de neutralidad en el conflicto. Además, su ascenso al poder podía resultar muy oportuno para contrarrestar las pretensiones de las guerrillas del Llano, que intentaban darle a su lucha un cariz más social.

Los militares llegaron entonces a la jefatura del Estado no tanto por voluntad propia, como por presiones de la oposición antilaureanista. Ese fue el origen del golpe, que dio lugar al único gobierno militar del siglo XX, por lo demás bastante corto (1953-1957). A diferencia de lo que sucedía en la mayor parte de países latinoamericanos, en Colombia los gobiernos militares no constituyeron un capítulo central de su historia. Ni siquiera durante el siglo XIX, en el que tan sólo se produjeron tres golpes de Estado. La tradición electoral ha sido, pues, una constante en la historia política, un rasgo «civilista» que no siempre es debidamente valorado por los colombianos. Sin

embargo, la continuidad de gobiernos civiles elegidos por el voto popular no garantiza, de manera incondicional, el buen funcionamiento de la democracia. Las elecciones no se interrumpieron en los años cuarenta y, no obstante, pocos se atreverían a afirmar que durante ese convulsionado período la democracia reinó en el país. Lo que ha sucedido en las últimas dos o tres décadas, como se verá en su momento, permite plantear las mismas dudas en torno a la supuesta solidez de la «democracia más antigua de América Latina».

El gobierno de Rojas se inauguró en medio de un gran regocijo. Con la excepción de los laureanistas y del pequeño reducto comunista, la mayor parte de la población celebró su ascenso al poder como el fin de la violencia partidista y el inicio de una época más promisoría. Parecía que el optimismo no era infundado. Tan pronto asumió sus funciones, Rojas no sólo multiplicó los llamados a superar el sectarismo bipartidista en aras de la «reconciliación nacional», sino que ofreció una amnistía a los grupos armados. Los guerrilleros liberales, en su gran mayoría, aceptaron rápidamente la «generosidad» del Gobierno, mientras que las guerrillas comunistas del Tolima decretaron una especie de tregua a la espera de ver qué rumbos tomaba el nuevo gobierno. La coyuntura económica que vivía el país ayudó, igualmente, a aumentar su prestigio. Las buenas ventas de café en el mercado exterior permitieron un incremento del gasto público en educación, en vivienda popular, en centros de salud, en la construcción de carreteras. Rojas se convirtió así, al cabo de muy pocos meses,

en el «pacificador» y en un hábil político que se ganó el respaldo de casi toda la clase dirigente, la gran prensa, los empresarios, la Iglesia y vastos sectores urbanos.

La popularidad del Gobierno empezó a declinar tan pronto quiso buscar una mayor autonomía con respecto a sus mentores. A pesar de que su gestión debía culminar en 1954, fecha en la que supuestamente el bipartidismo se haría cargo de la situación, Rojas fue reelegido para un nuevo período de cuatro años por la Asamblea Nacional Constituyente, que había reemplazado al Congreso desde su cierre en 1949. Rojas alegó, no sin cierta razón que si liberales y conservadores retomaban el poder, el sectarismo político volvería a incendiar el país. Al descontento que generó la prolongación de su mandato, se sumaron rápidamente otros factores que trastocaron la imagen inicial de Rojas. Los liberales se sentían molestos porque habían sido relegados a un segundo plano; el crecimiento económico se detuvo; la reforma fiscal que intentó implementar el Gobierno provocó de inmediato la cólera de los industriales; la política social no daba mayores resultados en el campo. Los choques entre el ejército y los estudiantes, que se saldaron con la muerte de varios civiles y decenas de heridos, alimentaron el malestar en el seno de una oposición cada vez más generalizada.

Rojas intentó recuperar su influencia de varias maneras. Por una parte, adoptando medidas que, en principio, debían satisfacer a las clases dirigentes. En 1954, se reinició la ofensiva militar contra las guerrillas comunistas bajo el pretexto de que desafiaban la «legitimidad» del

Estado, cuando en realidad lo que amenazaban eran los intereses de los terratenientes. Lo que se pensó que sería una sencilla operación de unos cuantos días, dio paso a una serie de combates durante varios meses que se extendieron por diferentes departamentos —Valle, Tolima, Cauca, Huila—. En algunas zonas, como Villarrica, en el Tolima, se buscaba acabar con la gran influencia gaitanista que allí predominaba desde hacía varios años y que, al igual que los comunistas, reivindicaba mejoras políticas y sociales, en particular, acceso a la tierra. La intensificación de la violencia, hábilmente denunciada por el bipartidismo, erosionó la imagen de Rojas como «pacificador». El pulso en el que se enfrascó Rojas con los partidos tradicionales lo llevó, por otra parte, a buscar nuevos aliados y nuevas bases de apoyo. Los beneficios otorgados a los militares, la intensificación de las campañas antiprotestante y anticomunista, así como una retórica con fuerte acento populista hacían parte de una estrategia para ganar el respaldo del Ejército, de la Iglesia y de los trabajadores urbanos. Rojas intentó reunir a esos diferentes sectores en torno a un movimiento común, que hacía gran énfasis en lo «nacional». Ya fuese con el Movimiento de Acción Nacional, con la Confederación Nacional del Trabajo o, más tarde, con la Alianza Nacional Popular —ANAPO—, Rojas pretendía demostrar que él representaba al conjunto de la nación, a diferencia del bipartidismo, que sólo atendía a los apetitos burocráticos de una pequeña minoría.

Rojas no era sólo un oportunista. Algunas de sus iniciativas dejan entrever preocupaciones más acordes con una

política propia y con los intereses de la nación. Durante su gobierno, las vías de comunicación conocieron un desarrollo bastante significativo: la aviación se benefició con la construcción de varios aeropuertos, como El Dorado, de Bogotá, calificado por los opositores como una obra demasiado grande y costosa; los sectores populares se vieron beneficiados con la venta de artículos subsidiados por parte del Estado; la televisión llegó al país en 1954. En ese mismo año, el Gobierno contrató los servicios de un equipo de investigadores sociales dirigidos por el destacado padre francés Louis-Joseph Lebret, representante de un catolicismo motivado por abordar los problemas sociales desde una perspectiva liberal. En concreto, el informe Lebret destacó la importancia de democratizar la educación, de fomentar los estudios técnicos y el aprendizaje industrial<sup>121</sup>.

Si en el pasado reciente la unión entre liberales y conservadores era prácticamente imposible, en el nuevo escenario, marcado por el posible surgimiento de un competidor con aspiraciones a marchar por su propia cuenta, los líderes de ambas colectividades se apresuraron a sellar un pacto que los blindara ante semejante amenaza. Mientras que Rojas apostaba por un proyecto que forzosamente tomaría mucho tiempo en cristalizar, la dirigencia bipartidista, mucho más experimentada, llegó a una serie de acuerdos que podían devolverle el poder de manera inmediata. Alberto Lleras y Laureano Gómez, en nombre de

---

<sup>121</sup> Helg, Aline, «La educación en Colombia...», *op. cit.*, pág. 117.

los dos principales partidos, fueron los grandes protagonistas en la doble lucha contra la «dictadura» y por la «democracia». De eso se trataba: de presentar al antiguo «pacificador» como un tirano que había interrumpido el curso de la democracia colombiana. Sin llegar a los extremos de barbarie de otros dictadores latinoamericanos, Rojas impuso fuertes medidas represivas que legitimaban las críticas de la oposición: la censura limitó la libertad de expresión y de información, aunque los principales diarios liberales pudieron seguir saliendo a la luz pública cambiando simplemente de nombre; la izquierda, las minorías religiosas, los estudiantes, como ya se dijo, fueron víctimas de la persecución oficial. A mediados de 1957, cuando Rojas intentó una vez más mantenerse en la presidencia por otros cuatro años, el Frente Civil liderado por Lleras y Gómez, y ampliamente apoyado por los gremios, por los jerarcas del catolicismo, por la gran prensa, por intelectuales y estudiantes, lo obligó a dimitir. En su lugar, una Junta Militar asumió el poder de manera transitoria, con la tarea de preparar el retorno de liberales y conservadores.

## ▪ CONCLUSIONES

La breve experiencia golpista dejó en claro que los militares estaban lejos de constituirse en una fuerza política de primer nivel. Sometidos durante toda su historia a las élites tradicionales, no lograron desarrollarse como una alternativa, sólida e independiente, frente al bipartidismo. Al

mismo tiempo, resulta sorprendente la resistencia de liberales y conservadores: a mediados del siglo XX, es decir, un siglo después de su aparición, seguían dominando el escenario político del país y, además, habían podido recuperar todo su prestigio luego de «restablecer la democracia». En América Latina, por el contrario, los partidos tradicionales, desde mucho antes, se habían transformado o ya habían desaparecido, cediendo su lugar a nuevos movimientos.

El bipartidismo colombiano llama la atención no sólo por su capacidad de conservación y de concentrar el poder a lo largo del tiempo. Fue también uno de los principales factores de identidad nacional. Ante la dificultad de verse representada en un Estado ausente y débil, la mayor parte de la población se identificó desde muy temprano con uno de los dos partidos tradicionales. De generación en generación, las familias heredaron las afinidades políticas, afinidades y lealtades que, en muchas ocasiones, se vieron reforzadas por las continuas guerras bipartidistas.

El retorno del bipartidismo al poder en 1958 abre interrogantes sobre el papel de las élites políticas. Si las directivas del liberalismo y del conservatismo no dudaron en presentarse como los restauradores de la democracia, es difícil pasar por alto su responsabilidad en el tenebroso conflicto que vivió el país durante tantos años. La superación de los enfrentamientos partidistas supuso promover el olvido, lo que constituyó, a corto plazo, un golpe, uno más, para las víctimas, y, a largo plazo, un referente para «solucionar» de manera supuestamente armónica las luchas armadas.



## ▪ 4. DEL FRENTE NACIONAL A LA CONSTITUCIÓN DE 1991

EL FRENTE NACIONAL FUE IDEADO principalmente para poner fin a los viejos conflictos bipartidistas. Desde ese punto de vista, fue un éxito total: hacia mediados de los años sesenta, liberales y conservadores ya no resolvían sus discrepancias por medio de violentas agresiones. Sin embargo, el Frente Nacional no logró convocar en realidad a la nación en su conjunto. Muy rápido, una oposición cada vez más numerosa y radical sintió que el acuerdo había dejado de lado los intereses de otros sectores. El clima de efervescencia que se vivía en muchos lugares del planeta avivó la agitación en el país. La aparición de varios movimientos guerrilleros fue muestra de ello.

La violencia volvía a resurgir bajo nuevas modalidades. A medida que aumentó el poder de la insurgencia, el país empezó a vivir una crisis cada vez más profunda. La situación se agravó con la aparición del narcotráfico, un fenómeno que permeó a amplios sectores de la sociedad, incluyendo al propio Estado. La violencia alcanzó niveles escalofriantes cuando la extrema derecha decidió apoyar

al paramilitarismo en su lucha contra las guerrillas. Para ese momento, la desinstitucionalización obstaculizaba el funcionamiento del Estado. Para hacer frente a la crisis generalizada, diferentes iniciativas, auspiciadas por diversos sectores, llevaron a la formulación de un nuevo «contrato social», muy diferente al que firmaron las élites a finales de los años cincuenta. La Constitución de 1991, contrariamente al pacto del Frente Nacional, quiso convocar a numerosos sectores de la nación colombiana para darle a la nueva carta política un aire más plural y democrático.

## ▪ EL PACTO BIPARTIDISTA

Los principales dirigentes del liberalismo y del conservatismo eran conscientes de que su regreso a la dirección del Estado, como bien lo había anunciado Rojas, podía volver a desatar las pasiones más violentas entre sus seguidores. Por eso, desde antes de derrocar al «dictador», ya habían hallado una fórmula para poner fin a las arraigadas luchas bipartidistas: conservadores y liberales se repartirían milimétricamente el poder. Por una parte, alternarían la presidencia durante dieciséis años, de manera que cada partido asumiera la dirección del Gobierno en dos ocasiones; por otra, todos los cargos públicos se repartirían entre las dos colectividades. En diciembre de 1957, en unas elecciones que inauguraron el derecho al voto de la mujer, colombianos y colombianas aprobaron abrumadoramente el retorno a la democracia en los términos planteados por

las élites del bipartidismo. Se iniciaba, así, el Frente Nacional, una etapa de reconciliación que despertaba enormes esperanzas en una sociedad agobiada por largos años de terribles enfrentamientos<sup>122</sup>.

El apoyo masivo al plebiscito otorgó una gran legitimidad a los dos partidos que, luego de varias décadas de duros enfrentamientos, se presentaban ahora ante la opinión pública como los garantes de una nueva unidad nacional. De acuerdo con los dirigentes del bipartidismo, el Frente Nacional, en efecto, era el reflejo de la voluntad popular, la cual, de manera espontánea y democrática, había demostrado su deseo de ponerle fin a la «dictadura». El pacto bipartidista fue presentado también como el inicio de una nueva y prometedora etapa histórica para todo el país, pues permitió el retorno de la «democracia», puso fin a la violencia y abrió las puertas a la reconciliación de todos los colombianos. Sus defensores agregaban que, gracias al nuevo clima de concordia, la economía podría desarrollarse, brindándole así los recursos necesarios al Estado para impulsar importantes reformas sociales.

La versión oficial fue cuestionada muy pronto por otras opiniones que le dieron una interpretación diferente al Frente Nacional. Según sus numerosos detractores,

---

<sup>122</sup> Lo que sigue de este capítulo es tomado, en muy buena medida, de mi artículo «Del Frente Nacional a nuestros días», publicado en *Historia de Colombia. Todo lo que hay que saber*, Bogotá, 2006, págs. 311-362, Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara. Agradezco a la editorial su amable autorización para retomar ese texto.

el acuerdo bipartidista, lejos de favorecer la democracia, no fue más que un pacto «oligárquico», que legitimó el monopolio del poder en manos de las élites y cerró las puertas a todos aquellos que no se identificaban con los partidos tradicionales. Sus adversarios señalaron que, al repartir el poder entre liberales y conservadores, el Frente Nacional le quitó todo sentido al juego democrático: ¿qué interés, se preguntaban, podían tener unas elecciones en las que se sabía de antemano que el triunfador sería el candidato del Frente Nacional?; ¿cuál era el sentido de hacer oposición política si el bipartidismo, amparado en la Constitución, podía acaparar todos los puestos gubernamentales? Además de su carácter excluyente y elitista, el Frente Nacional también fue tachado de ser un régimen autoritario, en el que el Ejército adquirió un gran poder y el estado de sitio —un régimen de excepción que le concedía al presidente, por un tiempo limitado, derechos extraordinarios para afrontar problemas de «orden público»—, se convirtió en práctica cotidiana para debilitar a la oposición. Al sentirse excluidos, los críticos más radicales del Frente Nacional terminaron legitimando vías ilegales para oponerse al régimen excluyente y autoritario de las élites colombianas. En el marco de esta interpretación, ese fue el origen de las guerrillas comunistas que aparecieron en Colombia a mediados de los años sesenta:

Este experimento [el Frente Nacional] produjo desastrosos resultados, cuyo precio todavía estamos pagando. Se partió del supuesto de que la opinión pública colombiana

se dividía exclusivamente entre liberales y conservadores y, en consecuencia, se proscribieron cualesquiera otras colectividades políticas, comenzando por las de izquierda. La limitación a participar en la dirección del Estado a quienes no pertenecieran a los partidos históricos se extendió a todas las ramas del poder público. Fue así como se formaron coaliciones de gobierno y coaliciones de oposición [...]. Y, en último término, se optó por apelar a la lucha armada<sup>123</sup>.

Estas declaraciones no provenían de la guerrilla, ni siquiera de uno de sus simpatizantes; eran el punto de vista del expresidente Alfonso López Michelsen.

Una visión más matizada permite superar interpretaciones que merecen ser revaluadas. Por ejemplo, quienes siguen insistiendo que el carácter excluyente del Frente Nacional dio origen a las guerrillas, debían pensar en que la Constitución de 1991 abrió los espacios políticos como nunca antes se había visto en la historia del país y, sin embargo, la violencia no ha cesado. De la misma manera, aquellos que continúan empeñados en hacer la apología del Frente Nacional, deberían preguntarse si el pacto bipartidista realmente contribuyó a sentar las bases de una mayor cultura política o de una sociedad realmente justa.

---

<sup>123</sup> *El Tiempo*, «Una revisión del Frente Nacional», 6 de junio de 2004.

## ▪ LA MODERNIDAD ESQUIVA

A partir de finales de los años cincuenta, el país conoció una serie de cambios muy profundos. En ciertos casos, se trata de la intensificación de procesos que venían de tiempo atrás; en otros, las transformaciones fueron producto de importantes reorientaciones formuladas durante el Frente Nacional. Numerosos académicos extranjeros que llegaron al país en la década de los cincuenta han manifestado su sorpresa ante la rapidez y la profundidad de los cambios que experimentó la sociedad colombiana a partir de esos años. Y tienen razón, pues en el lapso de medio siglo, que es un tiempo relativamente corto desde una perspectiva histórica, el país ha conocido numerosas transformaciones en los aspectos más diversos. Colombia no fue ninguna excepción: en otras regiones del mundo se estaban presentando fenómenos similares.

Durante veinte años, convergieron cambios políticos, económicos, culturales, estéticos, relacionados con enormes expectativas sociales. Fue la época en que la descolonización de Asia y África marcó la irrupción del Tercer Mundo. Los países «subdesarrollados», que no querían identificarse plenamente con ninguno de los dos grandes bloques que, en el marco de la Guerra Fría, dominaban el planeta —el capitalismo y el comunismo—, intentaron dotarse de una identidad propia, tanto en el plano político, como económico y cultural. El triunfo de la Revolución cubana (1959) alimentó en sus innumerables seguidores el anhelo de cambiar el mundo. Los movimientos estudiantiles y juveniles

de los años sesenta fortalecieron tal sentimiento: las revueltas de los estudiantes parisinos, así como el *hippismo*, cuyas repercusiones no tardaron en hacerse sentir en las capitales latinoamericanas, se hicieron en nombre de una revolución sexual, moral, cultural, mental, etcétera. En muchas ocasiones el arte, las ciencias sociales, la literatura, profundamente politizados, se pusieron al servicio de la «causa revolucionaria» o, al menos, adoptaron un discurso mucho más comprometido y militante.

Veamos cómo se dio todo este proceso de cambios en el caso colombiano. Una de las transformaciones más importantes se presentó en el plano demográfico. En primer lugar, la población colombiana aumentó aceleradamente: en 1951 el país contaba con once millones y medio de habitantes; a mediados de los años sesenta, la población ascendía a diecisiete millones y medio, y diez años después el número de colombianos era superior a los veintidós millones. Es decir, en menos de veinticinco años la población total del país se duplicó. En segundo lugar, se presentó una redistribución geográfica de la población: el fracaso de las políticas agrarias y la presión demográfica «llevaron a los campesinos a hacer su propia reforma agraria», colonizando nuevas regiones —Caquetá, Guaviare, Meta, etcétera—<sup>124</sup>. En tercera medida, se dio la transición de un país rural a un país mayoritariamente urbano, lo que, a su vez, propició otros cambios. En el curso de los

---

<sup>124</sup> Palacios, Marco, «País de ciudades», en *Colombia. País fragmentado, sociedad dividida*, Bogotá, Norma, 2002, pág. 575.

años sesenta, Bogotá sobrepasó el millón de habitantes, y ciudades como Medellín, Cali y Barranquilla llegaron a los quinientos mil. Durante mucho tiempo se dijo que la Violencia, al expulsar a miles de campesinos de sus veredas y pueblos, había sido un factor determinante en el crecimiento urbano; sin embargo, nuevos estudios señalan otros factores, como la creciente atracción que ejercieron las ciudades como centros laborales, gracias al desarrollo de la industria, del comercio y de las obras de infraestructura.

Hasta entonces, el desarrollo urbano había sido relativamente parejo entre las cuatro principales ciudades; es decir, Bogotá todavía no aventajaba considerablemente a Medellín, Cali y Barranquilla<sup>125</sup>. Con el auge económico de la primera mitad del siglo, basado en la agricultura, se había dado cierta especialización regional: Cundinamarca sembraba trigo y papa; el Valle del Cauca se dedicó a la caña de azúcar; la región del Caribe se llenó de cultivos de algodón y banano; el arroz fue prioritario en el Tolima; y desde el sur de Antioquia hasta el norte del Valle predominaba el café. Las diferentes y numerosas ciudades aledañas se vieron beneficiadas con el desarrollo de la agricultura regional. Lo mismo sucedió con el auge de una industria igualmente especializada en las zonas más dinámicas. El epicentro industrial se situó, durante buena parte, en Antioquia, que surtía al

---

<sup>125</sup> Un trabajo muy valioso sobre el desarrollo urbano colombiano y sus principales características es el de Gouëset, Vincent, *Bogotá: nacimiento de una metrópoli. La originalidad del proceso de concentración urbana en Colombia en el siglo xx*, Bogotá, TM Editores, 1998.

país en bebidas, cementos, en productos textiles y alimenticios. Animada por comerciantes emprendedores, algunos de ellos extranjeros —los libaneses—, Barranquilla fue durante toda la primera mitad del siglo el principal puerto del país y un centro comercial de primerísima importancia, lo que le permitió constituirse en la principal ciudad del Caribe, superando ampliamente a Cartagena y a Santa Marta. También conoció cierto desarrollo industrial por sus astilleros, pero se trataba de una actividad bastante precaria, muy inferior a la industria antioqueña, en particular, por las condiciones de su población, que era muy escasa y sobre todo bastante pobre<sup>126</sup>. El caso de Cali, la más joven de las cuatro principales ciudades, es notorio. Su importancia se debe, por una parte, a la caña y a otras actividades agropecuarias tecnificadas —cereales, ganadería—, que jalonaron la industria de fertilizantes y pesticidas, a lo que suma el sector papelerero; por otra, a las mejoras introducidas al puerto de Buenaventura, que de paso relegaron a Barranquilla. El puerto sobre el Pacífico facilitó las exportaciones de café, que era producido en las regiones cercanas del Eje cafetero. La capital del Valle se benefició de varias maneras con la construcción portuaria: por una parte, la ciudad se convirtió en un paso obligado entre el puerto y el centro del país; por otra, Cali canalizó a su favor las actividades vinculadas al puerto, como el comercio, la industria y las finanzas. Sin duda, la existencia de una numerosa red de pequeñas y medianas ciudades a su alrededor, habitadas por una población que tenía cierta capacidad

---

<sup>126</sup> *Ibidem*, pág. 76.

adquisitiva, favoreció el desarrollo de Cali. Bogotá, además de ser la ciudad más poblada y menos pobre del país, también ejercía su influencia sobre regiones aledañas, e incluso sobre los departamentos vecinos, a los que les vendía parte de su producción, y de los que recibía, a su vez, carbón, hierro, electricidad (Boyacá) y comida (Meta, Tolima).

La ausencia de una gran ciudad o región que monopolizara las diferentes actividades económicas se debe precisamente a la especialización regional de la producción agropecuaria e industrial. El panorama cambió a partir de los años sesenta y setenta, cuando la primacía de Bogotá se hizo cada vez más evidente debido a diversos factores. Demostró una mayor capacidad para atraer migrantes, estudiantes, trabajadores, inversionistas, industriales, etcétera, de todo el país, al tiempo que el sector servicios conocía un gran dinamismo, sobre todo, en lo relacionado con el comercio y las finanzas. A partir de ese mismo momento, Bogotá también superó en infraestructura a sus rivales, por ejemplo, mediante el desarrollo del transporte. Finalmente, el fortalecimiento del Estado, en particular en el plano financiero y económico, el crecimiento de su burocracia, al tiempo que debilitaba a los departamentos, reforzó la supremacía de la capital del país. Así, Bogotá aparecía cada vez como el epicentro ya no sólo político, sino además económico, cultural, financiero, etcétera<sup>127</sup>. El crecimiento urbano y el desarrollo económico de las ciudades se acompañaron de cierta modernización arquitectónica, visible

---

<sup>127</sup> *Ibidem*, capítulos 5-9.

particularmente en la capital del país. Edificios empresariales —Seguros Bolívar, Ecopetrol, Banco de Bogotá, sede de *El Tiempo*—, el aeropuerto El Dorado, la vivienda para las clases altas, permitieron apreciar novedades técnicas y formales, producto de una nueva generación de arquitectos formados en el exterior o en las nuevas facultades de Arquitectura que se abrieron en distintas universidades del país<sup>128</sup>.

El dinamismo urbano estuvo acompañado por el desarrollo en las vías de comunicación. Si los transportes ferroviarios y fluviales habían sido hasta entonces fundamentales, a partir de los años cuarenta las carreteras y, poco después, la aviación, pasaron a dominar el sistema de transporte nacional. La consolidación de las carreteras fue rápida. A comienzos del siglo xx, Colombia contaba tan sólo con algo menos de 200 km de carreteras; medio siglo después, la cifra ya había alcanzado los 21.000. Su desarrollo conoció un gran impulso durante los gobiernos liberales (1930-1946), los cuales impulsaron la construcción de 12.000 km<sup>129</sup>. El creciente predominio de las carreteras se debe a varios factores. En primer lugar, al mal manejo administrativo que siempre caracterizó a las empresas ferroviarias y fluviales. Si las comunicaciones viales estuvieron igualmente sometidas a la incompetencia de sus directores, así como a las presiones partidistas y regionales, ofrecían,

---

<sup>128</sup> Saldarriaga, Alberto, Fonseca, Lorenzo, «Un siglo de arquitectura colombiana», *Nueva Historia de Colombia*, tomo vi, *Literatura. Pensamiento. Artes. Recreación*, Bogotá, Planeta, 1989, págs. 199-201.

<sup>129</sup> Pachón, Álvaro, Ramírez, María Teresa, *op. cit.*, pág. 73.

sin embargo, importantes ventajas comparativas: a pesar de ser más costosas, eran más seguras y veloces; su flexibilidad horaria y la calidad de su servicio resultaban atractivas si se piensa en las incomodidades y demoras que significaban los continuos trasbordos de trenes a barcos, y viceversa. La cobertura cada vez mayor de las carreteras ofrecía un mejor cubrimiento del territorio nacional<sup>130</sup>. Buena parte del desarrollo de las carreteras tuvo que ver también con el crecimiento de las ciudades: para satisfacer las crecientes necesidades en alimentos e insumos de una población urbana en pleno crecimiento y con una mayor capacidad adquisitiva, era indispensable contar con un sistema más eficiente que el que ofrecían el tren y el barco. El apoyo estatal a la industria nacional como componente esencial del modelo de sustitución de importaciones, que había tomado mayor ímpetu en los años treinta y cuarenta, fue otro factor que contribuyó al desarrollo de las carreteras, condición indispensable para permitir la conexión y la integración del mercado nacional. Estas diferentes razones explican el predominio de las carreteras a partir de los años cuarenta, tanto por la carga como por el número de pasajeros transportados<sup>131</sup>.

A pesar de estos avances, en 1950 la situación no era para regocijarse. Por un lado, la mayor parte de carreteras estaba concentrada en unas cuantas regiones, por lo

---

<sup>130</sup> *Ibidem*, págs. 37, 45.

<sup>131</sup> *Ibidem*, pág. 47.

general, las más prósperas; es decir que buena parte del país seguía incomunicada y aislada por vía terrestre. A la ausencia de algo que se asemejara a una red nacional de vías de comunicación, se agregaba la influencia determinante de las condiciones climáticas —en verano se atascaban los barcos que circulaban por el Magdalena, de manera que el trayecto Puerto Salgar-Barranquilla, que era el que comunicaba al centro del país con el puerto caribeño ya no tardaba cuatro o cinco días sino unas dos semanas; en invierno los derrumbes y las inundaciones obstaculizaban el paso de todas las carreteras—. A todo ello se sumaba la deficiencia de las pocas carreteras existentes. Durante varios años, las vías se diseñaron para el tránsito de carretas de tracción animal, es decir, con pendientes muy leves y con curvas muy abiertas, lo que aumentaba el costo de las obras y de su mantenimiento, y hacía más demorados los trayectos. La sumatoria de la incompetencia y de las dificultades naturales no puede dar resultados muy esperanzadores: a mediados de siglo, Colombia presentaba «el índice de kilómetros de carreteras por 10.000 habitantes más bajo de la región, inferior incluso al de países con un nivel de desarrollo menor al colombiano, y con una topografía similar, como Bolivia, Ecuador y Perú». El atraso se mide no sólo en términos de longitud, sino, además, por el deplorable estado de sus carreteras: por las mismas fechas, menos del 10 % estaban pavimentadas<sup>132</sup>.

---

<sup>132</sup> *Ibidem*, págs. 54-56.

La aviación también conoció importantes avances a partir de los años cuarenta. Las inversiones del Estado en aeropuertos y de empresarios en flotas de aviones, la demanda de ciertos sectores de la población con capacidad adquisitiva, así como la falta de alternativas de comunicación para desplazamientos medianos y largos, favorecieron el desarrollo del transporte aéreo. La mayoría de rutas conectaban entre sí a las principales ciudades del país, retomando así el esquema de los otros medios de comunicación. Con la construcción de El Dorado, inaugurado en 1959, pero obra de la dictadura de Rojas Pinilla, Bogotá pudo contar con un moderno aeropuerto y desplazó a Barranquilla como principal punto de salida y de llegada de pasajeros y de carga. Las regiones más aisladas, los entonces «territorios nacionales», carentes de vías terrestres y abandonados por las grandes empresas comerciales, contaban con el muy deficiente servicio de unas cuantas aerolíneas que volaban desde Villavicencio y Leticia a los puntos más alejados de la Orinoquía y de la Amazonía, sin cumplir con los parámetros de seguridad<sup>133</sup>.

La economía colombiana también conoció cambios significativos y, como acabamos de mencionarlo, ello explica la importancia creciente de las ciudades en términos demográficos y económicos. De manera general, los economistas llaman la atención sobre un crecimiento acelerado y sostenido. El desarrollo se explica no sólo gracias al café, que seguía generando buena parte de los recursos estatales,

---

<sup>133</sup> *Ibidem*, págs. 407-420.

sino también al desarrollo industrial. Si hasta entonces el país había dependido casi exclusivamente de la actividad agrícola, a partir de mediados del siglo otras actividades económicas cobraron mayor importancia: el transporte, los servicios públicos, las comunicaciones y las finanzas. La industria, como se mencionó, concentró buena parte de los esfuerzos del Estado colombiano que, luego de la crisis del 29 y de la Segunda Guerra Mundial, quiso impulsar la producción y la demanda nacional para disminuir la dependencia con respecto al mercado exterior. El auge de nuevas actividades trajo consigo cambios significativos en la composición laboral: si a comienzos de los años cuarenta, más del 70 % de la población activa se desempeñaba en la agricultura, a finales de los cincuenta la cifra se había reducido a un 50 %, liberando mano de obra para el sector de servicios (más del 30 %) y para la industria (casi el 20 %).

Antes de los años sesenta, la mayor parte de la actividad industrial, limitada por la baja demanda interna, producto a su vez de los precarios ingresos de la población, estaba orientada a la fabricación de unos cuantos artículos de fácil elaboración —textiles, alimentos, bebidas, tabaco—. Pero, a medida que la situación económica iba mejorando y la demanda crecía, la industria se vio incentivada en invertir en tecnología para mejorar, aumentar y diversificar su producción: a las industrias anteriores se sumaron la automotriz, la petroquímica, los plásticos y la metalmecánica<sup>134</sup>. La diversidad económica le permitió al sector privado acumular

---

<sup>134</sup> Palacios, Marco, «País de ciudades», *op. cit.*, págs. 574-575.

grandes capitales, que fueron invertidos en fábricas modernas, en agroindustria y en construcción. Una economía cada vez más compleja intensificó el trabajo asalariado, sobre todo, en las ciudades, y permitió el desarrollo de nuevas regiones, como el Valle del Cauca, que conoció un gran dinamismo gracias a las mejoras introducidas en el puerto de Buenaventura y a su pujante agroindustria y, en menor medida, el Tolima y el Meta<sup>135</sup>.

El desarrollo de la economía colombiana también tuvo consecuencias sociales. Al disponer de recursos más numerosos, los gobiernos del Frente Nacional destinaron un mayor porcentaje del presupuesto a atender las necesidades de los sectores más pobres. El aumento de la esperanza de vida es quizá el índice más revelador de la mejoría en las condiciones de vida de la población, aumento que se sustenta en mejoras en la alimentación, en la higiene y en la salud. Hay otros índices no menos reveladores del progreso social. La cobertura de los servicios públicos se extendió a nuevas regiones y a nuevos sectores. Una evolución similar se dio en el ámbito educativo. De acuerdo con las reformas planteadas por los líderes del Frente Nacional, el 10 % del presupuesto nacional, como mínimo, debía invertirse en educación. Bajo el impulso del Estado, la educación primaria y, en menor medida, la secundaria, llegaron a un

---

<sup>135</sup> Ocampo, José Antonio, Joaquín Bernal, Mauricio Avellana y María Errázuriz, «La consolidación del capitalismo moderno», en Ocampo, José Antonio (comp.), *Historia económica de Colombia*, op. cit., págs. 243-250.

número mayor de personas, lo cual permitió reducir las tasas de analfabetismo, que pasaron del 39 % de mediados del siglo XX a un poco menos del 18 % a comienzos de los años setenta y al 12 % dos décadas después. El incremento cuantitativo de la educación se explica, en buena medida, por las necesidades crecientes del Estado —que requería de un número mayor de funcionarios letrados—; por el crecimiento de las clases medias, cuya importancia provenía, precisamente, de la ampliación de la burocracia estatal, y por el desarrollo de una economía que, como lo mencionamos, se estaba diversificando. El mayor número de estudiantes significa que los hijos de las clases populares tenían mayores oportunidades de cursar primaria y, de manera cada vez más frecuente, también secundaria. La educación «clásica» no fue la única que retuvo la atención del Frente Nacional. En momentos en que la industria nacional constituía una actividad de gran importancia para el país, la enseñanza industrial recibió un fuerte apoyo estatal mediante la creación, en 1957, del Servicio Nacional de Aprendizaje —SENA—, entidad encargada de ofrecerle una enseñanza práctica y técnica al trabajador. Muchos jóvenes, provenientes sobre todo de las clases medias y de diferentes regiones del país, encontraron allí una formación especializada que les abrió las puertas para desempeñarse en trabajos calificados.

La educación femenina también registró grandes avances durante el Frente Nacional. En la década del sesenta, el número de mujeres con título universitario igualó al de los hombres. Más allá de los derechos adquiridos para

cursar estudios superiores, la educación profesional de la población femenina acarrió una verdadera revolución en torno al papel de la mujer en la sociedad y a la imagen tradicional que de ella se tenía. La mujer, ahora dotada de título profesional, accedió por primera vez a importantes cargos laborales que hasta entonces le estaban vedados. Los estudios universitarios y el deseo de ejercer sus carreras le permitieron adquirir solvencia económica y, por lo tanto, una mayor independencia. Más aún: la política, que siempre había estado reservada a los hombres, abrió sus puertas, aunque tímidamente, a las primeras mujeres. En el nuevo contexto, las prioridades tradicionales para la población femenina sufrieron un reacomodamiento: el matrimonio, los hijos y la dedicación a la familia se postergaron, pues ya no eran sus únicos objetivos. El nuevo papel que empezó a desempeñar la mujer en la sociedad modificó el modelo tradicional de la familia. A partir de los años sesenta el número de hijos disminuyó debido, por una parte, a las políticas de natalidad impulsadas por los gobiernos liberales del Frente Nacional y, por otra, al uso masivo de la píldora anticonceptiva, lo que hizo de Colombia uno de los países más desarrollados en materia de control natal en toda América Latina. La efectividad de la política planificadora no tardó en verse reflejada: la tasa de fecundidad pasó de 7 hijos en 1964 a 4,6 hijos en 1973 y 3,9 en 1978<sup>136</sup>. La regulación en el número de hijos,

---

<sup>136</sup> *Documentación*, «Colombia 80. Realidad social del país», Bogotá, núm. 98, agosto de 1980, pág. 10.

además de reflejar un cambio importante en la estructura familiar tradicional, es igualmente reveladora de la poca incidencia que tenían por entonces los pronunciamientos de la Iglesia, en este caso en materia de moral sexual: el episcopado, en efecto, se opuso radicalmente al control natal, pero sus continuas prédicas, como lo corroboran las cifras mencionadas, no tenían mayor eco en sectores crecientes de la población, en particular, en las ciudades y entre las clases más ricas. No era el único motivo de preocupación para la Iglesia: a finales de los sesenta, los obispos sostenían que anualmente había más de 150.000 nacimientos fuera de los «hogares legítimamente constituidos»<sup>137</sup>, lo que representaba, según otro documento episcopal, cerca del 24 % del total de los nacimientos<sup>138</sup>; a esto se sumaba el incremento del aborto: «25 casos de aborto por 100 nacimientos vivos en las clínicas y hospitales del país»<sup>139</sup>. Por otra parte, las uniones libres, los divorcios y el número de madres solteras también mostraban índices preocupantes.

Como veremos más adelante, la mujer empezó a incursionar en nuevas actividades y espacios, de los que había

---

<sup>137</sup> *Conferencias Episcopales de Colombia*, «Paternidad responsable y programas de planificación familiar» (7 de julio de 1967), tomo III, 1962-1984, Bogotá, Editorial El Catolicismo, 1984, pág. 347.

<sup>138</sup> *Conferencias Episcopales de Colombia*, «Pastoral colectiva» (1969), tomo III, *op. cit.*, pág. 543.

<sup>139</sup> DANE. *Anuario General de Estadística*, citado en «Pastoral colectiva» (1969), *Conferencias Episcopales de Colombia*, tomo III, *op. cit.*, pág. 543.

estado históricamente excluida hasta entonces. Los nuevos patrones de comportamiento adoptados por un número creciente de mujeres son reveladores, a su vez, de los profundos cambios culturales que se estaban presentando en los años sesenta. Tales cambios permiten apreciar una sociedad cada vez más secularizada, en la que los valores morales, impuestos por el clero, con el respaldo del Estado, empezaron a ser cuestionados. La vida diaria de los colombianos, la cotidianidad, sobre todo en el ámbito urbano, ofrece otros ejemplos de desapego a los valores tradicionales. La diversión, el esparcimiento, el ocio tuvieron un desarrollo importante a partir de mediados de siglo.

La televisión llegó al país en 1954, durante el Gobierno Militar, y desde un comienzo privilegió una programación popular, por lo general de muy baja calidad, centrada en las telenovelas, en los concursos y en espacios humorísticos. Sin embargo, el espectáculo más apasionante para la mayor parte de los colombianos fue el deporte, en particular el ciclismo y el fútbol. La profesionalización de la actividad deportiva, las primeras vueltas a Colombia en bicicleta, la llegada de grandes figuras del balompié argentino a los equipos del país, la construcción de escenarios deportivos adecuados para albergar a un público creciente, los medios de comunicación —sobre todo la radio— favorecieron el auge de esos deportes y contribuyeron al protagonismo creciente de destacados atletas de origen muy humilde, algunos de ellos convertidos en verdaderos héroes nacionales: Efraín, el *Zipa* Forero y el *Marinillo* Ramón Hoyos, ganadores de las primeras vueltas a Colombia, y Efraín,

el *Caimán* Sánchez, Francisco Cobo Zuluaga, Julio, el *Chonto* Gaviria, por el lado del fútbol, fueron los antecesores más ilustres de los grandes deportistas nacionales de épocas más recientes, como los ciclistas Martín Emilio *Cochise* Rodríguez y Luis Herrera, y de las «grandes glorias» del fútbol nacional, Willington Ortiz, Carlos, el *Pibe* Valderrama, entre otros.

## ▪ DESCONTENTO Y AGITACIÓN

El país cambiaba, sin duda, pero al mismo tiempo persistían serios problemas de muy vieja data. Incluso en aquellos campos en que se observaban mejoras considerables, la situación no se prestaba para un gran optimismo. Si durante el Frente Nacional se dieron importantes progresos en materia social y económica, las desigualdades, sin embargo, no disminuyeron de manera sustancial. Mientras que en las ciudades tan sólo unos cuantos se beneficiaban, muchos eran excluidos; barrios enteros crecían alrededor de las principales urbes del país, formando cinturones de miseria donde se asentaban multitudes que carecían de servicios, empleo, protección, salud y educación, lo que a su vez generaba problemas de inseguridad y de criminalidad; la situación del campesinado era aún más precaria. Adicionalmente, las diferencias sociales aumentaron entre el mundo rural y el mundo urbano, entre las regiones aisladas y los epicentros económicos.

Lo que sucedió en el campo de la educación deja al descubierto que, pese a ciertos avances, problemas de gran importancia seguían sin solución. Vimos que el analfabetismo disminuyó durante el Frente Nacional, pero los logros en el plano educativo fueron esencialmente cuantitativos. En términos de calidad, la educación, como en el pasado, presentaba graves deficiencias y protuberantes contrastes. Las tasas de escolaridad, la infraestructura, el profesorado, las metodologías pedagógicas de los planteles oficiales, sobre todo rurales, estaban muy por debajo de lo que se observaba en los colegios privados urbanos, concentrados, en buena medida, en las ciudades más ricas del país. A pesar de la supuesta gratuidad de la escuela primaria, en muchas ocasiones los padres tenían que asumir los costos del material escolar y de uniformes, lo que representaba una carga muy onerosa para las familias pobres. Más aún: ante el ingreso creciente de estudiantes provenientes de sectores populares, las familias más adineradas multiplicaron la creación de colegios privados y costosos para asegurar a sus descendientes una formación exclusiva, alejada del «populacho». El carácter excluyente de la educación se observa igualmente en el sector superior: la educación universitaria seguía reservada a una población estudiantil muy reducida y, no obstante, recibía grandes recursos por parte del Gobierno central, más interesado en asegurar la formación de una minoría que en afianzar las bases educativas de la inmensa población escolar<sup>140</sup>.

---

<sup>140</sup> Helg, Aline, «La educación en Colombia...», *op. cit.*, pág. 120.

Razones políticas se sumaron al malestar social. Como lo dijimos anteriormente, muchos inconformes interpretaron el Frente Nacional como un pacto mediante el cual la «oligarquía» había monopolizado el poder y excluido a sus opositores, y en ese contexto aparecieron algunos partidos políticos que intentaron liderar el descontento. El Movimiento Revolucionario Liberal —MRL— y la Alianza Nacional Popular —ANAPO—, dirigidos respectivamente por Alfonso López Michelsen y por el derrocado Rojas Pinilla, se convirtieron en los principales cuestionadores del régimen, al que le reprochaban, en particular, su carácter excluyente y su desinterés por los problemas sociales. La ANAPO, hábilmente conducida por Rojas, quien supo deshacerse de la imagen de dictador corrupto con la que el Frente Nacional intentó desprestigiarlo, fue el movimiento que mejor aprovechó el clima de malestar general, sobre todo entre las clases medias y algunos sectores populares urbanos: los 100.000 votos que obtuvo en las elecciones parlamentarias de 1962 le abrieron paso en el escenario político, y los casi 750.000 alcanzados cuatro años más tarde hicieron de la ANAPO una fuerza política amenazante para el bipartidismo. Frente al descontento, las autoridades privilegiaron los mecanismos de fuerza. Al amparo del estado de sitio, la represión se desató contra los sectores contestatarios, formados no sólo por las disidencias políticas, sino también por el sindicalismo, las organizaciones campesinas y el movimiento estudiantil. Este último cobró gran importancia en los años sesenta y setenta. Fuertemente influenciados por el marxismo

y por la oleada revolucionaria que se extendía por toda América Latina, muchos estudiantes radicalizaron sus posturas y vieron con simpatía el surgimiento de las guerrillas en Colombia. Con una retórica beligerante en la que se mezclaban consignas antiimperialistas y exhortaciones a la lucha de clases, los estudiantes universitarios realizaron importantes manifestaciones en diferentes ciudades, dando lugar a violentos enfrentamientos con la fuerza pública, para la cual las diferencias entre el estudiantado y la «subversión» tendían a hacerse más tenues, lo que daba lugar, a su vez, a un clima cada vez más represivo.

La actitud crítica fue compartida por toda una generación de intelectuales que empezaban a superar la impotencia en la que los había sumido el horror de la guerra civil. En el nuevo ambiente intelectual, caracterizado por su actitud crítica, desafiante y militante, la universidad desempeñó un papel protagónico. Si en las décadas anteriores, la población estudiantil de primaria y secundaria había registrado un crecimiento notable, a partir de los años sesenta, fruto en parte del empuje en los niveles inferiores, el turno correspondió a la enseñanza superior. El número de estudiantes aumentó, aunque seguiría siendo muy reducido —20.000 en 1958—<sup>141</sup>. Más significativo: se dio una mayor representatividad nacional y social en la composición del estudiantado, gracias al ingreso de clases medias provenientes de diversas zonas del país, así como a la apertura de sedes regionales de algunas de las principales universidades públicas. Uno de

---

<sup>141</sup> *Ibidem*, pág. 137.

los rasgos más llamativos del nuevo estudiantado universitario era, en términos generales, su identificación política con la izquierda, algo que en ese momento caracterizaba a gran parte de la juventud latinoamericana, profundamente atraída por la Revolución cubana.

Uno de los principales focos de la vida intelectual fue, sin duda, la Universidad Nacional, un centro muy importante de formación en ciencias sociales, que tomó así el relevo de la desaparecida Escuela Normal Superior. Precisamente, varios de los estudiantes que se habían formado en la Normal se convirtieron en destacados profesores de la Nacional, donde tuvieron la oportunidad de transmitir a sus discípulos conocimientos, metodologías y rigor profesional. Bajo el impulso de los más importantes sociólogos e historiadores, entre los que se destacan Orlando Fals Borda y Jaime Jaramillo Uribe, fueron creadas las carreras de Sociología e Historia a finales de los cincuenta y comienzos de los sesenta. Nos interesa resaltar brevemente lo sucedido con la disciplina histórica. Hasta entonces, los historiadores profesionales eran muy pocos: quienes así se llamaban seguían siendo simples aficionados. Su falta de profesionalismo no constituía realmente un obstáculo para su labor, pues, según los parámetros de la época, lo que se esperaba de ellos era un relato «edificante», «ejemplar», «moralizante», mejor aún, «patriótico». De ahí el interés por ciertos temas y por ciertos períodos: los héroes, la guerra, la historia política, es decir por todo aquello que pudiera servir de modelo para la sociedad —el género biográfico era ideal para exaltar las virtudes de los padres de la

patria, lo que explica la atracción que ejercían la Colonia y la Independencia—. La realización de ese tipo de historia no requería, por consiguiente, cursar estudios universitarios, indispensables para dominar las herramientas que, en otros lugares, caracterizaban el trabajo del «verdadero» historiador, como lo son el manejo de un aparato conceptual y teórico, la capacidad analítica, la actitud crítica, el trabajo en los archivos, etcétera. La Nueva Historia de Colombia, impulsada por algunos egresados de la Escuela Normal Superior y por muchos de los intelectuales que surgieron en los años sesenta, reivindicó el carácter «científico» de los estudios sociales. Su formación en universidades europeas o estadounidenses, así como el contacto en Colombia con historiadores extranjeros, les permitió cuestionar y, luego, reorientar el oficio del historiador.

Los nuevos historiadores, sociólogos, antropólogos y compañía no estaban motivados únicamente por darle mayor rigor a sus respectivos quehaceres. Igualmente importante, para todos ellos, era utilizar el trabajo científico como un instrumento para conocer mejor la realidad del país, una realidad bastante sombría que planteaba todo tipo de interrogantes. Defraudados por el Frente Nacional y por el bipartidismo, los jóvenes académicos, cercanos al marxismo, emprendieron una reflexión acerca del pasado, presente y futuro de Colombia desde las perspectivas más diversas. Buena parte de su atención se dirigió al estudio de lo que consideraban los grandes problemas nacionales: el tema agrario, el papel del bipartidismo, las posibilidades del desarrollo económico, animaban los debates entre

economistas, historiadores, sociólogos, antropólogos, literatos, etcétera. Pero el tema que más llamaba la atención en los nuevos círculos intelectuales era el de la Violencia que, de una u otra manera, se relacionaba con los otros puntos señalados. Si la historiografía de muchos países suele contar con su tema «clásico» —en América Latina, la revolución en los casos mexicano y cubano, el populismo en Argentina y Brasil—, en Colombia la Violencia fue, a partir de los años setenta, el objeto de estudio predominante<sup>142</sup>.

Algunos de los trabajos realizados bajo estos nuevos parámetros fueron apoyados y patrocinados por el Estado, con lo cual no sólo se difundieron las investigaciones, sino que se le permitió a un público más amplio abordar trabajos de calidad sobre la realidad nacional en todas sus facetas. *El Manual de historia de Colombia*, dirigido por el historiador Jaime Jaramillo, editado por el Instituto Colombiano de Cultura, logró hacer realidad el propósito de sus principales adalides: llevar a cabo «una nueva síntesis del pasado nacional [...] utilizando los métodos y conceptos que en los últimos años han renovado la investigación histórica». Con el apoyo del gobierno de Alberto Lleras, se realizó una de las investigaciones académicas más importantes, *La violencia en Colombia* (1962), del sociólogo Orlando Fals Borda, del sacerdote Germán Guzmán

---

<sup>142</sup> Existe un balance que explica claramente los avances, los vacíos y las debilidades de la historiografía de la violencia en Colombia. Cf. Sánchez, Gonzalo, Peñaranda, Ricardo (comp.), *Pasado y presente de la Violencia en Colombia*. Bogotá, Cerec, 1991.

y del penalista Eduardo Umaña. Se trata de una obra pionera que logró convertir a la violencia en objeto de estudio «científico», sustentado en el análisis de las causas, en los actores, en las modalidades regionales, en algunos rasgos culturales de las guerrillas, etcétera.

Una actitud muy similar fue adoptada por las nuevas corrientes artísticas y literarias que surgieron en los años sesenta con propuestas y discursos novedosos, propios de la vanguardia. La renovación se observó, de manera muy clara, en la literatura, representada por figuras que pronto alcanzaron renombre internacional. No se trata, una vez más, de un fenómeno aislado. Los años sesenta y setenta constituyeron una especie de «edad de oro» de la literatura latinoamericana, en la que los grandes escritores que aparecieron en todo el continente lograron crear una obra de muy alta calidad literaria y de una gran importancia política. La Revolución cubana explica en muy buena medida los vínculos cada vez más estrechos que se forjaron entre el arte en general y la política, lo cual llevó a los artistas, sobre todo a los escritores más exitosos, a convertirse en intelectuales de primer plano que asumieron un papel político determinante, haciéndose voceros de amplios sectores de la sociedad. A través de sus obras y de su papel como intelectuales, muchos de estos escritores se convirtieron en una especie de «consciencia nacional», o mejor aún, «latinoamericana», que estaba en búsqueda de una «identidad propia». Sus libros, traducidos a varios idiomas, conquistaron un público muy amplio en diferentes lugares del mundo. Los reconocimientos internacionales

premiaron con el Nobel la obra de Miguel Ángel Asturias, Pablo Neruda y Gabriel García Márquez.

En Colombia, la renovación literaria se dio principalmente en torno a la revista *Mito*. Fundada por Jorge Gaitán Durán en 1955, en ella se desarrolló un espacio literario basado en la creatividad y abierto a las vanguardias. Allí aparecieron textos inéditos de Manuel Mejía Vallejo, García Márquez, Álvaro Mutis y otros novelistas y poetas que estaban revolucionando las letras colombianas. A estos nombres se sumaron los de Manuel Zapata Olivella, Álvaro Cepeda Samudio, Germán Espinosa y Andrés Caicedo. En medio de la gran diversidad —literaria e ideológica— que había entre los escritores, todos ellos compartían, por lo general, un espíritu crítico frente al bipartidismo, al clero, a la moral tradicional, al Frente Nacional, a la historia oficial. Varios de ellos mostraron un interés particular por el tema de la violencia. No se trataba de un fenómeno novedoso, pues en la década de los cincuenta ya se habían publicado numerosas obras centradas en el conflicto colombiano. Pero la literatura de los años posteriores lo hizo desde una nueva perspectiva, alejada de las posiciones partidistas, en la que lo relevante no era ya responsabilizar al adversario político, sino interrogarse por los efectos que había causado la violencia en los sobrevivientes y en el imaginario colectivo. En un contexto cultural que daba muestras de cierto despertar, en el que la demanda aumentaba gracias al desarrollo económico y a la politización creciente de la sociedad, muchas de estas novelas se convirtieron en éxitos literarios, con tirajes que alcanzaron varias reediciones y cifras récord en el país.

La efervescencia social, política y cultural tuvo varios puntos de gravitación: nuevas editoriales que no dudaban en publicar los trabajos de los jóvenes intelectuales —Oveja Negra—, centros universitarios fuertemente influenciados por el marxismo —Universidad Nacional—, revistas de avanzada —aparte de *Mito*, publicaciones como *Eco y Estrategia* difundieron los trabajos de autores nacionales y extranjeros que estaban a la vanguardia en los más variados temas—.

La pintura también conoció una transición que llevó a sus principales exponentes a abrazar las tendencias modernistas. El papel desempeñado por el Salón Nacional de Artistas fue determinante en este proceso, sobre todo después de su reapertura en 1958. Creado por el gobierno liberal a comienzos de los años cuarenta, poco a poco se fue institucionalizando hasta convertirse, a partir del Frente Nacional, en un espacio estatal destinado a promover el arte moderno. Allí fueron consagradas las obras de Alejandro Obregón, Enrique Grau, Fernando Botero, Pedro Alcántara, Eduardo Ramírez Villamizar, Édgar Negret, entre otros. Tanto por las temáticas como por el lenguaje empleado, las pinturas y esculturas de estos artistas marcaron el inicio del arte moderno en Colombia. Al igual que en la literatura, la consolidación de las artes plásticas se apoyó en la aparición de una crítica profesional, en la que desempeñaron un papel de primer plano algunos expertos extranjeros, dentro de los que sobresale la argentina Marta Traba. Y de la misma manera que el escritor se convirtió en un intelectual que, como tal, debía ayudar a reflexionar

sobre los problemas del país, muchos pintores también sintieron la obligación de «comprometerse» con la realidad. El premio otorgado a Obregón por su cuadro *Violencia* en el Salón Nacional de 1962 refleja la politización del arte, pero ya no se trata, como en las décadas anteriores, de una militancia bipartidista, sino de una denuncia del horror de la violencia y, al menos en algunos casos, de un llamado a una mayor justicia social.

El cine colombiano se inscribió en la misma tendencia. A su manera, intentó abordar los temas más delicados de la realidad nacional. Sus resultados fueron muy modestos en comparación con los obtenidos por la pintura y la literatura, y el proceso fue mucho más lento. A comienzos de los años sesenta, las temáticas predominantes eran las mismas de las décadas anteriores: «El mismo folclor, el mismo melodrama histórico o no histórico, el mismo paisajismo»<sup>143</sup>. No obstante, para esos mismos años, ya empezaban a apreciarse nuevas tendencias que le abrían otras perspectivas al cine colombiano. Películas, cortos y documentales de Diego León Giraldo (*Camilo Torres*), de Carlos Mayolo y Luis Ospina (*Oiga vea*), de Marta Rodríguez y Jorge Silva (*Chircales*), de Francisco Norden (*La leyenda de El Dorado*), abordaron, a partir de un lenguaje propiamente cinematográfico, los problemas sociales y políticos, entre los que se destacaban las críticas al imperialismo, las migraciones de los campesinos a las ciudades

---

<sup>143</sup> Martínez, Hernando, *Historia del cine colombiano*, Bogotá, Librería y Editorial América Latina, 1978, pág. 197.

y la violencia de los terratenientes. La mayor madurez del cine colombiano se relacionó igualmente con la aparición de una crítica cinematográfica más profesional, gracias al trabajo pionero de personajes como Hernando Valencia Goelkel; asimismo, la creación de un número mayor de cine-clubes, reflejo de una inquietud por la formación cinematográfica del público, también contribuyó al desarrollo del incipiente cine nacional<sup>144</sup>.

El descontento, la agitación y la militancia propia de los años sesenta y setenta contó con la participación de la mujer. Se trata de una participación muy activa y diversa. En todos los casos, deja al descubierto que amplios sectores de la población femenina se apartaban cada vez más de los patrones en los que había sido encasillada la mujer colombiana. En la política, numerosas mujeres desplegaron una destacada actividad pública: a partir de 1958, con el Frente Nacional, fueron elegidas las primeras senadoras; los gobiernos liberales, tímidamente, primero y, luego en mayor número, designaron las primera ministras. Varias mujeres, descontentas con el bipartidismo, engrosaron las filas de los movimientos disidentes —como la ANAPO, el MRL y el sindicalismo— y algunas de ellas ocuparon lugares protagónicos: siguiendo los pasos de Evita Perón, María Eugenia Rojas, hija del general Rojas, fue candidata en varias ocasiones a la Presidencia de la República; la *Capitana del pueblo*, como se le conoció, gozaba de una gran popularidad que le permitía movilizar a amplios sectores

---

<sup>144</sup> *Ibidem*, págs. 241 y ss.

del electorado. Otras mujeres se mostraron más radicales, pues pasaron al comunismo, desde donde intentaron mejorar la situación de las trabajadoras. Aunque no es posible determinar el número, varias dieron un paso más allá e ingresaron a las guerrillas. Quizá eran más radicales políticamente, pero los sectores «feministas» les reprochaban su conservadurismo, pues no luchaban por emancipar a la mujer de otras formas de exclusión. En las tribunas políticas, en las campañas electorales, en la prensa, muchas de estas mujeres abrieron las puertas para que en los años siguientes otras, más numerosas, siguieran sus pasos.

Un protagonismo similar se observa en la pintura, en la literatura, en la escultura, en el cine, en el teatro. No se trata tan sólo de la aparición de las mujeres en ese tipo de actividades, lo que de por sí está lejos de ser insignificante; también hay que insistir en el papel de primerísima importancia que algunas de ellas alcanzaron en esas diferentes actividades. La crítica de arte Marta Traba contribuyó a sacudir el ambiente cultural del país: participó en la revista *Mito*, fundó el Museo de Arte Moderno de Bogotá e hizo valiosos aportes en el desarrollo de la crítica artística. Feliza Bursztyn renovó la escultura en Colombia. Destacadas investigadoras, algunas de ellas relacionadas con la Escuela Normal Superior, se consolidaron en el campo académico: tal es el caso, entre otros, de Virginia Gutiérrez de Pineda, quien abrió nuevos senderos en los estudios sobre las estructuras familiares en el país. La participación de muchas mujeres en el movimiento *hippie*, así como en el nadaísmo —una «corriente» literaria que pretendía

escandalizar a la pacata burguesía citadina— constituyen otro ejemplo del activismo femenino y, en ocasiones, de la búsqueda de una mayor independencia con relación a los valores tradicionales. Incluso la televisión contribuyó a formular nuevos modelos para las mujeres: si bien buena parte del contenido televisivo reforzaba los estereotipos tradicionales, ciertos espacios culturales y políticos ofrecieron una imagen renovada de los papeles femeninos.

En los últimos años del Frente Nacional, encontramos definitivamente a las mujeres en la calle, solas, sin damas de compañía, en el movimiento social, en las universidades, fábricas y oficinas, en las huelgas estudiantiles, en el movimiento campesino, en las carpas de las huelgas sindicales, en el movimiento de los católicos por la transformación social, en el movimiento *hippie*, en la guerrilla y en los reinados de belleza<sup>145</sup>.

El Estado intentó ponerse al día con la lucha emprendida por los sectores feministas. El gobierno de Alfonso López Michelsen (1974-1978), quien era el hijo de López Pumarejo, se destacó ampliamente por su clara voluntad de promover los derechos de las mujeres: estableció la igualdad jurídica de los sexos; en materia familiar, puso fin a la primacía de la figura del esposo y padre, de manera que la

---

<sup>145</sup> Velásquez, Magdala, «La condición de las mujeres colombianas a fines del siglo XX», *Nueva Historia de Colombia*, tomo IX. *Ecología y cultura*, Bogotá, Planeta, 1998, pág. 60.

madre y esposa tuviera los mismos derechos para decidir en torno a la vida de pareja.

Los convulsionados años sesenta provocaron cambios, incluso, en la muy conservadora y tradicionalista Iglesia católica colombiana. Numerosos sacerdotes, provenientes sobre todo del «bajo clero», adoptaron un discurso crítico frente a la realidad nacional que muy pronto los condujo a cuestionar igualmente la actitud de la jerarquía eclesiástica. La evolución en el clero colombiano se relaciona, en primer lugar, con el Concilio Vaticano II (1962-1965) que, liderado por los papas Juan XXIII y Pablo VI, representó un esfuerzo para abrir un diálogo, como nunca antes se había realizado, entre el catolicismo y el mundo moderno. Promoviendo una mayor tolerancia y apertura al mundo y a las otras visiones sobre la sociedad, el Vaticano II quiso dejar atrás las actitudes defensivas y hostiles de la Iglesia frente a muchas de las conquistas de la modernidad. Sin embargo, para el catolicismo latinoamericano fue mucho más decisiva la política trazada por los propios obispos del continente en la reunión que tuvo lugar en Medellín —CELAM II, 1968—. El episcopado de toda la región, con la excepción de los jerarcas colombianos, expresó su profunda preocupación por las condiciones de pobreza y de dependencia del continente. Con un discurso muy novedoso dentro del clero, pero ampliamente conocido en los sectores cercanos al marxismo, los obispos no dudaron en señalar que las innumerables situaciones de injusticia y de exclusión a las que estaba sometida la mayor parte de la población latinoamericana era el resultado de la dependencia frente

a las «potencias imperialistas» y constituía una forma de violencia «oficial» o «institucionalizada».

Camilo Torres, el «cura guerrillero», se adelantó unos cuantos años a las nuevas tendencias del clero latinoamericano, pues ya para 1965 había proclamado que el verdadero cristiano tenía que ser revolucionario. Consecuente con su punto de vista, ingresó a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional —ELN— luego de varios enfrentamientos con sus superiores eclesiásticos, que lo llevaron a salir de la Iglesia y a radicalizar sus posturas. Pocos meses después moriría en un combate con el ejército (1966), pero su trayectoria significó un cuestionamiento, como nunca antes había ocurrido, del papel que debían desempeñar la Iglesia católica y los cristianos, en general, en una sociedad con graves problemas sociales. En el caso de Torres, como en el de otros sacerdotes que tomaron las armas, se desarrolló una alianza simbólica entre la fe cristiana y la revolución, al tiempo que surgía un nuevo lenguaje cristiano que «articula una fe —su violencia revolucionaria— en un campo político»<sup>146</sup>. Todo ello, por supuesto, era una «herejía» absoluta para sus superiores, escandalizados no tanto por la mezcla entre política y religión —una fórmula consagrada al fin y al cabo por la propia jerarquía desde hacía mucho tiempo—, como por el *tipo* de política que se pretendía defender desde el discurso cristiano.

---

<sup>146</sup> Certeau, Michel de, «*Mystiques violentes et stratégie non violente*», *La prise de parole et autres écrits politiques*, París, Seuil, 1994, pág. 135.

Camilo Torres no tardó en convertirse en un nuevo referente para miles de católicos militantes en toda América Latina: inspirados en su mensaje, muchos de ellos quisieron convertirse en los voceros de los sectores populares. La Teología de la Liberación ahondó las divisiones dentro del clero del continente: a un lado, estaban los defensores del orden establecido, dentro de los que se destacaban los obispos colombianos, opuestos a toda veleidad contestataria; del otro, encabezados por algunos obispos chilenos y brasileños, se situó un episcopado decididamente combativo, que, reinterpretando la noción de «pecado», concluyó que la pobreza también constituía una situación pecaminosa, cuya responsabilidad recaía en las clases dirigentes. Muchos de esos obispos, influenciados por la Revolución cubana y por los enfoques marxistas, se habían hecho más radicales tras la decepción provocada por los escasos logros que alcanzaron los gobiernos demócrata-cristianos en Venezuela y Chile.

Torres no representa un caso aislado en Colombia. A comienzos de la década del sesenta, el ambiente intelectual en los planteles educativos del clero colombiano era bastante convulsionado. Al respecto, resulta muy revelador el testimonio de Ernesto Cardenal, quien luego se convertiría en una de las grandes figuras de la revolución sandinista en Nicaragua. En los años sesenta, era un joven poeta y novicio que iniciaba su carrera sacerdotal en un seminario de La Ceja, Antioquia. Cardenal señala que entre sus compañeros había varios seminaristas con vocación artística que le imprimían un toque bastante particular a lo que se

suponía que debía ser la vida austera y disciplinada de un seminario en la Antioquia de mediados de siglo. El interés por la política también estaba muy presente: querían saber lo que sucedía en América Latina, en general y, en particular, se interesaban por la situación de los indígenas y por el trabajo social, todo ello animado por un notorio sentimiento antiimperialista. Estaban al tanto de las andanzas de Camilo Torres, quien en una ocasión visitó el seminario dejando la impresión de ser «un sacerdote progresista». Su admiración por él aumentó cuando Cardenal leyó una copia de su discurso sobre la Plataforma del Frente Unido. Los temores que suscitaba Camilo Torres en el episcopado colombiano se hicieron sentir en el seminario. A medida que aumentaba su popularidad, las directivas multiplicaban las expulsiones de seminaristas. Cardenal regresó a Nicaragua en 1966, pocos días antes de la muerte de Torres. Algunos de sus compañeros partieron con él para hacer parte de la comunidad de Solentiname, fundada por Cardenal y marcada por su orientación social a favor del campesinado y de los indígenas de la zona; otros, menos numerosos, siguieron los pasos de Camilo Torres e ingresaron al ELN<sup>147</sup>.

Los jerarcas del catolicismo colombiano afrontaban otros problemas no menos preocupantes: los fieles se alejaban de las prácticas religiosas; otras creencias empezaban a ganar terreno y el número de curas católicos disminuía,

---

<sup>147</sup> Cardenal, Ernesto, *Memorias II. Las islas extrañas*. México, Fondo de Cultura Económica, 2003, págs. 11-74.

seguramente debido a que la imagen del sacerdote ya no gozaba del mismo estatus social. Teniendo en cuenta este panorama se puede concluir que, a partir del Frente Nacional, la sociedad confesional que había establecido la Constitución de 1886, sociedad en la que la Iglesia y sus valores morales ocupaban un lugar central en la vida de los colombianos, comenzó a presentar fisuras de consideración. En otras palabras, la religión católica, que hasta entonces había sido uno de los pilares esenciales de la sociedad, empezaba a perder su lugar privilegiado.

El otro gran pilar, el bipartidismo, conocía una crisis muy similar. Los lazos de lealtad y el sentimiento de pertenencia se vieron profundamente debilitados con el fin de los enfrentamientos bipartidistas<sup>148</sup>. El proceso de urbanización también golpeó a liberales y conservadores, ya que los sectores pobres de las ciudades se alejaron de los partidos tradicionales para apoyar masivamente a la ANAPO<sup>149</sup>. El debilitamiento del bipartidismo puede explicarse también por la ausencia de grandes debates ideológicos entre los dos partidos: en la medida en que liberales y conservadores tenían asegurada su participación en el Gobierno, independientemente de los resultados electorales, la discusión ideológica pasó a un segundo plano. De ahí que no resulte extraño que el desinterés de muchos colombianos frente al bipartidismo se reflejara en las altas tasas

---

<sup>148</sup> Leal, Francisco, *Estado y política en Colombia*, Bogotá, Cerec, Siglo XXI, 1989, págs. 151-185.

<sup>149</sup> Palacios, Marco, «País de ciudades», *op. cit.*, págs. 605-606.

de abstención que caracterizaron las elecciones durante toda la década de los sesenta. El alejamiento de las urnas fue algo más que simple indiferencia del electorado; en el fondo, reflejaba un creciente descontento de la población con respecto al Frente Nacional.

La aparición de movimientos guerrilleros en casi toda América Latina constituyó la expresión más radical de ese malestar generalizado. El triunfo armado de Castro y sus compañeros, que puso fin en 1959 a la dictadura de Fulgencio Batista, se convirtió para muchos en el modelo que debía imitarse para solucionar, de una vez por todas, los problemas históricos del continente. El impacto de la Revolución cubana se puede apreciar, entre otros aspectos, en que, durante treinta años, desde el triunfo de Castro hasta la caída de la ex Unión Soviética, la idea de la revolución ocupó el centro del escenario político de la izquierda en toda América Latina<sup>150</sup>.

En Colombia aparecieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia —FARC— y el ELN<sup>151</sup>. Ambos

---

<sup>150</sup> Castañeda, Jorge, *La utopía desarmada. Intrigas, dilemas y promesa de la izquierda en América Latina*, Bogotá, Tercer Mundo, 1993, págs. 82-85.

<sup>151</sup> Sobre las FARC hay algunos trabajos que permiten conocer determinados aspectos de la principal guerrilla colombiana; sobre sus orígenes: Pizarro, Eduardo, *Las FARC (1949-1966). De la autodefensa a la combinación de todas las formas de lucha*, Bogotá, Iepri, Tercer Mundo, 1991; sobre su situación en los últimos años: Pécaut, Daniel, *Las FARC. ¿Una guerrilla sin fin o sin fines?*, Bogotá, Norma, 2008; de Pizarro, también resulta útil consultar un trabajo en el que

grupos pertenecían a una tradición contestataria que había comenzado décadas atrás y presentaban ciertas continuidades con el conflicto bipartidista de la época de la Violencia. El origen de las FARC, cuyos antecedentes se remontan a las luchas agrarias de los años cuarenta, se dio en 1964, cuando el gobierno de Guillermo León Valencia (1962-1966) decidió bombardear algunas regiones con influencia comunista bajo el pretexto de que el Estado no podía tolerar «repúblicas independientes». De esos ataques surgieron las FARC, movimiento netamente campesino en sus orígenes, con una capacidad de influencia muy limitada, localizada en áreas de colonización —sur del Tolima y regiones del Meta, del Guaviare y del Caquetá—, es decir, territorios periféricos, alejados del centro del país y con poca o nula presencia del Estado. Sus objetivos, inicialmente, también eran bastante modestos: además de protegerse de los ataques del Ejército, sus luchas estaban orientadas a conseguir tierras para la población rural y a acumular cierto poder en sus zonas de influencia. Para este grupo, el impacto de la Revolución cubana no fue determinante.

El ELN surgió en Santander, cerca de Barrancabermeja, región con una larga tradición contestataria: en los años veinte fue epicentro de las huelgas de los trabajadores de la Tropical Oil, en los cuarenta conoció la agitación gaitanista y, luego, durante la época de la Violencia, contó

---

compara las principales guerrillas colombianas con movimientos de otros países: *Insurgencia sin revolución. La guerrilla en Colombia en una perspectiva comparada*, Bogotá, TM Editores, Iepri, 1996.

con la presencia de guerrillas liberales. El ELN mantenía grandes diferencias con las FARC. Sus dirigentes eran jóvenes ciudadanos de clase media con títulos universitarios, casi todos con un pasado militante: algunos venían de las filas del MRL, la disidencia de López Michelsen; otros eran líderes sindicales del puerto petrolero. Para todos ellos, el ejemplo cubano fue decisivo: buena parte de la cúpula del ELN pasó temporadas de entrenamiento en La Habana antes y después de la creación del movimiento; pero, sobre todo, para sus dirigentes el triunfo de Castro demostró que la lucha revolucionaria tenía un gran porvenir. Por eso, el objetivo de los jefes del ELN era la toma del poder a escala nacional.

Estos movimientos guerrilleros, sobre todo en sus primeros años, tuvieron un impacto muy reducido. Se trataba de grupos pequeños, con grandes dificultades económicas, débiles militarmente y con unas bases de apoyo bastante limitadas. Sin embargo, no pasaron desapercibidos; por el contrario, desde muy temprano, los dirigentes del Frente Nacional vieron en ellos una amenaza para el sistema e intentaron doblegarlos, casi siempre recurriendo a la fuerza. El gobierno de Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), sin abandonar la respuesta militar, le dio cierta importancia a la dimensión social del problema guerrillero. Por una parte, autorizó a los civiles a armarse para protegerse de las guerrillas, lo cual legitimó el paramilitarismo, sentando así un precedente nefasto en nuestra historia reciente. Pero, por otra, quiso apoyar a la población campesina impulsando una reforma agraria y creando

una asociación que defendiera sus intereses, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos —ANUC—. Estas medidas no eran ajenas a los intereses estadounidenses. Con el fin de evitar que el ejemplo cubano se extendiera por el resto del continente, Estados Unidos, además de alentar a las élites locales para que reforzaran las medidas represivas contra la izquierda, instó a los gobiernos de la región a adoptar programas de corte social. Tal fue la misión de la Alianza para el Progreso, la iniciativa liderada por el presidente Kennedy a partir de 1962 para intentar calmar los ánimos de los sectores contestatarios. Muy pronto, sin embargo, el componente militar de la Alianza relegó los proyectos sociales a un plano secundario. En Colombia se presentó una evolución muy similar: los esfuerzos por involucrar al campesinado en la lucha contra el comunismo se impusieron rápidamente a la política agraria. Durante el gobierno de Lleras Restrepo fueron distribuidas miles de hectáreas a la población rural, pero, por una parte, casi todas estaban localizadas en regiones muy alejadas y, por otra, resultaron de baja calidad. A pesar de que realmente no constituía ninguna amenaza para la gran propiedad privada, los terratenientes, tal como había sucedido en los años treinta, ejercieron todo tipo de presiones para que el Gobierno renunciara a su política agraria. Y al igual que en ese entonces, sus demandas terminaron imponiéndose.

Las raíces del descontento social y político no fueron, como vemos, debidamente resueltas durante el Frente Nacional, y la agitación, por lo tanto, se mantuvo e incluso aumentó en la década de los setenta. A comienzos de ella

apareció un nuevo movimiento guerrillero, el M-19, que rápidamente acaparó la atención nacional. Su surgimiento dejó al descubierto la fragilidad de la democracia frentenacionalista. En las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970, la ANAPO logró sus mejores resultados, hasta el punto de que los primeros datos le daban el triunfo al disidente Rojas Pinilla. Sin embargo, el presidente saliente, Lleras Restrepo, decidió suspender las informaciones parciales y al día siguiente se proclamó el triunfo del candidato oficialista, Misael Pastrana. Para los líderes del M-19, la situación no ofrecía dudas: el Frente Nacional había recurrido al fraude, desconociendo las inclinaciones políticas de los electores, que habían expresado claramente su deseo de buscar una solución por fuera del bipartidismo; la supuesta democracia no ofrecía espacios para la oposición y, por consiguiente, el único camino posible era el de las armas. El Movimiento 19 de abril —en alusión a los hechos ocurridos en las elecciones de esa fecha— reunía a personajes bastante heterogéneos: anapistas, universitarios, guerrilleros de otros movimientos, intelectuales y cristianos con inclinaciones sociales. Sin duda alguna, fue la guerrilla más popular de los años setenta, lo que se explica, entre otros factores, porque su discurso no se acompañaba del dogmatismo comunista de las otras guerrillas, por el carisma de sus dirigentes y por la espectacularidad de sus acciones.

Los hechos que ocurrían en Colombia, parecían, sin embargo, ir contra la corriente. En el resto de América Latina, en efecto, ya hacia finales de los sesenta y, sobre todo, en la década siguiente, las esperanzas puestas en

la revolución comenzaban a esfumarse. La muerte del mítico Che Guevara, en 1967, simbolizó, para muchos, el fin de una época. A partir de ese momento, la lucha revolucionaria empezó a perder parte de su legitimidad y los movimientos guerrilleros entraron poco a poco en un período de decadencia antes de desaparecer del todo. Cuba estrechó vínculos con los Gobiernos latinoamericanos, ante los cuales no había mostrado mayor deferencia hasta entonces. Los golpes de Estado que se desencadenaron en varios puntos del continente en la década del setenta —Chile, 1973; Uruguay, 1974; Argentina, 1976—, se acompañaron de una represión muy fuerte que debilitó aún más a la izquierda en sus dos variantes, la legal y la ilegal.

A partir de finales de los años setenta, Colombia entró en una delicada y muy compleja etapa de su historia, que aún hoy no ha logrado superar, a pesar de los grandes y numerosos esfuerzos que han hecho diferentes sectores, así como de las reformas que se han emprendido desde el Estado. Se trata de una crisis generalizada que afecta a las principales instituciones estatales y a la sociedad en su conjunto. La crisis nacional tuvo que ver, en primer lugar, con la agudización de la violencia, relacionada con el fortalecimiento de las guerrillas, en especial de las FARC, y con el auge y consolidación del narcotráfico y del paramilitarismo. A finales de los años setenta, las guerrillas se habían convertido en un problema nacional para el Estado. Frente a las crecientes protestas sociales y al recrudecimiento de la violencia insurgente, que empezaba a golpear los centros urbanos, los Gobiernos optaron por reforzar

el aparato militar de las Fuerzas Armadas. Esta actitud fue particularmente evidente durante la administración liberal de Julio César Turbay (1978-82). Desde el inicio de su controvertido gobierno, los mecanismos de excepción para «restablecer el orden público» perdieron su carácter extraordinario y se convirtieron en normas casi permanentes. El Estatuto de Seguridad, respaldado por la Iglesia, los gremios y la clase política tradicional, le abrió paso a una militarización creciente: algunas de las zonas más amenazadas por las guerrillas quedaron bajo el control de alcaldías y gobernaciones castrenses; la justicia militar se vio ampliada y fortalecida, y la oposición fue objeto de una represión implacable.

En la ofensiva contrarrevolucionaria, alentada aún más por los temores que suscitó el triunfo de la guerrilla sandinista en Nicaragua (1979), el gobierno de Turbay cometió todo tipo de violaciones al orden jurídico —detenciones arbitrarias, régimen de torturas, «desapariciones»—, como no tardaron en denunciarlo numerosas organizaciones de derechos humanos. Ante las presiones de algunos sectores de la sociedad y de la guerrilla, que había retenido a varios embajadores, el Gobierno aceptó a regañadientes crear una comisión de paz que debía iniciar diálogos con las guerrillas. Se evocó, incluso, la posibilidad de concederles una amnistía general, pero ninguna de las iniciativas prosperó: la comisión de paz, encabezada por el expresidente Lleras Restrepo, se disolvió rápidamente cuando sus miembros se percataron de que el Gobierno, las élites políticas y empresariales, así como la alta comandancia

del Ejército, no tenían en realidad ninguna intención de facilitar los contactos con la guerrilla y, mucho menos, de adelantar negociaciones. Si la vía política no daba resultados, las acciones militares, por el contrario, habían logrado capturar a buena parte de la dirigencia del M-19. La «mano dura» del Gobierno, sin embargo, no parecía ser del agrado de amplios sectores de la opinión, indignados igualmente por los excesos de corrupción y clientelismo oficiales.

Las elecciones presidenciales de 1982 giraron en torno a la búsqueda de la paz, lo que reflejaba la preocupación de la sociedad al respecto. El triunfo del conservador Belisario Betancur marcó un hito en el accidentado camino de las relaciones entre el Estado y la insurgencia: por primera vez en la historia, un Gobierno reconoció que el problema guerrillero no era un asunto de orden público, como habían dicho hasta entonces todos los mandatarios, sino que existían «causas objetivas» —injusticia social y exclusión política— que habían llevado a numerosos colombianos a optar por las armas.

## ▪ LOS PROCESOS DE PAZ

Consecuente con su diagnóstico acerca de las raíces del conflicto armado, Betancur puso en marcha el proceso de paz y abrió así una fórmula que no sólo ha sido retomada por los diferentes gobiernos que le sucedieron, sino que ha sido extendida a otros actores armados. La iniciativa de Betancur reposaba en tres principios claves: negociación

entre amplios sectores de la sociedad, incluidos los movimientos guerrilleros, reformas sociales y apertura del espacio político. Los resultados concretos fueron muy modestos, decepcionantes para la mayoría. En cuanto a los enfrentamientos, se decretó un cese al fuego que nunca sirvió para propiciar un clima de confianza entre las partes; en lo político, se aprobó la elección popular de alcaldes, medida que entraría en vigencia en 1986; y se constituyó la Unión Patriótica —UP—, el movimiento político de las FARC; finalmente, para enfrentar el problema social, se creó el Plan Nacional de Rehabilitación, organismo cuya capacidad de acción fue muy limitada debido a los escasos recursos con los que contó al comienzo de sus gestiones. Con el paso del tiempo, y en vista de los múltiples tropiezos que sufrió desde sus propios inicios, el experimento de Betancur fue objeto de innumerables objeciones por parte de los empresarios, de los obispos y de la gran prensa nacional. Todos ellos vieron en la criminal toma del Palacio de Justicia por parte de un comando del M-19, en noviembre de 1985, la oportunidad para deslegitimar por completo el cuestionado proceso de paz.

¿Qué balance se puede hacer de este experimento pionero? Para muchos fue un fracaso absoluto, pues lejos de debilitarla, la guerrilla aumentó su poderío. Aunque lo anterior no deja de ser cierto, la misma objeción resulta válida para deslegitimar la vía militar, pues luego de varias décadas esta estrategia tampoco había logrado acabar con la insurgencia. Es importante tratar de reconocer que la solución negociada del conflicto armado que inauguró

Betancur ha sentado varios precedentes que no se pueden ignorar. En primer lugar, durante los sucesivos gobiernos, gracias a diferentes procesos de paz, se logró la desmovilización de varios grupos guerrilleros y de otros actores armados. Por otra parte, la iniciativa de Betancur ha sido retomada por todos los gobiernos posteriores —ya hablaremos con más detalle de ello—. Asimismo, una visión comparativa, que se pregunta por lo que ha ocurrido con fenómenos similares en otros países, arroja conclusiones muy significativas: en Centroamérica, para citar un caso, pese a los enormes gastos de guerra y al apoyo militar de Estados Unidos, los movimientos guerrilleros no lograron ser derrotados y su reinsertión en la sociedad civil sólo se consiguió mediante procesos de paz. Y, de una manera más general, en todo el mundo, «la disminución de los conflictos [armados en la posguerra fría] ha tenido como origen ante todo procesos de paz exitosos y no el triunfo militar de uno de los polos en conflicto»<sup>152</sup>.

Si todos los gobiernos posteriores al de Betancur se encargaron de introducirle numerosas modificaciones, ninguno de ellos renunció a la modalidad del diálogo como instrumento para acercarse a las guerrillas. Los cambios que se observan en los sucesivos procesos se explican, en buena medida, por el deseo de no repetir los errores de oportunidades anteriores y por las evoluciones que se iban

---

<sup>152</sup> Pizarro, Eduardo, *Una democracia asediada. Balance y perspectivas del conflicto armado en Colombia*, Bogotá, Norma, 2004, págs. 42-43.

presentando en las distintas coyunturas. Pero más allá de las diferencias entre un proceso y otro, es posible hablar de dos modelos generales que han inspirado las políticas de paz de todos los gobiernos desde 1982. En primer lugar, están aquellas iniciativas dispuestas a ceder a las exigencias de los grupos alzados en armas. Fue el caso de Betancur, que nunca exigió, por ejemplo, el desarme de las guerrillas, ni fijó un plan para su desmovilización; o el de Andrés Pastrana (1998-2002), quien le reconoció un vasto territorio a las FARC para iniciar conversaciones. En el otro extremo, se encuentran las negociaciones basadas en agendas más concretas y más exigentes, en las que el inicio del diálogo está condicionado por muestras tangibles de la voluntad de paz por parte de la guerrilla, como el cese unilateral al fuego, la liberación de secuestrados y su compromiso a reinsertarse definitivamente en la sociedad civil mediante el desarme y la desmovilización. Este fue el modelo puesto en marcha por Virgilio Barco (1986-1990) y corresponde al de los gobiernos de Álvaro Uribe (2002-2006, 2006-2010). En ocasiones, los mandatarios combinaron las dos estrategias: César Gaviria (1990-1994) no dudó en adelantar diálogos y en decretar la «guerra integral».

Como resultado de las negociaciones, a comienzos de los años noventa se habían desmovilizado varios grupos guerrilleros o parte de ellos, algunos de importancia nacional: casi todo el EPL, una pequeña facción del ELN y, sobre todo, el M-19. Varios factores pueden haber jugado a favor de la búsqueda de una salida política. La coyuntura internacional, con el derrumbe de la ex Unión Soviética y de los

regímenes de Europa del Este —a partir de 1989—, significó un golpe muy fuerte, en términos ideológicos, para la izquierda en general, que veía desaparecer abruptamente del panorama político uno de sus principales referentes. Internamente, desde finales de los años ochenta, varios movimientos insurgentes habían iniciado un proceso de autocrítica con relación a sus estrategias y objetivos, lo que los llevó a cuestionar cada vez más la «combinación de todas las formas de lucha», línea de acción en la que se combinaban elementos de la política legal —participación en partidos y movimientos, en las instituciones representativas, en las elecciones, etcétera— con el ejercicio de la violencia. El proceso de paz de Virgilio Barco y, sobre todo, la Constitución de 1991, al ofrecer posibilidades reales de participar en la formulación de nuevas políticas, contribuyeron a afianzar las convicciones de algunas guerrillas en torno a la legalización de sus grupos. En esta dinámica de reconciliación, varios sectores hicieron contribuciones destacadas.

La Iglesia católica desempeñó un papel importante en las negociaciones. A diferencia de las décadas anteriores, marcada por su férrea hostilidad a los diálogos Estado-guerrilla y por su profundo temor a abordar desde una óptica crítica los graves problemas que aquejaban al país, el clero colombiano empezó a dar muestras de una nueva actitud hacia finales de los años ochenta, comienzos de los noventa. Si hasta entonces la «amenaza comunista», la «crisis moral» y el «alejamiento de Dios» eran las principales causas evocadas por el clero para explicar los problemas

del país, a partir de ese momento la «cuestión social» y la crisis humanitaria empezaron a ocupar un lugar cada vez más visible en los diagnósticos de la Iglesia sobre la realidad nacional. Las denuncias de la Iglesia sobre la pobreza, la explotación, la concentración de la tierra, se hicieron frecuentes en sus sermones y pastorales. Con la misma vehemencia, denunciaron la corrupción de la clase política y la violación a los derechos humanos, criticando no sólo los atropellos de las guerrillas y de los paramilitares, sino también los del propio Estado. Uno de los puntos que más preocupaba al clero era el de los desplazados. De hecho, fueron los informes detallados de la Iglesia católica los que llamaron la atención de la opinión nacional, a mediados de los años noventa, sobre la dramática situación de los cientos de miles de desplazados, presionados por todos los actores del conflicto. Algunos factores pueden ayudar a explicar el nuevo compromiso de la Iglesia con los valores de la democracia: el «fin» de la amenaza comunista permitió ver de otra manera a las guerrillas, consideradas hasta entonces como simples agentes del comunismo mundial, lo que a su vez facilitó una nueva lectura de los problemas sociales; por otra parte, obispos más sensibles a los problemas del país han llegado a las más altas posiciones, dándole así mayor peso a las soluciones políticas y sociales.

Los aportes de la izquierda legal también deben ser tenidos en cuenta. Al igual que la Iglesia, aunque por razones muy diferentes, las numerosas tendencias en las que estaba dividida la izquierda colombiana se opusieron al

diálogo durante mucho tiempo. A lo largo de los años sesenta y setenta, numerosos escritores, profesores, académicos, artistas, en general, miembros del Partido Comunista o de otras organizaciones igualmente críticas frente a la «farsa democrática», no habían ocultado sus simpatías por la lucha armada. La radicalización se enmarcaba en un contexto mundial en el que la revolución se había convertido en el único camino que podía hacer realidad el sueño de la «utopía». Los numerosos ejemplos de resistencia nacional o popular que se multiplicaban en todo el planeta contra el «imperialismo», contra la «oligarquía», contra el «capitalismo», corroboraban esas esperanzas. Bastaba ver lo que sucedía en Vietnam, en Argelia, en Indochina y, sobre todo, en Cuba.

En un contexto nacional e internacional particularmente convulsionado, la izquierda asumió, con más fuerza y decisión que antes, su papel de conciencia crítica de la sociedad. El caso del intelectual o del artista ejemplifica claramente esa radicalización. Mientras que la falta de compromiso se convirtió en una especie de negación de la *naturaleza* misma del trabajo intelectual, la militancia orientada a «transformar el mundo» era señalada como el sello distintivo, el rasgo que contribuía a realzar su prestigio y su legitimidad, el único camino que podía tomar el «verdadero» intelectual. El intelectual revolucionario de los años sesenta y setenta, crítico del bipartidismo y del Estado, llegó a ser el modelo para todo «pensador». La Revolución cubana fue uno de los factores que más contribuyó en el proceso de politización de la cultura, asignando

al artista o al escritor una función social. Si el análisis crítico había sido considerado hasta entonces como la tarea básica del intelectual, ahora, bajo el clima de euforia que se apoderó de amplios sectores tras el triunfo de Castro, era necesario, casi que un deber moral, ir más allá: el intelectual debía participar directa y activamente en la «revolución»: «El intelectual de los años sesenta estaba ligado, mucho más que hoy, a una intensa vocación de poder, de poder alternativo, incluso en su manifestación más descarnada de poder armado»<sup>153</sup>. Si bien no todos siguieron el ejemplo de Camilo Torres, el modelo del «intelectual-revolucionario», en la cátedra, en la prensa, en sus obras, dejó en claro que la violencia era una opción válida para luchar contra el enemigo, representado en el «régimen oligárquico» del Frente Nacional, legitimando así la «combinación de todas las formas de lucha».

Lo mismo se puede decir de muchas organizaciones y movimientos «progresistas», comenzando por el Partido Comunista, que dominaba ampliamente el escenario de la izquierda colombiana en los años sesenta. Desde la época de la Violencia, como respuesta a la persecución de los conservadores contra los sectores populares y los líderes sociales, el comunismo había empezado a prestar su apoyo

---

<sup>153</sup> Sánchez, Gonzalo, «Intelectuales... poder... y cultura nacional», *Análisis Político*, Bogotá, núm. 34. mayo-agosto 1998, págs. 129-133. Este artículo ofrece una muy útil tipología de los intelectuales colombianos, aunque con algunos vacíos de consideración, seguramente por tratarse de un trabajo pionero.

a las guerrillas campesinas creadas como mecanismo de autodefensa. La necesidad de la resistencia armada se fortaleció con el Frente Nacional, un pacto que, como vimos, dejaba por fuera a las expresiones ajenas al bipartidismo. Tras el triunfo de Castro y la irrupción de numerosas guerrillas en todo el continente, la lucha revolucionaria se convirtió en el tema central, en el objetivo primordial, en la obsesión de la izquierda. Nada parecía satisfacerla: aunque naturalmente las medidas del Frente Nacional no respondían a sus exigencias, la izquierda no reconocía el más mínimo avance promovido por las políticas sociales que mejoraron en algo las condiciones materiales, educativas, sanitarias de amplios sectores de la población. A medida que las FARC, el ELN, el M-19 y las otras guerrillas aumentaban su poderío, la opción militar cobraba mayor prestigio y legitimidad, mientras que las vías políticas y los mecanismos institucionales parecían cada vez más inadecuados y desacreditados: «Entonces era casi un pecado sugerir la participación electoral como medio para cambiar al país»<sup>154</sup>. Si la izquierda había sido, desde su aparición en el escenario político, una abanderada de la justicia social y lo poco que se había logrado en esa materia era resultado, en buena medida, de sus presiones a lo largo del siglo XX, en materia democrática su legado

---

<sup>154</sup> Archila, Mauricio, «Auge, crisis y reconstrucción de las izquierdas colombianas (1958-2006)», en Archila, Mauricio et ál., *Una historia inconclusa. Izquierdas políticas y sociales en Colombia*, Bogotá, Cinep, 2009, pág. 69.

era muy desfavorable: «La izquierda —no sólo la comunista— enseñó a los trabajadores a pensar pero no superó a la derecha en el ejercicio de la democracia y fue igualmente intolerante y avasalladora del interlocutor político. El doctrinarismo se atravesó en su camino». Y eso fue lo que legó al sindicalismo, al estudiantado, a la academia<sup>155</sup>.

La radicalización de la izquierda y su hostilidad hacia las instituciones comenzaron a perder intensidad en los años ochenta. El paradigma del intelectual «comprometido» fue poco a poco sustituido por otro tipo de intelectual, más dispuesto a examinar y a juzgar bajo otro ángulo al Estado y a la democracia, y a replantear, por consiguiente, la validez de la lucha armada. El proceso de paz de Betancur permitió que numerosos intelectuales, hasta entonces radicalmente hostiles frente a toda acción emprendida por el Estado, colaboraran de manera estrecha en las negociaciones. Varios de ellos se vincularon, incluso, a las políticas estatales, colaborando en diversos campos, como el de las relaciones internacionales, la planeación económica, la administración distrital, los derechos humanos, etcétera. De esta manera, pudieron cuestionar sus visiones tradicionales sobre el Estado y la violencia guerrillera. Este proceso no significa, de ninguna manera, que el intelectual haya renunciado a su función crítica, pues puede seguir ejerciendo esa tarea desde la academia, la prensa e incluso desde

---

<sup>155</sup> Delgado Guzmán, Álvaro, «El experimento del Partido Comunista Colombiano», en Archila, Mauricio et ál., *Una historia inconclusa*, *op. cit.*, pág. 100.

el propio Estado. El giro en el campo intelectual resulta muy importante por dos razones relacionadas entre sí: por una parte, el intelectual acepta que «desde el Estado se pueden cumplir tareas democratizadoras»; por otra, que su tarea crítica no es incompatible con la democracia»<sup>156</sup>. La nueva posición de la izquierda fue auspiciada, igualmente, por la criminalización creciente de la guerrilla. Desde los años ochenta, diferentes movimientos intentaron marcar sus diferencias con respecto a prácticas cada vez más recurrentes que deslegitimaban el sentido de la lucha social. La Unión Patriótica y la Alianza Democrática M-19 hicieron esfuerzos considerables tendientes a valorizar, en el seno de la izquierda, las cualidades de la democracia y a hacer de ellas los instrumentos privilegiados para fortalecer a la misma democracia y para transformar al país.

## ▪ LAS FARC, EL PARAMILITARISMO Y EL NARCOTRÁFICO: COCTEL EXPLOSIVO

Los procesos de paz no han arrojado, sin embargo, ningún avance significativo con respecto a la guerrilla más poderosa: las FARC. Este movimiento conoció, a partir del gobierno de Betancur, un gran fortalecimiento en todos los aspectos, tendencia que se reafirmó en la década siguiente.

---

<sup>156</sup> Sánchez, Gonzalo, *op. cit.*, págs. 115-116.

A comienzos de los años ochenta los dirigentes de la organización, muy limitada hasta entonces en el plano político, económico, militar y geográfico, decidieron que las condiciones estaban maduras para pasar a la ofensiva en la lucha por la toma del poder y que, para alcanzar dicho objetivo, era necesario fortalecer las finanzas, aumentar el pie de fuerza y conquistar territorios estratégicos. El secuestro, las extorsiones a los hacendados y a las multinacionales, y los cultivos ilícitos se convirtieron en sus principales fuentes de financiación.

Los cuantiosos ingresos que derivaban y aún derivan de esas actividades delictivas les permitieron reclutar numerosos adeptos, fortalecer su presencia en zonas de colonización y, sobre todo, extenderse hacia regiones mucho más importantes en términos estratégicos: áreas ganaderas, como el Magdalena medio y las sabanas de Córdoba; regiones agroindustriales, como Urabá, el sur del Cesar y algunas provincias de Santander; y zonas de explotación petrolera, como el Magdalena medio, Casanare, Arauca y Putumayo. Las FARC fortalecieron su presencia, igualmente, en la región andina, en la zona cafetera, en algunas ciudades, en áreas fronterizas con casi todos los países vecinos y en franjas costeras del Pacífico y del mar Caribe, que constituyen puntos vitales para la exportación de drogas y la importación de armas. Al mismo tiempo, sometieron a las autoridades locales a un acoso permanente con el fin de intervenir, directa o indirectamente, en las esferas políticas, económicas, jurídicas, etcétera. «Es decir, la acción militar comenzó a combinarse con un proceso de erosión

institucional mediante una sustracción de municipios enteros al control del Gobierno central»<sup>157</sup>. Como se ve, ya no se trataba de una simple organización con influencia limitada a las zonas de colonización, sino que ahora tenía presencia y ejercía control en regiones del país de gran importancia estratégica.

La expansión económica y militar de las FARC, por otra parte, estuvo estrechamente relacionada con el auge del paramilitarismo, otra pieza central, por sus múltiples consecuencias, de la crisis actual del país. Para muchos, el paramilitarismo fue una respuesta, una reacción, a los desmanes de la guerrilla en un contexto en el que el Estado no estaba en condiciones de proteger a la población afectada. Para tratar de frenar esa amenaza, que se traducía en secuestros, asesinatos y extorsiones contra la población, se organizaron grupos armados de «autodefensas» en unas cuantas regiones del país. Se trata de una tesis muy polémica tanto por sus explicaciones acerca del origen de las supuestas «autodefensas», como por su silencio cómplice en torno a la evolución que tuvieron esas organizaciones. En primer lugar, el paramilitarismo, entendido como grupos armados no estatales que reciben el apoyo —tácito o explícito— de poderes locales, regionales o nacionales, tiene una larga tradición en el país. Ya en la época de la Violencia, liberales y conservadores, en diferentes departamentos, habían auspiciado la creación de bandas armadas. En los sesenta, como ya se dijo, el respaldo vino del propio

---

<sup>157</sup> Pizarro, Eduardo, *Una democracia asediada*, op. cit., pág. 92.

jefe del Estado, que creyó oportuno armar al campesinado. En segunda medida, lo que supuestamente comenzó siendo una propuesta de carácter local y defensivo se convirtió, debido a su vinculación con los dineros de la mafia del narcotráfico y al apoyo de influyentes sectores, en un proyecto mucho más ambicioso y siniestro. Ya no se trataba simplemente de esperar a que el enemigo atacara para defenderse, sino que había que tomar la iniciativa, es decir, había que salir en búsqueda de la guerrilla para expulsarla a sangre y fuego del territorio. Con la ayuda de terratenientes, empresarios, políticos y numerosos miembros del Ejército y de los organismos de seguridad, los grupos paramilitares, cada vez más ligados al narcotráfico, se extendieron por diferentes regiones del país. Su primer epicentro fue el Magdalena medio, en particular, los alrededores de Puerto Boyacá. De allí no tardaron en avanzar hacia otras regiones controladas de tiempo atrás por las guerrillas, y hacia finales de los años ochenta ya ejercían el poder, de hecho, en varios municipios de Córdoba, del Urabá antioqueño y, un poco después, del piedemonte llanero<sup>158</sup>.

El origen del paramilitarismo, en consecuencia, no se explica sólo por los crímenes de la guerrilla. Es decir, no es únicamente, como afirman sus numerosos simpatizantes, una respuesta defensiva que encuentra su justificación en la debilidad de un Estado que no puede proteger a la

---

<sup>158</sup> Reyes, Alejandro, «Paramilitares en Colombia: contexto, aliados y consecuencias», *Análisis Político*, Bogotá, núm. 12, enero-abril 1991, págs. 37-38.

población de los ataques guerrilleros<sup>159</sup>. En su gestación y desarrollo hubo también motivaciones económicas e ideológicas muy precisas. El paramilitarismo se consolidó en el mismo momento en que el gobierno de Betancur puso en marcha el proceso de paz, una iniciativa que, como ya vimos, intentó privilegiar las reformas políticas y sociales, lo cual, directa o indirectamente, le dio un gran protagonismo a los movimientos guerrilleros. Todo ello preocupó a buena parte de las élites, que temieron por sus privilegios y consideraron con horror la perspectiva de que exguerrilleros pudieran, en un futuro próximo, ejercer su influencia desde las instituciones del Estado:

[El crecimiento del paramilitarismo] no se debe sólo a la ofensiva de las guerrillas y al incremento de los secuestros, tal como sostienen los que ven en los paramilitares sólo el resultado de una falta de seguridad para hacendados, ganaderos y propietarios rurales. Ese mayor radio de acción paramilitar también se puede explicar como parte de los planes de quienes serían afectados por un proceso de paz exitoso. Estos sectores —élites ganaderas y rurales, políticos locales tradicionales, etcétera—, mediante una alianza estratégica con grupos de las Fuerzas Armadas y el narcotráfico, esperan neutralizar cualquier intento de paz con negociación, lo mismo que el reformismo que

---

<sup>159</sup> Dos sólidas aproximaciones al paramilitarismo se encuentran en: Romero, Mauricio, *Paramilitares y autodefensas, 1982-2003*, Bogotá, Universidad Nacional, Iepri, 2003; Duncan, Gustavo, *Los señores de la guerra. De paramilitares, mafiosos y autodefensas en Colombia*, Bogotá, Planeta, 2006.

aparentemente le seguiría, en especial el que supone una redistribución de activos rurales<sup>160</sup>.

Los representantes más violentos de la extrema derecha, dispuestos a impedir cualquier cambio que atentara contra sus prerrogativas, lanzaron una verdadera cruzada contraguerrillera en todo el país a partir de los años ochenta. Para ello combinaron, en lo fundamental, dos tácticas — «las acciones de control y combate de las Fuerzas Armadas, y las acciones de escuadrones paramilitares privados» —<sup>161</sup>, y como en toda cruzada de este tipo, sus instigadores empezaron a ver enemigos por todas partes. Mediante una guerra sucia muy bien planificada y financiada, periodistas, jueces, intelectuales, maestros, sindicalistas, ecologistas, defensores de los derechos humanos, candidatos presidenciales y cientos de miles de campesinos engrosaron la larga y triste lista de víctimas del terror. La up, el movimiento que había nacido como brazo político de las farc durante el proceso de paz de Betancur, ya había visto caer asesinados, hacia finales de los años noventa, a centenares de simpatizantes y a numerosos dirigentes, incluidos dos candidatos a la presidencia y cientos de líderes regionales y locales. Desde un comienzo, la gran prensa, la Iglesia, los gremios, los partidos tradicionales y el Ejército, estigmatizaron a la up por sus vínculos con las farc. Razón no les faltaba, pues la guerrilla había convertido en

---

<sup>160</sup> Romero, Mauricio, *op. cit.*, págs. 103-104.

<sup>161</sup> Reyes, Alejandro, *op. cit.*, pág. 35.

objetivos militares a los opositores y adversarios de la up. Pero esos mismos sectores se mostraron mucho menos escandalizados frente a la política de aniquilamiento desatada por la extrema derecha contra la up. Su indiferencia tampoco cambió cuando el partido, bajo la conducción de nuevos líderes que buscaban una mayor independencia con respecto a las farc, empezó a criticar la violencia como mecanismo para impulsar los cambios que el país necesitaba. Es decir, la guerra contra la up no obedecía a sus vínculos con las farc, como sostenían sus enemigos<sup>162</sup>. Para amplios sectores de la clase dirigente, la creación y, por supuesto, la consolidación de un partido de izquierda constituían una amenaza que había que extirpar. En una alianza siniestra, miembros del Ejército, terratenientes, políticos locales, paramilitares, recurrieron al terror para arrasar con todo lo que oliera a izquierda.

En un comienzo, el paramilitarismo no encontró mayor freno ni por parte de la sociedad, hastiada de los ataques de la guerrilla, ni por parte del Estado, que veía en los paramilitares un aliado en su lucha contra el enemigo común. Durante muchos años, las autoridades negaron, incluso, la existencia de los grupos «contrainsurgentes», como desde entonces se calificaban a sí mismos; sólo a partir del momento en que empezaron a asesinar a encumbrados

---

<sup>162</sup> Para un mayor desarrollo de esta cuestión, consultar Lorgia, María Paula, *El Tiempo frente a la Unión Patriótica: la representación de un partido político de izquierda* [trabajo de grado], Bogotá, Universidad de los Andes, Carrera de Historia, 2008.

funcionarios y a dirigentes políticos de primer orden, se tomaron medidas al respecto. Pero, hasta el día de hoy, las políticas han sido bastante ambiguas y permisivas: si algunos gobiernos han intentado, aunque tímidamente, enfrentar el paramilitarismo, otros, por el contrario, han llegado, incluso, a auspiciarlo oficialmente —el presidente Ernesto Samper creó las Convivir, agrupaciones campesinas armadas por la fuerza pública para asegurar la protección de ciertas regiones—.

Las consecuencias del fenómeno paramilitar fueron funestas para el Estado, para la sociedad y para la democracia. Es cierto que la ofensiva contrainsurgente «liberó» zonas históricamente controladas por la guerrilla, pero los resultados obtenidos —y los métodos que se utilizaron— no contribuyeron a legitimar las instituciones ni a reforzar su presencia en las áreas dominadas por los insurgentes. Por el contrario, los costos ocultos de los supuestos triunfos trajeron como consecuencia la «creación de dominios territoriales armados donde no puede actuar el Estado sino como cómplice de sistemas de justicia privados»<sup>163</sup>, de donde se deduce que los paramilitares, como lo han puesto de presente numerosos pronunciamientos de tribunales judiciales nacionales e internacionales, llevaron a cabo su política de terror bajo la mirada indiferente de las autoridades oficiales y, en no pocas ocasiones, con la colaboración explícita de miembros de las Fuerzas Armadas.

---

<sup>163</sup> Reyes, Alejandro, *op. cit.*, pág. 35.

En cuanto a la sociedad, los costos que pagó fueron altísimos. Así como el terror causado por la guerrilla facilitó, y para muchos «justificó» la reacción de sus víctimas, el horror que acompañó las acciones de los paramilitares incrementó la violencia de la guerrilla. La espiral de masacres y contramasacres golpeó, en primer lugar, a la población civil, pues las arremetidas «justicieras» de uno y otro bando estaban más dirigidas a sembrar el terror entre las bases de apoyo del enemigo que a vulnerar directamente al adversario. El balance de esta tenebrosa lógica es, sencillamente, aterrador: en las últimas décadas del siglo pasado, los homicidios se convirtieron en la principal causa de mortalidad en el país; según datos del episcopado, desde mediados de los años ochenta más de dos millones de colombianos han tenido que huir de su lugar de residencia para escapar al fuego cruzado de los paramilitares, la guerrilla y el Ejército. Las guerrillas llegaron a tener en su poder a unos tres mil secuestrados aproximadamente, muchos de ellos privados de libertad desde hace varios años y sometidos a un cautiverio desgarrador.

En tercer lugar, la democracia colombiana, «la más antigua de América Latina», también se vio amenazada. Por una parte, la lucha a muerte de los paramilitares contra la izquierda legal impidió que el escenario político se ampliara y se consolidara como un espacio abierto a otras tendencias. Como consecuencia de ello, y en medio de un macabro círculo vicioso, el paramilitarismo contribuyó a la radicalización de la guerrilla y los crecientes desafíos de la lucha armada hicieron que el poder económico y

militar de ambos bandos comenzara a fundarse, en muy buena medida, en las enormes ganancias que las dos organizaciones obtenían —y aún obtienen— del narcotráfico. Según algunos estudios, los ingresos de las farc por este concepto, entre 1991 y 1996, ascendieron a 470 millones de dólares, cifra que representó el 41 % del total de sus ingresos durante el mismo período, al tiempo que los paramilitares obtuvieron cerca de 200 millones de dólares, correspondientes al 70 % de sus ingresos<sup>164</sup>. El interés de ambos grupos por controlar las zonas de cultivos ilícitos se tradujo en un aumento sustancial de la violencia. El narcotráfico, sin embargo, no sólo ha contribuido a alimentar la guerra. En realidad, se trata de un fenómeno que ha tenido un impacto decisivo en muchos aspectos de la sociedad colombiana.

En primer lugar, ahondando los niveles de criminalidad, corrupción y desinstitucionalización. Como respuesta a la demanda creciente de los consumidores de los mercados internacionales, a partir de la década de los ochenta Colombia adquirió una mayor importancia como país productor y exportador de cocaína. La cercanía de Colombia a los Estados Unidos —el principal consumidor mundial— y a Perú y Bolivia —los principales centros productores de la hoja hasta los años ochenta— explica el protagonismo de las mafias criollas, que también sacaron provecho de su enorme habilidad para burlar y sobornar a todo tipo de autoridades. Los carteles de Medellín y de Cali, dominados

---

<sup>164</sup> Pizarro, Eduardo, *Una democracia asediada...*, op. cit., pág. 193.

por Pablo Escobar y los hermanos Rodríguez Orejuela, respectivamente, fueron los ejemplos más exitosos de tales empresas delictivas. Las dos organizaciones, en su afán por aumentar su riqueza y por eliminar a sus adversarios, dieron desde muy temprano origen a todo tipo de violencias: ajustes de cuentas entre las diferentes mafias, asesinatos selectivos de sus críticos y de los defensores de la extradición, ya fuesen políticos, policías, jueces o periodistas, y atentados indiscriminados para sembrar el pánico en todo el territorio nacional. Los años de 1988 y 1989 marcaron el clímax de una época de terror, mediante el cual se buscaba presionar al Estado para que aboliera la extradición. Los «dineros calientes» penetraron cada vez más hondo en el tejido social, permeando desde la clase política hasta la guerrilla, pasando por los paramilitares, el deporte, los medios de comunicación, la banca, miembros del Ejército y miles de campesinos y de comerciantes. La corrupción del narcotráfico llegó a tal nivel que, incluso, un presidente de la República —Ernesto Samper— fue acusado de recibir enormes cantidades de dinero del cartel de Cali para financiar su campaña electoral.

El comercio de la cocaína no fue solamente un asunto de las grandes mafias de la droga; también tuvo —y sigue teniendo— una dimensión social. Para miles de campesinos, el cultivo de la planta era, en muchas ocasiones, la única alternativa económica viable frente a las escasas oportunidades que ofrecía el mundo rural en las décadas de los ochenta y noventa. Departamentos como Guaviare, Caquetá y Putumayo recibieron en aquellos años a miles de

inmigrantes ansiosos de mejores oportunidades, atraídos por lo que veían como una situación ideal, caracterizada por la ausencia estatal en esas zonas, por la posibilidad de cultivar la coca sin invertir grandes sumas de dinero, por la adaptabilidad de las plantas a los suelos de esas regiones y, sobre todo, por las enormes ganancias que reportaba la venta de hoja de coca o, más aún, de la pasta procesada. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las olas de colonización no tuvieron un final feliz. Por el contrario, las regiones de cultivos ilícitos se tardaron en convertirse en zonas altamente conflictivas, en las que convergían delincuencia común, presencia guerrillera y paramilitar. Si innumerables campesinos de todo el país participaron en la economía ilegal, y algunos consiguieron mejorar su suerte, las grandes ganancias estaban reservadas para las organizaciones mafiosas. El verdadero negocio consistía en transformar la pasta básica de coca en cocaína, mediante un complejo proceso de refinación en laboratorios que implicaba conocimientos químicos avanzados y cuantiosas sumas de dinero, necesarias para financiar una estructura encargada de conseguir todos los materiales necesarios para el proceso químico —muchos de ellos inexistentes en el mercado nacional—, para sobornar autoridades, para sostener bandas armadas, para contratar abogados, banqueros y administradores, y para exportar la cocaína a los mercados internacionales utilizando barcos, aviones, etcétera.

La esfera económica también fue seriamente afectada por el narcotráfico. Algunos cálculos señalan que, en las dos últimas décadas del siglo pasado, esta actividad

generó un promedio de 2.000 millones de dólares anuales, cifra que superaba, en ese entonces, los ingresos de las exportaciones de café, razón por la cual durante un tiempo hubo quienes se empeñaron en destacar las consecuencias positivas del auge de la droga: generación de miles de empleos directos e indirectos, grandes inversiones financieras y un auge inusitado de la construcción y del consumo. Sin embargo, muchos economistas han cuestionado las supuestas bondades, ya que, si bien es cierto que a corto plazo la economía conoció cierta reactivación, a mediano y largo plazo las consecuencias fueron claramente desfavorables: los gastos de la mafia estaban orientados, esencialmente, al lujo y la especulación, lo que no favorecía un desarrollo sostenido, y sus inversiones en actividades comerciales reposaban en el contrabando, generando así una competencia desleal que afectaba al comercio y a la industria. Adicionalmente, la droga produjo profundos cambios en la estructura de la tenencia de la tierra. El interés de los narcotraficantes, de los paramilitares y de las guerrillas por controlar zonas estratégicas tuvo consecuencias demoledoras para los propietarios rurales, ya fuesen grandes terratenientes o humildes campesinos, pues se vieron presionados a vender o a abandonar sus propiedades según la voluntad omnímoda de los «señores de la guerra». Las transferencias forzadas dieron lugar a la creación de enormes latifundios dedicados más que todo a la ganadería extensiva. Las cifras son muy difíciles de calcular, pero es indiscutible que en el transcurso de unos pocos años se implementó una auténtica contrarreforma

agraria que concentró la tierra en manos de unos pocos y que agravó considerablemente los problemas sociales del campo colombiano. Muchas de las propiedades que pasan a manos de esos grupos armados se convierten en tierras improductivas, que sólo sirven para darles estatus social a sus nuevos propietarios. En numerosas ocasiones son mal utilizadas, pues no se tienen en cuenta las características del suelo: por ejemplo, se dedican a la ganadería extensiva a pesar de que son más aptas para la producción agrícola, lo que a su vez afecta la producción nacional. Por otra parte, miles de campesinos se han visto obligados a desplazarse a los centros urbanos, huyendo de la violencia, hacia ciudades que no ofrecen solución a sus necesidades más elementales de vivienda, educación, salud y servicios.

La consolidación de los nuevos hacendados se manifestó en sus pretensiones de extender su enorme poder económico al plano social y político. En el primer caso, han intentado, muchas veces con éxito, hacer parte del mundo de las élites, imitando algunos patrones de comportamiento de la burguesía o, de manera más directa, incursionando en los círculos sociales de las altas esferas. En cuanto a lo político, los narcotraficantes han recurrido tanto a la violencia como al apoyo financiero para conseguir el apoyo de diferentes tipos de autoridad. También han participado en las elecciones, ya sea individualmente o mediante partidos muy efímeros.

Las consecuencias éticas han sido muy graves en el conjunto de la sociedad. Con la droga, amplios sectores, que en efecto no se limitan a los que están relacionados

con el narcotráfico, estimulados por el ejemplo de las organizaciones criminales y por el clima de impunidad, «han podido definir sus propias normas, sus códigos particulares, sus circuitos de influencia, sin tener en cuenta las regulaciones estatales y jurídicas, con lo que tienden a disiparse las fronteras entre lo legal y lo ilegal». La justicia, como se adivina en todo este panorama, se debilitó muy rápidamente. A la congestión en los procesos judiciales y a la elevada impunidad, se sumaron entonces la intimidación y los sobornos por parte de los barones de la droga. Ya no sólo se trataba de comprar o asesinar a unos cuantos jueces, sino de presionar al Estado para negociar directamente con él, como sucedió durante el gobierno de César Gaviria, cuando Pablo Escobar impuso sus condiciones para su reclusión en una cárcel en la que gozó de una muy amplia libertad de acción. La llamada *política de sometimiento a la justicia* abolió la extradición, que era la principal exigencia de los narcotraficantes, y concedió muchos otros privilegios jurídicos a quienes se «sometieron» a ella.

Hay que agregar que la droga también ha tenido incidencias considerables en el plano de la soberanía nacional. Las políticas antinarcóticos de los diferentes gobiernos colombianos no han sido el resultado de una deliberación interna y autónoma, sino de las presiones ejercidas por Estados Unidos. En la medida en que para Washington el problema radica en la oferta y no en la demanda, la responsabilidad de resolverlo ha recaído en los países productores, por lo cual todos los esfuerzos deben concentrarse en erradicar los cultivos ilícitos y en perseguir a

los carteles. Este enfoque simplista de un fenómeno tan complejo, que se observa con rasgos muy particulares en el Plan Colombia, suscrito por los presidentes Andrés Pastrana y Bill Clinton, explica por qué la ayuda que brinda el Gobierno estadounidense se dirige esencialmente a las Fuerzas Armadas y por qué, además de trazar las políticas que han de adoptar los gobiernos andinos para luchar contra la droga, Estados Unidos impone castigos unilaterales a los países que se «portan mal», como la descertificación y las sanciones comerciales. Sin desconocer la importancia que reviste el apoyo estadounidense para luchar contra los cultivos ilícitos, resulta evidente que la manera como se ha planteado la «ayuda» limita los márgenes de maniobra del Estado colombiano: «[Estados Unidos] se ha convertido en la “nación indispensable”, lo cual ha hecho que, en adelante, cualquier forma de tratamiento al conflicto, así como su solución, deba tener en cuenta los intereses y las políticas en Washington»<sup>165</sup>.

Cabe añadir que, en su lucha contra el narcotráfico, convertido en una de las principales fuentes de financiación de la insurgencia, las autoridades colombianas relegaron a un segundo plano la dimensión social del problema y no supieron ofrecer alternativas serias a los millares de campesinos que siembran coca para subsistir.

---

<sup>165</sup> Rojas, Diana Marcela, «Estados Unidos y la guerra en Colombia», *Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia*, Bogotá, Iepri, Norma, 2006, pág. 56.

Por último, resulta evidente que la política antinarcótics, basada en mecanismos represivos, no ha dado los resultados esperados. Cada gobierno afirma que acabará con el narcotráfico, pero actualmente hay todavía unas 70.000 hectáreas sembradas con coca. Las arremetidas del Estado, lejos de erradicar el problema, generan nuevas respuestas por parte de los traficantes, que siembran semillas más productivas y más resistentes a las fumigaciones, y que trasladan los cultivos a otras zonas del país, devastando de paso el medio ambiente.

Los costos de esta política represiva, por lo tanto, imprimieron su huella en el conjunto de la sociedad colombiana. La represión hizo del negocio de las drogas una actividad enormemente lucrativa, sólo comparable al tráfico de armas y de rentas petroleras, y sus astronómicos ingresos alimentaron la violencia, aumentaron *la* corrupción, extendieron los cultivos ilícitos y provocaron mayores daños ecológicos<sup>166</sup>.

## ▪ CONCLUSIONES

Durante el Frente Nacional y en los años posteriores a su culminación, la sociedad colombiana conoció profundos cambios. Algunos de ellos, permitieron esbozar una

---

<sup>166</sup> Para el tema de las drogas, cf. Tokatlian, Juan Gabriel, *Drogas, dilemas y dogmas. Estados Unidos y la narcocriminalidad organizada en Colombia*, Bogotá, TM Editores, Universidad de los Andes, 1995.

sociedad un tanto más justa, incluyente y secular. En ocasiones, los avances fueron impulsados por el Estado, en otras los logros se dieron pese a él y más bien bajo el liderazgo de diferentes actores sociales que fueron adquiriendo un protagonismo cada vez mayor. Pero, al mismo tiempo, surgieron diferentes formas de violencia y la sociedad y el Estado se vieron permeados por el narcotráfico.

Ante una crisis cada vez más compleja y generalizada, en los años ochenta se llevaron a cabo los primeros intentos por superar algunos de los problemas más serios del país mediante una iniciativa novedosa: los procesos de paz. La ambigüedad de los resultados obtenidos fue, en muy buena medida, consecuencia de las contradicciones de la sociedad, del Estado y, por supuesto, de los propios movimientos guerrilleros. Desde entonces, es evidente que no existe un consenso nacional en torno a lo que significa la «paz» ni a las implicaciones que se derivan de una solución negociada.

## ▪ 5. LA CONSTITUCIÓN DE 1991 Y SU LEGADO

PARA ENFRENTAR LOS ENORMES problemas que venían aquejando de tiempo atrás a la sociedad colombiana, se conjugaron diversos factores que terminaron creando una nueva carta constitucional, caracterizada por su deseo de reforzar y ampliar las bases de la debilitada democracia colombiana. Un proceso similar se venía presentando en el resto del continente, donde las férreas dictaduras, desgastadas por los efectos de las crisis humanitaria y económica, cedían su lugar a gobiernos civiles. Igualmente, en Europa del Este, la caída del comunismo había permitido cierta apertura política. En el caso colombiano, la Constitución fue el resultado de un esfuerzo desplegado por numerosos actores sociales, en el que las minorías tradicionalmente excluidas desempeñaron un papel protagónico, moldeando un proyecto de nación en principio mucho más representativo. Si bien apunta realmente hacia una sociedad más democrática, la Constitución, no obstante, no ha sido suficiente para superar los viejos problemas del país. Colombia entra al siglo XXI en un clima de violencia muy agudo y con un gran déficit social.

Las reformas que se adelantaron para tratar de superar los diferentes problemas se inscriben en un país que seguía transformándose. A comienzos de los noventa, la población colombiana superaba los 36 millones de habitantes. El proceso de modernización económica y social que comenzó a mediados de siglo continuó su marcha. El promedio de vida siguió mejorando, pues ahora supera los setenta años. La promoción de la mujer le permitió no sólo ocupar un porcentaje cada vez más elevado en el mercado laboral, sino además ingresar de lleno al campo político, académico, artístico y a los más altos cargos en el sector privado. La infraestructura se amplió considerablemente, gracias, entre otros factores, a las numerosas y juiciosas recomendaciones de varias comisiones internacionales que ayudaron a formular planes modernizantes y coherentes a largo plazo. De esa manera, no sólo aumentó la red de comunicaciones, sino que el territorio nacional se encuentra mejor integrado, pese a que todavía hoy en día Colombia sigue muy rezagada en carreteras. El auge urbano también mantuvo la misma tendencia de los años anteriores: Bogotá concentra cerca del veinte por ciento del total de la población nacional y varias ciudades cuentan con más de un millón de habitantes.

## ▪ HACIA EL RECONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD

El curso normal para adelantar las diferentes reformas que pedían amplios sectores era el Congreso, pero el Poder Legislativo se había convertido, precisamente, en el principal obstáculo para llevar a cabo los cambios necesarios. La iniciativa para reformar la Constitución por otros medios provino de los estudiantes, pero rápidamente otros sectores apoyaron la propuesta. Ante el amplio respaldo a favor de la reforma constitucional, el gobierno de César Gaviria aceptó la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, encargada de hacer los cambios necesarios.

Los miembros de ese organismo fueron elegidos por los colombianos en diciembre de 1990, en unos comicios que tuvieron varios rasgos inéditos y sorprendentes. En primer lugar, dentro de la larga historia constitucional del país, era la primera vez que una asamblea de este tipo era elegida popularmente, aunque los niveles de participación fueron mínimos: sólo el 26 % del electorado acudió a las urnas, lo que sin duda le restó legitimidad a la Asamblea desde un comienzo. Por primera vez, también, el organismo encargado de reorientar los principios constitucionales del país escapó al control de las élites tradicionales. En efecto, sectores que hasta entonces no habían tenido mayor capacidad de decisión en los rumbos del país ocuparon un lugar central en las deliberaciones. El mejor ejemplo lo constituye el M-19, el grupo guerrillero recién

desmovilizado, que obtuvo el segundo lugar —con casi el veintisiete por ciento—, detrás del liberalismo, pero por encima del Partido Conservador. Hubo también espacio para minorías religiosas y étnicas, para sindicalistas y para nuevas fuerzas sociales.

Después de cinco meses de deliberaciones, la Asamblea concluyó que la crisis colombiana podía ser resuelta mediante cambios decisivos en dos grandes áreas: la ampliación de derechos y libertades y el fortalecimiento de la democracia. En cuanto al primer aspecto, la Asamblea estableció múltiples libertades y derechos, de naturaleza muy variada —sociales, económicos, culturales, ecológicos, colectivos, etcétera—, dentro de los cuales se destacan los fundamentales: derecho a la vida, a la intimidad, a la igualdad, a la libertad de conciencia, de culto y de expresión, entre otros. Al mismo tiempo, la Asamblea creó herramientas e instituciones encargadas de velar por el respeto de esos derechos, como la acción de tutela, que obliga a la justicia a resolver, en un plazo de diez días, demandas relacionadas con los derechos fundamentales.

El segundo punto, el fortalecimiento de la democracia, se buscó a través de diferentes estrategias. Por una parte, se le dieron nuevas atribuciones al ciudadano en materia política: hasta entonces, el elector se limitaba a escoger sus representantes mediante el voto; ahora, gracias al plebiscito, al referendo, a la revocatoria del mandato, el ciudadano participa de una manera más activa y directa en la política. En segundo lugar, se crearon mecanismos para facilitar la aparición de nuevos partidos, una medida

destinada a darle cabida a otras voces y a otros sectores. En ese contexto favorable, apareció la Alianza Democrática M-19, que reagrupaba a los guerrilleros desmovilizados del M-19. Y con el fin de darle cabida a los indígenas, se estableció que estas minorías étnicas contarían siempre con dos representantes en el Congreso mediante la creación de una circunscripción propia. Por otra parte, la Asamblea introdujo la segunda vuelta para la elección presidencial, buscando de esa manera que el jefe de Estado, al ser elegido por más del 50 % del electorado, contara con una mayor legitimidad. También se consideró benéfico para la democracia establecer un mayor equilibrio entre las distintas ramas del poder, lo cual implicó, por un lado, aumentar la descentralización para darle mayores facultades y mayor autonomía a las regiones y, por otro, recortar las funciones del Ejecutivo —muchos funcionarios públicos que antes eran elegidos por el presidente, ahora lo son por el electorado o por instancias estatales independientes del Poder Ejecutivo—.

Más allá de las medidas tendientes a fortalecer la democracia y de la ampliación de derechos y libertades, que en sí constituyen cambios muy significativos en las orientaciones del Estado, la nueva Constitución reconoció y valorizó la pluralidad de la nación colombiana, al destacar y defender su diversidad social, étnica, religiosa, política, sexual, etcétera. Si, por un lado, la igualdad era muy importante, la Asamblea consideró que el derecho a la diferencia también era fundamental, pues el respeto al «otro», es decir, la tolerancia, se consideró un principio básico para una

convivencia armoniosa. En otras palabras, la democracia ya no consistía simplemente en votar cada cierto tiempo para elegir a unos cuantos representantes. Por ese tipo de democracia lucharon los liberales radicales en la segunda mitad del siglo XIX, lo cual, para la época, resultó bastante revolucionario. En los años treinta, Alfonso López Pumarejo comprendió que la democracia, para ser más firme, no podía reposar únicamente en los derechos políticos, sino que tenía que apoyarse también en el reconocimiento de los derechos sociales de los sectores populares. Acorde con esa interpretación de la democracia, López Pumarejo quiso poner en marcha el Estado social de derecho. La Constitución de 1991 profundizó aún más el significado de la democracia, al introducir el derecho a la diferencia.

La Constitución de 1991 reconoce la pluralidad de la nación, por lo que en adelante las minorías y los grupos excluidos pueden acceder, al menos teóricamente, sin ningún tipo de restricciones, a la ciudadanía, sin perder sus propias especificidades. Los artículos 1.º y 13 consagran ese nuevo rasgo característico de la Constitución:

Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria [...], democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana [...].

Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones

para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados [...].

Estas disposiciones están dirigidas a mujeres, homosexuales, creyentes, etnias, etcétera. Para entonces la situación de la mujer era muy diferente a la que se podía observar décadas atrás. Continuando con el proceso de igualdad sexual que venía gestándose desde mediados de los años setenta, la mujer colombiana siguió abriéndose paso en diferentes tipos de actividades. En el plano político, su participación en las diferentes instancias representativas aumentó, al igual que su presencia en los ministerios. Algunas de ellas se atrevieron a pedir el derecho al aborto en casos puntuales —violación, malformación del feto, riesgos del embarazo para la madre—; sus esfuerzos fracasaron, al menos a corto plazo, dado el conservadurismo y la hipocresía de amplios sectores de la sociedad, pero a la larga se convirtieron en pioneras de unas demandas que finalmente fueron aceptadas. Inspiradas por los movimientos de mujeres argentinas y chilenas, otras mujeres se orientaron hacia la defensa de los derechos sociales. En la academia, no sólo aumentó el número de investigadoras, sino que se consolidaron los estudios sobre la mujer, muchos de ellos orientados a denunciar «las brechas entre la condición y posición social de mujeres y de hombres»<sup>167</sup>. Sin sobrestimar el alcance de la «emancipación» femenina,

---

<sup>167</sup> Velásquez, Magdala, «La condición de las mujeres colombianas a fines del siglo XX», *op. cit.*, pág. 60.

obstaculizado todavía hoy en día por múltiples trabas, tanto legales como culturales, es evidente que la situación de la mujer ha mejorado de manera significativa.

El caso de las minorías étnicas ilustra el alcance de las nuevas medidas en torno a la diversidad cultural. Como legado de la Colonia, a lo largo de los siglos XIX y XX las poblaciones negras e indígenas fueron consideradas bajo el lente de concepciones racistas y eurocentristas: las dos etnias remitían a lo «salvaje», a lo «inmoral», a la «superstición», en otras palabras, a todo aquello que se alejaba y amenazaba lo «blanco», lo «occidental». De ahí, la feroz oposición a reconocer el derecho a la diferencia y los continuos y repetidos esfuerzos desplegados por las élites y por amplios sectores de la sociedad para «civilizarlos», erradicando sus costumbres, sus creencias, sus formas de asociación, es decir, sus formas de vida, primer paso para convertirlos en «verdaderos ciudadanos». Por lo general, con muy contadas excepciones, los partidos de izquierda, cuando se interesaban por los indígenas y negros, sólo lo hacían desde una perspectiva social, no cultural: los reducían a su calidad de explotados, como al campesinado y al proletariado urbano, desconociendo —y negando— las reivindicaciones en torno a sus valores culturales. Las guerrillas han ido aún más allá: en muchas ocasiones han perseguido, desplazado y asesinado a negros e indígenas que se negaron a seguir sus órdenes. Si bien existen ejemplos de movilidad social en el que negros e indígenas han superado su marginalidad social, se trata de casos aislados que obedecen a estrategias individuales, basadas en el

deporte, en el matrimonio, en la actuación, etcétera. En el mismo sentido, si ciertas manifestaciones musicales han sido admitidas como parte de la cultura nacional —tales como la cumbia y, sobre todo, la salsa y el vallenato—, ha sido a costa de un proceso de «blanqueamiento» para depurarlas de sus connotaciones étnicas e inmorales<sup>168</sup>.

En medio del ancestral desconocimiento de sus culturas, los procesos de migración campo-ciudad llevaron a muchos negros e indígenas a las ciudades, haciendo cada vez más evidente la diversidad cultural del país<sup>169</sup>. Las comunidades indígenas habían resistido mejor que las poblaciones negras los atropellos del Estado y de la sociedad. Quizá el mayor nivel de organización de los primeros explica los resultados que obtuvieron en la Constitución de 1991.

La población indígena corresponde apenas al 2 o 3 % del total de la población nacional, pero es mayoría en algunas regiones del país —en La Guajira, en la Orinoquía y en la Amazonía—. De acuerdo con la nueva carta política, el Estado colombiano reconoce a la comunidad indígena derechos territoriales y culturales, en la medida en que ambos están estrechamente relacionados. Así, el indígena es un ciudadano que goza de todos los derechos y libertades reconocidos por las leyes; pero en cuanto miembro de una cultura particular, sus costumbres, su lengua, sus

---

<sup>168</sup> Wade, Peter, *op. cit.*

<sup>169</sup> Velásquez, Magdala, «La condición de las mujeres colombianas a fines del siglo XX», *op. cit.*, pág. 95.

valores, en resumidas cuentas, su concepción de la vida, es plenamente respetada: «El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana», reza el artículo 7.º, lo que se traduce en libertades para que los indígenas se autogobiernen, ejerzan su propia justicia, administren sus resguardos, preserven su tierra sin temor a que les sean expropiadas, etcétera. Adicionalmente, el Estado reservó para los indígenas dos escaños en el Senado como mecanismo permanente de representación de sus intereses.

Las comunidades negras no fueron objeto de los mismos reconocimientos por parte de los constituyentes, a pesar de representar aproximadamente un diez por ciento del total de la población colombiana —las principales zonas que habitan están ubicadas en las costas del Pacífico y del Atlántico, en los departamentos del Valle del Cauca y en algunas ciudades—. Contrariamente a los indígenas, el grado de organización de las negritudes ha sido mucho más precario y tardío. En un comienzo, sus exigencias giraron en torno al acceso a la tierra y al rechazo de la exclusión racial. Luego, poco a poco, a medida que iban desarrollando una mayor conciencia acerca de los valores de su propia cultura, comenzaron a actuar como grupos étnicos en pos del reconocimiento de su identidad; «Así, el discurso de la diferencia, desde el cual se reclamaban unos derechos, representó la superación de las luchas del movimiento negro, hasta ese momento librada únicamente en torno a la denuncia de la discriminación racial y la exigencia de una inclusión plena. De esta manera, el discurso por

la inclusión se mantuvo, pero ahora desde la condición de una alteridad cultural y un referente territorial»<sup>170</sup>.

A pesar de sus presiones, en las deliberaciones de la Asamblea no participó ningún representante de las negritudes y sólo mediante un artículo transitorio, adoptado muy al final de las sesiones deliberativas, se anunció que una norma emitida en el futuro por el Gobierno les reconocería algunos derechos. Dos años después, en 1993, la Ley 70 precisó los derechos de las comunidades del Pacífico en torno a la propiedad colectiva y a la protección de su identidad cultural. Si bien se trata de un paso esencial para poner en práctica la diversidad étnica que promueve la Constitución, la ley limitó su propio alcance, pues alude en particular a las poblaciones rurales, lo que deja por fuera a los negros que viven en las ciudades, y no definió «negritudes», es decir que excluyó a zambos y mulatos. Por otra parte, «las tierras de las comunidades negras son definidas como baldías, no como suyas; los negros están considerados como pobladores, no como propietarios». Además, no gozan de la misma autonomía que tienen los indígenas en materia de autogobierno<sup>171</sup>.

---

<sup>170</sup> Agudelo, Carlos Efrén, «La Constitución de 1991 y la inclusión ambigua de las poblaciones negras», en Arocha, Jaime, *Utopía para los excluidos. El multiculturalismo en África y América Latina*, Bogotá, Universidad Nacional, 2002, pág. 188.

<sup>171</sup> Helg, Aline, «Constituciones y prácticas sociopolíticas de las minorías de origen africano», en Arocha, Jaime, *Utopía para los excluidos, op. cit.*, págs. 38-39.

Un resultado práctico de la nueva política sobre diversidad ha sido la mayor visibilización de las minorías étnicas. Tanto indígenas como negros han logrado desarrollar una mayor conciencia «sobre el valor político de la etnicidad»<sup>172</sup>; han participado de una manera más directa en sus propios asuntos, lo que se ha traducido en la consolidación de algunas de sus tradiciones más significativas. No menos importante ha sido la titulación colectiva de varios millones de hectáreas a favor de las dos comunidades.

Sin embargo, los derechos de las minorías étnicas se han visto profundamente afectados por el conflicto armado. Poderosos grupos, tanto legales como ilegales, no han ocultado su interés por apoderarse de las ricas y extensas tierras de negritudes e indígenas para adelantar proyectos agroindustriales —madera, palma africana—, para explotar minerales —oro, platino, petróleo— o para desarrollar cultivos ilícitos. Paramilitares, grandes empresarios, en ocasiones con la complicidad de autoridades locales, y guerrillas han desplazado de sus tierras a millares de miembros de estas colectividades mediante las amenazas y el terror. Los megaproyectos adelantados por el propio Estado —carreteras, represas, puertos, canales— arrojan consecuencias similares.

En nombre del mismo principio de diversidad y de pluralismo, la Constitución estableció la igualdad y la libertad

---

<sup>172</sup> Arocha, Jaime, «Ley 70 de 1993: una utopía para afrodescendientes excluidos», en Arocha, Jaime, *Utopía para los excluidos*, *op. cit.*, pág. 169.

religiosas —artículo 19—. Se trata de una medida que cambia radicalmente parte del paisaje religioso colombiano: puso término a la situación privilegiada del catolicismo; visibilizó a las minorías religiosas; sentó las bases para sustituir el confesionalismo estatal por el Estado laico. Es el fin, ni más ni menos, de la hegemonía católica. De acuerdo con la laicidad, no es posible, en efecto, que un credo tenga mayores derechos que otros, porque el Estado no puede tener preferencias religiosas, es decir, se ve impedido a establecer relaciones privilegiadas con una religión en detrimento de las otras. Para garantizar una verdadera igualdad religiosa, base imprescindible de la laicidad del Estado, se hacía igualmente necesario establecer la libertad de enseñanza y asegurar la autonomía de la educación con respecto a la religión, cualquiera que ella fuese. Es decir, no podía haber un Estado laico sin una educación igualmente laica —artículos 67 y 68—. Por las mismas razones, fue necesario modificar las normas sobre matrimonio, pues estaban inspiradas en los valores del catolicismo: el modelo de familia tradicional ya no era la única oferta válida; en adelante, la pareja podía optar por la unión libre, el matrimonio civil o religioso según su propio credo, y el divorcio.

Algunos de los periódicos más influyentes, tanto liberales como conservadores, se unieron a las protestas de la jerarquía eclesiástica para descalificar la mayor parte de las reformas religiosas. El procurador general de la República, que había solicitado a la Corte Constitucional invalidar los artículos concordatarios que beneficiaban al catolicismo, pues tales privilegios iban en contra de la igualdad

religiosa, fue acusado por *El Colombiano*: su actitud, decía el diario antioqueño, está influenciada por «la presencia de la mano oculta de la masonería [...]. Mientras el país se destruye por inmoral, el mismo Estado se suma y de alguna manera pretende violar legalmente los derechos de los católicos»<sup>173</sup>. *El Espectador*, por su parte, refiriéndose a lo que consideraba una indebida intervención de la Corte en tratados internacionales — «el veneno anti-clerical de los magistrados» —, no encontró reparos para recordar que «la doctrina de la revisión de tratados tuvo en Adolfo Hitler su campeón más dedicado»<sup>174</sup>. *El Tiempo* abrió ampliamente sus principales páginas para que los católicos defendieran sus propios intereses, en detrimento de los puntos de vista de los movimientos cristianos que, cuando aparecían, lo hacían en las páginas interiores<sup>175</sup>.

La nueva constitución dio un giro radical en lo concerniente al principio de unidad nacional. El principio que orientó sus decisiones no estuvo determinado por los derechos de las mayorías. Por el contrario, la libertad religiosa, la promoción de las minorías étnicas, la visibilización de otros sectores igualmente marginados, le dio un enfoque inédito a la concepción de la «nacionalidad»: si durante la mayor parte de nuestra historia se pretendió subsanar

---

<sup>173</sup> Citado en Bermúdez, Jaime (dir.), «Opinión pública y Corte constitucional», *Estudios ocasionales*, Bogotá, Universidad de los Andes, Cijus, mayo de 1996, pág. 26.

<sup>174</sup> Citado en *ibidem*, pág. 26.

<sup>175</sup> Citado en *ibidem*, págs. 33-34.

la falta de integración nacional haciendo del catolicismo, de la lengua y de la «raza» los instrumentos privilegiados para lograr la anhelada unidad de la nación, con la Constitución de 1991 esta unidad ahora se funda en el pluralismo y en la diversidad cultural, étnica, religiosa, política, etcétera. El Estado se convierte, así, en el Estado de todos los ciudadanos y, al mismo tiempo, se erige, al menos en principio, como defensor de los rasgos particulares de cada comunidad cultural.

El espíritu participativo impulsado por la nueva Constitución ha permitido que la «sociedad civil», más consciente acerca del papel que puede desempeñar, asuma un mayor protagonismo en la búsqueda de soluciones a sus problemas. De esta manera, diferentes sectores sociales, hasta entonces atados al bipartidismo, comenzaron a explorar nuevos caminos en forma autónoma. Es lo que se observa en el proselitismo de un gran número de organizaciones muy variadas, las cuales, a través de múltiples iniciativas tomadas desde «abajo», han contribuido a la búsqueda de la paz y del desarrollo social. En diferentes regiones del país, las comunidades locales empezaron a organizarse para exigir a los bandos enfrentados que no los involucraran en el conflicto; en las últimas dos décadas, se han dado grandes movilizaciones nacionales a favor de la paz, en contra del secuestro y de la desaparición forzada. Los objetivos de los nuevos movimientos sociales van más allá de la resistencia civil. También han luchado por ampliar los derechos de los sectores excluidos. Las movilizaciones ya no son únicamente por mejorar la situación

social de los trabajadores; en otras palabras, el carácter de clase desaparece o, al menos, se hace difuso frente a la consolidación de movimientos policlasistas que convocan a un público muy amplio en torno a objetivos que apuntan a otro tipo de derechos, relacionados con el pluralismo y la diversidad: derechos étnicos, religiosos, sexuales, feministas, ecologistas, etcétera<sup>176</sup>.

A pesar de los diferentes logros alcanzados gracias a la carta política de 1991, la democracia colombiana continuaba, al finalizar el siglo, profundamente afectada por el conflicto interno y por el problema social.

## ▪ LA DURA REALIDAD

La amplitud de la Constitución en materia de derechos y libertades contrasta con una realidad en la que los viejos problemas, lejos de desaparecer, hipotecan la democracia. Por una parte, la pobreza y la exclusión social. A comienzos del nuevo siglo, más del sesenta por ciento de la población vive en condiciones de pobreza. Según un informe del Banco Mundial, los niveles de desigualdad de los años noventa eran similares a los de 1938<sup>177</sup>. «[...] A pesar de haber experimentado el período de crecimiento más rápido

---

<sup>176</sup> Archila, Mauricio, *Idas y venidas, vueltas y revueltas*, op. cit., págs. 67-68.

<sup>177</sup> *El Tiempo*, «70 años sin avances en equidad», 15 de febrero de 2006.

en más de tres décadas, el avance colombiano estuvo por debajo del de sus pares y para la población en estado de miseria el salto fue muy bajo. Particularmente inquietante es que, en las poblaciones pequeñas y en las zonas rurales, dos de cada tres personas son pobres y una tercera parte es indigente»<sup>178</sup>.

Los contrastes sociales encuentran, y no por casualidad, una réplica en la educación. No existe todavía un sistema masivo de educación, como se observa en los bajos porcentajes de estudiantes que finalizan el ciclo de secundaria —de cada diez niños que comienzan estudios, sólo tres culminan su bachillerato—; los contrastes entre la educación privada y la oficial —la cual concentra a la mayoría de estudiantes— siguen siendo protuberantes: «Es decir que el Estado colombiano no ha conseguido realizar el ideal democrático de ofrecer educación de buena calidad a toda la población, en cumplimiento de uno de sus deberes básicos y como método de integrar a la sociedad y la nación desde el aula»<sup>179</sup>.

La Constitución no es ajena a la situación de pobreza generalizada. Al mismo tiempo que proclamaba todo tipo de derechos para una mayor igualdad, oficializó el modelo neoliberal que venía implementándose desde hacía poco. Siguiendo las tendencias de la economía occidental, las élites de América Latina querían suprimir el viejo sistema

---

<sup>178</sup> *El Tiempo*, 24 de agosto de 2009.

<sup>179</sup> Palacios, Marco, «País de ciudades», *Colombia. País fragmentado, sociedad dividida*, Bogotá, Norma, 2002, pág. 48.

de sustitución de importaciones, que parecía agotado, por un nuevo paradigma. Bajo la influencia de los organismos internacionales y de las principales potencias, comenzando por Estados Unidos, se aceptaron una serie de medidas orientadas a fomentar las privatizaciones, a desregular la economía, a eliminar todo tipo de trabas que impidiera el libre mercado. Todo ello implicaba una reducción del Estado, considerado, desde la perspectiva neoliberal, como un obstáculo para el libre desarrollo de los pueblos. Si bien la economía colombiana se ha desarrollado, el neoliberalismo afectó, como en el resto del continente, a los sectores populares. Acorde con los objetivos trazados, las medidas adoptadas permitieron controlar la inflación, favorecer el desarrollo de ciertas actividades —industria automotriz, construcción— y aumentar las exportaciones que, además, se han diversificado: desde los años ochenta, el café perdió buena parte de su importancia, mientras que el petróleo, el carbón y, en menor medida, el banano, las flores y otros productos no tradicionales, ocupan desde entonces los primeros lugares en las exportaciones colombianas. Pero, por otra parte, el libre cambio, cuya aplicación no respetó la gradualidad que inicialmente había sido prevista con el fin de amortiguar sus efectos en los sectores más vulnerables, provocó una profunda crisis en el sector agrario que aún hoy en día tiene sumida a la población rural en una situación muy precaria, como se observa en las altas tasas de desempleo, en los bajos salarios, en la caída de los precios de muchos productos, en la reducción del área sembrada con ciertos cultivos. La flexibilidad laboral eliminó varios

derechos de los trabajadores con el fin de aliviar las cargas de los empresarios y así contribuir supuestamente a aumentar el empleo<sup>180</sup>. Las tasas actuales de desempleo (12 %) y de empleo informal —superiores al 50 %—<sup>181</sup>, sin olvidar las de pobreza y miseria, indican que las promesas del neoliberalismo están lejos de cumplirse.

En cuanto a la violencia, a finales de los años noventa el desafío para el Estado y la sociedad era colosal, pues estaban amenazados por dos movimientos guerrilleros, más fuertes que nunca, por el paramilitarismo, en plena expansión, y por el narcotráfico y sus innumerables bandas criminales. Si los carteles de la droga sufrieron algunos golpes —el temido Pablo Escobar cayó finalmente muerto en 1993 y los principales cabecillas del Valle fueron capturados en 1995 y luego extraditados a Estados Unidos—, el narcotráfico y el paramilitarismo, en manos de otras organizaciones no menos tenebrosas y eficientes, continúan generando todo tipo de conflictos.

Durante el gobierno Samper, el Ejército y la Policía sufrieron los peores reveses por parte de las farc, reveses que ya no se medían únicamente por el número de bajas o por la pérdida de control territorial —que de por sí resultaban alarmantes—, sino, además, por la captura de numerosos

---

<sup>180</sup> Ocampo, José Antonio, «Una década de grandes transformaciones económicas», *Nueva Historia de Colombia*, tomo VIII, *Economía y regiones*, Bogotá, Planeta, 1998, pág. 78.

<sup>181</sup> Kalmanovitz, Salomón, «La prosperidad: ¿qué tan democrática?», *El Espectador*, 16 de agosto de 2010.

miembros de las Fuerzas Armadas, que fueron a engrosar la lista de secuestrados. La toma masiva de los prisioneros indicaba el nuevo objetivo de las farc: al pretender que los soldados, policías y oficiales capturados fueran reconocidos como prisioneros políticos, la guerrilla aspiraba a que se le reconociera el estatus de fuerza beligerante, sin duda un triunfo jurídico y, sobre todo, político, que legitimaba nacional e internacionalmente el carácter insurgente de su lucha. Como bienvenida a Pastrana, el nuevo jefe de Estado, las farc lanzaron una ofensiva en treinta lugares diferentes, la cual incluyó la destrucción de bases fortificadas de la Policía y la toma de importantes poblaciones.

Sin embargo, su fortalecimiento económico y militar, al que no afectó la desaparición de los regímenes comunistas en Europa, fue sólo parcialmente exitoso, pues a mediano plazo no se tradujo en una consolidación de su influencia en el plano sociopolítico. Si bien es indudable que contaban con el apoyo local de ciertos sectores, la población nacional no se ha identificado con las farc, ni siquiera las clases populares, que ven a la guerrilla más como un verdugo que como el supuesto vocero de obreros y campesinos. Su poderío radica en la fuerza de sus armas, no en el apoyo popular. En todas las regiones que están bajo su control, la presencia guerrillera se ha acompañado de una política de terror contra la población civil orientada a demostrar su predominio, ejerciendo un poder arbitrario, intolerante y represivo, que se aplica no sólo en el plano político, sino que abarca incluso aspectos morales —persigue a los homosexuales— y religiosos —no toleran

a las minorías cristianas—. Las contradicciones entre la teoría y la práctica, entre los discursos y los hechos, son protuberantes: la guerrilla dice luchar por los intereses del pueblo y por el restablecimiento de la democracia, pero lo que se aprecia a diario son actos claramente criminales que poco tienen que ver con los ideales revolucionarios. No es de extrañar, entonces, que, en su inmensa mayoría, la sociedad no perciba a las farc como representantes de un nuevo orden de sociedad, más justo, menos corrupto. La capacidad de desafío de la guerrilla era muy grande, pero no se puede hablar de «guerra civil». Si bien hay un claro enfrentamiento entre proyectos antagónicos y la guerrilla ha logrado usurpar en algunas zonas las funciones estatales, la sociedad colombiana no se encontró nunca escindida entre los seguidores del Estado y los defensores de la guerrilla; los bajos niveles de apoyo interno y externo, así como los límites en recursos y en hombres armados por parte de las fuerzas insurgentes, también hacen difícil hablar de una verdadera guerra civil; finalmente, el Estado colombiano, más allá de sus numerosas debilidades, incluso en los momentos más críticos —finales de los años noventa—, logró conservar ciertos niveles de institucionalidad —jurídica, política, militar, económica, etcétera— con los que no cuentan los Estados colapsados y fallidos inmersos en verdaderas guerras civiles<sup>182</sup>.

---

<sup>182</sup> Pécaut, Daniel, *Guerras contra la sociedad*, Bogotá, Espasa, 2001, pág. 17. El debate sobre el tipo de conflicto que vive el país (¿«guerra civil?»), «guerra contra la sociedad», «guerra antiterrorista»?)

El desarrollo del aparato militar de las FARC en la década del 90 no logró traducirse en avances de la capacidad de propuestas políticas, ni en la consecución del apoyo de amplios sectores urbanos del país a la lucha revolucionaria [...]. La agrupación podría haber llegado a confundir su fortaleza militar y su dominio en varias regiones con legitimidad política nacional y apoyo de vastos sectores de la sociedad, pues la suma de sus poderes regionales estaba lejos de constituir de alguna manera un poder nacional<sup>183</sup>.

La guerrilla privilegió la acción militar no sólo porque veía cada vez más cerca el triunfo, sino también porque estaba convencida de que el régimen colombiano no permitiría la participación de la izquierda. No supieron apreciar la evolución política, que había ampliado los mecanismos de participación y que había permitido a líderes de izquierda llegar a la alcaldía de Bogotá y Medellín, así como de algunas gobernaciones:

[Existe una] democracia «formal» si se quiere, pero una democracia arraigada y estable. Desde la creación de las FARC, se han producido [hasta el año 2003] diez elecciones presidenciales abiertas, han sesionado doce Congresos pluripartidistas y una Constituyente de origen popular, las autoridades locales pasaron a ser elegidas

---

está bien explicado en Pizarro, Eduardo, *Una democracia asediada...*, *op. cit.*, capítulo I.

<sup>183</sup> González, Fernán, Bolívar, Ingrid, Vázquez, Teófilo, *op. cit.*, pág. 57.

por la ciudadanía, se han sucedido cuatro elecciones de gobernadores y seis de alcaldes en todo el territorio, se adoptaron los mecanismos de la democracia directa y se ha respetado —incluso ha aumentado— la separación de los poderes públicos<sup>184</sup>.

El inventario de lo que ha logrado la guerrilla, desde su ya remota aparición, hasta el presente, resulta desalentador:

El estudio del impacto del conflicto armado en Colombia es contundente: lejos de haber generado una dinámica positiva para la resolución de las múltiples grietas geológicas que afectan a nuestro país, ha contribuido a profundizarlas y a agravarlas. Si la guerrilla emerge en los años sesenta con objeto de luchar contra la pobreza, la desigualdad de los ingresos y las insuficiencias de las instituciones democráticas, el balance es profundamente negativo<sup>185</sup>.

A los golpes asestados por la principal guerrilla, habría que sumar las numerosas acciones del eln, menos poderoso, pero no menos decidido a desafiar al Estado. Otras formas de criminalidad, diferentes al paramilitarismo y la subversión, contribuyeron a incrementar los índices de violencia: a mediados de los años noventa, la tasa de

---

<sup>184</sup> Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), *El conflicto, callejón con salida* [Informe nacional de desarrollo humano, Colombia-2003], Bogotá, 2003, pág. 32.

<sup>185</sup> Pizarro, Eduardo, *Una democracia asediada...*, *op. cit.*, pág. 252.

homicidios por 100.000 habitantes llegó a 94; el número de homicidios era superior a los 25.000 por año.

El deterioro progresivo de la situación de orden público, así como el debilitamiento institucional, planteaban sombríos interrogantes. Colombia, según los más pesimistas, se había convertido en un «Estado fallido»; otros, para decir seguramente lo mismo, evocaban la posibilidad de un «colapso estatal». Los problemas del país eran considerados como un factor de desestabilización regional. Académicos, políticos de diferentes tendencias, la prensa en general, comparaban la situación del país con escenarios particularmente conflictivos: así, se comparaba la situación del país con la «balcanización», aludiendo a la desintegración del Estado, mientras que en América Latina se empezaba a hablar de la «colombianización» para dar cuenta de los crecientes problemas de violencia o de narcotráfico que podían estar afectando a algunos países de la región<sup>186</sup>.

Para ese entonces, las dificultades por las que atravesaba Colombia habían dejado de ser un asunto interno. La comunidad internacional veía con una preocupación creciente lo que sucedía en el país: los Estados vecinos se sentían afectados por las incursiones de las guerrillas en sus territorios fronterizos; la producción y exportación de droga, la violación de los Derechos Humanos y

---

<sup>186</sup> Pizarro, Eduardo, «Las FARC-EP: ¿repliegue estratégico?», en *Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia*, Bogotá, Iepri, Norma, 2006, pág. 192.

del Derecho Internacional Humanitario, los nexos de la clase política con el narcotráfico, suscitaron fuertes críticas por parte de algunos Gobiernos europeos y sobre todo de Estados Unidos. La Casa Blanca le retiró el visado al jefe de Estado colombiano porque presumía que tenía vínculos con la mafia. Si bien las relaciones entre Colombia y Estados Unidos se normalizaron con la llegada de Pastrana —que coincidió con los «proyectos bolivarianos» de Hugo Chávez—, su fallido proceso de paz se tradujo en un mayor fortalecimiento de las FARC. Si unos años atrás, como condición para iniciar diálogos con el Estado, la guerrilla exigía el despeje de un municipio, ahora pidió y logró el pleno control sobre cinco municipios que cubrían un área de 42.000 km<sup>2</sup>. La zona del Caguán, en el sur del país, se convirtió en el «centro de operaciones»: allí, la guerrilla trasladó a centenares de secuestrados, desde allí amplió sus nexos con el narcotráfico y desde allí planeó ataques a regiones aledañas. Dando muestras de una soberbia que luego le pasaría factura, se negó a entrar en negociaciones con un gobierno que tenía claras intenciones de llegar a un acuerdo histórico con ella y, por consiguiente, probablemente dispuesto a otorgarle mayores concesiones. Muy pronto, iban también a empezar a sufrir serios reveses.

## ▪ LA «ERA» URIBE

En ese contexto fue elegido a la presidencia el liberal disidente Álvaro Uribe. Después del frustrante proceso de paz

de su predecesor, la balanza se inclinaba por un gobierno de mano dura, tal como había sucedido con Virgilio Barco luego del fallido intento de Betancur. Desde un comienzo, el nuevo gobierno se fijó como gran objetivo derrotar a la guerrilla. Sólo así, decía, se podría recuperar la soberanía nacional, sentar las bases para la reactivación económica y ofrecer un panorama más esperanzador para la población. En sus dos gobiernos (2002-2006, 2006-2010), Uribe jamás abandonó su principal propósito.

Gracias a la ayuda del Plan Colombia, que había entrado en aplicación en la administración anterior, Uribe contaba con cuantiosos recursos para financiar la guerra que le había declarado a la insurgencia —inicialmente, más de 1000 millones de dólares; en 2010, casi 8000 millones—. Además del dinero, tenía también a su disposición un ejército mejor organizado, otro legado del gobierno Pastrana. La coyuntura internacional jugó igualmente a su favor: tras los ataques de Al Qaeda en territorio estadounidense, en el año 2001, las organizaciones armadas ilegales de todo el planeta perdieron buena parte de su legitimidad política, pues ahora eran vistas predominantemente como grupos «terroristas» a los que sólo cabía enfrentar mediante acciones militares. Poco antes de que Uribe asumiera el poder, Pastrana había logrado que varios países, entre ellos Estados Unidos, catalogaran a las guerrillas colombianas como bandas «terroristas».

A todos estos factores, Uribe sumó, de su propia cosecha, una voluntad inquebrantable para doblar a sus enemigos. Para ello, aumentó como nunca el presupuesto

militar, duplicó el número de efectivos de la Fuerza Pública —de 250.000 pasaron a casi 500.000—. Aunque con cierta tardanza, dadas las dimensiones del esfuerzo bélico llevado a cabo por el Estado, los éxitos finalmente empezaron a llegar. En primer lugar, las estadísticas demuestran que, desde que asumió el poder en 2002, los atentados guerrilleros, los secuestros y los homicidios se redujeron de manera sustancial gracias a una mayor presencia de las tropas a lo largo del territorio nacional y a una mejor coordinación de las diferentes instituciones encargadas de la seguridad. La confianza de la opinión pública se convirtió en júbilo cuando cayeron algunas de los principales cabecillas de las farc, algo que ningún gobierno había logrado hasta entonces. Además, desmoralizados por el acoso y por los reveses militares, un número considerable de guerrilleros ha abandonado la lucha armada y se ha entregado a las autoridades. Uribe no derrotó a las guerrillas, como era su intención. Pero las dejó seriamente heridas, arrinconadas; más importante aún, completamente deslegitimadas ante la opinión pública y, salvo unas pocas excepciones, ante la comunidad internacional. En ese sentido, se trata de un logro que debe ser celebrado no sólo por sus gestores y por los simpatizantes del Gobierno, sino por el conjunto de la sociedad.

El uribismo y sus seguidores insisten también en otros éxitos, según ellos, no menos significativos. Mediante la Ley de Justicia y Paz, el paramilitarismo habría sido eliminado: sus principales líderes se entregaron a las autoridades y muchos de ellos fueron a parar a la cárcel. Como

consecuencia de los éxitos de la política de «seguridad democrática», la economía retomó impulso de la mano de las cuantiosas inversiones extranjeras. No menos importante, agregan con la misma convicción, la «cohesión social» se fortaleció, fruto del papel estelar del Gobierno, del heroísmo de las Fuerzas Armadas, del «sentimiento patriótico» que embarga a la mayoría de los ciudadanos.

La opinión pública aprobó sin reservas la gestión de Uribe. A lo largo de sus ocho años en el poder, contó siempre con un abrumador respaldo popular —cercano al 80 %—, proveniente de todas las regiones del país y de todos los sectores sociales. Si hubiese dependido de la opinión pública, sin lugar a dudas Uribe hubiera podido ejercer un tercer mandato ininterrumpidamente. Y si hubiese dependido de él y de sus colaboradores, también, pues recurrieron a todo tipo de artimañas para prolongar su estadía en el poder, contrariando así las disposiciones constitucionales. La Corte Constitucional negó cualquier posibilidad de una nueva reelección.

El legado de Uribe no se puede medir únicamente por sus resultados en materia de «pacificación». Sus gobiernos sentaron un precedente muy delicado en la forma de asumir el poder y de buscar los fines propuestos, que tuvo —y puede seguir teniendo— incidencias muy negativas en el desarrollo de la democracia colombiana. Durante la campaña presidencial de 2010, en la que se decidía quién sería el sucesor de Uribe, el candidato Antanas Mockus contribuyó a ventilar un debate muy importante en torno al respeto a la legalidad y a la promoción de los valores

éticos. Su mensaje, sintetizado en la expresión «no todo vale», constituyó una clara denuncia a la «cultura del atajo» que ha caracterizado, en general, a la clase política y, en particular, al gobierno Uribe. Los más de tres millones de votos que apoyaron al Partido Verde de Mockus, cuyo programa presentaba en varios aspectos grandes similitudes con el candidato del uribismo, permiten pensar que un sector del electorado, así no fuese antiuribista, creyó oportuno retirar su apoyo a una forma de hacer política en la que, en varias ocasiones, primaron los resultados, sin importar que los medios se saliesen de los cauces legales.

Tal fue el caso de la reelección de 2006, sobre la que recaen todo tipo de denuncias que señalan los múltiples «vicios», por decir lo menos, a los que se recurrió para asegurar la reforma constitucional que abría la puerta al segundo mandato de Uribe. Los más de dos mil civiles inocentes asesinados por la Fuerza Pública, acusados de ser guerrilleros —«falsos positivos»— con el fin de demostrar «resultados» y de paso cobrar las recompensas que ofrecía el Gobierno por exterminar a los «terroristas», son ejemplos —vergonzosos ejemplos— de la profunda descomposición moral que reina entre muchos representantes del Estado, poco dados en reparar en las consecuencias que se derivan de semejantes actos. En su lucha contra la guerrilla, Uribe no dudó en violar los tratados internacionales, atacando territorios de un país vecino, lo que desató, como era de esperarse, fuertes críticas mundiales. El caso de las escuchas ilegales deja ver, al igual que los anteriores ejemplos, hasta dónde estaba dispuesto a ir el Gobierno

en su afán por satisfacer sus propios intereses: magistrados de las Altas Cortes, periodistas y políticos de la oposición, académicos, intelectuales, fueron objeto de seguimientos ilegales por parte de agencias estatales para calumniarlos e intimidarlos.

La «parapolítica», sin ser ninguna novedad, adquirió en los últimos años un protagonismo inédito a causa de las investigaciones que dejaron al descubierto las alianzas entre numerosos políticos y el paramilitarismo: «Hoy se han iniciado procesos contra 107 congresistas, de los cuales 21 ya han sido condenados y muchos están en juicio. Además fueron condenados tres gobernadores y otros 16 procesados. Los más contaminados han sido los partidos uribistas, con 84 congresistas salpicados». Se les acusa de todo tipo de delitos, en los que se incluyen asesinatos, apropiación indebida de recursos y bienes, desplazamiento forzado.

El proceso de paz adelantado entre el Gobierno y los principales cabecillas del paramilitarismo ya había suscitado una gran indignación en algunos sectores por el clima de impunidad que pretendía establecerse. El principal objetivo de las negociaciones consistía en la desmovilización y no en el esclarecimiento de la verdad, en la aplicación de la justicia y en la reparación de las víctimas. Si finalmente los jefes del paramilitarismo terminaron en la cárcel y se vieron obligados, para acogerse a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, a confesar sus delitos, no fue por voluntad del Gobierno, sino por las presiones de la Corte Constitucional, de la oposición, de la prensa independiente, de la comunidad internacional e incluso de algunos uribistas.

El Polo Democrático alcanzó una gran notoriedad por el cuidadoso seguimiento que hizo a la parapolítica. Permanentemente denunció los vínculos del uribismo con las bandas criminales y llegó, incluso, a revelar documentos con los que buscaba comprometer directamente al presidente y a algunos de sus familiares más cercanos con el paramilitarismo.

Sólo así ha sido posible empezar a vislumbrar las verdaderas dimensiones del fenómeno paramilitar en sus diferentes facetas: en lo criminal, el país ha escuchado revelaciones espeluznantes acerca del régimen de terror que pusieron en práctica; en lo organizacional, se conoce mejor su funcionamiento interno y sus relaciones con empresarios y miembros de las fuerzas públicas; en lo político, día tras día se confirma la paramilitarización de la política. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de algunos jueces, fiscales, periodistas y políticos por llegar al fondo del asunto, hasta el momento son pocos los condenados y los procesos de reparación sufren todo tipo de tropiezos. El propio Gobierno se encargó de obstaculizar las indagaciones, al decidir intempestivamente extraditar a los principales jefes del paramilitarismo, precisamente cuando algunos de ellos habían manifestado su intención de colaborar con la justicia. Que en su decisión primara la voluntad de acusarlos de narcotraficantes y no de homicidas responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos contra ciudadanos colombianos —lo que implicaba juzgarlos en su propio país—, permite medir el temor del Gobierno ante las comprometedoras revelaciones que podían hacer los paramilitares sobre sus vínculos con la clase dirigente.

En política social, el balance fue claramente negativo. En un país en el que casi la mitad de su población vive en condiciones de pobreza —es decir todo hogar compuesto por cuatro personas con ingresos inferiores a 1.100.000 pesos mensuales, el equivalente a unos 600 dólares aproximadamente—, a la que hay que sumar un 15 % sumida en la indigencia, se trata de un resultado preocupante. La pobreza va de la mano de altas tasas de desempleo y de informalidad laboral, en la que los trabajadores se encuentran privados de cualquier tipo de protección social. Frente a un problema de tal magnitud, lo mejor que hizo el Gobierno fue desarrollar una política paternalista que no tuvo como objetivo atacar el origen del problema. Y no lo tenía, porque en los planes del uribismo no figuraba luchar contra la profunda desigualdad social del país. Las cifras sobre pobreza citadas anteriormente son mucho más inequitativas en el sector rural, pese a lo cual el Ministerio de Agricultura dirigió todos sus esfuerzos para favorecer a los grandes empresarios, ya fuese otorgándoles créditos destinados en principio al campesinado o concediéndoles inmensas extensiones de tierra asignadas por organismos de la justicia, también en principio, a las víctimas del paramilitarismo...

Si bien los resultados en materia de orden público resultan alentadores, la violencia está lejos de haber sido erradicada. Las guerrillas, hay que recordarlo, no han desaparecido y no se sabe realmente qué tan afectadas se encuentran —¿se han replegado?, ¿se están reorganizando?, ¿están en estado de coma terminal?—. El paramilitarismo,

aunque se lo quiera disfrazar cambiándole el nombre — «nuevas bandas criminales», «bandas emergentes» —, continúa vinculado al narcotráfico y sigue generando terror, asesinatos y desplazamientos. Por su parte, el narcotráfico, del que también se dijo que sería erradicado a corto tiempo, sigue alimentando el conflicto. Y fuera de las acciones de paramilitares y guerrillas, persisten otras modalidades de violencia que arrojan un porcentaje elevado del total de homicidios anuales. Como se observa, los resultados obtenidos por la Seguridad Democrática, la «joya de la corona» del uribismo, no coinciden con la propaganda oficial.

Este tipo de balance no parece quebrantar las sólidas convicciones de amplios sectores de la opinión pública, para los cuales la política de la Seguridad Democrática constituye la solución para enfrentar los asuntos más delicados de la sociedad. Las voces favorables al intercambio humanitario, que pondría fin al infame cautiverio de los secuestrados; los llamados a luchar contra la corrupción de la clase política; las peticiones al Gobierno para que adelante una reforma agraria o al Estado para que reconozca su parte de responsabilidad en el conflicto que vive el país, todo ello queda ahogado por un discurso guerrillero, hábilmente orquestado por buena parte de las élites, empeñadas en señalar a las guerrillas como las únicas responsables de los grandes problemas que aquejan a la sociedad colombiana. Parecen olvidar que ciertas prácticas a las que ellas mismas suelen recurrir, ya sea, para las más extremistas, financiando escuadrones de la muerte o,

para las más discretas, «simplemente» evadiendo sus obligaciones fiscales, también constituyen obstáculos para la construcción de un país más justo y democrático.

No se trata de minimizar, mucho menos de desconocer, lo que la sociedad colombiana le debe al gobierno de Uribe como artífice del progresivo debilitamiento de una guerrilla tan miope como arrogante y criminal que, cuando asumió la presidencia en 2002, tenía amedrentado al país. Pero, asimismo, resulta difícil negar o restarle importancia, no a hechos aislados o a deslices menores, sino a lo que fue un estilo de gobierno que confrontó permanentemente principios básicos de la democracia. El deseo de erigir el régimen personal del caudillo, del redentor, a máxima expresión del poder amenazó la institucionalidad; los constantes enfrentamientos con el Poder Judicial pusieron en tela de juicio la autonomía de uno de los pilares de la democracia liberal; la exaltación típicamente populista del «Estado de opinión» intentó nada menos que relegar el Estado de derecho a segundo plano; la proclamación del pensamiento único como doctrina de la «patria», alimentado por una retórica agresiva, puso contra la pared al disenso, estigmatizó a la oposición, socavó las bases del pluralismo ideológico y polarizó más a la sociedad; las facilidades otorgadas al gran capital no hicieron más que ahondar las abismales diferencias entre una minoría privilegiada y una abrumadora mayoría que no encuentra posibilidades de dejar atrás la pobreza y el desempleo.

## ▪ CONCLUSIONES

Al término de uno de los gobiernos más polémicos de las últimas décadas, la situación en el país ofrece diferentes lecturas. Para los simpatizantes de Uribe, que constituyen una inmensa mayoría, Colombia entró en una etapa de paz, de crecimiento económico, de confianza generalizada. El camino que trazó constituye una especie de hoja de ruta que no puede ser abandonada por sus sucesores en el poder. Para una minoría, los avances en la lucha contra la guerrilla deben complementarse con una política social que contribuya a mejorar la suerte de millones de colombianos marginados.

El panorama colombiano es preocupante y el escenario político no ofrece mayores alternativas. Las fuerzas del uribismo cuentan con el respaldo mayoritario de la población, lo que les permitió arrollar a sus contendores en las elecciones presidenciales de 2010. La segunda fuerza en importancia, el Partido Verde, era, en muchos aspectos, seguidora de las políticas de Uribe. En cuanto a la izquierda, luego de haber alimentado las esperanzas de una minoría antiuribista, despilfarró el capital político que había conseguido apenas pocos años atrás. Una vez más, las disputas internas debilitaron un proyecto que, no obstante, contaba —o cuenta, si no desaparece del todo— con un programa centrado en los grandes problemas del país.



## ▪ CONSIDERACIONES FINALES

SI BIEN EN LAS ÚLTIMAS décadas la sociedad colombiana ha logrado avances muy significativos que deben ser destacados, también es necesario puntualizar que el país entró al siglo XXI sin haber resuelto problemas fundamentales, que vienen de muy vieja data, relacionados, en particular, con la justicia social y con la convivencia pacífica entre sus ciudadanos. Al igual que otros países latinoamericanos, Colombia ofrece un panorama con numerosos y agudos contrastes: por un lado, exhibe con orgullo su incursión en la «modernidad», en el «progreso», en la «civilización»; pero, por otro, persisten numerosos factores propios a otras épocas, sin duda más próximas al siglo XIX que al XXI. En otros términos, se trata todavía de un Estado en construcción, que no ha logrado atender las necesidades básicas de la población, ya sea en materia de salud, de recreación, de comunicaciones, de educación, de seguridad y, por supuesto, de bienestar social.

En la historia colombiana, no todo son tragedias ni los balances arrojan siempre saldos negativos. En estas

páginas intentamos destacar la importancia de algunos cambios considerables en materia económica, social, cultural y política. La Constitución de 1991 marcó un hito en la construcción de una sociedad más justa y diversa. En comparación con la situación de hace un siglo, el Estado responde a algunas de las necesidades de buena parte de la población. Los sectores tradicionalmente marginados cuentan hoy día con numerosos derechos. En este sentido, tienen razón los investigadores que han venido insistiendo en los últimos años en que la historia colombiana no se reduce únicamente a sus calamidades. Sin negar la existencia de la violencia, de la corrupción, de la injusticia, etcétera, consideran que la cultura política nacional también tiene otra faceta mucho más amable que es necesario conocer y valorar en su justa medida. Recuerdan que la economía ha mantenido un desarrollo estable, que las instituciones no han dejado de funcionar, que las elecciones no se han visto prácticamente interrumpidas; agregan, también con mucho sentido, que la práctica de la violencia se reduce a unos cuantos actores armados, desprovistos, además, de legitimidad social. Su llamado de atención ha sido sin duda importante para cuestionar una lectura histórica «derrotista», en la que todo se reduce a una sucesión de desgracias y en las que no se reconoce ningún tipo de mejora en la sociedad colombiana<sup>187</sup>.

---

<sup>187</sup> Cf. entre otros, Posada Carbó, Eduardo, *La nación soñada*, Bogotá, Norma, 2006; Cepeda Ulloa, Fernando (ed.), *Fortalezas de Colombia*, Bogotá, Ariel, Banco Interamericano de Desarrollo, 2004; Deas,

Pero es difícil mostrarse demasiado optimista. Más allá de la consistencia de la tradición electoral y de la permanencia de los gobiernos civiles, la corrupción, la impunidad, los vicios electorales, la intervención de las bandas criminales en los asuntos políticos, arrojan muchas sombras sobre la supuesta solidez de la democracia colombiana. El problema no es únicamente institucional. Lo que se observa en la sociedad es igualmente preocupante. ¿Hasta qué punto los colombianos conocen, valoran y defienden los logros de su democracia? Algunos hechos ocurridos en los últimos años pueden dar pistas para una respuesta. La indiferencia generalizada frente a los horrores del paramilitarismo dejó en claro que sólo los crímenes de la guerrilla merecen ser sancionados. La misma indiferencia predominó con relación a los escándalos de la parapolítica, los «falsos positivos», la interferencia del Poder Ejecutivo en otras ramas del poder. Si semejantes problemas no inquietan al grueso de la población, si la sociedad no ve en ello pruebas alarmantes de un profundo deterioro de la cultura política, es difícil pensar que la democracia va por buen camino. No es el único reto de envergadura que debe asumir el país.

---

Malcolm y Fernando Gaitán, *Dos ensayos especulativos sobre la violencia en Colombia*, Bogotá, Fonade, Departamento Nacional de Planeación, 1995; Rubio, Mauricio, «Rebeldes y criminales. Una crítica a la tradicional distinción entre el delito político y el delito común», en Arocha, Jaime, Fernando Cubides y Myriam Jimeno (comp.), *Las violencias: inclusión creciente*, Universidad Nacional, 1998.

En cuanto al persistente problema de la violencia, en lo relacionado con los dos principales factores de desestabilización, el paramilitarismo y la guerrilla, el Estado y la sociedad enfrentan dilemas bastante complejos. A corto plazo, ¿cómo afrontar a los grupos ilegales sin salirse de los marcos constitucionales? A mediano, ¿cómo entablar negociaciones políticas con grupos acusados de terrorismo?<sup>188</sup>. E, independientemente de los plazos en que se logre un acuerdo definitivo con los actores armados ilegales, y asumiendo que estos realmente están dispuestos a poner fin a sus acciones criminales, ¿hasta qué punto está preparada la sociedad para asumir los retos de la reconciliación nacional, como lo son la convivencia en el día a día con exguerrilleros y exparamilitares?<sup>189</sup>.

El tema de la reconciliación, que plantea asuntos muy delicados en materia económica, jurídica, política, moral, remite a otro asunto crucial: la memoria. ¿Deben

---

<sup>188</sup> Pizarro, Eduardo, *Una democracia asediada...*, *op. cit.*, págs. 154-163.

<sup>189</sup> Las encuestas señalan que diferentes sectores sociales rechazan a los desmovilizados de la guerrilla y del paramilitarismo: son frecuentes los casos de los habitantes de un barrio cualquiera que se oponen a tener como vecinos a los reinsertados, así como el sector empresarial se niega a contratar antiguos combatientes ilegales; para un ejemplo de este último caso, cf. *Portafolio*, 2010, 14 de septiembre, «Sólo el 13 por ciento de empresarios colombianos daría empleo directo a desmovilizados» [en línea], disponible en: <http://www.portafolio.co/economia/finanzas/13-ciento-empresarios-colombianos-daria-directo-desmovilizados-489518> [Consulta: 14 de septiembre de 2010].

la sociedad y el Estado colombianos recordar sus capítulos más trágicos o, por el contrario, resulta inconveniente detenerse en ellos? ¿Qué papel cumple la memoria en una sociedad? Cuando el espinoso tema de la memoria se relaciona con la experiencia de la guerra, una de sus funciones consiste en preservar, en la conciencia de un individuo, de una comunidad o de una nación, la historia de lo sucedido. Saber lo que pasó —¿quiénes fueron los responsables?, ¿por qué lo hicieron?, ¿en qué circunstancias?— es la condición para que haya un mínimo de justicia, para que los crímenes y las víctimas no queden en el olvido, para que a los culpables no los cobije la impunidad. Diferentes países latinoamericanos, que también conocieron un pasado traumático, han hecho esfuerzos por descubrir lo sucedido durante las dictaduras. En un primer momento, se pensó que la estabilidad democrática dependía del humor de los militares, así que era mejor no molestarlos averiguando, por ejemplo, a cuántas personas habían torturado, matado o desaparecido. Luego, se llegó a la conclusión de que resultaba difícil hablar de democracia sin establecer un mínimo de verdad, tarea de la que se encargaron diferentes comisiones cuyos resultados ayudaron a la justicia a enviar a prisión a varios responsables. En el caso colombiano, hay una marcada tendencia a olvidar ciertas memorias, ciertos recuerdos: la de los vencidos, la de las víctimas. Pero si el duelo no tiene oportunidad de realizarse, si se oculta la verdad, si los culpables no reciben sanción alguna, es difícil pensar en una verdadera reconciliación. En otras palabras, si la memoria oficial no es una memoria común,

colectiva, nacional, en la que las víctimas puedan reconocerse, las cuentas con el pasado constituyen un pesado lastre para encarar el presente y el futuro<sup>190</sup>.

---

<sup>190</sup> Para una aproximación a este tipo reflexiones, cf. Sánchez, Gonzalo, *Guerras, memoria e historia*, Bogotá, Icanh, 2003.

## ▪ BIBLIOGRAFÍA

- Abel, Christopher, *Política, Iglesia y partidos en Colombia: 1886-1953*, Bogotá, FAES, Universidad Nacional, 1987.
- Bushnell, David, *Colombia: una nación a pesar de sí misma*, Bogotá, Planeta, 1999.
- Cepeda, Manuel, *Los derechos fundamentales en la Constitución de 1991*, Bogotá, Temis, Consejería Presidencial para el Desarrollo de la Constitución, 1992.
- Dávila, Carlos, (comp.), *Empresas y empresarios en la historia de Colombia. Siglos XIX-XX*, Bogotá, Norma, Universidad de los Andes, 2003.
- Dugas, John, (comp.), *La Constitución de 1991: ¿un pacto político viable?*, Bogotá, Cerec, 1993.
- Gutiérrez Girardot, Rafael, «La literatura colombiana en el siglo XX», *Manual de Historia de Colombia*, tomo III, Bogotá, Instituto Colombiano de Cultura, 1984, págs. 445-536.
- Legrand, Catherine, *Colonización y protesta campesina en Colombia, 1850-1950*, Bogotá, Universidad Nacional, 1988.
- Loaiza, Gilberto, *Luis Tejada y la lucha por una nueva cultura*, Bogotá, Tercer Mundo, 1995.
- Molano, Alfredo, *Selva adentro. Una historia oral de la colonización del Guaviare*, Bogotá, El Áncora, 1987.
- Molina, Gerardo, *Las ideas liberales en Colombia*, tomo I, 1849-1914, Bogotá, Tercer Mundo, 1988; tomo II, 1915-1943, Bogotá,

- Tercer Mundo, 1988; tomo III, *De 1935 a la iniciación del Frente Nacional*, Bogotá, Tercer Mundo, 1989.
- Nueva Historia de Colombia*, 9 tomos, Bogotá, Planeta, 1989, 1998.
- Palacios, Marco, *Entre la legitimidad y la violencia: Colombia 1875-1994*, Bogotá, Norma, 1995.
- Pécaut, Daniel, *Las FARC. ¿Una guerrilla sin fin o sin fines?*, Bogotá, Norma, 2008.
- Sánchez, Gonzalo y Wills, María Emma (comp.), *Museo, memoria y nación. Misión de los museos nacionales para los ciudadanos del futuro*, Museo Nacional de Colombia, Bogotá, 2000.





**Biblioteca  
Básica DE  
Cultura  
Colombiana**

Este libro no se terminó de imprimir en 2017. Se publicó en tres formatos electrónicos (PDF, ePub y HTML5), y hace parte del interés del Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional de Colombia —como coordinadora de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, RBNP— por incorporar materiales digitales al Plan Nacional de Lectura y Escritura «Leer es mi cuento».

Para su composición digital original se utilizaron familias de las fuentes tipográficas Garamond y Baskerville.

Principalmente, se distribuyen copias en todas las bibliotecas adscritas a la RBNP con el fin de fortalecer los esfuerzos de promoción de la lectura en las regiones, al igual que el uso y la apropiación de las nuevas tecnologías a través de contenidos de alta calidad.



MINCULTURA



Biblioteca  
Nacional  
de Colombia



TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS

PAZ Y PROSPERIDAD ECONÓMICA